

ECUADOR
LA CARA OCULTA DE LA CRISIS

La Colección Becas de Investigación es el resultado de una iniciativa dirigida a la promoción y difusión de los trabajos de los/as investigadores/as de América Latina y el Caribe que CLACSO impulsa a través del Programa Regional de Becas.

Este libro presenta la investigación que la autora realizó en el marco del Concurso de proyectos para investigadores senior *Fragmentación social y crisis política e institucional en América Latina y el Caribe* organizado por el Programa Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.

León Galarza, Natalia Catalina

Ecuador: la cara oculta de la crisis : ideología, identidades políticas y protesta en el fin de siglo . - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2009.

296 p. ; 23x16 cm. (Becas de investigación)

ISBN 978-987-1543-23-6

1. Ciencias Políticas. 2. Política Ecuatoriana. I. Título
CDD 320.986 6

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO:

Ecuador / Crisis Política / Conflictividad Social y Política / Protesta / Ideología de la Protesta / Identidades Políticas / Lucha Discursiva / “Eutanasia” Simbólica / Ajuste Estructural / Movilización Indígena y Campesina / Movilización de los Trabajadores / Movilización Estudiantil y Juvenil

Colección Becas de Investigación

ECUADOR
LA CARA OCULTA DE LA CRISIS
Ideología, identidades políticas y
protesta en el fin de siglo

Natalia Catalina León Galarza



Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Editor Responsable Emir Sader - Secretario Ejecutivo de CLACSO

Coordinador Académico Pablo Gentili - Secretario Ejecutivo Adjunto de CLACSO

Colección Becas de Investigación

Directora de la Colección Bettina Levy - Coordinadora del Programa Regional de Becas

Asistentes del Programa Natalia Gianatelli - Luciana Lartigue - Magdalena Rauch

Revisión técnica de textos Ernesto Funes

Área de Producción Editorial y Contenidos Web de CLACSO

Responsable editorial Lucas Sablich

Director de arte Marcelo Giardino

Responsable de contenidos web Juan Acerbi

Web master Sebastián Higa

Logística Silvio Nioi Varg

Producción Kayros Estudio

Arte de tapa Jimena Durán Prieto

Impresión Gráfica Laf SRL

Primera edición

Ecuador: la cara oculta de la crisis

(Buenos Aires: CLACSO, septiembre de 2009)

ISBN 978-987-1543-23-6

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Av. Callao 875 | piso 5º J | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | <clacso@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>

Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional



No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

Este libro está disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

ÍNDICE

Agradecimientos	9
Introducción	11
Capítulo I Fin de siglo: la historia de un empate	29
Capítulo II “Campesino” e “indígena”. Los idiolectos de la protesta	79
Capítulo III Después del “movimiento”: la protesta estudiantil	137
Capítulo IV Patria, solidaridad y redención: la protesta obrero-sindical	181

Pensando en voz alta (a manera de conclusiones)	229
Post-scriptum Ecuador: protesta y poder entre el siglo XX y el XXI	243
Anexo	265
Bibliografía	281

AGRADECIMIENTOS

EL PRESENTE TRABAJO fue realizado gracias a varias generosas complicidades. En primer lugar, doy gracias CLACSO y ASDI por el auspicio financiero; destaco la colaboración de Bettina Levy y Natalia Gianatelli por sus gestiones ante estos organismos. Asimismo, varias orientaciones analíticas aquí presentes tomaron forma al calor de mi participación en el Aula 524 del curso virtual ofrecido por CLACSO: “Neoliberalismo y movimientos sociales en América Latina: la configuración de la protesta social”, impartido por José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati; y reconozco a Gabriela Amenta por su eficiente apoyo operativo a mi participación en la mencionada Aula. Agradezco, igualmente, las contribuciones del/de la académico/a anónimo/a que evaluó el informe de investigación entre los meses de julio y septiembre de 2004; este/a colega respetuosamente ha sugerido modificaciones, sobre todo en lo relativo al tratamiento de los testimonios, que he procurado recuperar; por tanto, toda limitación del trabajo es sólo mía. Ladislao Landa me ofreció su apoyo incondicional durante mi permanencia en Cusco y Lima, igualmente sus diálogos contribuyeron de modo sustancial en la producción de muchas ideas. Sonia Zhañay colaboró con la mejor voluntad en el tratamiento de los datos cuantitativos.

Debo a Jean-Jacques Decoster, ex director del Colegio Andino del Centro Bartolomé de las Casas del Cusco, y a todos/as quienes allí laboran, por la acogida en dicha institución durante el año 2002, así como

por haberme proporcionado el acceso a la infraestructura del Centro. Sin tal contribución no hubiese podido avanzar en un importante trecho del texto. Agradezco a la FLACSO, sede Ecuador, por el auspicio institucional que me permitió participar en el concurso de proyectos de investigación; guardo gratitud hacia Lucía Herrera y hacia el personal de la biblioteca, en especial a Nilma Martins Rua. Mis reconocimientos para Marcia Suárez, recepcionista de la institución, y en general para el personal de servicios que colaboró con el mejor ánimo durante los meses que permanecí en FLACSO.

En el plano personal, agradezco el apoyo de mi madre, mis hermanos y hermanas, quienes, como siempre, me brindaron su apoyo de diversas maneras. A mi hijo, Miguel Enrique, le agradezco por su cariño, paciencia y comprensión.

INTRODUCCIÓN

UNA TARDE A INICIOS DE MARZO DE 2002, seguí la ruta de la avenida 10 de agosto, una de las arterias centrales de la ciudad de Quito, hasta encontrar una multitud de aproximadamente 700 personas apostada frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, que obligaba a las unidades del trolebús a desviar su curso habitual. Hombres y mujeres portaban el tricolor patrio y pancartas; y muchos de ellos, a juzgar por sus ropas informales algo ajadas, venían de lejos. Al borde de uno de los carriles de la vía, varios de ellos exhortaban a quienes conducían los vehículos que pasaban por el lugar a “pitar” en apoyo de su causa. Sin saber, seguramente, cuál era esa causa ni cuál el motivo de la protesta, la mayoría de los interpelados –de extracción popular y media y, aun, representantes de una burocracia estatal acomodada– oprimían las bocinas, sumándose a la cacofonía que servía de fondo sonoro a los gritos de la muchedumbre: “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Ahí están, esos son los que joden a la nación”.

Me adentré en la compacta aglomeración de los manifestantes, y sólo entonces tomé conocimiento de que se trataba de una movilización de los empleados administrativos de la educación, quienes demandaban ante “el ministro de la plata” la elevación de sus salarios –el salario del empleado público medio en el Ecuador con dificultad sobrepasa los 200 dólares– en un 100%, así como el desembolso de los sueldos vencidos (incumplimiento que, en los últimos años, forma parte de una silenciosa política de Estado, con relación a los servidores públicos).

¿Por qué, sin saber a ciencia cierta el motivo de la manifestación, muchos transeúntes se sumaron a ella? ¿Pensaban, a la distancia, que se trataba de la exigencia de la devolución de los dineros engullidos por algún fracasado y deshonesto banquero, durante la crisis bancaria de inicios de 1999 y después de ella?

En el Ecuador de fin de siglo, sobre todo en ciudades serranas como Quito y Cuenca, era frecuente observar el apoyo de la población a las acciones públicas de fuerzas sociales que dicen reivindicar mejoras de la calidad de vida, movilizarse en contra de la implantación del modelo neoliberal, o sencillamente protestar contra un “otro” a veces indefinido, pero responsable de las penurias actuales. Aquella tarde constaté, sorprendida, la adhesión incierta, pero firme, del transeúnte casual a una de las muchas manifestaciones de descontento, que ocurría en un momento de aparente (o tensa) calma social. Ocurría esto en un momento en que los otrora aguerridos protagonistas de los levantamientos indígenas –que muchas veces durante los años noventa paralizaron vías urbanas y carreteras en todo el país– se desentendieron de la participación en la huelga nacional convocada por la Coordinadora de Movimientos Sociales para el 20 y 21 de febrero de ese año, en rechazo a la venta de las empresas estatales de distribución de energía eléctrica, una importante y rentable rama del patrimonio nacional.

La protesta de la que he dado testimonio fue una más de las innumerables manifestaciones de lo que Margarita López Maya (2002) denomina “la política de la calle”, que en el Ecuador ha formado parte de la rutina pública de manera sostenida desde hace más de dos décadas, coincidiendo con los presagios de la crisis económica, social y política.

Lo narrado indicaría que, a pesar de las dubitaciones de algunos sectores del movimiento indígena –cuyas cúpulas a la sazón se encontraban preocupados por las definiciones preelectorales y las búsquedas de inclusión en el establishment político– en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana latía un estado de exaltación permanente por los efectos sociales y económicos de la dolarización y el avance de la economía de mercado y su marco institucional, que coincidían con tendencias sociopolíticas de agudización de la conflictividad expresadas en toda América Latina y que, en países como Ecuador y Perú, se configuran como protestas de alcance nacional de cuestionamiento a la legitimidad e institucionalidad política (Seoane y Taddei, 2000).

Habría, pues, una disposición para el descontento permanente, latente en los ánimos colectivos, en virtud del quiebre del curso acostumbrado de la vida cotidiana y de la relativa holgura que trajo consigo, sobre todo para los sectores medios, la era petrolera. Tal “espontaneidad” se mantendría, a pesar del declive de sujetos de la protesta predominantes antaño, como es el caso del Frente Unitario

de los Trabajadores (FUT), que reunía a las centrales sindicales más importantes. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar estos manifestantes, y sus adherentes de ocasión? ¿Qué es lo que provoca –como durante el masivo derrocamiento de Bucaram, el 5 de febrero de 1997, y la impugnación del mandato de Mahuad, el 21 de enero de 2000– que los tiempos de la protesta “normal” (parafraseando a Kuhn) cedan el paso a los de protesta “extraordinaria” y de ruptura? ¿Cuál es el alcance de tal ruptura?

A inicios del siglo XXI, la protesta de las fuerzas intensamente movilizadas durante muchos años parece implosionar. Así, las fuerzas de la protesta, otrora radical, se asemejan más y más al sediento que se atraganta con el agua que le aplaca la sed: en las elecciones de noviembre de 2002 llegó al poder el coronel Lucio Gutiérrez, ex insurgente del 21 de enero de 2002, quien se declaró buen aliado de Estados Unidos, apoyándolo inclusive en la invasión a Irak. Su triunfo se debe, en grado considerable, al apoyo de la población indígena serrana, y contó en su gabinete con dos de sus más destacados dirigentes en las carteras de Relaciones Exteriores y Agricultura, así como con un representante del Movimiento Popular Democrático, reconocida como fuerza partidaria de la izquierda política, en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya en la presidencia, Gutiérrez no se ha diferenciado mucho de los gobiernos que le precedieron, en lo relativo a las políticas económicas que lleva adelante.

Vale de paso mencionar que hacia mediados de la primera década del tercer milenio parece que asistiríamos a una reconfiguración radical del campo político-ideológico, pues se han establecido alianzas que para muchos analistas resultan ser “contra natura”. Así han sido calificados, por ejemplo, los acuerdos –aunque puntuales– entre el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, y fuerzas autodefinidas como de izquierda, tales como el Movimiento Popular Democrático y sectores socialistas, a las que se sumarían los “populismos” de Bucaram y Álvaro Noboa, junto con los demopopulares; de otro lado, vemos coaligados a antiguos adversarios como el Partido Social Cristiano y la socialdemocracia de nuevo cuño, junto con *Pachacútek*, aliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y cogestor de una activa censura a las orientaciones neoliberales de los gobiernos de los noventa.

Así, como sugería Pablo Dávalos, el movimiento indígena, a pesar de haber detentando espacios institucionales de alto nivel, tendría menos poder que antes de ganar las elecciones. Dávalos se pregunta: “¿Es necesario ganar las elecciones en cualquier tipo de alianzas para ser poder? ¿Podrá el movimiento indígena ecuatoriano recuperar los espacios perdidos desde que pensó, o se imaginó que llegar al gobierno

significaba ‘ser o tener poder’? ¿Habrá aprendido que el poder está más allá de una eventual participación en un gobierno y que esos pequeños espacios de tipo institucional, por importantes que sean, no ameritan poner en riesgo todo un proyecto histórico?” (Dávalos en Ojarasca, 2003). Así, según este mismo analista, los indígenas se habrían convertido, gracias a la “alquimia” del poder, “en los facilitadores políticos de un modelo neoliberal cuya agenda estaba pendiente” (Dávalos citado en Ojarasca, 2003). Se trataría, en todo caso, de un efecto colateral de la política de la dirección indígena, producido quizá por cierta unilateralidad en el planteamiento de la relación con el poder, y también en el énfasis excesivo de estos sectores en la dimensión étnica, que oblitera la dimensión clasista y, en general, social más amplia, y que torna inconsistente la enunciación de objetivos de cara a los resultados reales de su actuación política.

Con todo, la historia de este jaque mate no comenzaría en noviembre de 2002, sino a partir de enero de 2001, cuando tras el levantamiento indígena de esa fecha y el desarrollo de las mesas de diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno y la adopción del acuerdo de 21 puntos, la administración del presidente Gustavo Noboa desistió de radicalizar la agenda de privatizaciones y eliminación de los subsidios al combustible, con lo que la protesta entra en el “limbo” político, puesto que no hubo desmovilización, pero tampoco radicalización. El hábil manejo del conflicto por parte de Noboa conllevó la continuidad del régimen de dolarización, con lo que las fuerzas opositoras al mismo, lideradas por el movimiento indígena, hubieron de desandar el camino recorrido durante los últimos años del siglo XX. En noviembre de 2002, con el triunfo de Gutiérrez, y sobre todo a partir de los primeros meses de 2003, se rompió definitivamente el equilibrio entre las fuerzas que impulsan el ajuste y las opositoras, a favor de las primeras. Por otro lado, se cerró un ciclo de protesta, en el que esta se manifestó intensamente y se caracterizó por el liderazgo indígena, y al que podríamos denominar “la larga década de los noventa”.

Ya en el poder, a partir de enero de 2003, la CONAIE y el movimiento *Pachacútek* experimentaron serias limitaciones para llevar adelante el proyecto de gobierno diseñado en las mesas de trabajo programático desarrolladas entre la primera y la segunda ronda electoral. Un proyecto que contemplaba la reactivación productiva, el desarrollo del turismo, el impulso a la agricultura, y la lucha contra la corrupción, entre otros puntos. Las limitaciones se expresaron no solamente debido a la propia envergadura de los problemas a resolver, sino sobre todo –según lo que mencionó el ex subsecretario de gobierno Augusto Barrera en la entrevista que nos concediera– debido a que, de entrada, dichas fuerzas debieron atenuar sus expectativas programáticas, en

razón de la conflictiva relación con el gobierno y el partido Sociedad Patriótica, pero también de discrepancias internas entre la dirigencia indígena y el movimiento *Pachacútek* sobre la permanencia en el gobierno. La ruptura fue, entonces, preanunciada por el propio curso de las acciones iniciales de Gutiérrez y su entorno de gobierno. ¿Ha devuelto dicha ruptura la vitalidad y presencia contestataria al movimiento indígena? Al menos por el momento, las acciones parecen circunscriptas a la actuación electoral y a la lucha parlamentaria, contexto en el que las alianzas políticas parecen tener un cariz más bien pragmático y de flexibilidad en aras de enfrentar situaciones concretas, mientras se agudiza la fragmentación de la organización. De ahí que la contestación al ajuste adolecerá de serias limitaciones, pues la movilización continuará con la profundización de la crisis social, pero probablemente estará circunscripta a las demandas sectoriales y, sobre todo, ocurrirá dentro de la estrategia impuesta por los sectores políticos de extrema derecha, liderados por el Partido Social Cristiano, y la elites económicas “modernizadoras” (tal sería el caso de la protesta de los servidores públicos que, en noviembre de 2004, exigían el cumplimiento de la Ley de Homologación Salarial, decretada por el gobierno de Gutiérrez, como parte de la reforma económica neoliberal).

En síntesis, no está del todo claro el futuro del movimiento indígena; tampoco se ha configurado el abanico de alianzas socio-políticas en el que habrá de sustentarse la contestación al ajuste. Lo que está claro es que en adelante se precisa del diseño de nuevas metas y estrategias, nuevos lenguajes –tanto en la política como en las ciencias sociales–, así como una nueva filosofía de alianzas que reconozca la trayectoria de los años noventa, sus aciertos y errores.

En lo que a nuestros propósitos concierne, vale la pena preguntarse, para deslindar campos con el determinismo de una hipótesis conspirativa ¿son los límites de la política indígena y de otras fuerzas opuestas al ajuste el resultado de un trabajo “de inteligencia” de los estrategas políticos de las elites gobernantes? ¿O lo son de un ejercicio hegemónico, de la propia debilidad que entrañan las creencias y prácticas políticas que acompañan la protesta tanto de personas comunes, como de dirigentes de las fuerzas sociales configuradas?

En esta ocasión, deseamos indagar sobre los orígenes de tales *impasses*, así como de la pujanza de la crítica al ajuste durante “la larga década del noventa”, enfatizando en sus años finales. A este efecto, hemos invitado a tres grandes fuerzas nacionales, con el fin de averiguar acerca de las concepciones sobre la movilización y su participación en la protesta, a través del diálogo con sus representantes. Dichas fuerzas socio-políticas han sido seleccionadas como fuente de información, en virtud de que, con mayor o menor visibilidad y éxito, han mantenido un

discurso crítico de manera sostenida, a través de la voz de sus miembros de base y/o dirigentes locales e intermedios, generalmente menos visibles y audibles en el ámbito nacional, ciudadanos o ciudadanas comunes que constituyen el “tejido” fundamental de la movilización y la protesta, y que autorizan el ejercicio de una posición dirigencial a los líderes nacionales, en tanto enunciadores de experiencias colectivas, dando “un cuerpo biológico a un cuerpo constituido” (Bourdieu, 1998: 83, 89-91, 119).

Como veremos en su momento, la comprensión de estas voces y acciones, así como de sus virtualidades democráticas y limitaciones, estará orientada por el concepto de “ideología”, en tanto lucha en el terreno de los significados (Eagleton, 1996). Y en esta línea conceptual, hemos comprendido a las identidades de la protesta como momentos de la ideología, es decir como relatos, personales y colectivos, que han permitido encarnar tanto a la contestación a las políticas de institucionalización del ajuste, como a la desmovilización y suspensión de la conciencia crítica.

CONTEXTOS, HEGEMONÍAS Y LUCHAS

Llegando a este punto, deseo reflexionar sobre la inscripción histórica y la significación de las luchas sociales y políticas desarrolladas a partir de la segunda mitad de los años noventa en el Ecuador, así como esbozar las condiciones de la hegemonía en las que estas se desenvuelven.

Al situar la protesta a partir de mediados de la década de los años noventa, es menester contextualizarla en la entrada del país en lo que ha sido denominado “la tercera ola neoliberal” (Petras y Morley, 2000). La entrada sostenida a la lógica de las reformas neoliberales fue emprendida con ritmo sostenido desde por el gobierno de Durán-Dahik (fundamentalmente en materia política). Desde 1996, el gobierno de Bucaram intentó presionar para que el ajuste sea acelerado y para que las reformas neoliberales pendientes se hagan realidad. A partir de ese año, los efectos sociales de tales reformas, y la cada vez más profunda precarización de la sociedad, se han acompañado de la intensificación de la protesta.

Un reconocimiento inicial del momento histórico se refiere al carácter de la transición política inaugurada a inicios de los años ochenta. Según Enrique de la Garza Toledo, “a partir de 1982, en América Latina ha habido dos transiciones políticas. Una ha sido de la dictadura militar al pluralismo político y, posteriormente, al neoliberalismo civil [...]. La otra ha sido en los países que no tenían dictadura militar, de régimen autoritario, caracterizados por el monopolio o duopolio partidario, al pluralismo político y al surgimiento de fuerzas políticas alternativas” (De la Garza Toledo, 2001: 14).

El proceso político ecuatoriano, entre la década de los ochenta y la de los noventa, parece aproximarse al primer tipo de transición; de ahí que la ebullición social y política que caracteriza al Ecuador durante la década de los noventa deba ser entendida en ese contexto. La incidencia de la protesta en el mismo ha tenido repercusiones y significados plúvocos para la instauración del “neoliberalismo civil”, paralelo al advenimiento del pluralismo político, refrendado en la reforma jurídico-política del Estado de fines de los años setenta. Las interpretaciones de la protesta, por tanto, no pueden evitar registrar la contradictoria inscripción de la misma en la construcción política y discursiva de este “neoliberalismo civil” que en la década de los noventa entra en una fase de mayor extensión y radicalización de sus lineamientos, con una presión inédita por el ahondamiento de la desestatización. Imperativo que se torna crucial desde la perspectiva del ajuste, pues a pesar de los avances del “neoliberalismo civil” durante los gobiernos de Hurtado y Febres Cordero¹, los posteriores gobiernos reciben un legado de los años ochenta, en el cual subsiste una continuidad del Estado en tanto espacio de interlocución y negociación/puja con el movimiento obrero y sectores como el magisterio, estudiantes, etc., a pesar de las “magras” conquistas de las huelgas nacionales (Pérez Sáinz, 1985). En los años noventa, con su proyecto de desestatización radical y contrarreforma agraria, de lo que se trata es de eliminar esta posibilidad, aun cuando se han preservado espacios de satisfacción de los intereses de los grupos económicos dominantes (como fue evidente, por ejemplo, en los casos de salvataje bancario).

Es precisamente en la senda de la desestatización radical y las políticas contrarreformistas en el tema agrario, donde adquiere una importancia singular la reconfiguración de la hegemonía, a través de estrategias discursivas y simbólicas específicas. Sus logros políticos son quizás su más importante triunfo durante los años noventa, pues el pluralismo político y el respeto formal a la existencia de polos político-organizativos de contestación se acompañan de mutaciones notables en las representaciones oficiales y mediáticas sobre la sociedad, el conflicto y la protesta. Tal representación tiene un anclaje en interdicciones de figuras políticas y sociales emblemáticas de las luchas de los

¹ Para César Montúfar, por ejemplo, el proyecto de la derecha neoliberal ecuatoriana en los años ochenta habría fracasado, “no porque no se haya liberalizado casi completamente la economía desde 1984, sino porque el grupo que intentó hegemonizarlo ha sido incapaz de lograr que los principios del neoliberalismo no solo económico sino político pasen a determinar las interacciones entre Estado, sociedad y economía. La economía como la sociedad en el Ecuador siguen estatizadas; el comportamiento de los actores económicos y sociales todavía se articula por los recursos y prebendas que pueden extraer del Estado” (Montúfar, 2000: 9).

años ochenta, y ellas son sometidas, desde los enunciadores oficiales, y desde luego desde los medios de comunicación, ora a desplazamientos discursivos, ora a supresiones y a la criminalización eufemizada de la protesta. Por ejemplo, tras el primer levantamiento de la CONAIE en 1990, cuyas demandas incluían, entre otras cosas, la profundización de ciertos aspectos de la reforma agraria, exhibiendo un corte clasista y étnico-cultural, ya hacia mediados de la década se afianza la aceptación oficial de los pronunciamientos con contenido étnico, adquiriendo preponderancia lo “indígena” frente a lo “campesino” (y aquí vino como anillo al dedo el debilitamiento de las dimensiones clasistas a nivel de algunos sectores de la dirigencia indígena).

Para el caso del movimiento estudiantil, por otra parte, se operaría un desprestigio de la protesta –más aun cuando muchas de las demandas apuntaban directamente a la reformulación de políticas de Estado, tanto en el campo de la educación como de la implementación del ajuste–, sumado al enunciado de la “juventud” y una preocupación por crear ciertas condiciones de inclusión en tanto “jóvenes”.

En el caso del movimiento sindical, en cambio, la enunciación oficial no parece operar desplazamiento alguno en el que el icono sea sustituido, sino más bien una supresión, que es simultánea a una incisiva campaña de desprestigio del sindicalismo en todas sus vertientes, acompañándolo, además, de las modificaciones de las reglas del juego mediante las transformaciones del Código del Trabajo y la reorganización de la producción.

Por todo esto, uno de los factores del declive y la poca visibilidad de algunas de las expresiones sociales y políticas de la contestación sería –además de la ausencia de propuestas alternativas de sociedad, de la desmovilización y de la fragmentación organizativa– el déficit político-simbólico, y la brecha discursiva que caracterizó su presencia política.

Esta lógica de visibilización/desplazamiento/ocultamiento incidiría también en la representación de lo social elaborada desde las ciencias sociales, una parcela de las cuales se ha regido por tales pautas, preconizando la aparición de “un nuevo actor social” y profetizando la desaparición de los actores “tradicionales” (en sintonía con el *modus operandi* mediático), cuando en realidad, como veremos, de lo que se trata es de un creciente incremento de la conflictividad laboral y salarial, y de una resistencia activa a las privatizaciones, aun cuando ciertamente de manera dispersa.

La hegemonía ha funcionado, entonces, con una lógica sutilmente disruptiva: son represiones discursivas “limpias” (tanto como las representaciones televisadas de las guerras de Irak), es decir sin violencia material a la vista. Represiones que, pasado el primer sobresalto y la primera perplejidad (frente a una supuesta “abolición de las

antiguas certezas”), se deslizan como sobre ruedas, reconfigurando el campo de producción ideológica. Esa represión “limpia” es, como se ha dicho, potencializada por el peso de los medios de comunicación y sus peculiares métodos de inducción de verdades y consensos, al operar, no solo mediante la profusión de signos, sino también mediante el juego de visibilización-ocultamiento de los emblemas políticos, su sobreexposición y/o supresión. Michel Foucault decía que lo que hace que el poder sea aceptado “es simplemente que no sea solamente como una fuerza que dice no, sino que de hecho circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo social que como una instancia negativa que tiene como función reprimir” (Foucault, 1999: 48). Y es en la trama de esta productividad discursiva y flujo de saberes y placeres donde se construyen las significaciones políticas, en un entorno en el que operan, como argumentaba Foucault, interdicciones, clasificaciones, recortes y disciplinamiento de los enunciados (Foucault, 1996).

Como sabemos, el análisis realizado por ese autor en *El orden del discurso* derivaría de la experiencia del *modus operandi* del estalinismo. Una matriz discursiva similar encontramos hoy en día en el *modus operandi* del neoliberalismo y el “pensamiento único”, que ha naturalizado los procesos sociales, económicos y políticos e invisibilizado el conflicto y la contestación al orden². A eso Jameson (1999), siguiendo a Stuart Hall, ha denominado “lucha discursiva”, y es en ese terreno que se ha operado la supresión de ciertos tópicos, con la correspondiente invisibilización de los sujetos críticos del dogma del mercado. Es así como, por ejemplo, en el caso ecuatoriano a partir de los años noventa desaparecen del horizonte mediático fuerzas sociales como los sindicatos o los campesinos. O reaparecen bajo la forma de abyección (con la criminalización de la protesta de por medio). Y eso causa perplejidad, mientras la interrupción del flujo apacible de los nuevos lugares comunes y abyecciones requiere nuevas y denodadas astucias, demandando comprensiones renovadas de la hegemonía y la política.

Tales lenguajes y modos de representación están claramente inscriptos en la época de los años noventa; hoy en día nos compete superar esos enfoques y lenguajes, pues no han ayudado para el conocimiento de la sociedad de fin de siglo, propiciando más bien la legitimación de un nuevo orden discursivo cuyas prácticas es menester aprender a de-

² En la entrevista concedida a M. Fontana, Foucault relata que la inspiración de las concepciones vertidas en *El orden del discurso* provendría de la experiencia de la supresión dogmática por parte de los post-estalinistas de todos aquellos enunciados que no calzaban en la vulgata oficial en torno a la ciencia (Foucault, 1999).

codificar. Nos cabe, pues, recuperar una visión de futuro y, sobre todo, actualizar la discusión política.

LOS SUPUESTOS DE PARTIDA

La tesis central aquí sustentada es que la protesta social en el Ecuador de fin de siglo, aspecto fundamental de la crisis política, encuentra su fuente de inspiración, por una parte, en la experiencia de una ciudadanía social trunca, y de una economía moral expresada en el rechazo de la corrupción, percibida como usurpación y engaño, como la fuente de privaciones del acceso a derechos, recursos y servicios que caracterizan a la vida moderna³. La contestación emerge en un contexto de orientaciones políticas contradictorias y, en gran medida, gracias al contrapunto que establecen la democratización de la sociedad ecuatoriana a partir de los años setenta, y las cada vez más acentuadas tendencias hacia la desigualdad social y económica al finalizar el siglo XX; o entre las tendencias hacia una construcción de un estatus ciudadano (en tanto vínculo político basado en la igualdad política, el acceso a recursos) y la “erosión” del sentimiento de pertenencia a la comunidad política⁴. Un elemento de dicha tensión contextual que “ensambla” la protesta sería también, desde mediados de los años noventa, sobre todo para los grupos indígenas y campesinos –pero también para ciertos grupos urbanos medios– el despertar de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada”, y la ausencia de acciones del Estado (que en muchas mentes se encarna en personajes concretos de la política) que refrenden con la garantía de los derechos sociales ese sentimiento de pertenencia, y la fidelidad a un territorio y a unos símbolos.

El sentimiento de pertenencia se manifiesta también a través de la intolerancia a los abusos del poder y la corrupción de los gobernantes en el manejo de la cosa pública, a los excesos y el rebasamiento de ciertos límites de actuación. Empero estos tópicos no siempre son politizados ni demandan una reformulación del sentido político y social de las instituciones, sino la sustitución de sus personeros. Estos

3 Según Bryan Turner, el estatuto de ciudadanía implica derechos y obligaciones, la forma y tipo de tales derechos y obligaciones, las fuerzas sociales que producen tales prácticas y, por último, las condiciones (*arrangements*) sociales a través de las cuales dichos beneficios son distribuidos a los diferentes sectores de la sociedad (Turner: 1993: 3). por otro lado, Stephen Kalberg sostiene que, en términos de las fuerzas culturales que sostienen las prácticas de la ciudadanía moderna, los componentes centrales son: la responsabilidad cívica, la confianza social, el igualitarismo y el individualismo universalmente orientado (Kalberg, 1993: 91).

4 Pablo Andrade encuentra tal contradictoriedad expresada, por una parte, en la creciente igualdad y afirmación de las libertades políticas y, por otra parte, en la erosión del sentimiento de pertenencia a la comunidad política (Andrade, 2002). Esta pauta analítica se encuentra recuperada y profundizada en el primer capítulo del presente trabajo.

elementos del sentimiento de inconformidad asumen configuraciones y contenidos diversos en cada grupo socio-cultural abordado, traduciendo una polifonía social en la que el malestar con el estado de cosas y el cuestionamiento a los gobernantes y/o políticos se expresa en acciones que van desde la inconformidad y la protesta hasta la emigración y el exilio económico.

La protesta desde mediados de los años noventa apuntaría a demandas tan básicas, cuanto universales (que frecuentemente se entrelazan con reivindicaciones específicas como las étnicas) como son las aspiraciones a estándares decorosos de vida, acceso a la educación, la salud, el trabajo y –¿por qué no?– al consumo, que intentarían contrarrestar la creciente precarización de la sociedad. Hacia los últimos años del siglo XX, estas demandas sociales se entrelazan con el cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones políticas vigentes, lo que logra su máxima expresión en la impugnación a los poderes del Estado, y en la demanda de la plurinacionalidad.

Me he referido aquí a un concepto eminente elaborado por Benedict Anderson en *Comunidades Imaginadas* (Anderson, 1993). El enfoque de la nación como formación cultural –que surge del pensarse colectivo simultáneo como miembros de una comunidad “imaginada” (nunca se conocerá a todos sus miembros), “limitada” (dentro de ciertas fronteras territoriales) y “soberana” (en tanto libre)– nos ayuda a comprender el suelo emotivo y una gran parcela de los contenidos ideológicos que sustentaron la experiencia de los/as diversos/as movilizadas/as durante estos años. Tales contenidos y sentimientos serían el punto de partida para las interpelaciones al Estado y sus elites dirigentes, y el cimiento de una “ciudadanía de sentido común” (concepto de Andrés Guerrero).

El sentimiento de ciudadanía se expresaría más en el clamor por los derechos que en el reconocimiento de las obligaciones. Tal anclaje no representaría una minusvalía de la ética ciudadana, sino una forma de “ciudadanía social de sentido común” que supone un sentido de pertenencia a la “comunidad imaginada”, la conciencia sobre un conjunto de derechos inalienables y prácticas de participación en demanda del acceso a tales derechos, recursos y servicios (que parcialmente fueron provistos por el Estado desarrollista de los años sesenta y setenta, ver Andrade, 2002).

Por otra parte, es menester precisar que he deseado hacer un trabajo de historia contemporánea, pues los sujetos aquí analizados han instituido, como diría Rojas, “un modo específico de pasar el tiempo” (Rojas, 2001: 42). Tal modo peculiar se extendería desde octubre de 1996 hasta más o menos mediados de 2002, y sus cualidades obedecerían a dos circunstancias fundamentales.

La primera: es precisamente en estos años que hemos vivido lo que he denominado un ciclo de “aceleración del ajuste”. Es decir que, si durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo Borja y, sobre todo, Sixto Durán Ballén las reformas neoliberales se intentaban instaurar de manera más o menos parsimoniosa, ya a partir del gobierno de Bucaram, pasando por Mahuad y Noboa, el ritmo del ajuste se apresura y se presiona por la viabilización de medidas altamente conflictuantes, como la eliminación de los subsidios del gas. Además el ciclo coincide con la agudización de la crisis económica y fiscal (a lo que nos referiremos en el Capítulo I); entonces, ese cuadro socio-económico se constituye en el “contexto desencadenante” del ciclo de intensificación de la protesta. En lo posterior, la protesta decae; sobre todo, el gobierno de Noboa “administra” la crisis sin realizar medidas rechazadas anteriormente, tales como la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica, pero también, entregando fondos en las visitas que el presidente realizaba a las provincias durante las festividades locales (CAAP, 2002b: 51). Veremos en adelante cómo este hecho fue positivamente percibido, desde una expectativa asistencialista, abrigada por los protagonistas de las protestas indígenas de fin de siglo.

La segunda circunstancia radica en que desde las elecciones de 2002 estaríamos asistiendo a un nuevo momento o ciclo político, que quizá coincide, nuevamente, con la dinámica de estabilización de la economía. Es decir, no es que esta se haya recuperado, pues persiste hacia finales de 2003 una inflación del 6% que se estima elevada para una economía dolarizada (ILDIS, 2003: 23). Por otro lado, los indicadores sociales señalan una mayor precarización de las condiciones de vida de la población. Empero, los ritmos de deterioro parecen desacelerarse en comparación con los fatídicos años 1998-1999, cuando la tasa de desempleo se disparó al 14,4%. El mismo indicador en el 2003 bordeó el 11% (sin la válvula de escape que representa la emigración, los índices de desempleo y subempleo señalarían una hecatombe social). Por otro lado, a pesar de que el salario real ha tendido a estabilizarse, se trata apenas de indicadores promedio que desconsideran los extremos, en uno de los cuales la mayoría sobrevive con ingresos ínfimos, mientras que tal tendencia al equilibrio social redundaría en la profundización del desempleo (ILDIS, 2003: 39).

La protesta, de todos modos, no ha cesado y hemos sido testigos en el 2004 de acciones radicales y prolongadas, como la de los jubilados a mediados del año, o de los servidores públicos en el mes de noviembre. La movilización, sin embargo, ha carecido de la articulación y despliegue generalizado que otrora le imprimieron tanto la CONAIE y otras organizaciones campesino-indígenas, cuanto la Coordinadora de Mo-

vimientos Sociales en alianza con el Frente Unitario de Trabajadores, como por ejemplo ocurrió a principios de 1997.

¿Cómo entender la latencia de la protesta o ebullición sectorializada que vivimos desde entonces? Este fenómeno estaría configurado por varias situaciones. En primera instancia, la inconformidad habría sido canalizada por vías institucionales, a través de la elección de Gutiérrez y la inclusión en el gobierno, aunque pasajera y conflictiva, de representantes de la CONAIE –fue notable la presencia de Luis Macas como ministro de Agricultura– y el partido *Pachacútek*, quienes intentan durante el lapso de enero de 2003 hasta agosto del mismo año, fecha de la ruptura, contrapesar las presiones del ajuste realizadas a través sobre todo, de los ministerios de Finanzas y Comercio Exterior. En segunda instancia, las organizaciones que alentaron la movilización en años anteriores estarían atravesando momentos críticos –como la CONAIE que al momento enfrenta discrepancias internas–, viéndose abocada también a una redefinición de estilo político, como a una reconceptualización de las alianzas dentro del mismo campo indígena (la Federación de Indígenas Evangélicos, por ejemplo, ha desplegado acciones de respaldo al gobierno; y el dirigente del ala amazónica de la CONAIE, Antonio Vargas, ha sido nombrado ministro de Bienestar Social, con lo que se habría conseguido moderar la movilización indígena); en lo que al FUT concierne, ha sufrido un proceso de franco desvanecimiento. De otro lado, como hemos mencionado, la emigración continúa de manera sostenida, y ello permitiría una mitigación importante de los efectos del desempleo: es notorio, por ejemplo, que a pesar de los elevados índices en el país no haya surgido un movimiento de desocupados; por otra parte, es interesante anotar que los montos de las remesas de los emigrantes ascendieron de 1432 millones de dólares en el 2002 a 1600 millones superando a las inversiones extranjeras (ILDIS, 2003). Por último, es muy probable que en la población esté latiendo una “fatiga cívica” de cara a la ineficacia de las impugnaciones presidenciales de los últimos años, y a la irremediable precarización de las condiciones de vida.

Pero sobre todo, es la mentada reconfiguración del campo político-ideológico, junto con la “re-ingeniería” de las pautas éticas que modelan los estilos políticos, entre las que hoy se manifiestan brotes de una especie de práctica “ascéptica”, a-partidaria y “post”-ideológica de la ciudadanía (un medio adaptable a diversos fines, entre ellos a la defensa de una institucionalidad caduca y antidemocrática y aun a la creación de dispositivos de violencia y represión paraestatal, como fue la denominada Marcha Blanca convocada por el alcalde de Guayaquil en enero de 2005) lo que nos indicaría el tránsito de un ciclo político a otro, a partir de mediados de 2002.

DE LAS PERSPECTIVAS EN TORNO A LA PROTESTA

Por razones evidentes, la protesta social en el Ecuador ha sido, en los últimos años –bajo la denominación de “movimientos sociales”– un tema difícil de soslayar. No podemos decir, sin embargo, que en todos sus componentes sociológicos se haya profundizado de manera suficiente. Así, mientras el tema indígena, en general, ha suscitado una verdadera “explosión discursiva” –referida al tema de la protesta o no– la visión de otras presencias públicas se vio opacada casi por completo. Y esto podría deberse no solamente a la importancia política de la CONAIE durante los años noventa, sino en gran medida también a la débil institucionalización y arraigo de la investigación social en el país, que dificulta a los/las investigadores/as la dedicación sostenida a temas que están al margen de las urgencias sociales y políticas. Por otro lado, para comprender la cancelación del tema de la protesta y presencia social de sectores como el movimiento obrero y estudiantil, prevaecientemente vinculados a la izquierda, habría, asimismo, que considerar, ya en el plano político-discursivo, la censura frecuentemente más implícita y silenciosa que pesó a partir de 1989 sobre aquellos tópicos. A continuación, antes que un recuento exhaustivo de las perspectivas en torno a la protesta social, veamos algunas de las contribuciones más importantes sobre el tema.

Bajo la óptica de las incidencias del conflicto, dicho fenómeno está siendo registrado continuamente por el Equipo de Coyuntura del Centro Andino de Acción Popular (CAAP), colectivo que desde hace algunos años nos ofrece en forma cuatrimestral, a través de la revista *Ecuador Debate*, datos “frescos” sobre la conflictividad social y política. Se trata de una perspectiva sociográfica y analítico-coyuntural que permite identificar tanto las dinámicas y contenidos de los conflictos socio-políticos más relevantes, como a los sujetos de dichos conflictos y los desenlaces de los mismos; es, pues, en ese marco que es posible leer las características generales de la protesta social de diversos sectores, incluidos sindicatos y estudiantes. También dentro de una visión general del conflicto y de un corte analítico-coyuntural, podemos encontrar referencias a dichos sectores en el trabajo de Mario Unda Soriano *Ecuador: conflictos sociales en el año 2000* (Unda Soriano, 2001).

Como hemos dicho, con respecto a la problemática indígena los años noventa, en general, se vio surgir una multiplicidad de trabajos, publicados en libros de autoría múltiple e individual, pero sobre todo en revistas nacionales y extranjeras. En 1992 fue publicada la obra colectiva de Ayala, Maldonado, Kowii, Ramón y otros: *Pueblos indios, estado y derecho*, trabajo que representa la memoria del Seminario del mismo nombre realizado en Quito en abril de 1991; el tratamiento del tema tiene un enfoque multidisciplinar y constituye un balance de la

presencia de los pueblos indígenas y su relación con la nación, desde el punto de vista histórico, jurídico, antropológico y político (Ayala et al., 1992). Uno de los trabajos de investigación de mayor aliento es la obra colectiva editada por Muratorio (1994): *Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX*; así como la compilación *Etnicidades*, realizada por Guerrero (2000), obras en las que destacamos los textos de Guerrero (1994 y 2000), consagrados al tema de las formas históricas de la dominación étnica. Una muestra de esa profusión de perspectivas sobre la temática indígena es, entre otras, el trabajo compilado por Angélica Bernal: *De la exclusión a la participación. Pueblos indígenas y sus derechos colectivos en el Ecuador* (Bernal, 2000), que conjuga miradas jurídicas, antropológicas y políticas sobre los cambios operados en la relación pueblos indígenas-Estado en el Ecuador de finales del siglo XX.

En una primera “ronda” de investigaciones sobre el tema de la movilización indígena, un trabajo relevante ha sido la obra colectiva: *Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990* (Almeida et al., 1991), en el que desde una pluralidad de miradas se fue analizado el primer levantamiento indígena de junio de 1990, manteniendo en foco los aspectos sociales, el análisis de las reivindicaciones, y los aspectos político-organizativos del levantamiento. León Trujillo, por su parte, dedica su obra: *De campesinos a ciudadanos diferentes* al análisis de la constitución de las identidades del levantamiento de 1990 en relación a los referentes étnicos, ciudadanos y de clase (León Trujillo, 1994). El levantamiento de 1994 mereció, asimismo, artículos como el de Andrés Guerrero: “El levantamiento indígena de 1994. Discurso y representación política en Ecuador” (Guerrero, 1996), en el que se resalta el tema de la lucha por el reconocimiento étnico y cultural.

En una segunda “ronda”, aparecen nuevos autores abordando el tema de la protesta indígena, en trabajos referidos al tema que es objeto de nuestro análisis. Tras la aparición de las obras, predominantemente testimoniales, *La rebelión de los indios* (Lucas, 2000) y *Nada sólo para los indios. El levantamiento indígena del 2001* (Lucas y Cucurella, 2001), ve la luz el trabajo de Augusto Barrera Guarderas *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los años 90* (Barrera Guarderas, 2001), que sintetiza reflexiones sobre dicho período de la movilización indígena. Este autor enfoca la constitución del movimiento indígena, y su acción en el marco de la crisis política y el campo del conflicto creado por la reforma del Estado impulsada sobre todo en la década de los años noventa; los levantamientos realizados en este período son examinados, tal como el autor nos explica, en una “línea simbiótica” de los paradigmas de acción racional, la movilización de recursos y el paradigma de la iden-

tividad; particularmente (Barrera Guarderas, 2001: 61) la identidad es concebida como “cemento” del proyecto étnico, a partir del despliegue de recursos expresivos, y como “estrategia” en la proyección de una lucha redistributiva (Barrera Guarderas, 2001: 145)⁵. Otro autor que ha reflexionado sobre la movilización indígena de finales de los años noventa es Pablo Dávalos. Desde su perspectiva se analizan las estrategias políticas aparejadas a la demanda de la plurinacionalidad y la pluriculturalidad (Dávalos, 2000 y 2003). Por su parte, Pablo Ospina analiza la relación entre el carácter del sistema político, y cómo este es modulado desde la demanda indígena (Ospina, 2000). Y entre los esfuerzos más importantes de los últimos tiempos encontramos la obra de Fernando Guerrero y Pablo Ospina (2003) *El poder de la comunidad. Movimiento indígena y ajuste estructural en los Andes ecuatorianos*, realizada con apoyo institucional de CLACSO-ASDI; sus autores analizan el tema de la movilización indígena en estrecha relación tanto con las modificaciones de la estructura agraria del Ecuador en el contexto del ajuste estructural, como de las identidades étnicas. El texto actualiza, por otra parte, el debate sobre el problema de la tierra, la reforma agraria y las condiciones actuales del agro serrano; vale decir, el tema de lo “campesino” asociado a lo “indígena”.

Este breve balance sobre la producción ecuatoriana en torno a la protesta revela algunas ausencias. En primer lugar, vemos que dada la centralidad de la problemática de lo “indígena”, en la mayoría de los trabajos ha sido relegada la preocupación sobre la protesta en tanto “campesinado”, que atañe aún a una enorme parcela de la población indígena. En segundo lugar, sentimos la carencia de enfoques sobre la movilización campesina en otras regiones, por ejemplo, en la Sierra Sur, que ha otorgado consistencia nacional a la protesta (tanto en cuanto movilización campesino indígena, digamos, de la provincia del Cañar, como a nivel del Seguro Social Campesino). En tercer lugar, en los trabajos disponibles priman tanto las perspectivas de análisis de fuerzas sociales actuantes en el campo de disputa por la construcción institucional, como de las voces autorizadas, sin que sea abordado un tratamiento del tema desde el punto de vista de los sujetos “rasos” y de los dirigentes intermedios, es decir, en tanto experiencia “desde abajo” de la movilización. Por último, como se ha señalado, la visibilización de la temática de lo indígena se ha acompañado del silencio sobre otras presencias movilizadas. Por eso, las reflexiones desplegadas, sobre todo, en la segunda parte del Capítulo II y en los capítulos III y IV del presente texto tienen una base bibliográfica insuficiente en lo que corresponde

⁵ El autor se guía en este punto por las perspectivas teóricas de Melucci (1989) y Pizzorno (1989 y 1994).

al tratamiento mismo del tema, confiando al análisis presente un carácter provisional e hipotético.

Nuestra tarea central ha sido explorar la protesta en el Ecuador en los últimos años, desde el punto de vista de la ideología, es decir de los significados políticos, así como de los hechos o dichos políticos y económicos que habrían conmovido el sentido más íntimo de quienes se han movilizado durante estos años. Un segundo propósito ha sido el de reflexionar sobre la incidencia de la protesta anti-ajuste y de sus orientaciones y contenidos en el desenlace de la vida pública a fin de siglo. Intentamos saldar las ausencias anotadas, reconociendo los significados de la protesta desplazándonos al Austro serrano del país, localidad política que ha sido vista como periférica en relación a un espacio considerado decisivo para la protesta, como es la sierra centro-norte del Ecuador. Por último, el interés primordial es examinar la ideología de la protesta a través de las representaciones, para lo cual hemos privilegiado el diálogo predominantemente con dirigentes intermedios que no han tenido una gran visibilidad nacional, personas cuyas voces han sido menos audibles y cuyo discurso muestra “desviaciones” de sentido con relación al discurso de las cúpulas, en la medida en que su destinatario no es directamente el Estado en sus instancias nacionales, sino las sociedades locales.

Cabe prevenir que no hemos tenido la pretensión de hacer un trabajo exhaustivo en torno a la protesta, sino que se ha intentado más bien realizar una cierta restitución de los vacíos analíticos de la última década, sobre todo en lo que corresponde a la protesta estudiantil y sindical a partir de nuevos supuestos e interrogantes; pero también ensayar un enfoque diferenciado de aquellos que han sido realizados desde las diversas teorías sobre los movimientos sociales, abordajes bastante difundidos en los años noventa.

El contenido analítico ha sido dividido en cuatro capítulos. El primero sitúa el contexto histórico de la protesta, comprendiendo a esta como constituyente de la crisis política de los últimos años. El segundo capítulo examina la protesta indígena y campesina desde el punto de vista de sus desdoblamientos ideológicos, enfatizando en la complejidad y oscilación entre las demandas específicas y las proyecciones nacionales, así como en las mutaciones que sufren las identidades políticas en las postrimerías del siglo XX. El tercer capítulo nos remite a las búsquedas de afirmación social de ciertos sectores politizados del estudiantado secundario, y a su construcción de los sentidos del mundo. El cuarto capítulo intenta descubrir los entretelones, más bien ocultos durante los años noventa, de la protesta obrero-sindical. En la medida de lo posible, hemos intentado también esbozar los procesos históricos y político-culturales de constitución de los sujetos sociales

de la protesta, recuperando también el tema de los desplazamientos de su representación en la iconografía política oficial de la última década. En la última parte, conclusiva, reflexiono “en voz alta” sobre posibles alternativas para la reconstitución del vigor político y la eficacia de la protesta de dichas fuerzas.

Una última advertencia: al escribir estas páginas no he podido sustraerme de los sentimientos que embargan a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas, por eso este texto, que está abierto al debate y lleno de interrogaciones y perplejidades, está también colmado de aspiraciones de cambio y de esperanza, del deseo de bienestar y dignidad para todos y todas. Recorramos pues, junto con nuestros/as testimoniantes, este difícil camino de la historia del Ecuador de los últimos años, anhelando que sus puntos de vista contengan el distanciamiento temporal suficiente que permita hacer justicia a los sujetos colectivos que marcaron nuestro acontecer nacional al eclipsarse el segundo milenio.

Lima, julio de 2003

Cuenca, noviembre de 2004

Capítulo I

FIN DE SIGLO: LA HISTORIA DE UN EMPATE

HACE MUY POCOS AÑOS, numerosos analistas coincidían en señalar que en Sudamérica habríamos experimentado un desplazamiento hacia la “izquierda”, tras una década de dominio de los ánimos conservadores. Tal aseveración solía ser sustentada en la constatación del fenómeno Chávez en Venezuela, de la importante presencia del Movimiento al Socialismo liderado por Evo Morales en Bolivia, y del apabullante triunfo electoral de Lula en el Brasil. También los resultados electorales de finales del año 2002 en el Ecuador fueron considerados en su momento como parte de esta “nueva ola” continental.

Digamos que, más allá del giro político y económico que ha dado el gobierno de Lucio Gutiérrez, en cierto sentido la aseveración señalada era verdadera, pues en el Ecuador de fin de siglo se configuró una tendencia más o menos consistente –y sobre todo persistente– de crítica e irritación con un orden de cosas. Corriente que se concretó en el cuestionamiento al modelo de sociedad que se ha pretendido vigorosamente instaurar durante el último decenio del siglo XX. En los últimos años esto se ha expresado en dos impugnaciones presidenciales, reiteradas protestas y, finalmente, en las urnas.

La crítica de las urnas, aun cuando expresada en una votación inconsistente, volátil y otorgada a favor de candidatos “salvadores” (Lucio Gutiérrez, ex militar, cholo y provinciano, y Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, ambos “advenedizos” en la política nacional) y, particularmente, en las identificaciones electorales con Gutiérrez, habría sido un

aval inequívoco a lo actuado el 21 de enero de 2000, cuando la insurgencia indígena, los llamados “movimientos sociales” y los mandos medios de las Fuerzas Armadas, en conjunción de voluntades, derrocaron al demócrata cristiano Jamil Mahuad, y por unas horas ocuparon el Palacio de Gobierno hasta que el retiro de Gutiérrez desmovilizó al fugaz gobierno. Sobre este tema volveremos más adelante, para captar la importancia de este evento, recordemos que Mahuad se ha convertido en uno de los símbolos de la plutocracia y que bajo su mandato se realizó el feriado bancario en marzo de 1999 (incautación de los depósitos). Tiendo, pues, a concordar con el analista Marco Aráuz, quien considera que “la sensación de que el 20 de octubre de 2002 el Ecuador volvió al 21 de enero de 2000 es cierta de varias maneras, pero no lo es en la medida en que se trata de una situación avalada en las urnas”¹ (*El Comercio*, 26 de octubre de 2002).

En el presente capítulo reflexionaremos sobre las características y significación histórico-política de la movilización de protesta de los últimos años del siglo XX y los albores del XXI, constitutivo esencial del torrente cuestionador, para lo cual haremos un recuento de los eventos cruciales de la protesta, dando un vistazo al tenor de las reivindicaciones, como al panorama socio-político general. Propongo también plantear unas consi-

1 El analista César Montúfar considera que el triunfo de Lucio Gutiérrez “no puede interpretarse como parte de la tendencia o giro continental hacia la izquierda” (*El Comercio*, 2002). Para Montúfar, el gran elector del domingo 20 de octubre fueron los indecisos, quienes habrían dado un súbito vuelco en su decisión electoral, dando el triunfo a los candidatos Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa, desplazando a quienes parecían más opcionados. Para el caso de Gutiérrez no se puede, dice Montúfar, considerar que se trata de un apoyo consistente, sino de una adhesión volátil, “de una sumatoria de segundos, terceros y cuartos puestos hasta remendar su posición estelar”. Es decir, el 20% de Gutiérrez no representaría un triunfo contundente a nivel nacional, sino el “remiendo” de votaciones provinciales. No obstante, si consideramos lo que la “inconsistente” votación de Gutiérrez representa con relación a las votaciones obtenidas por el candidato que ocupó el tercer lugar, el socialdemócrata Rodrigo Borja, y quien obtuvo el cuarto, el socialista León Roldós, veremos un predominio electoral de la tendencia crítica, o quizá un elocuente equilibrio con aquellas fuerzas que propugnan el ajuste. Debemos observar que el social demócrata Rodrigo Borja, con el 15% de los votos, ha representado durante los últimos años una corriente que se ha pronunciado permanentemente contra el desmantelamiento del sector estatal de la economía, aun cuando en su gobierno se dieron las modificaciones de las reglas de juego en el ámbito de la legislación laboral. Por su parte Roldós, quien obtuvo el 14%, quizá con más consistencia que Borja ha tenido una voz permanente en contra de las medidas extremas impulsadas por la tecno-burocracia y la derecha política; ambos políticos, por cierto, se ha opuesto con coherencia a la dolarización. Tendríamos también en el plano electoral la cristalización de una tendencia crítica que se orienta, ora a la beligerancia, ora a las soluciones institucionales, ora a la impugnación al Estado (como aconteció en el 2000), ora a la inscripción de sus alternativas en el marco de la legitimidad. La tendencia, no obstante, exhibe fragmentación política, quizá debido a la orfandad de liderazgo, a la ausencia de una figura simbólicamente concentradora (como es el caso de Chávez; o más aun de Lula, que tiene tras de sí un importante acumulado histórico desde las luchas antidictatoriales), pero sobre todo, en razón de la dificultad para establecer consensos en aras de una candidatura única.

deraciones sobre los límites que ha exhibido la protesta, frente al telón de fondo de los valores y metas que los sujetos movilizados decían defender. Articularé la argumentación de este capítulo en torno a tres tesis.

En la primera sostengo que la protesta social tuvo una incidencia fundamental como componente de la crisis política, en la medida en que los pronunciamientos populares y de oposición al ajuste han logrado retrasar la agenda de transformaciones neoliberales, aunque sin levantar propuestas consistentes en el plano redistributivo y social.

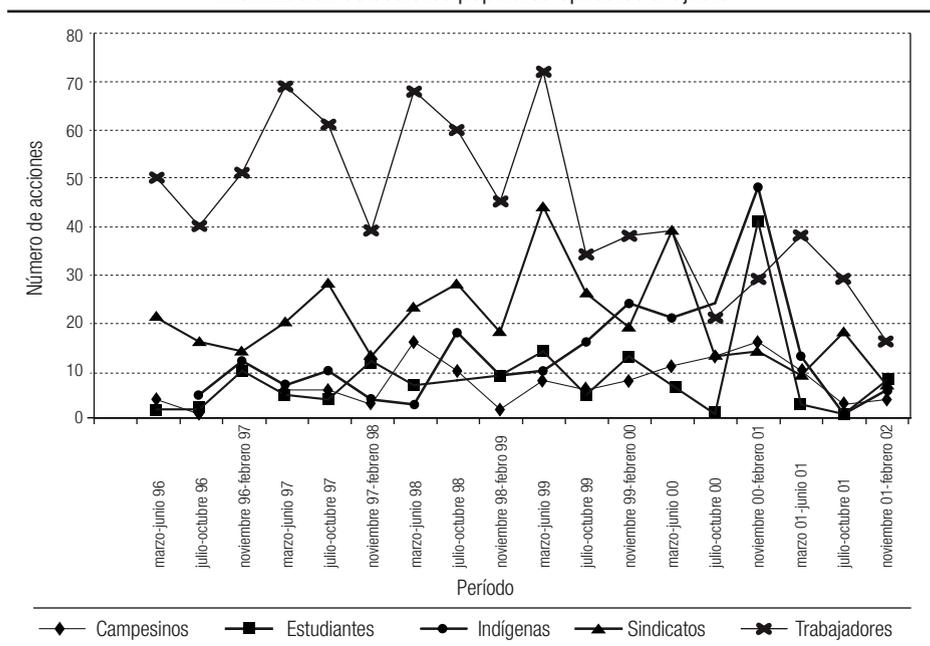
La segunda tesis –y sobre ella me permito extenderme– ubica la importancia de la movilización del sujeto laboral (obrerros sindicalizados y trabajadores) y los estudiantes, junto con la presencia de los indígenas y campesinos, para la configuración de un campo político en el que las fuerzas opositoras al ajuste han logrado mantener una dinámica de resistencia, que parecería intensificarse con la impugnación de Jamil Mahuad en el 2000. Empero, la aparente intensidad (y radicalidad) de la protesta se acompañaría del debilitamiento de los componentes antisistémicos. Así, la acción de sindicatos y trabajadores se realizó en el campo de los intereses del otro, esto es, estuvo circunscripta al plano táctico: de defensa en contra de las apetencias privatizadoras y de las reivindicaciones sectoriales, sin una propuesta clara del modelo de sociedad deseado. En la movilización indígena de la Sierra, por otra parte, ha perdido vigor la lucha por la tierra, en el contexto de la “contrarreforma” y la reestructuración de las relaciones agrarias emprendidas desde 1994. Aclaremos que al constatar el debilitamiento de los componentes antisistémicos no estamos desconociendo la contribución de esta lucha a la desaceleración del ajuste.

De paso, cabe puntualizar que sostener la importancia de la movilización del sujeto laboral y estudiantil sería un lugar común y, para muchos/as, con cierto “olor rancio”, siempre y cuando no estableciera contrapuntos con un conjunto de planteos exagerados sobre la exclusividad del movimiento indígena, “nuevo actor social” en la década del noventa, junto con la supuesta desaparición de fuerzas organizadas como los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, “movimientos sociales tradicionales”². No se trata, desde luego, de desestimar la presencia in-

2 Tales perspectivas analíticas y aun prácticas de contestación –y discursos legitimatorios– que tuvieron lugar durante los años noventa, se inspiraron en la sociología de Alain Touraine, en particular en su obra clásica *Production de la société* (Touraine, 1973). Según esta perspectiva, la unidad del espacio político y social en cada una de las sucesivas fases históricas resultaría de la oposición central entre dos actores que luchan con la finalidad de obtener el control social de los modelos culturales y los sistemas de conocimiento. En esta perspectiva serían centrales las nociones de dualidad y de identidad, entendiéndose que en cada momento histórico uno de los dos protagonistas del conflicto central se vuelve el único capaz de asumir el nuevo rumbo de la acción histórica. Por ejemplo, con el advenimiento de la sociedad postindustrial y el declive de su conflicto central el movimiento obrero quedaría

dígena, ni su carácter hegemónico en la crítica social de los años noventa, que es tal en virtud de la contundencia y sobre todo de la masividad de la movilización, sino de llamar la atención sobre la importancia de la movilización del sujeto laboral, lo que sería una advertencia sobre la centralidad del antagonismo laboral en el contexto de la reestructuración de la producción, a pesar de las mentadas limitaciones de la movilización obrero-sindical. El siguiente gráfico ilustra la importancia de la movilización del sujeto laboral (trabajadores y sindicatos), durante todo el período de intensificación del ajuste, aunque declinando desde octubre de 2000, seguida de la movilización indígena y, en tercer lugar, de la movilización estudiantil (ver también Tabla I en Anexo).

Gráfico 1
Movilización de sectores populares opuestos al ajuste



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

fuera del escenario de dirimencia del conflicto, dada la posibilidad de su institucionalización y de su integración en el aparato del Estado. Mouriaux y Beraud han considerado, a mi juicio de manera acertada, que tal lectura introduce en la interpretación de la contemporaneidad un sesgo normativo, en el sentido que “importa más el hecho de descalificar ciertas formas de contestación social como formas arcaicas [...], o de subrayar la novedad de otras [...] que de pensar la unidad concreta que existe en el movimiento social” (Mouriaux y Beraud, 2000). En efecto, en el Ecuador se utilizó con frecuencia el enunciado sobre “los nuevos actores sociales” para representar el panorama social de entonces, tras lo que se consideraba el ocaso (y la obsolescencia) de la movilización obrera, estudiantil y campesina.

Si confrontamos los niveles de movilización del sujeto laboral con las reivindicaciones planteadas (ver cuadros sobre objeto del conflicto en Anexo), observaremos que tales acciones estarían predominantemente asociadas a la protesta contra las políticas de gobierno, antes que a demandas salariales y laborales, lo que podría sugerir la disolución de los objetivos de dicho sujeto en las demandas de ciudadanía social y política más generales, aunque sin una perspectiva estratégica o propuesta propia del modelo, y un contrato social acorde a las mudanzas históricas de las últimas décadas, sobre todo en el campo del trabajo y la reestructuración de la producción. En todo caso, el estudio exclusivo de la acción de dicho sujeto, así como del nuevo carácter del antagonismo laboral en nuestro país, supera los propósitos y las posibilidades del presente esfuerzo. No cabe, pues, sino esperar que tal preocupación sea reintegrada al repertorio de cuestiones que merecen ser urgentemente tratadas por las ciencias sociales ecuatorianas, más allá de las “modas” impuestas por el “orden del discurso”.

La tercera hipótesis argumenta que, junto con la presencia movilizada de estas fuerzas, y al mismo tiempo la decoloración de los componentes clasistas, se operó una suerte de “secuestro de sentido” de la protesta por parte del Estado y los medios de comunicación. “Secuestro” que se traduciría en la interlocución con el movimiento indígena-campesino en tanto “indígena” o sujeto exclusivamente étnico, mientras se operaba la supresión discursiva de otros sujetos sociales y, aun, la criminalización de su protesta.

En tales circunstancias, el equilibrio entre las fuerzas pro y anti ajuste estructural que se ha mantenido durante la década de los años noventa ha permitido una desaceleración del ritmo de las anheladas transformaciones “modernizadoras”; no obstante, hoy por hoy la balanza se ha inclinado definitivamente a favor de los reformadores neoliberales.

Al caracterizar los últimos veinte años de la historia ecuatoriana, Guerrero y Ospina anotan la presencia de dos movimientos: el primero sería aquel que propugna las reformas estructurales neoliberales en lo político y lo económico; el segundo, que se fortalece a partir de los años noventa, se originaría en las organizaciones que interpelan al Estado ecuatoriano con la reivindicación de la plurinacionalidad (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo 5). En esta línea de raciocinio considero que, siendo un eje fundamental la concomitancia del proyecto de gobernabilidad neoliberal y del proyecto de la plurinacionalidad para explicar la profundidad de la crisis política de la segunda mitad de los años noventa, es menester ampliar el panorama y tomar en cuenta el conjunto de fuerzas movilizadas, el haz político de proyectualidades e intereses en pugna. Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta la convocatoria social que logran otras fuerzas que no han sido vistas como representa-

tivas en el proceso de la movilización de los años noventa, tales como, el Frente Unitario de Trabajadores y la Coordinadora de Movimientos Sociales en el proceso de destitución a Abdalá Bucaram, o los estudiantes, quienes inician las protestas que concluyeron en la impugnación de Jamil Mahuad. No siendo posible hacer un análisis exhaustivo de todas las fuerzas concurrentes en la producción de la crisis política, hemos optado por visualizar la presencia de las fuerzas que más consistentemente han cuestionado y resistido a la implementación de la reforma neoliberal, y a ello se debe la elección de la protesta indígena-campesina, sindical y estudiantil en el marco de este estudio.

Emprendamos ahora, con más detenimiento, el análisis de las características y los contextos de la protesta. En la primera parte de este capítulo, abordaremos las claves conceptuales para la comprensión de la efervescencia social y la corriente cuestionadora en el Ecuador contemporáneo, visualizando a la crisis en su productividad desde el punto de vista de los sujetos sociales. A continuación, caracterizaremos, el “contexto desencadenante” del conflicto. Luego ofreceremos un análisis del repertorio de opciones político-prácticas frente a las carencias de ciudadanía, desde el punto de vista de la constitución de los sujetos sociales. Intento también dar una visión general de la dinámica y contenidos de la conflictividad social y la protesta, deteniéndome en el examen de los momentos cumbre de la movilización. Y, por último, esbozaremos unas líneas conclusivas en torno a los desenlaces del ciclo de protesta.

CRISIS Y CONFLICTO

Desde hace algunos años, en el Ecuador es un hecho común hablar de crisis. Se la menciona para referirse a los diversos ámbitos y niveles de existencia de la sociedad y desde diversos ángulos teóricos. En lo que todos y todas estamos de acuerdo es en que se trata de un fenómeno multidimensional, que afecta profundamente nuestros modos de vida. Así, Julio Echeverría considera que la “crisis”:

[...] es económica, en la medida en que sus principales indicadores revelan una fuerte inestabilidad en la cual se combinan altos índices de inflación y de recesión productiva; es política, en cuanto se presentan seriamente debilitados los mecanismos y sistemas de representación, de producción de legitimidad y de gobernabilidad; es crisis social, la cual se vuelve patente en el indetenible incremento de la pobreza y del desempleo, y es también crisis ética, con fuertes rasgos de debilitamiento en el sentido de lo público y de explosión de la corrupción y de la violencia (Echeverría, 1999: 33).

Para los propósitos de este trabajo, planteamos comprender la crisis desde las “entrañas” de la sociedad, allí donde parecen diluirse las previsiones, y gobernar la indeterminación de la acción humana, singular y colectiva. Queremos, entonces, explorar la producción de legitimidad a través de la protesta y desde el punto de vista de la incidencia de los sujetos sociales, desde la manera cómo su concurrencia ha contribuido a la configuración del campo de fuerzas, en tanto espacio de dirimencia de conflictos y búsquedas de hegemonía. Es decir, buscamos entenderla en tanto formación histórica compleja, a la luz del papel de los sujetos que habitan su temporalidad, y no simplemente como “daño” momentáneo o de larga duración de un sistema, susceptible de resolución, en la medida que se coloque, “como garante de la recomposición, a algún ordenador exterior: Mercado, Nación, Partido” (Portantiero, 1988: 175).

Al considerar el desempeño de los sujetos en el contexto de la crisis política, hemos considerado fecunda la contribución de Juan Carlos Portantiero, quien propone una comprensión de la crisis situándose en el seno mismo de su productividad, desnudando la falsedad de un mundo “natural”, y mirando la artificialidad del mundo social, que es una construcción, una confluencia de proyectos y subjetividades, de opciones “cuyo resultado está abierto”, pero que tarde o temprano producirán “un orden”, buscando superar la amenaza de la entropía (Portantiero, 1988: 174-175). Al invocar el carácter artificial de la crisis no estamos confiriendo a la movilización y a la protesta el carácter de “milagro”; queremos únicamente señalar la mediación de la ideología. En tal sentido, al hablar de crisis, preferimos pensarla como el encuentro y pugna de proyectualidades y búsquedas de cambio, la concurrencia de deseos que aún no han alcanzado la dignidad de “proyectos”, o sencillamente de inconformidades inorgánicamente expresadas que se manifiestan en el campo de dirimencia de los conflictos de una época³. Entiendo al conflicto como el cuestionamiento al orden y las acciones inspiradas en tal cuestionamiento que, como sugieren Seoane y Taddei (2000), alteran dicho orden, quebrando e interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales dominantes; digamos, una “interacción antagónica” con el orden (Vakaloulis, 1999), aun cuando no se lo haga, necesariamente, desde una conciencia del antagonismo.

Colocamos, pues, en el foco del análisis a los sujetos singulares y colectivos, así como a su contradictoria profundidad. Y recordar el

3 Tal definición busca una aproximación a la comprensión de la crisis “desde adentro”, a diferencia, por ejemplo, de la visión totalizante que ofrece Pasquino, para quien crisis es “un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema”, “un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo, un giro imprevisto, a veces hasta violento y no previsto en el módulo normal según el cual se desenvuelven las interacciones dentro del sistema examinado” (Pasquino, 1998: 303).

papel de los sujetos es primordial, pues la imposición de un modelo de sociedad y sus consecuencias, por un lado, y los movimientos contestatarios, por otro, no guardan entre sí una relación de causa y efecto. Por ejemplo, no hay una respuesta “automática” al deterioro de las condiciones de vida, a la opresión, a la marginación, pues bien podría ocurrir que la explotación y la pobreza, lejos de promover una oposición activa, se sostengan gracias a mecanismos de autorrepresión que sofoquen el sentido de injusticia, o que inhiban la autoestima a partir de ciertas definiciones culturales, como en el ejemplo que ofrece Moore, al mostrar que la dominación de los intocables de la India se sustenta en la desviación de la indignación hacia el “orgullo” por realizar trabajos humildes (Moore, 1987). Entonces “la crisis política”, desde el punto de vista que la estamos abordando, existiría, en gran medida, porque los “datos” del “mundo de la vida” están siendo “procesados” o leídos desde proyectualidades subjetivas, mediaciones culturales, valores y narrativas sociales, y porque tales energías están siendo canalizadas hacia la constitución de las fuerzas actuantes en el campo político.

Recogiendo las definiciones conceptuales planteadas hasta aquí, podríamos decir que la crisis ecuatoriana puede ser vista como el resultado de la convergencia de proyectos de cambio –aun vagamente concebidos– e inconformidades que surgen bajo ciertas pautas político-culturales, y al calor de la contemporánea centralidad de la noción de “dignidad”. Búsquedas que han desembocado en la demanda de ciudadanía social y política. El caldo de cultivo de tales valores políticos, modernos –y liberales– por excelencia, históricamente han sido la influencia de la ideología libertaria de las izquierdas del siglo XX, la teología de la liberación que germinara en América Latina, pero también, la interacción de los sujetos con el Estado desarrollista, a merced de la democratización de la educación. Y es el acceso a la educación lo que ha permitido a amplios sectores de la población acrecentar sus expectativas igualitaristas, a partir de la acumulación de lo que Bourdieu (2000) denomina “capital social y cultural”.

Por otro lado, los planos subyacentes de la movilización y la protesta serían varios. En primer lugar, el surgimiento “normal” de demandas producido por el acumulado histórico de falta de respuesta a las aspiraciones sociales (de índole laboral, cívico-regional, de género). En segundo lugar, las reivindicaciones que son producto de “la crisis” en tanto resultado de las políticas de ajuste (salud, vivienda, educación, acceso al consumo), tamizadas, desde luego, por expectativas modernas; reivindicaciones que son puestas en juego en el campo de conflicto de intereses por la realización de un modelo de sociedad.

Pablo Ospina considera que el conflicto que dinamiza la movilización indígena y campesina de fines del siglo XX sería “el resultado

de una acumulación de historias fallidas y de varios siglos de distancia entre el país real y el país previsto por las instituciones modernas” (Ospina, 2000: 130). Recuperamos la idea de “distancia” por ser precisamente ella la que nos ayuda a visualizar el crisol en el que se forja el conflicto mayor del Ecuador contemporáneo: la abismal discrepancia entre el orden existente y los estándares de vida vigentes, por un lado, y, por otro, las apetencias por lo moderno, llámese inclusión, bienestar o igualdad. “Lo moderno”, en tanto meta de la protesta como fuente de inspiración de la misma, sería aquí un concepto de amplio espectro, dado que remite al ideal socialista que no ha sido removido, al ideal liberal –y no estrecha y unívocamente neoliberal–, y también al ideal desarrollista concebido aún como desarrollo industrial y progreso. Ideales y horizontes de expectativas que estarían enraizados en los relatos cotidianos, perseverando en los ánimos y mentalidades singulares y colectivos, aunque de manera espontánea, y frecuentemente inconsciente, inconexa y aun dislocada.

En suma, proponemos pensar “la crisis” ecuatoriana contemporánea desde una perspectiva moderadamente “constructivista”, que considere el papel de los sujetos en la prefiguración de los cambios, pero sin dejar de lado los aspectos “objetivos”, las externalidades a las que esta se asocia.

EXTERNALIDADES DE LA CRISIS

El primero de tales aspectos externos es el origen de su persistencia, pues la crisis ecuatoriana contemporánea ha dejado de ser “un momento” para convertirse en una “latencia” que de tiempo en tiempo adquiere dimensiones dramáticas. Como ha manifestado Jorge León Trujillo, la crisis contemporánea en nuestro país “dura ya más de una generación”, de manera que no se trataría apenas de un desperfecto en el funcionamiento del sistema, parece que ese “daño de la máquina”, antes que ser inesperado y pasajero, se ha constituido, más bien, en parte del funcionamiento del sistema, sin que se pueda ya concebirlo solo como parte de una crisis” (León Trujillo, 2000: 15).

Una de las fuentes de tal persistencia, según el mismo autor, serían las imposiciones externas de cambio de modelo de sociedad:

Una de las características de las sociedades dependientes es que deben asumir olas, cada vez más frecuentes, de grandes mutaciones que ellas no han engendrado, y que requieren de tiempo para ser internalizadas. Las sociedades dependientes superponen, por consiguiente, los tiempos de cada ola de cambio, sin que las nuevas olas borren a las anteriores. Se superponen pasados y presentes, sin que necesariamente se vuelvan

armónicos; la norma de estas sociedades es, más bien, que estos tiempos diferentes, juntos, formen su singular dinámica, su personalidad (León Trujillo, 2000: 16).

En esta suerte de “palimpsesto” histórico de la dependencia se inscribiría actualmente una nueva ola de cambios dictados por la expansión del modelo neoliberal, el mismo que se pretende instaurar sobreimponiéndolo a los atavismos de la dominación colonial.

Un segundo aspecto externo es la búsqueda de aplicación del modelo neoliberal sobre esta acumulación de saldos “atávicos”, diseño que tiene en la disminución del gasto social a una de sus definiciones centrales. Sumadas a esta explosiva mezcla las consecuencias de la recesión, tenemos una declinación categórica de las capacidades redistributivas del Estado que se expresa dramáticamente en la vida de la población. Así, solo por citar una pocas cifras, a partir de 1990 se estanca la ampliación de la escolarización primaria; si entre 1982 y 1990 el porcentaje de niños/as de 6 a 11 años escolarizados subió de 69% a 89%, durante la década de los años noventa, en cambio, la tasa de matrícula se detuvo en alrededor del 90%. De otro lado, el número de personas que viven bajo la línea de pobreza aumentó del 34% en 1995, al 46% en 1998 y al 56% en 1999 (Barrera, 2001: 259). Según Vázquez y Saltos, desde 1995 al 2000 se habría duplicado el número de pobres y triplicado el de indigentes, pasando el primer indicador de 3 millones 200 mil personas a 8 millones 100 mil, cifras nunca antes vistas (Vázquez y Saltos, 2003: 264).

Son estas las presiones que provocan un “conflicto distributivo” que, según Barrera, se sitúa en medio de dos coordenadas:

por un lado, en el nivel socio-económico, la aplicación de una modalidad de modernización económica, excluyente y concentradora; y de otro, en el nivel socio-político, la persistencia de la democracia como orden formal y de un naciente sentido democrático en la sociedad como efecto de la propia modernización de las instituciones sociales (Barrera, 2001: 258).

El ajuste se convierte, entonces, en el “contexto desencadenante” (noción de León Trujillo, 1994), el entorno de la manifestación del conflicto, que se expresa a través de la protesta y la movilización.

Siendo las carencias distributivas una de las fuentes del conflicto detonante de la protesta, este se produciría, como hemos dicho, a partir del cuestionamiento a la distancia entre la formalidad de las declaraciones sobre la inclusión y los derechos sociales y la ausencia real de ellos. Distancia que se expresa en un desencuentro categórico entre las identificaciones colectivas como “comunidad imaginada” y el sentimiento

de estar en los márgenes de la misma. Andrade ha señalado que la trayectoria de la sociedad ecuatoriana, posterior a la reforma política de 1978, ha seguido orientaciones contradictorias, pues mientras, por una parte, se han afirmado las libertades políticas, por otro lado, se ha erosionado tanto el sentimiento de pertenencia a una comunidad política como la igualdad (Andrade, 2002: 2). Los argumentos de los capítulos que siguen descubren más bien la existencia de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada” forjado a través de la educación y el discurso sobre la nación, así como en la relación con el mínimo Estado de Bienestar y de Desarrollo construido en el Ecuador durante las décadas precedentes. Durante los años setenta, las políticas de estado dieron cierta cobertura social y oportunidades ocupacionales a amplios sectores de la población, aunque sin consolidar los fundamentos para el ejercicio de la ciudadanía social; en todo caso, la movilidad social ascendente gestada por el desarrollismo estimuló la participación en la comunidad política a través de la igualdad. Es este sentimiento ciudadano destituido de sólidas garantías para la ciudadanía lo que estaría en el origen de la inconformidad, la protesta y la movilización de los últimos años del siglo XX.

LA INTENSIFICACIÓN DEL AJUSTE

Desde 1997, con las radicales medidas que se aprestaba a tomar el gobierno de Abdalá Bucaram, se vive un ciclo de “intensificación del ajuste”, tras un preludio del mismo que se experimentó ya con el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 1992 y 1996, cuyo período ha sido considerado como de afirmación del modelo neoliberal (Barrera Guarderas, 2001)⁴. Durante la administración de Durán-Dahik, la transición habría intentado llevarse a término en tres direcciones fundamentales.

En la primera, al inicio de su gobierno, Durán Ballén adoptó un paquete de medidas que fueron calificadas como “adscriptas en una orientación explícita y firme del gobierno de entrar de una vez por todas en la senda de la modernización neoliberal” (Barrera Guarderas, 2001: 136). El paquete consistió en la devaluación del 35% del tipo de cambio real del mercado de intervención, el establecimiento de mecanismos de mercado abierto como mesas de dinero y subastas semanales de bonos para el manejo de la política monetaria, la elevación de las tarifas de energía

⁴ Al inicio, la implementación del modelo neoliberal se puede rastrear a los gobiernos de Hurtado y León Febres Cordero, a través de sus políticas monetarias y de restricción del gasto público. En lo posterior, el modelo fue impulsado durante el gobierno de la Izquierda Democrática (1988-1992), bajo el lema de la política de “concertación” y en gozo de una mayoría parlamentaria consiguió un cambio radical de la legislación laboral a través de la Ley de maquila y la creación de las empresas de tercerización, así como de reformas al Código Laboral.

eléctrica y la elevación del precio de la gasolina, entre otros. Igualmente significativa en el ámbito de la consolidación de dicho modelo fue la creación del Consejo Nacional de Modernización (CONAM), cuya función sería la de impulsar la privatización de las empresas estatales.

La segunda consiste en el nuevo diseño de las instituciones políticas. En ese sentido se impulsa una reforma política que inaugura una nueva forma de relacionamiento de la sociedad con el Estado a través de la candidatización de los independientes. Según Arias (1995: 53), dicha forma de relacionamiento contiene, en el fondo, una censura al sistema de partidos políticos, la que concordaría con la exigencia desde las políticas de ajuste, para que la lógica de toma de decisiones se concentre en las manos de tecnócratas, marginando posibles influencias “políticas” (léase: de los remanentes de la antigua izquierda y también la “nueva” izquierda, es decir algunos sectores de los llamados “movimientos sociales”). Aunque prevista en el marco de la liberalización de la sociedad, tal medida tuvo el reverso paradójico de la consagración de las antiguas formas patrimonialistas de la política –las mismas que habían sido neutralizadas hasta cierto punto con la reforma política de finales de los años setenta– pues con la promoción de los independientes, cuyas candidaturas no demoraron en proliferar, se abrían nuevamente las puertas a la “dominación política personalizada” y al menoscabo de las mediaciones institucionales (posteriormente algunas de las consignas electorales captaron y tradujeron expresivamente este fenómeno: “un candidato en quien confiar”, “vota por alguien de tu barrio” y así por el estilo) (De la Torre, 1997).

La tercera orientación crucial de reestructuración de los marcos societales fue la tramitación de la nueva Ley de Desarrollo Agrario impulsada por la Cámara de Agricultura y que “suponía un punto final al proceso de reforma agraria ejecutado a medias desde los setenta” y que buscaba “garantizar la propiedad sobre la tierra y establecer garantías para la inversión privada” (Barrera Guarderas, 2001: 167). En realidad, los cambios que se buscaba apuntalar desde el Estado eran de carácter radical y tenían que ver en primera instancia con la reprimarización de la economía, con el rol decisivo del sector agropecuario de cara a la diversificación de los productos de exportación; en segunda instancia, las reformas institucionales del propio sector agropecuario, entre las que se contemplaba la privatización de entidades antes dependientes del sector público y, por último, con la finalización del proceso de reforma agraria, y la liberalización del mercado de tierras y de capitales en el agro (Guerrero y Ospina, 2003).

En otro ámbito, se intensifican desde entonces las ofensivas simbólicas de desprestigio de los frentes sindicales, instancias que representaban a fuerzas sociales debilitadas por la reformulación de las leyes

laborales durante la administración de Rodrigo Borja (sobre este punto, ver Capítulo IV).

Estas orientaciones se llevan a cabo en un contexto de agudización de la crisis política, acentuada hacia el final del gobierno de Durán Ballén y aderezada por los escándalos de corrupción que involucraron a las más altas esferas de la administración estatal y sus allegados (el autoexilio y fuga del vicepresidente Alberto Dahik, por la acusación de manejo doloso de los gastos reservados). Estos factores impiden, entre otras cosas, que se consolide en este período la reforma neoliberal, pues si bien la reforma política fue aprobada en el referéndum de 1995, el voto popular no dio luz verde a la privatización de las empresas de propiedad estatal y del Seguro Social. Los esfuerzos por consolidar las bases del modelo neoliberal tuvieron un éxito parcial, pues quedaban “resquicios” del anterior modelo: empresas estatales “estratégicas” por privatizar y una Constitución que debía ser reformulada, a fin de que diese cuenta de los requerimientos jurídicos para dichas privatizaciones (en 1997, serán los propios “movimientos sociales” los que impulsen la elaboración de una nueva Constitución, la misma que reformularía las bases jurídicas para el tratamiento de los bienes públicos, a tono con las exigencias supranacionales de eliminación de barreras para las privatizaciones). Hacia 1996, entonces, se mantenía en pie la agenda de las privatizaciones y la eliminación de los subsidios estatales. Y es esta pugna en torno a la postergación de la conclusión de la instauración de las bases del modelo lo que ha signado de manera dramática la novísima historia de nuestro país.

Entonces, si el gobierno de Sixto Durán intentaba consolidar las bases para la concreción del modelo, Bucaram y luego Mahuad pretenderían, por una parte, impulsar las privatizaciones pendientes y la eliminación de los subsidios estatales, y luego fortalecer dicho modelo mediante un régimen monetario radicalmente distinto, llámese convertibilidad o dolarización, que asegurase la inserción en la economía globalizada y, específicamente, en la “zona de influencia” del dólar estadounidense (conceptualización que adquiere hoy en día una renovada validez, de cara a las presiones por la constitución del ALCA. Y se lo pretendió hacer, desde 1996, en forma de shock y bajo modalidades autoritarias.

La postergación de las reformas neoliberales liberal habría operado en dos direcciones: en primer lugar, habría profundizado la tendencia a la crisis política, sobre todo en materia de legitimidad y capacidad de procesamiento del conflicto del sistema político, y, en segundo lugar, se habría activado “el tránsito de las demandas formuladas en clave étnica y campesina del movimiento indígena a un conjunto de planteamientos que articulaban la lucha contra el neoliberalismo y las reivindicaciones étnico nacionales y económico-sociales” (Barrera Guarderas, 2001: 180).

En este ciclo de intensificación del ajuste, la experiencia de la crisis se torna especialmente dramática debido a los intentos y luego a la aplicación de medidas extremas como la dolarización –forzada en momentos en que no era recomendada ni siquiera por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional–, con sus secuelas de bloqueo para la competitividad de la producción nacional, y elevación de los precios a niveles internacionales y el deterioro de la calidad de vida, minando profundamente la credibilidad en las instituciones democráticas⁵. En este entorno de fragmentación del sistema político y sus bases sociales, ganarían importancia, desde el punto de vista de los sujetos “llanos” de la política, los canales extra-institucionales de resolución del conflicto y de las carencias de ciudadanía; entra en juego la “invención” de formas individualistas de sobrevivencia y canalización de demandas de ciudadanía social y política (en ese sentido, el caso del Perú durante el período de Fujimori es paradigmático), y se fortalecen, finalmente, las formas de dominación patrimonialistas, cuyas manifestaciones no tardaron en hacerse presentes a través de las urnas.

ENTRE LA POLÍTICA Y LA COTIDIANEIDAD: EXPLORANDO SALIDAS

¿Cuáles son las alternativas de los sujetos, singulares y colectivos, frente a las carencias sociales? Ellas van a depender de las identidades políticas y los sujetos van a mantener una relación diferenciada con la institucionalidad política, dependiendo de su horizonte político-cultural.

Una primera tabla de salvación sería la opción electoral, que abriría amplias perspectivas a los candidatos “salvadores”⁶. Es, por

5 Un estudio presentado por Flavia Freidenberg (2000), acerca de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas en los países de la región andina, nos trae interesantes revelaciones al respecto. La autora destaca “la excepcionalidad de la opinión pública ecuatoriana en una serie de cuestiones”, pues “los ciudadanos ecuatorianos no se manifestaron en su mayoría defensores incondicionales de la democracia como forma de gobierno, ni de los partidos políticos y el Congreso como instituciones indispensables para el funcionamiento del sistema democrático” (Freidenberg, 2000: 217). En efecto, solamente el 41% de los ciudadanos ecuatorianos encuestados habrían declarado su apoyo rotundo a la democracia, en contraste con los ciudadanos encuestados de Bolivia, que lo habrían hecho en un 66%, de Colombia (69%), de Perú (60%), de Venezuela (64%). Por otro lado, el 48% de los encuestados en Ecuador considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos, mientras que para el 42% no puede hacerlo; nuevamente observamos la diferencia, a veces drástica, con los otros países de la región, pues en Bolivia el 31% de los encuestados disocian la democracia de los partidos políticos, en Perú el 28%, en Colombia el 42%, y en Venezuela el 43%. Por último, el 47% de los encuestados ecuatorianos creen que una democracia puede funcionar sin Congreso, en tanto que en Bolivia así lo creen solamente el 27%, en Perú el 26%, en Colombia y Venezuela, el 38% respectivamente (Freidenberg, 2000: 206, 211, 215).

6 Los procesos de reconocimiento político de líderes personalistas o “héroes” de la política están analizados extensamente en mi libro *Género, subjetividad y populismo* (León Galarza, 2006). El examen de estos fenómenos se profundiza también en León Galarza, 2002.

cierto, una opción desde el individualismo, una comunión electoral solitaria con un héroe personalista, que emerge del mundo de las emociones privadas, y que genera evaluaciones dominadas por las metáforas del parentesco. Tal actitud frente al deterioro de los estándares de vida habría gravitado sobre todo en el triunfo de Bucaram en 1996, en la importantísima votación de Álvaro Noboa en 1998 y 2002; aunque en cierta medida también en el reconocimiento electoral a Lucio Gutiérrez, uno de los protagonistas de los hechos del 21 de enero de 2000. Por otro lado, en el proceso mismo de identificación política de los/las adherentes a las candidaturas personalistas se genera la experiencia de una subalternidad: hijo/hermano(a) menor, como contraparte a la representación de la unicidad del individuo, héroe, o líder; subalternidad que es negociada constantemente mediante proyecciones de los seguidores en la figura del líder y mediante la exigencia de cumplimiento de las promesas, aun cuando tal subalternidad generalmente, se encuentra asociada una fuerte demanda de protección. Así, “el retorno del líder” y la contundencia de las opciones identificatorias encuentran un nuevo aliento hoy, con la retirada del Estado de las responsabilidades sociales que en grado mínimo eran atendidas antaño, y con el correspondiente repliegue de la ciudadanía en sus redes familiares, ámbito en el que es posible la atenuación de las carencias de ciudadanía social. De tal manera, la primacía de lo público y colectivo como vías de resolución de la crisis darían paso a la primacía de lo individual, limitando la percepción del fenómeno político a la percepción de lo inmediato, con una perspectiva moralizante y desde las metáforas del parentesco.

En todo caso, a pesar de la invocación de elementos externos a la política, esta alternativa se puede considerar institucionalizada en la medida que se encuentra referida al sistema político, emanando de lo cotidiano pero con repercusiones político-institucionales. Es decir, la realización de tales opciones electorales podría representar también la realización de la ciudadanía, mediante el establecimiento de vínculos oblicuos o *ad hoc* con la institucionalidad del Estado, a través de las relaciones personalizadas, en este caso con los intermediarios políticos de los líderes o el patrocinio de personajes importantes, del favor material y simbólico que alivia el apremio y/o eleva el capital simbólico de sus beneficiarios, pero también de la red de relaciones que un sujeto pueda tener en la comunidad (DaMatta, 1985; De la Torre, 1997: 63)⁷.

⁷ Estos fenómenos tendrían como efecto la llamada “crisis de representatividad”. Simón Pachano la define como “la baja o nula capacidad de los partidos –y, en general, de las instituciones del sistema político– para representar los intereses y procesar las demandas de la sociedad” (Pachano, 2000: 156). El origen de tal situación sería la vigencia de prácticas como el procesamiento informal de las demandas sociales, a través del clientelismo.

Ahora bien, si es verdad que la textura político-cultural de tales opciones se asienta en la individualidad, el entorno cotidiano y la posibilidad de satisfacción inmediata de las carencias, ¿excluye esta alternativa la movilización? Puede ocurrir que “los clientes se rebelen”, para usar una expresión de Marina Farinetti. ¿Cuáles son las características de tal rebelión? ¿Cómo se configuraría el conflicto que la anima?

Antes que nada, es preciso desarmar la dualidad “clientelismo”/ acción colectiva. Como Farinetti sostiene –remitiéndose a Cristina Escobar– el clientelismo no necesariamente socava las posibilidades de acción colectiva, pues representaría dos caras de la misma moneda: la exclusión social (Farinetti, 1997)⁸. En efecto, en mi propio trabajo he encontrado interlocutores/as, cuyos testimonios permiten confirmar la confluencia de ambos fenómenos⁹. La pregunta sería, entonces: ¿se aproxima, el sentido de esta participación a una demanda de ciudadanía? En un artículo anterior he ensayado respuestas a esta interrogante, elaborando el modelo de la censura del sector volátil del electores que habría votado con una firme expectativa de salvación (León Galarza, 2002).

Sostengo que si la unción de un candidato parte de la dinámica de las identificaciones, el contrato –ficcionalmente personal– que con él se establece, se funda en la expectativa del/la elector/a por la compensación al bien simbólico-político otorgado: el voto. Se trataría de un circuito de reciprocidad que no puede ser interrumpido, más aún en virtud de que fue inaugurado por la promesa electoral, que habría dado paso a las expectativas que guiaron la opción. En el contexto de las políticas de ajuste, el cumplimiento de la promesa se torna deleznable, sobre todo cuando las ofertas son proferidas en abundancia, a tal punto que su obligatoriedad se torna prácticamente improbable. El incumplimiento de los ofrecimientos generaría la censura de un sector de adherentes (otros, los incondicionales, y, desde luego, los intermediarios políticos, prefieren desviar la culpa a terceros, “la oligarquía corrupta”, etc.), que si bien se plasmará en una nueva “delegación” a un candidato de similares características –así se explicaría, por ejemplo, la oscilación de votantes entre Bucaram y Álvaro Noboa, en los últimos años, y quizá cierto caudal de tales votos pueda beneficiar a otros

⁸ Farinetti menciona el artículo de Cristina Escobar (1997).

⁹ En mi ya citada tesis de doctorado menciono el testimonio de Silvia, una mujer cuencana de aproximadamente 45 años, quien relata la experiencia vivida en su barrio, donde los pobladores masivamente votaron por Bucaram, pero también participaron en las movilizaciones de censura algunos de ellos, cuando Bucaram, a inicios de 1997 anunció la elevación del precio del gas doméstico. Tras la impugnación de Bucaram, su destitución y la continuación con la profundización del ajuste en el gobierno de Jamil Mahuad, advino el arrepentimiento por la censura: “De gana mandamos botando al loco, con él mismo bien hubiéramos estado”.

candidatos del espectro político y, por cierto, a Lucio Gutiérrez-, eventualmente puede derivar en una adhesión a las manifestaciones públicas, engrosando las filas de los movilizados, aun cuando, posiblemente, atomizados y disueltos en ellas. Y tal “revuelta”, de orden eminentemente moral, paradójicamente, estaría inscripta en la reproducción del orden de la “delegación”, en el sentido que a este concepto confiere Guillermo O’Donnell, en sus trabajos sobre “democracia delegativa” (O’Donnell, 1997a y 1997b).

Otra forma de búsqueda de alternativas es la crítica al orden que se plasma en la movilización de protesta, asume un carácter colectivo y se basa en identidades políticas de otra textura. Un primer elemento de esta otra textura es, como diría Moore (1987), la búsqueda de reformulación del contrato social vigente. Tal reformulación, en el contexto contemporáneo, no se la debe necesariamente entender como un clamor por salidas “revolucionarias”, sino como una búsqueda de respeto a la dignidad, expresada en la lucha por la vigencia de una ciudadanía social y política, que eventualmente puede asumir caracteres “antisistémicos”, aun cuando parcialmente podrían estar permeados por la personalización del conflicto. Ahora bien, como Taylor señala, la política vinculada a la valorización de la dignidad es la política del universalismo (Taylor, 1993). El universalismo aquí se plasmaría en el rechazo a las privaciones originadas por las políticas de ajuste, y al déficit endémico de ciudadanía social. Es este segundo modelo del que nos ocupamos en este libro, aunque, desde luego, no se pueden trazar fronteras rígidas entre una y otra forma de la protesta, ni verlas como polos opuestos.

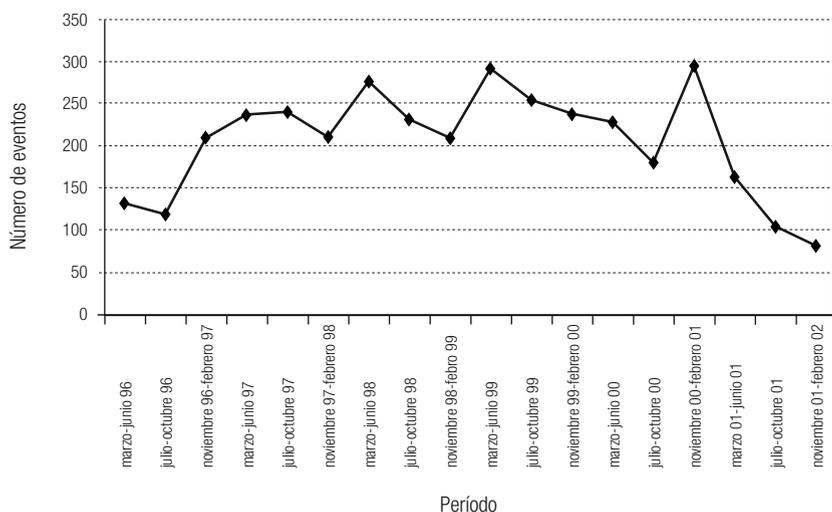
Observemos ahora cuáles son las reivindicaciones específicas que animaron el curso de la historia ecuatoriana contemporánea, en los momentos de mayor efervescencia social, desde agosto de 1996 hasta el momento de declinación de la protesta en el 2002.

LA PRODUCCIÓN DE DEMANDAS SOCIALES Y LA CONFLICTIVIDAD

El propósito de la descripción que sigue es recrear el ambiente de efervescencia socio-política que anima los últimos años del siglo XX en el Ecuador, para remitirnos en lo posterior a los contenidos de la protesta en sus momentos cumbres, contextualizarla e interpretar su significación. Cabe puntualizar que establecemos una diferencia semántico-conceptual entre “conflictividad” y “protesta”, de manera que si la primera se refiere al desencuentro de intereses sociales, políticos, partidarios, institucionales, regionales, la segunda señala específicamente a manifestaciones beligerantes de la crítica social, de la censura a las políticas de Estado y de gobierno, en la senda de las reformas neo-

liberales. Demos, pues, por ahora un vistazo panorámico al conflicto que ha caracterizado la vida política de los últimos años del siglo XX, constatando el crecimiento de la conflictividad social a partir de 1996 (ver Tabla II en Anexo).

Gráfico 2
Dinámica del conflicto



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

En el ciclo de intensificación del ajuste, desde los primeros meses del gobierno de Bucaram, se iniciaba también un período de intensificación de la conflictividad social, cuyos momentos más altos, según el número de conflictos y en orden cronológico, recaen en el cuatrimestre entre noviembre de 1996 y febrero de 1997. El Centro Andino de Acción Popular, a través de la revista *Ecuador Debate*, explica el aumento de la conflictividad por la cantidad de desaciertos del gobierno de Bucaram, así como por su “política del espectáculo”, que estuvo marcada por un claro matiz regionalista, lo que habría catapultado las oposiciones sectoriales y políticas (CAAP, 1997a: 35-36).

A continuación, durante los primeros meses de gestión presidencial de Fabián Alarcón, la conflictividad se incrementa hasta julio y, ligeramente, hasta octubre de 1997. El mismo colectivo de análisis explica tal situación por los rezagos y los efectos socio-políticos del gobierno de Bucaram (CAAP, 1997b: 29). Por mi parte, diría que tanto las demandas como las exigencias de solución fueron reforzadas por el sentimiento de legitimidad de las mismas gestado en los procesos partici-

pativos en la impugnación al bucamato. Entre julio y octubre de 1997, la beligerancia se mantiene, asimismo, debido “a la inestabilidad de los pactos que se establecen” (CAAP, 1997b: 27). Si bien la confrontación tiende a declinar coincidiendo con las festividades de fin de año, luego tiende nuevamente a incrementarse y recrudece en el período contemplado entre marzo y junio de 1998, cuando a la problemática social no resuelta (como, por ejemplo, las demandas en torno al presupuesto para la educación, la salud, los ajustes salariales) se suman las limitaciones para resolver las secuelas del fenómeno de El Niño, así como fenómenos de orden político-institucional ligados a la controversial convocatoria a la Asamblea Constituyente y a la proximidad de la campaña electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República (CAAP, 1998a).

Un momento singularmente conflictivo es el que transcurre entre marzo y junio de 1999, bajo la gestión presidencial de Jamil Mahuad, en virtud del feriado bancario y el congelamiento de depósitos decretado el 8 de marzo de 1999. Se trataba, como se ha dicho innumerables veces, de una debacle del sistema bancario nacional. Por añadidura, en este momento crítico se reforzó el carácter regional, pues como recordaremos el actor principal del atraco bancario fue el Banco del Progreso, de origen guayaquileño, mientras que se rumoraba insistentemente que el gran beneficiario de la inestabilidad monetaria y cambiaria fue el Banco del Pichincha, con raíces serranas. Veremos más adelante que es justamente este momento uno de los más sensibles al rechazo a las políticas de gobierno, y las impugnaciones se expresaron en un “enjambre” de huelgas, paralizaciones, movilizaciones de maestros, trabajadores de la salud, transportistas y hasta en disputas entre los poderes del Estado (CAAP, 1999b: 3).

Después, como la curva indica, en la segunda mitad de 1999 la conflictividad tiende a bajar; en todo caso este período estaría signado por tendencias contradictorias, pues el anuncio de la dolarización habría permitido poner en compás de espera a los sectores medios, alejando hasta cierto punto el fantasma de la hiperinflación (Guerrero y Ospina, 2003). Tal tendencia entrañaría también el declive del conflicto anclado en la polarización regional, aun cuando repunta la conflictividad laboral privada y el malestar con el incremento de precios de los combustibles y el nuevo esquema tributario (CAAP, 1999c). En todo caso, se pactó el mantenimiento de precios de los combustibles hasta julio de 2000, el subsidio eléctrico a los más pobres y el descongelamiento gradual de los ahorros; de todas maneras, la inminencia de la dolarización mantuvo en alerta a algunos sectores, como los indígenas, y es por ello que, a pesar de que la curva de la conflictividad general descendió, se produjo el levantamiento del 21 de enero del año 2000, cuando los mandos medios del ejército respaldaron las acciones indígenas (CAAP, 2000a).

Desde enero de 2000 hay una tendencia de crecimiento de la conflictividad con caídas temporales, hasta alcanzar el clímax en el cuatrimestre noviembre de 2000-febrero de 2001, con el levantamiento indígena que culminaría con la firma del acuerdo de veintinueve puntos entre los indígenas y el gobierno, para luego decrecer en forma notable (retomo el tema en la sección “La gran minga”). ¿Por qué ocurrió tal declinación? Podríamos ensayar las siguientes respuestas: primera, las fuerzas organizadas se encuentran en un compás de espera, primero, en razón de la expectativa creada por la firma del acuerdo y, segunda, por la proximidad de las elecciones y la dedicación de la fuerza movilizadora más importante, la CONAIE, al tema electoral; por otro lado, la gestión del gobierno de Gustavo Noboa procura no crear motivos para alzamientos, al punto que se frustró el levantamiento indígena que fue convocado para marzo-abril de 2002, cuando se suspendió la subasta de las comercializadoras de energía eléctrica. El gobierno tampoco dio paso a la elevación de pasajes ni a la elevación del precio del gas de uso doméstico. En todo caso, las últimas elecciones presidenciales habrían servido, como hemos sugerido al inicio del capítulo, como un canal institucionalizado para la expresión de la inconformidad con un estado de cosas (CAAP, 2000a; 2000c; 2000d; 2001c; 2002a).

Pasemos, ahora, del panorama de la conflictividad al enfoque de la protesta, propiamente dicha, hacia los contenidos concretos de las demandas y reivindicaciones sociales y políticas en los momentos de ruptura, que no necesariamente han coincidido con los momentos más altos de la conflictividad.

¡QUE SE VAYA!

En 1996, Abdalá Bucaram se presentó a las elecciones presidenciales con un tono contemporizador, prometiendo cumplir con todo aquello que le demandasen las fuerzas sociales y políticas dispuestas a apoyarlo; explicitando con estridencia proyectos de asistencia a los sectores populares (como el célebre plan de vivienda “Un solo toque”), así como su decisión de lucha antioligárquica. Se hacía todo esto sin despejar la posibilidad de dobles interpretaciones, pues al mismo tiempo se refería a medidas en pro de la profundización del ajuste estructural. El talante antioligárquico duró apenas hasta las vísperas de la toma de mando, pues ya en el proceso de conformación del gabinete ministerial explicitó el carácter estratégico de su alianza con la plutocracia: designó, por ejemplo, como ministro de Economía y Finanzas a uno de los hombres más ricos del Ecuador y América Latina, Álvaro Noboa, o al potentado Alfredo Adum, candidatos, en todo caso, a una neo-oligarquía, dentro de una lógica de “circulación de elites”.

En los meses inmediatos a la juramentación del cargo presidencial se rompió definitivamente el tono contemporizador, poniendo en marcha su plan de privatizaciones y eliminación de subsidios al gas, acompañando a dicho plan con una serie de escándalos de corrupción y de abusos de poder por parte de algunos de sus ministros. Se anunció tempranamente la puesta en marcha de un plan de convertibilidad monetaria. En tal contexto, si bien intentó ganar respaldo cogobernando con algunos de sus potenciales adversarios, a escasos dos o tres meses de gobierno comenzaron a sentirse las señales del desgaste de una gestión que habría de terminar, como sabemos, en la impugnación masiva del presidente y su destitución por el Congreso Nacional.

La primera fuerza social que se movilizó en contra del gobierno de Bucaram fueron las mujeres, y el mes de noviembre estuvo marcado por su participación¹⁰. Desde el comienzo se puso en evidencia el carácter urbano de la movilización antibucaramista, pues en las calles del centro de Quito, en las inmediaciones del Palacio de Gobierno se veía a mujeres de diversa extracción social, desde mujeres con anacos¹¹ hasta damas elegantes, con sacos de cachemira y tacones¹² (*El Comercio*, 1996b).

En noviembre se dio también el inicio de las protestas de la CONAIE, fuerza que se expresó públicamente el 20 de noviembre, manifestándose, de manera central, en contra de la creación del Ministerio Étnico y sobre todo del clientelismo con el que se manejó el nombramiento para esa cartera, pero también en contra de las medidas económicas que se aprestaba a imponer el gobierno. Se rechazaba, por ejemplo, el proyecto de convertibilidad, con el que solamente se buscaría “pagar favores políticos a sectores de importadores que apoyaron en la campaña” (*sic*) (*El Comercio*, 1996a). La CONAIE se opuso también

10 Los pronunciamientos de las mujeres expresan, eventualmente, una protesta contra el gobierno como metáfora del orden patriarcal y la violencia de género. Así, el 9 de noviembre, en Quito la agrupación “Mujeres por la Democracia” realiza la primera manifestación que culmina en la Plaza de la Independencia, demandando la renuncia del Ministro de Energía y Minas Alfredo Adum, quien había golpeado a una de sus subalternas. Los ejes de la movilización de las mujeres contra Bucaram y del mandato de la organización a los legisladores Frente Patriótico fueron: “No a la violencia, no a la corrupción y por una mejor calidad de la vida de ecuatorianos y ecuatorianas” (Palán, 1997: 216).

11 “Anaco” prenda de vestir de mujeres indígenas de algunos pueblos de la sierra norte del Ecuador; cumple las funciones de una falda.

12 A título de testimonio personal, recuerdo que las mujeres aglutinadas en la CPME estuvimos presentes en la marcha con motivo de la conmemoración de 25 de noviembre, día internacional de la No Violencia contra la Mujer. La reivindicación se refería a la reglamentación de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia para su aplicación, a la creación de nuevos Juzgados de Familia y Nuevas Comisarías, así como a la destitución del ministro Adum.

a que el 45% del presupuesto se destinase al pago de la deuda externa, restando recursos al área social. Para la CONAIE, el gobierno bucaramista habría cumplido cien días de “show, escándalo y abuso”, según dijo el portavoz Cabascango.

Simultáneamente, también los sectores laborales expresaron su desaprobación a la gestión de Bucaram, lo que significaría el abandono definitivo del apoyo a Bucaram desde grupos que habrían apostado a cierta colaboración mediada por la vicepresidenta Rosalía Arteaga. El 20 de noviembre Fausto Dután, representante del Frente Sindical, evalúa los “cien días” del gobierno de Bucaram como “cien días nefastos”, y pide al presidente que medite y cambie el modelo económico, sobre todo el esquema de convertibilidad (*El Comercio*, 1996a). Días más tarde, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) rompió los diálogos en las mesas tripartitas –gobierno, empresarios y trabajadores– que se estaban realizando en torno al tema de la flexibilización laboral, la unificación salarial, la convertibilidad y el incremento de salarios (*El Comercio*, 1996b).

El mes de diciembre se caracterizó por una cierta calma social, debido a la celebración de las festividades de fin de año, las que, en cambio, estuvieron signadas por nuevas manifestaciones de excentricidad del presidente. Ya a inicios de enero se configura un consenso de oposición, plasmado en un acuerdo parlamentario de amplio espectro, firmado por el ultraderechista Partido Social-Cristiano, los centristas Democracia Popular (demócrata cristiano) e Izquierda Democrática (socialdemócrata), el izquierdista Movimiento Popular Democrático y *Pachakútec*-Nuevo País, brazo político de la CONAIE. Este abanico multicolor de fuerzas políticas se pone de acuerdo para exigir cambios de forma y de fondo a la administración de Bucaram, para que se declare la ilegalidad del presupuesto del Estado recientemente aprobado (pues se lo pretende financiar con la elevación de las tarifas de la energía eléctrica y la eliminación de los subsidios al gas de uso doméstico y otros combustibles), para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en contra de la privatización y, finalmente, para oponerse al Plan de Convertibilidad.

En efecto, ya en los primeros días del mes de enero fueron anunciadas la elevación de las tarifas eléctricas y la eliminación del subsidio al gas doméstico. El alza del costo de los servicios de energía sería del 30-40% para el sector industrial y comercial, y entre el 150 y 500% para el sector residencial, dependiendo de los niveles de consumo.

El Frente Unitario de Trabajadores presionaba, entonces, por conversar con el presidente “sobre el futuro del pacto social” (*El Comercio*, 1997a). El presidente se desentendía de estas advertencias y el pacto social se rompe, a pesar de la disposición de los representantes

del FUT a mantener el diálogo tripartito. A partir del 8 de enero (fecha en la que se movilizaron en Quito más de 8.000 personas) la protesta popular cobraba unanimidad y se extendía a varias ciudades del país, en particular a la ciudad serrana de Cuenca, pero se expresaba también en las provincias de la Costa y el Oriente. En adelante, la protesta se acrecentaría constantemente, y a ella se sumarían mujeres organizadas, amas de casa, activistas barriales, periodistas (en contra de agresión del Poder Ejecutivo a los medios de comunicación), artesanos (en contra del Reglamento de Facturación que se pretendía poner en vigencia), en el contexto, claro, de la movilización permanente de los estudiantes secundarios y universitarios.

En Cuenca y la provincia del Azuay la movilización fue ejemplar, pues, literalmente, “pululaban” las demostraciones de rechazo al régimen: en barrios, parroquias, anejos, las calles de la urbe. Agrupaciones sociales de toda índole engrosaron las manifestaciones sobreponiendo a la demanda general sus propias reivindicaciones: contra la instalación de una gasolinera, por la reubicación del botadero de basura, etc. (las reivindicaciones sectoriales parecen ser el móvil mayor de la protesta pública, usufructuando un espacio de expresión preparado por demandas más generales). La movilización pasó a ser coordinada por el Frente Cívico presidido por el rector de la Universidad, y conformado por 50 organizaciones provinciales.

En síntesis, la movilización, desde lo que puede ser denominado “el bloque popular” u oposición crítica (Frente Unitario de Trabajadores, Coordinadora de Movimientos Sociales y Frente Popular), venía siendo coordinada ya hace varias semanas, desde finales de 1996. De acuerdo a los consensos logrados entre estas fuerzas se definieron las siguientes metas: la no privatización de la seguridad social y las áreas estratégicas de la economía; el reconocimiento de la plurinacionalidad; el respeto a los derechos humanos, políticos, laborales y de la mujer; el impulso a la gestión ciudadana; la promoción de la convocatoria a una asamblea constituyente (Narvárez, 1997: 43).

En lo que concierne al sector empresarial, este no se decidía a sumarse al anunciado paro del 5 y 6 de febrero, aduciendo que este tendría un “tinte político”, pero también porque la desestabilización podría conducir al “vandalismo”, como se expresó la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, Joyce de Ginatta (*El Comercio*, 1997b). No obstante, a fines de enero el embajador de los Estados Unidos, Leslie Alexander, expresó públicamente que en el Ecuador “hay corrupción” en los niveles gubernamentales, lo que, al parecer, sirvió como señal para la adhesión de los sectores empresariales y financieros de la Costa a las jornadas de febrero. De todas maneras, según Guerrero y Ospina, estos sectores habrían vacilado en sumarse a

la movilización antibucaramista, debido al temor a una recapitulación de la hegemonía política de la Sierra en el nuevo gobierno (Guerrero y Ospina, 2003).

Desde mi punto de vista, la presencia de última hora (a inicios de febrero) de las cámaras de la producción, principalmente de Guayaquil, así como de los partidos de la derecha, pudo deberse también a la necesidad por resguardar el prestigio de la implementación del modelo neoliberal, que comenzaba aceleradamente a degradarse al ser impulsado por un “bufón”. Tal presencia puede, entonces ser interpretada como parte importante de la “lucha discursiva” (concepto de Stuart Hall). En todo caso dicha adhesión, por dubitativa que haya sido, sirvió para capitalizar la hegemonía de la movilización de febrero, propósito en el que los sectores empresariales y financieros fueron coadyuvados por los medios de comunicación, que visibilizaron el liderazgo de personalidades de esa extracción social y política, opacando así la iniciativa de la convocatoria hecha desde el Frente Unitario de Trabajadores y la Coordinadora de Movimientos Sociales¹³, así como sus acciones.

La señal de la radicalización de las protestas fue dada por la Coordinadora de Movimientos Sociales, organización que hizo una toma simbólica de varios días (hasta la caída de Bucaram) de la catedral metropolitana de Quito, en demanda no solamente de la dimisión de Bucaram, sino de la convocatoria a una Asamblea Constituyente (tesis que se plasmó al año siguiente) y por la formación de un gobierno transitorio de consenso. Sin embargo, la señal para la ampliación de la movilización social fue dada por el Embajador de los Estados Unidos, quien con su denuncia de actos de corrupción dio luz verde a la incorporación de las cámaras de la producción a la movilización en contra del mandatario. Con ello, se operaría un secuestro simbólico y político del rechazo a las políticas estatales (predominante, como veremos en el gráfico de la página siguiente), a favor del componente de la lucha contra la corrupción, lo que tendería a dar a la movilización un toque moralizante por sobre el carácter propiamente político. Ya en

13 Organización formada en 1996 y que aglutina a expresiones de los “nuevos movimientos sociales”, al momento de su fundación tenía como referentes a algunos sectores de la antigua izquierda. Su naturaleza y tareas fueron definidas de la siguiente manera: “La CMS es una síntesis de diversos esfuerzos organizativos y de construcción de una nueva referencia del movimiento social. Parte de la necesidad de reconocer nuestra diversidad y la consagración institucional de la plurinacionalidad: plantea el carácter estratégico del Estado y las áreas petrolera, eléctrica, de telecomunicaciones y de seguridad social e insiste en su modernización, sin privatizar. En igual forma, propone el reconocimiento de derechos colectivos, el de vivir en un medio ambiente sin contaminación, castigo a los delitos y crímenes de Estado y fundamentalmente establece como la principal riqueza de nuestro país a su pueblo” (Narváez, 1997: 44).

el transcurso mismo de la movilización, los medios de comunicación participaron activamente en la coordinación.

Desde inicios de enero ya se preparaba “la transición”: acuerdos partidarios, elaboración de la argumentación jurídica, comunicados. Tras la resistencia de Bucaram para abandonar el poder y las incesantes y cruentas manifestaciones de la población, el 7 de febrero de 1997 “Ecuador amanece con tres presidentes”: Bucaram, elegido constitucionalmente, pero depuesto por el parlamento bajo la causal de “incapacidad mental”; Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta apoyada por las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, quien firma con su puño y letra el decreto que consagraría su nombramiento presidencial, y Fabián Alarcón, ex presidente del Congreso, quien logró capitalizar el apoyo de todos los sectores parlamentarios.

¿Cuál es la significación las jornadas de inicios de febrero de 1997? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Qué es lo que ellos repudiaron? Es necesario formularse estas preguntas, debido a que, más allá de la realidad virtual construida por los medios de comunicación, tuvieron lugar procesos que no fueron tanto subterráneos, cuanto invisibilizados por la prensa de gran circulación y la televisión.

Entre noviembre de 1996 y febrero de 1997 fueron expresivas las movilizaciones de rechazo a las políticas estatales, siendo mayoritaria la manifestación de los trabajadores, seguida de “grupos locales” y organizaciones barriales. Verifíquese en el Gráfico 3 que las manifestaciones en contra de la política estatal predominan sobre las protestas en contra de la corrupción, eje discursivo de los medios de comunicación (ver también Tabla III en Anexo).

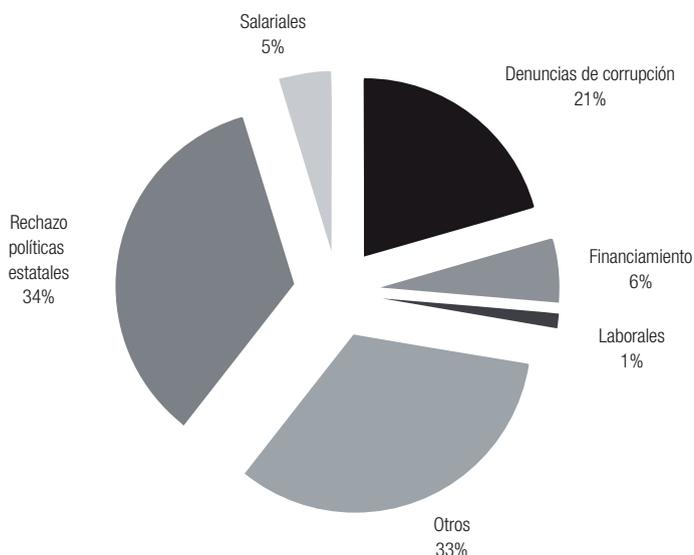
Si consideramos la importancia de la movilización del sujeto laboral, impugnador de las políticas estatales, podríamos decir que la movilización organizada, la protesta dentro de los cauces “tradicionales”, es decir, contra la política económica y la presión por la profundización del ajuste, habría primado por sobre la “posmaterialista” censura a la corrupción, a pesar de que fue este tópico el que recibió mayor atención por parte de los medios de comunicación. Otros sujetos activos fueron los representantes de los poderes locales, dada la visión centralista del gobierno y su política de confrontación con los municipios (Ibarra, 1997: 30).

Un rasgo particularísimo de la movilización en contra de Bucaram en febrero de 1997 fue la presencia de las clases altas y medias, lo que obedecería al horror que producía en ellas “el repugnante otro” (así define Carlos de la Torre la actitud de dichos sectores sociales), Bucaram y su séquito de administradores de gobierno, con una imagen que desafiaba las representaciones corrientes sobre la majestad del poder del Estado. Cabe decir que, se trató, en términos generales, de una mo-

vilización cívica de base urbana, en la que confluyeron el Frente Unitario de Trabajadores, los movimientos aglutinados en la Coordinadora de Movimientos Sociales –la Federación de Trabajadores Petroleros, la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, la CONAIE– y los partidos de todo el espectro político, y colateralmente lo hicieron también las cámaras de comercio y la producción.

Gráfico 3

Objeto del conflicto: noviembre de 1996-febrero de 1997



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Tal unanimidad opositora, que recorría casi todos los colores del espectro político y social –sin contar, no obstante, a muchos seguidores silenciosos, incondicionales, aunque inorgánicos–, puede ser explicada por la “exacerbación de los estilos patrimonialistas y excluyentes”; mientras tanto, por otro lado, una alianza política de tal amplitud se desarrolló en medio del compromiso para diferir las privatizaciones y limitar las medidas de ajuste (Ibarra, 1997: 31).

Constatada la incidencia de la movilización del sujeto laboral y otros sectores urbanos, es interesante también otear lo que ocurría en las organizaciones indígenas. En criterio de Miguel –interlocutor presentado en el capítulo siguiente y uno de los “mandos medios”, portavoz del sentir de las bases cotopaxenses– el objetivo del levantamiento de inicios de 1997 no significaba, por parte de la CONAIE, una presión

para la renuncia, sino la petición de que Abdalá “rectifique” sus políticas y se dedique a “administrar con seriedad el país”, tanto en lo que concernía a las medidas económicas, como a la existencia del Ministerio Étnico. Miguel considera que “[...] este Bucaram también, es por culpa de él que está fuera del país, fuera del gobierno. Si él hubiese llamado a la CONAIE y dialogaba con los indígenas no salía”. De acuerdo con la versión de este interlocutor, los indígenas se habrían enterado de una expresión irrespetuosa de Bucaram proferida al ser informado sobre la movilización indígena:

Y eso se informó a la gente, la gente [se puso] más radical, se radicalizó y eso aprovecharon los políticos grandes. Ya cuando la cosa estaba dura amenazaron con [las] Fuerzas Armadas. Si que ya sabiendo que venían los indígenas, llamaba a la CONAIE, los ricos qué gente [habrían] sacado. Ahí fuimos utilizados, ya por último faltando veinte minutos para salir [...] ya hermano, venga converse. La CONAIE dijo nuestras bases están en las calles, ya no podemos hacer absolutamente nada.

Este fragmento indicaría no solamente la cautela de los movimientos de la dirigencia de la CONAIE, sino también una indefinición de posiciones de cara a las metas de transformación del modelo de sociedad propulsadas por el gobierno bucaramista y, a su manera, también por los posteriores. ¿O entró en juego una proclividad “etnopolitista” que ha ido poco a poco minando la viabilidad de un proyecto de plurinacionalidad que atendiese también los clamores por la ciudadanía y la justicia social?

Podríamos pensar que fue, posiblemente, el carácter de frente cívico en el que se disolvieron los sujetos populares lo que veló la parte propositiva de su accionar. Así, Napoleón Saltos, uno de los dirigentes políticos de oposición de mayor visibilidad durante la última década, expresó en la entrevista que nos concediera: “la caída de Bucaram fue más bien un plan de oposición, rechazo, de protesta más que un plan de propuesta”. Por otro lado, los límites de las acciones del 5 de febrero son vistos así por Iván Narváez, uno de sus más prominentes organizadores y dirigente de la Federación de Trabajadores de Petroecuador:

Frente al entrapamiento (límite de no disponer de un centro de dirección) de los movimientos sociales, la CMS no lograba transparentar sus intereses políticos en términos de propuestas nacionales y no concluyó la Agenda Programática anunciada. Se corría el riesgo de no asumir retos políticos más colectivos y menos gremiales, pero en todo caso, los movimientos sociales jugaron un rol direccionador y conductual de

la sociedad civil a través de propuestas políticas alternativas generales, tesis para el debate público y acciones relevantes como el proceso de aglutinamiento y conformación de Frente Patriótico, formulación del manifiesto del FP y concreción del “mandato” que fue entregado al presidente del Congreso Nacional, Dr. Fabián Alarcón (Narváez, 1997: 46).

En síntesis, la gran movilización de base urbana de febrero de 1997 adoleció de la ambigüedad y la oscilación entre una lucha social contra los efectos inmediatos de la crisis y el ajuste –y en tal medida es importante reconocer la existencia de un componente “antisistémico”– y un levantamiento “ético-cívico” como elemento unificador a todas las fuerzas participantes. A esta ambigüedad se asocia una reorientación discursiva en la que se funden el tópico de la lucha contra la corrupción y el acentuado rechazo de los sectores medios y altos, en alianza con los grandes medios de comunicación, al “repugnante otro”: el presidente-transgresor y advenedizo.

Se trataba de la confluencia de haces de fuerzas con diversos objetivos, diverso anclaje social e ideológico, cuya movilización sin propuesta definida dio un amplio espacio de maniobra a los sectores del bloque dominante. Aunque de todas maneras, el amplio basamento social y político de la movilización dio una tregua en el ritmo de la aceleración del ajuste.

Debemos apuntar una última, pero muy importante particularidad de las jornadas de febrero de 1997, para comprender algunos significados de la protesta de los últimos años noventa que a menudo han sido desestimados. Hernán Ibarra recuerda que los símbolos dominantes de la protesta fueron la bandera nacional con un crespón negro, la invocación a la patria y a la unidad nacional; dicho autor sugiere que la presencia de tales símbolos habría conferido a la movilización “una continuidad con lo que se ha llamado el ‘espíritu’ del Alto Cenepa” (Ibarra, 1997: 30), esto es, con los estados de ánimo que se inspiran en el conflicto bélico con el Perú de inicios de 1995. En efecto, este *leitmotiv*, aun cuando poco se enfatiza en él en la mayoría de los análisis, parece recorrer la protesta de los últimos años. Tendría también expresión en los acontecimientos de enero de 2000; y como veremos, el sentimiento de “ecuatorianidad” se hace presente en los enunciados de nuestros/as interlocutores, insistentemente, sobre todo, en los/las indígenas. Veremos también en páginas ulteriores la existencia de indicios de fortalecimiento de sentimientos de pertenencia a la “comunidad imaginada”.

Por último, uno de los saldos más importantes de los procesos de 1996 y 1997 fue la convergencia de los llamados “movimientos sociales”

y las fuerzas político-partidarias para la elaboración de un nuevo texto constitucional, que fue aprobado en 1998. Y este trajo novedades en el plano de la conceptualización jurídica de lo social y lo económico. Uno de los rasgos más salientes del nuevo marco jurídico en el plano social son el reconocimiento a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros, en lo que concierne a la territorialidad, la preservación de tradiciones y el desarrollo, así como la protección de la familia bajo la igualdad de responsabilidades y derechos de ambos progenitores (lo cual era resultado de la movilización de los pueblos originarios y las mujeres). Ya en el plano de la regulación del sistema económico, en lugar del concepto “áreas estratégicas” –que implicaba la propiedad pública intransferible sobre ciertos recursos naturales–, la Constitución de 1998 declara con un espíritu permisivo de la potencial venta o licitación de la explotación privada de recursos naturales, en su artículo 247 del título XII “Del sistema económico”, Capítulo I “Principios Generales”, la “propiedad inalienable e imprescriptible del Estado sobre los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta a la del suelo”.

De tal manera, la movilización de finales de 1996 e inicios de 1997, a pesar de haber conseguido una tregua en los ritmos del ajuste, arrojaría un resultado poco favorable a las fuerzas promotoras de las jornadas de protesta y una victoria de las fuerzas pro ajuste, resultante de una propuesta clara sobre el país por ellas deseado, de una gran habilidad para capitalizar el carácter cívico y masivo de la protesta, así como de sacar amplia ventaja de las debilidades de los sujetos sociales y políticos críticos del ajuste.

LA GRAN MINGA

El indígena es un movimiento que a partir de un discurso que puede parecer radical, fuerza lo posible

Javier Ponce citado por Kintto Lucas

La administración del democristiano Jamil Mahuad –afianzada en la legitimidad de las urnas, a mediados de 1998– retomó la aceleración del ajuste, en el contexto de la crisis, y la aderezó con una franca cesión a favor de los grandes exportadores, los financistas y la bancocracia. Mahuad llevó el mandato de las elites económicas para profundizar el modelo de ajuste, realizando las tareas que quedaron truncas con el derrocamiento de Abdalá Bucaram: se trató principalmente del retiro de los subsidios al gas, la elevación de los precios del combustible, la dolarización o convertibilidad, la reforma tributaria y las privatizaciones pendientes. Recordemos también que dicho gobierno fue el autor del tristemente célebre “feriado bancario” de marzo de 1999 que congeló

los depósitos bancarios de la población ecuatoriana. Se incrementó, como veremos, el tono de la protesta y los ejes de la movilización se desplazan hacia el campo, sobre todo a partir de mediados de 1999, para desembocar en el derrocamiento de Mahuad, el 21 de enero de 2000. ¿Cuál fue la situación que configuró una conmoción socio-política de esa magnitud?

Un excelente análisis del “contexto desencadenante” nos lo ofrecen Fernando Guerrero y Pablo Ospina (2003). Según estos autores, las vicisitudes políticas de la segunda mitad de los años noventa, tales como el movimiento de febrero de 1997, el fracaso de la solución de gobernabilidad lograda en la Constitución de 1998, y la crisis económica, habrían reforzado una lectura de la crisis, por parte de la CONAIE –a la sazón dirigida por Antonio Vargas– y la Coordinadora de Movimientos Sociales, como una oportunidad para la acción extrainstitucional radical. Por otra parte, en la crisis habrían confluído factores acumulados desde el inicio del ciclo recesivo de inicios de 1995: el desajuste fiscal generado por la guerra del Cenepa; la caída drástica de los precios internacionales del petróleo (desde 15 dólares el barril en noviembre de 1997 hasta 7 dólares en diciembre de 1998) con el consecuente desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado; las devastaciones producidas por el fenómeno de El Niño. Todos estos factores incidirían en una crisis fiscal que impedía el pago a los empleados públicos, por lo que la agitación social iría en ascenso (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

La crisis bancaria de 1999 merece una puntualización especial. Según la analista Wilma Salgado (citada por Guerrero y Ospina, 2003), entre agosto de 1998 y febrero de 1999 el Banco Central habría transferido cerca de 1.000 millones de dólares para evitar la quiebra de algunos bancos (700 millones solo al Filanbanco), dinero que habría sido utilizado para especular con el dólar y aumentar sus utilidades derivadas de compra y venta de divisas. Bajo amenaza de fuga de capitales, el Banco Central eleva las tasas de interés, hasta el 180%, en febrero de 1999. Fue decretada la flotación del dólar, con la consecuente devaluación del sucre. Frente a la inminencia de hiperinflación, el gobierno de Mahuad decretó el feriado bancario, con un congelamiento de depósitos que afectó a toda la población y tuvo efectos profundamente recesivos sobre la economía, aun cuando frenó la tendencia alcista del dólar. Y la espiral de la debacle continuó, porque al gobierno no le quedó más que el endeudamiento externo e interno y la emisión monetaria, lo que llevó a niveles exorbitantes de devaluación e inflación. Ahora bien, ¿cómo fue posible esta catástrofe? se preguntan Guerrero y Ospina, y ubican su causa en la confluencia de la desregulación financiera asociada a la liberalización de la economía,

con la profunda crisis económica y fiscal latente desde 1995 (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En estas circunstancias la población habría sido presa “de una situación social de desamparo” (Guerrero y Ospina, 2003), acompañada de indignación por el servilismo del gobierno frente a las elites económicas. Y fue así que la inquietud social se intensificó en el mes de enero de 1999, en medio del anuncio de un recorte presupuestario que lesionó el gasto social, del congelamiento de sueldos, de la quiebra de bancos y su salvataje apuntalado desde el Estado, y de la elevación de la cotización del dólar. Desde las esferas del Estado se hablaba, además, de nuevos impuestos (como el 1% a la circulación de capitales), y de liberalización del precio de los combustibles. A mediados de febrero se decretó la flotación del dólar norteamericano y el precio de la divisa subía sin control. Ya en el mes de marzo, cuando se decretó el congelamiento de los depósitos, se acentuaron algunos elementos que eran germinales en 1997: la crisis fiscal (el déficit fiscal alcanza el 7%), y la caída del sistema bancario.

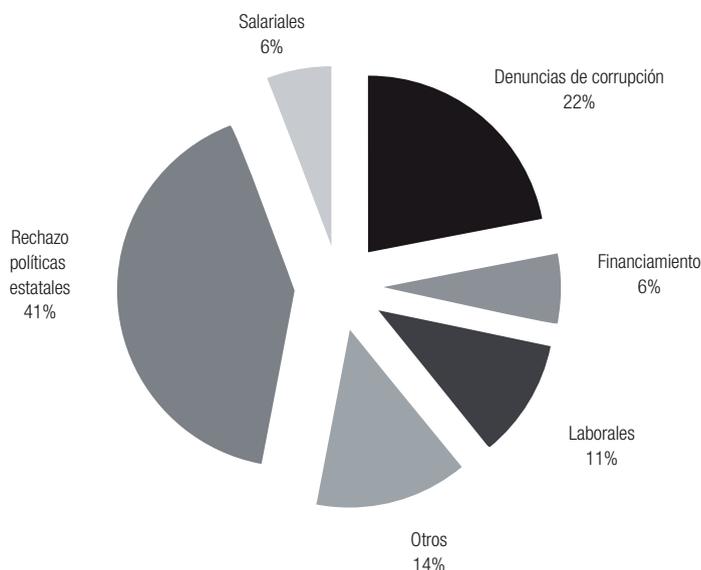
Nuevamente la protesta volvía a las calles de las urbes ecuatorianas y las carreteras eran otra vez bloqueadas. En efecto, en el cuatrimestre de marzo-junio de 1999 la tónica del conflicto tuvo apogeo, y no solamente con relación al período de gestión de Bucaram, sino en comparación con otros períodos del ciclo de intensificación del ajuste, momento que fue superado solamente por la conflictividad social del cuatrimestre de noviembre de 2000 a febrero de 2001. El sujeto colectivo más intensamente movilizado fue nuevamente el laboral (trabajadores y sindicatos), seguido de los estudiantes, y sólo en tercer lugar –en cuanto a la cantidad de eventos– el sujeto indígena y campesino promueve manifestaciones de rechazo al gobierno (Gráfico 1). Hay que señalar, además, que debido al impacto generalizado de las medidas económicas, hubo una gran efervescencia de movilizaciones de organizaciones de perjudicados por las quiebras bancarias, manifestándose en general una gran beligerancia en contra del congelamiento de los depósitos. El tópico predominante durante este período era el “rechazo a la política estatal”, que apuntaba al gobierno como tal y se enfilaba básicamente contra el congelamiento de los depósitos y los métodos de salvataje estatal para la solución de la crisis bancaria; seguido del rubro “denuncias por corrupción”. Desde la perspectiva de los analistas de la revista *Ecuador Debate*, las persistentes movilizaciones, aun de sectores como el funcionariado de misiones diplomáticas en el exterior, cuyos salarios se habían deteriorado notablemente, eran “señales elocuentes del intenso desgaste del Estado-nación, de su incapacidad para equilibrar soluciones técnicas y arreglos políticos de largo alcance para crear mínimos márgenes de certeza, previsibilidad y movilidad a los actores sociales” (CAAP, 1999b: 37).

Después de este pico de la protesta, en el contexto de lo que sería una aparente declinación de la conflictividad social, advino el desenlace del 21 de enero de 1999. Ese acontecimiento tuvo relación inmediata con el anuncio de la dolarización realizado por Mahuad. Además, estuvo configurado por la acumulación de inconformidad con los efectos del congelamiento y la evidencia del alineamiento del mandatario a favor de la “plutocracia”, pero sobre todo con el mencionado deterioro de la capacidad estatal para lograr soluciones políticas y técnicas frente a la plétora de conflictos.

Antes de analizar las circunstancias de enero de 2000, demos un vistazo al tenor de las reivindicaciones de ese período, en especial durante finales de 1999 e inicios de 2000, como observaremos en el siguiente gráfico (ver también la Tabla III en Anexo).

Gráfico 4

Objeto del conflicto: noviembre de 1999-febrero de 2000



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Observamos aquí la gran presencia en ese entonces del rechazo a las políticas estatales, cuyo índice supera al manifestado durante los últimos meses del buaramato, pues el porcentaje de conflictos se eleva del 34% al 41% (ver Tabla III en Anexos), lo que se explicaría, como se ha mencionado, tanto por la insistencia en el cambio de régimen monetario, como sobre todo por los efectos del feriado bancario. Por otra par-

te, el rubro “denuncias por corrupción” mantiene un “empate técnico” con las realizadas contra la administración de Bucaram. Finalmente, uno de los aspectos sociales más afectados durante este período es el trabajo, por lo que la incidencia de la conflictividad laboral ha crecido del 1% al 11%, en comparación con el período final del gobierno de Bucaram. En síntesis, estos datos indicarían un agravamiento de la crisis, no solamente por la férrea voluntad de profundizar el ajuste o por los desaciertos en la resolución de la problemática social y económica, sino también por los niveles de desaprobación a las políticas de gobierno.

¿Qué ocurría en el mes de enero de 2000? ¿Qué ambiente se vivía en el país?

El anuncio de la dolarización provocó el rechazo de la mayor parte de la opinión pública, incluidos algunos empresarios serranos; según la encuestadora Market, el 54% de la población habría sido contraria a ella (Lucas, 2000: 92). Ocurre una escalada del precio del dólar –junto con su acaparamiento– acaecida probablemente debido a la libre emisión de moneda por parte del Banco Central, a fin de hacer frente a las deudas de los bancos que fueron asumidas por el Estado. No es de descartar una escalada artificial de la moneda, pues según la autorizada voz del analista León Roldós Aguilera: “la impresión es que le dieron palo al dólar para que suba, y habría que ver quiénes compraron divisas en esos días, ya que hicieron el negocio del siglo porque ahora vale 30 por ciento más” (citado en Lucas, 2000: 91)¹⁴.

El gobierno de Mahuad alcanzó altos índices de impopularidad. Según la encuestadora CEDATOS, el 53% de la población se habría manifestado por la renuncia del presidente, mientras que el 42% por la rectificación de rumbos (Lucas, 2000: 92). Y a propósito del contenido de la demanda de rectificación de rumbos, es interesante hipotetizar sobre las representaciones que las estructuran a partir del testimonio de Pablo, un estudiante cuencano de 15 años (interlocutor que será

14 Un texto de Perry Anderson ilustra muy elocuentemente que la crisis económica y la inflación no solamente podría tener un carácter artificial, sino que podrían éstas ser deseables, con miras a imponer soluciones radicales que desbrocen el camino a la reestructuración neoliberal y tornen irreversibles sus consecuencias, como es el caso de la dolarización en nuestro país, aceptada por muchos como un mal menor frente a la inestabilidad cambiaria de ese período. Anderson relata que en cierta ocasión, durante una conversación en Rio de Janeiro en 1987, un colega neoliberal brasileño, “economista destacado y gran admirador de la experiencia chilena”, se habría sincerado acerca de su visión sobre lo que el consideraba el problema crítico del Brasil durante la presidencia de Sarney. Este problema, decía ese economista, no es una tasa de inflación demasiado alta, como creía la mayoría de los funcionarios del Banco Mundial, sino una tasa de inflación demasiado baja; así pues, desde el punto de vista de ese economista, habría sido deseable una hiperinflación a fin de que “los diques se rompan” para “condicionar al pueblo a aceptar la drástica medicina deflacionaria que falta en este país” (Anderson, 1999).

presentado en el Capítulo III), quien expresaría los ánimos de sectores urbanos. De acuerdo con este interlocutor,

La protesta que se dio no era destinada a botarle a él [Mahuad], lo que se quería era la derogatoria de las medidas y que no se dé la dolarización, entonces se dio una serie de factores, como el que el ejército se unió a los campesinos, tomaron el Congreso y se podía ver que era una cosa que cogió de sorpresa, pero como ya estábamos en el Congreso pero sin manifiesto, fue una cosa repentina.

Los motivos de tal estado de ánimo habrían sido su “disimulo” en los actos de corrupción; así, al ser invitado a analizar las diferencias entre la impugnación a Bucaram y a Mahuad, Pablo confirma la existencia de las mismas:

[...] a Abdalá lo quisimos botar todos, las cosas eran demasiado: él robaba de frente, al hijo le manda a las aduanas y muestra que adquirió su primer millón de dólares que ha robado. Mahuad en cambio era un mal presidente pero era más tapado, si se robaba era más tapado, no hacía tantas payasadas. Las dos cosas están mal, no se debería hacer ninguna pero en todo caso la gente acepta más que le roben por atrás que le roben de frente. Esos comentarios he oído en algunas veces en el bus.

En esta ocasión la movilización tuvo una lógica distinta a la subyacente tras la impugnación a Bucaram, pues mientras este habría gozado de mayor condescendencia de los sectores indígenas, Mahuad la tendría frente a sectores urbanos. Probablemente, tal situación obedezca a la textura de las identificaciones políticas generadas en uno y otro caso, aunque también, según la lectura de Guerrero y Ospina, es justamente el anuncio de la dolarización lo que habría permitido a Mahuad recomponer momentáneamente su bloque de apoyo, así como también tranquilizar a los sectores medios urbanos, temerosos de la hiperinflación, o al menos ponerlos en compás de espera (Guerrero y Ospina, 2003).

Entonces, en el nuevo momento, a pesar de lo drástico de las medidas económicas, el espectro de fuerzas sociales movilizadas fue menos amplio que en febrero de 1997, pues en los sectores medios urbanos no tuvieron la presencia masiva de aquel entonces. La protesta se concentra en la CONAIE, en primer lugar, pero también son convocados diversos sectores, tales como: sindicatos del sector público, estudiantes, organizaciones de profesionales, Iglesia, ONG, organizaciones de mujeres, representantes de organismos de derechos humanos, es decir, sectores claramente “politizados”. Todos ellos confluyeron en la constitución del Parlamento de los Pueblos del Ecuador, instancia

conformada en varias localidades serranas, en forma paralela y como alternativa al Congreso Nacional. Desde el 19 de enero algunos sectores se involucraron de manera activa a las presiones en contra del gobierno: los trabajadores de Petroecuador, por ejemplo, dejaron de bombear crudo desde la Amazonía hacia la refinería de Esmeraldas, impidiendo el embarque para la exportación y la distribución de combustibles (Lucas, 2000: 106).

Los indígenas por su parte, tras varios días de camino a pie por vías secundarias desde sus comunidades en las provincias aledañas, iban llegando a Quito para acampar en las cercanías del Congreso Nacional. El gobierno de Mahuad reaccionó reprimiéndolos, y apresando a más de cien dirigentes. Era notable el carácter de la represión, que fue denunciado como “rebrote de racismo”, pues se procedió a desalojarlos de los medios de transporte, tratando de impedir su entrada en la capital. En otra ciudad serrana, Cuenca, en esos días hubo una impresionante marcha de unas 35 mil personas.

Las jornadas de enero de 2000, a diferencia de las de febrero de 1997, a criterio de sus organizadores, habrían tenido varios elementos de ventaja, desde el punto de vista organizativo. En primer lugar, habría contado con una estrategia insurreccional, según expreso Napoleón Saltos en la entrevista que nos fue concedida. Los elementos de tal estrategia, además de la alianza con las Fuerzas Armadas, habrían sido “aislar al poder” [el Ejecutivo], “aislar a los partidos políticos que son partidos parlamentarios y electorales, sin base social, para que ellos no sean los que decidan”. (Nótese que esta postura ante los partidos políticos difiere de la actitud más conciliadora que mantendrían miembros de base del movimiento indígena, a juzgar por uno de los testimonios analizados en el siguiente capítulo). De otro lado, surgiría el sustento político de la insurrección, una suerte de poder paralelo encarnado en el Parlamento de los Pueblos del Ecuador con eje en la CONAIE, y configurando la iniciativa desde el campo hacia la ciudad.

Con todo, a pesar de promover la impugnación a los tres poderes del Estado, en el proyecto de poder desplegado en enero de 2000 habría predominado una visión eminentemente moral, y no claramente política. Las palabras del religioso Luis Alberto Luna Tobar, cercano a los sectores movilizados, ponen de relieve estas ambivalencias: “el pueblo no pide el quiebre de las instituciones. Solo pide que estas se pongan al servicio de las grandes mayorías para que sea una verdadera democracia” (citado en Lucas, 2000: 109) (las mismas ambivalencias se expresarán en la visión de ciertos sectores de base de la CONAIE, que analizaremos en el siguiente capítulo).

Más allá de las vacilaciones de la coordinación del levantamiento, y de los reveses y el desconcierto debido al desplazamiento de los

coroneles Gutiérrez y Cobo por el general Mendoza, ¿por qué una movilización de tal magnitud no logró revertir la dolarización, a pesar de la estrategia insurreccional que, se dice, existió? ¿Por qué en meses posteriores no se pudo activar la movilización y realizar un nuevo levantamiento, tal y como se anunció para abril, y luego se difirió para septiembre de 2000?

Por otro lado, a pesar de la diafinidad de los planteamientos en torno a “una línea de defensa del patrimonio nacional y a la oposición a las privatizaciones con el tema del trabajo o el derecho a no ser despedido y el de tener un salario”, como manifestó Napoleón Salto cuando lo entrevistamos, a pesar de la nítida oposición a la dolarización, la coordinación no habría delineado un programa de gobierno claro. Sobre todo, el perfil conspirativo y “antipartidista” de la organización habría limitado la base de alianzas políticas y sociales que la sustentó. Conuerdo, por otra parte, con Guerrero y Ospina, cuando manifiestan que la salida de Jamil Mahuad y el nombramiento constitucional de Gustavo Noboa, habría sido planificada para retirar a un mandatario incómodo que obstaculizaba la implementación del ajuste, con lo que de paso se encontraría una salida a la crisis (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En la conducción del movimiento del 21 de enero del año 2000, cuando la alianza insurgente indígena-militar derrocó a Mahuad, se habrían cometido, ante todo, errores de apreciación de las dimensiones y posibilidades reales de la movilización. Y este análisis fue suplantado por la planificación de la insurrección como tal, es decir los elementos instrumentales y tácticos de la planificación obscurecieron al análisis político-estratégico. De manera que la consigna del 21 de enero, la formación de un gobierno popular con sustento militar, resultaba imposible, pues se habría sobreestimado la propia capacidad de movilización, así como el compromiso del Ejército; pero sobre todo no habría existido la capacidad de reconocer las debilidades estructurales de la conjura: la debilidad regional e internacional (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo V).

Ahora bien, ¿cómo fue posible esa alianza entre indígenas y militares que a los ojos de muchas personas parecía extraña? Consideramos que algunos sectores indígenas son portadores de un proyecto de nación (plurinacional, desde luego), lo cual habría facilitado la alianza con los sectores militares. Desde el punto de vista de, al menos, un sector de los militares participantes en la gesta del 21 de enero, lo que habría es una especie de identificación horizontal con la movilización indígena. Ya en las palabras del coronel Mario Lascano podemos destacar una configuración de los siguientes elementos que sustentarían tal

identificación: rechazo a los políticos tradicionales¹⁵, a una democracia extranjerizante y disfuncional para el entorno cultural nacional¹⁶, nacionalismo definido a base de la autarquía político-económica del país, de la exaltación de la indianidad y el mestizaje y del rechazo al “otro” venido de ultramar, a su protagonismo político en el país¹⁷ (nacionalismo emparentado con autoctonismo¹⁸); este sector se declara, asimismo, partidario de métodos drásticos de gobierno¹⁹, condena al neoliberalismo y su adscripción a un origen externo²⁰, apuesta al rol del Estado en la gestión del desarrollo²¹. Un punto medular de la iden-

15 Este actor de 21 de enero de 2000 justifica su participación en la asonada, por los “políticos que no habían cambiado en nada su repugnante discurso; un pueblo apático y aburrido de su propio destino; unos sectores sociales confundidos en las redes de sus propias incongruencias y un Estado atascado, sin timón ni timonel de proa, pesado y corroído en sus propias articulaciones” (Lascano, 2001: 37).

16 El tenor autoritario del pensamiento de ciertos sectores militares puede evidenciarse en el citado texto de Lascano “La democracia es una forma de gobierno; no la primera ni la más óptima, como quiere catalogarla obstinadamente el etnocentrismo occidental. Es una forma de gobierno que debe adaptarse eficientemente al entorno cultural en que va a ser aplicada. Las democracias de los pueblos amerindios eran casi perfectas composiciones de una estructura social equilibrada. [...]. No es cierto que existan formas de gobierno buenas o malas; Malinowski demostró que las sociedades van creando sus propios órganos, capaces de satisfacer sus propias necesidades. Cuando los órganos sociales o estatales no funcionan o no satisfacen sus necesidades, la misma sociedad tiene tendencia a eliminarlos. He ahí el problema de las dictaduras, tan proliferantes en Latinoamérica (aunque los norteamericanos se esfuerzan por no permitirlos; no mirando sus pecados de la época en que las fomentaban). La democracia será la mejor forma de gobierno en cuanto sea capaz de adaptarse a nuestros entornos culturales” (Lascano, 2001: 33).

17 “Los países pobres como el nuestro, lo que deben hacer es diseñar sus propias estrategias y modelos de toda índole, diseñar a su propia medida y con sus propios recursos. No podemos deslindarnos del concepto de la economía al servicio del hombre, humanitaria, que dignifique al hombre” (Lascano, 2001: 79).

18 “El bien nace de manera autóctona, y solo puede ser construido por hombres de esta tierra: soldados solidarios, dignos, multifacéticos e indígenas” (Lascano, 2001: 75).

19 “Al pueblo esta democracia enfermita no le da alternativas; lo tiene ‘achagnado’ a la estaca de su ignominia. [...] La aplicación de la pena de muerte por traición a la patria, fue el gran secreto de los grandes estadistas. [...] Rocafuerte ejecutó a más personas que todavía que García Moreno, Alfaro los fusilaba al estilo Pedro el Grande (por escogitamiento). De esta manera las cosas marchaban por las buenas o las malas, buscando el fin último de la política: el bien común” (Lascano, 2001: 42-43).

20 “Nuestro país ha adoptado un modelo económico neoliberal: cruel, inhumano, individualista; ajeno a nuestra naturaleza latinoamericana. Justamente hablamos de que ese es el problema de todos los países tercermundistas: ser incapaces de generar un propio modelo económico, a nuestra medida; considerando nuestra potencialidad material y humana” (Lascano, 2001: 79).

21 “Esa tarea le compete al Estado y a la burocracia. Quienes se empeñan en desmantelarlos olvidan que: ‘El estado para los más prominentes geopolíticos es una entidad que

tificación con la movilización indígena provendría del reconocimiento a la capacidad organizativa y movilizatoria exhibida por la CONAIE en los levantamientos y a estrategias que se consideran similares a las militares (Lascano, 2001: 91).

Así, la alianza entre militares e indígenas no fue un encuentro de ocasión, sino que se sustentó en afinidades mayores, tales como el rechazo a las consecuencias extremas del modelo neoliberal y la empatía en aspiraciones e intereses nacionalistas, aunque de manera diferente (más allá, claro, de que la figura central del gobierno del 21 de enero, Lucio Gutiérrez, haya asumido orientaciones políticas opuestas). Pero el acuerdo se tornaba posible también a merced de la relación, que data desde 1990, entre los mandos medios de las Fuerzas Armadas, y las organizaciones indígenas, a través del capitán Sandino Torres (Virgilio Hernández, citado en Guerrero y Ospina, 2003).

Por otro lado, importantes entretelones para la participación militar el 21 de enero ofrecería la firma del tratado de Brasilia que ponía fin a los diferendos limítrofes entre Ecuador y Perú. Al menos así podría haber sido desde el punto de vista de un sector de militares:

Y el primer error que cometió el Dr. Mahuad fue imperdonable para las Fuerzas Armadas. Él pensó que el asunto territorial se podía manejar en forma liviana y apresurada. Hizo exactamente lo que quería Estados Unidos y lo que pretendía Perú: firmar una paz endeble y entreguista [...] Recuerdo cuando se firmó la paz en Brasilia. Fue un día negro para la Academia de Guerra, los oficiales se veían nerviosos y afligidos, inquietos, la mayoría de ellos había combatido en el Cenepa (Lascano, 2001: 53).

Esboceemos, para finalizar esta sección, el patrón general de las movilizaciones del 21 de enero. A diferencia de las jornadas de febrero de 1997, la iniciativa de la movilización la tienen los pobladores rurales y, sobre todo, las bases de la CONAIE, entre las que desempeñaron un papel central las organizaciones de la provincia del Cotopaxi. En segundo lugar, la base de alianzas es más restringida, descartando un acuerdo político amplio y apostando, más bien, a la acción conjunta de campesinos-indígenas y militares, coadyuvados por sectores urbanos aglutinados en torno a la Coordinadora de Movimientos Sociales. Tercero, durante esta jornada predominó el tópico “antisistémico”, expresado con fuerza y radicalidad, llegando a pedir la reorganización de los poderes del Estado y la reversión de la dolarización; sin embargo, tal

hay que fortalecerla. A través de él, el país irradia poder o debilidad frente al contexto mundial” (Lascano, 2001: 49).

carácter “antisistémico” se presenta limitado, en la medida que no se trata de la demanda misma de reforma de las instituciones del Estado, sino de la sustitución de los personeros que las componen, expresado, desde luego, de manera radical, en lenguaje impugnatorio. Cuarto, el enunciado de lo nacional continúa estando presente, aunque esta vez se condensa en la “esencia” de la nacionalidad, los pueblos originarios, y en las Fuerzas Armadas; al menos tal parece haber sido uno de los sentidos rectores de la participación de los mandos medios militares. Quinto: por último, en la protesta indígena comienza a acentuarse el enunciado universalista, la demanda de respeto a lo público, la exigencia de derechos sociales subyacente al cuestionamiento de las políticas de ajuste; en tal sentido hay una línea clara de continuidad del sentido de la protesta con los pronunciamientos de enero de 2001.

DECRESCENDO TUMULTUOSO

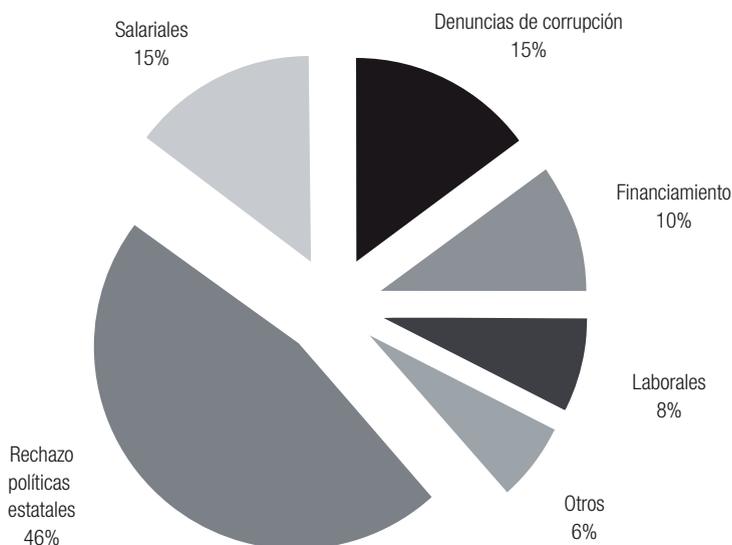
Como resultado de los eventos del 21 de enero de 2000, asumió la presidencia el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, cuya misión fundamental fue llevar adelante el plan de dolarización de la economía. Se trataba, en realidad, de un personaje gris en el que las elites cifraron expectativas de gobernabilidad, a través de una “dolarización sin Mahuad”. Por otra parte, en la construcción de la imagen política de Noboa, el poco “carisma” del mandatario fue traducido como “profesional de un talante tranquilo y una hoja de vida impecable”; es decir, se lo representaba como un cruzado pacífico en contra de la corrupción, pretendiendo atribuirle una capacidad para la solución de los problemas del país, aun cuando era de dominio público su vinculación a la plutocracia y la extrema derecha guayaquileña, así como su sesgo económico orientado claramente hacia las privatizaciones (su hermano, Ricardo Noboa Bejarano, es uno de los adalides de las privatizaciones, y a la sazón fue nombrado director del Consejo Nacional de Modernización, CONAM).

En todo caso, Noboa procuró limar asperezas con los sectores insurgentes asignando la cartera de Bienestar Social a Luis Maldonado, eximio representante de la intelectualidad indígena. Por otro lado, como recordaremos, el presidente realizó visitas a las provincias entregando fondos para obras, con ocasión de las celebraciones locales. El cuadro general de la conflictividad fue de descenso de la misma, y a pesar de que en los primeros meses de la gestión de Noboa es eliminado el sucre como moneda nacional, y entra en plena vigencia la dolarización, no logran concretarse los intentos de alzamientos indígenas, cuya programación fue siendo postergada.

Un nuevo y súbito ascenso de la conflictividad se hizo presente hacia finales de 2000, siendo los protagonistas centrales los indígenas y los estudiantes, particularmente los secundarios. Como muestra el

siguiente gráfico, en el cuatrimestre noviembre 2000- febrero 2001 se manifestó una primacía incontestable del rechazo a las políticas estatales (dolarización y sus efectos), seguidos de conflictos “salariales”, y de denuncias contra la corrupción (ver también la Tabla III en Anexo).

Gráfico 5
Objeto del conflicto: noviembre de 2000-febrero de 2001



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

Si observamos el Gráfico 5 y lo confrontamos con el correspondiente al del contexto de la impugnación de Mahuad, veremos un crecimiento notable de la inconformidad con las políticas de gobierno, así como con la situación social en general, lo que se expresaría por ejemplo en el crecimiento de la conflictividad en torno a los salarios. Sin duda, comenzaban a sentirse los efectos inflacionarios de la dolarización, que promovió la práctica del “redondeo” de precios, y sus impactos en las condiciones generales de vida de la población.

Estas tensiones acumuladas llevaron a un nuevo levantamiento indígena que se convertiría en el evento estelar de la contestación al avance, ahora radical, del ajuste estructural y de la imbricación profunda con la economía norteamericana. El levantamiento indígena de enero-febrero de 2001, que proclamó “Nada sólo para los indios”, acontecía, pues, tras una relativa calma, generada tal vez por las expectativas del diálogo y las negociaciones con el gobierno de Noboa,

expectativas rotas tras el estancamiento de los diálogos y el anuncio de un nuevo paquete de medidas económicas. Nuevamente se inician las protestas de sectores urbanos, básicamente de estudiantes y pobladores. A las protestas de la población urbana, desde el 22 de enero se sumó el cierre de carreteras.

El gobierno, entonces, decidió “que el manejo político de la crisis se lo asuma directamente desde el Ministerio de Defensa y una línea dura desde el Ministerio de Gobierno. Esta delegación a la fuerza policial y militar restó capacidad política de negociación al régimen, a la vez que exacerbó la crisis” (ICCI, 2001: 97). Se habría recurrido a tal delegación en respuesta al clamor de las elites, particularmente del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado, conspicuo ideólogo de la derecha, en el afán de “suprimir el efecto político de los levantamientos indígenas” (ICCI, 2001: 98). La disposición presidencial trajo consigo una secuela de violencia y represión, lo que detonaría definitivamente la movilización indígena, desarrollada en medio del estado de emergencia:

Es a partir de este inusitado despliegue de violencia, que las estructuras organizativas del movimiento indígena deciden realizar un levantamiento en contra de las medidas económicas aplicadas y en contra de la represión y la violencia (ICCI, 2001: 97).

Miles de indígenas llegaron a Quito para acampar en la Universidad Politécnica Salesiana el 27 de enero, donde permanecieron hasta la suscripción de los acuerdos con el gobierno. La universidad fue cercada por efectivos policiales y cortados los servicios de agua, luz, teléfonos. El movimiento de protesta no solamente se vio confrontado con la represión del régimen, sino también con amenazas con tintes racistas. “A esto se suma la aparición de perros muertos ensangrentados con la leyenda: ‘están jugando con la muerte, manueles’” como de manera despectiva, a la sazón, se bautizó a los indígenas (Lucas, 2001: 119). El saldo de las jornadas fueron cuatro personas muertas, treinta heridos y doscientos presos, incluido el dirigente amazónico Antonio Vargas, entonces presidente de la CONAIE y actor de los ya relatados eventos del 21 de enero de 2000. El levantamiento concluyó el 7 de febrero, con la firma de un acuerdo de veintiún puntos entre los indígenas y el gobierno. En un sentido general, el tenor del acuerdo giraba en torno a la no revisión durante el lapso de un año de las tarifas de transporte y los precios del cilindro de gas y los combustibles, a la reestructuración y capitalización del Banco Nacional de Fomento para facilitar los créditos al sector agrícola, al impulso a los mecanismos jurídicos para la recuperación por vía coactiva de los recursos entregados a la banca, y el respaldo a los procesos de extradición solicitados por el Gobierno

Nacional, al incremento de financiamientos a los organismos indígenas (Consejo Nacional de Desarrollo de los Pueblos del Ecuador, CODENPE, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, etc.), al impulso a los procesos de descentralización profunda del Estado, la búsqueda de consensos para la reforma a la Seguridad Social, y el pago de la deuda al Seguro Social campesino. Se pactaba, por otro lado, no admitir la regionalización del Plan Colombia ni involucrar al país en un conflicto ajeno, así como un trato especial a todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador –especialmente a los de la región amazónica– para su desarrollo (Lucas y Cucurella, 2001: 203-205).

El acuerdo de veintiún puntos suspendía temporalmente el ímpetu del ajuste. Advino entonces una relativa calma rota a fines de 2001 por las renovadas intenciones del gobierno para privatizar las empresas comercializadoras de energía eléctrica, los intentos de incrementar los precios de los combustibles, el gas, las tarifas de energía eléctrica y el transporte público. Se preveían, además, la disminución del impuesto a la renta y el incremento del impuesto al valor agregado (IVA)²². El asunto de la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica fue altamente polémico y recibió la crítica de amplísimos sectores sociales, políticos y colegios profesionales, pues las condiciones de tal venta no eran lo suficientemente diáfanos. Se planteó, de nuevo, la amenaza de un nuevo levantamiento indígena para los meses de febrero-marzo, respaldado por los sindicatos de las empresas eléctricas y otros sectores laborales (como los empleados del Seguro Social opuestos a su privatización), así como por el estudiantado. Ante la objeción generalizada, el gobierno de Noboa retrocedió, evitando en adelante exacerbar los ánimos de las fuerzas opuestas a tal venta. Es decir, Noboa no consiguió tomar grandes decisiones, las protestas disminuyeron y los niveles de conflicto declinaron bruscamente, al mismo tiempo que las decisiones para la continuación con la intensificación del ajuste quedarían aplazadas para el próximo gobierno. En todo caso, la pacificación llevada adelante por Noboa parece haber dado ciertas bases para la gobernabilidad, al menos temporal.

Posteriormente, durante el gobierno de Gutiérrez, asistimos ya a una reconfiguración del campo ideológico y político, a la transformación del esquema de alianzas políticas, a la fragmentación de la unani-

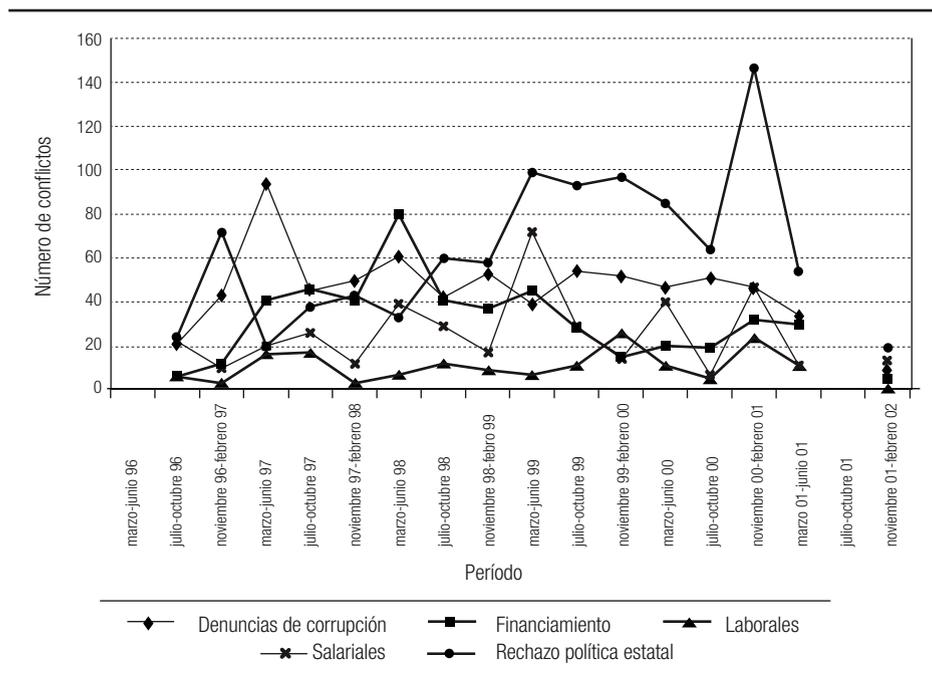
22 Según el Instituto Científico de Culturas Indígenas (ICCI), en esa época se habría estado gestando un proceso de cuestionamiento de las bases a sus dirigentes por su alejamiento de los procesos político-organizativos. Esto llevaría a resolver la reestructuración interna de la CONAIE, lo que habría dado pie para una interpretación, de parte del gobierno, de que la organización indígena nacional puede entrar en un proceso de división interna. En tal circunstancia se decide el anuncio de anuncio de las medidas (ICCI, 2001: 96).

midad indígena y a otros síntomas de conclusión del ciclo político y de protesta. Y quién sabe: de cara al desgaste del repertorio de protesta expresado en el levantamiento indígena (de la misma manera como otrora se degradó la eficacia de la huelga laboral), presenciaremos tal vez nuevos repertorios y formas de contestación, nuevas fuerzas en la palestra de la política nacional (la gran protesta de los/las jubilados/as, por ejemplo, en el 2004, expresando la dimensión etárea de la pauperización galopante). La resistencia al deterioro de lo político y lo social deberá, entonces, ser pensada bajo nuevas pautas.

CONCLUSIONES

A manera de síntesis de la situación de conflicto y protesta beligerante de las fuerzas opuestas al ajuste estructural, deseamos recalcar, antes que nada, que durante el período analizado, la agudización del conflicto distributivo se ha acompañado básicamente de un creciente repudio de las políticas de gobierno, como podemos observar en el siguiente gráfico (ver Tabla III en Anexo).

Gráfico 6
Dinámica del objeto del conflicto



Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

¿Cómo interpretar el predominio creciente de la crítica a las políticas de gobierno por sobre otros aspectos de la protesta? Sugiero que, pese a no lograr el diseño de una propuesta del modelo de sociedad, las fuerzas movilizadas se han inspirado en una comprensión de las implicaciones del modelo económico y político que se ha instaurado, aun cuando tamizada de importantes dosis de “economía moral”. Observamos también que la protesta debida a la corrupción tampoco ha sido predominante durante el período, lo que abona un criterio sobre el carácter político de la movilización, aunque, desde luego, no podemos desconsiderar los componentes morales de la insurgencia. Así, pues, las demandas universalistas y críticas al modelo económico en marcha (en contra de las medidas impositivas, monetarias, de restricción del gasto público, despidos masivos, etc.) habrían prevalecido, como tendencia general, por sobre otras demandas sociales: sectoriales, salariales y laborales. No obstante, la perspectiva lograda sobre el peso del modelo económico y social como factor del déficit de ciudadanía social, no se ha acompañado de una propuesta estratégica de organización social.

En lo concerniente a las características de la movilización como tal, del análisis anteriormente realizado cabe resaltar la frecuencia de los reclamos generados por el sujeto sindical, cuya protesta se expresaría, sin embargo, de manera fragmentada, en comparación, por ejemplo, con la unanimidad de la movilización indígena.

Luego es menester reconocer la presencia estudiantil, pues han sido precisamente ellos, sobre todo los secundarios, en varias oportunidades los pioneros de la protesta, tanto en razón de la supervivencia al menos formal de su estructura organizativa a nivel nacional (la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE), como de las relativas facilidades para su convocatoria a partir de la confluencia en los locales de estudio.

Notamos, por otra parte, la aparente secundariedad de la presencia indígena en momentos pico de la conflictividad, si esta es vista desde un criterio cuantitativo. La excepción se da únicamente en el período noviembre 2000-febrero 2001, cuando los indígenas expresaron reivindicaciones más generales, y no específicamente étnicas. Dichos sectores sociales no tuvieron una expresión contundente en la impugnación a Bucaram, y esto obedece a que inicialmente los indígenas no pensaban en el derrocamiento, sino en la exigencia de rectificación de rumbos. En los acontecimientos del 21 de enero de 2000, el protagonismo indígena fue compartido con las Fuerzas Armadas y, en realidad, fueron las fuerzas propulsoras del ajuste las beneficiarias del desenlace. Lo que sostendría la primacía cualitativa de la presencia indígena son los levantamientos masivos, oportunamente preparados y asentados en una sólida organización con redes a nivel nacional, y el papel crucial de

las bases indígenas en las decisiones tomadas sobre todo, en los levantamientos de 2000 y 2001.

En conjunto, la movilización, llevada a cabo desde disímiles estilos y dinámicas, ha tenido un efecto más de resistencia a los efectos extremos del modelo de ajuste, que de reversión o instauración de alternativas al mismo; y esas acciones se han llevado a cabo en entornos contradictorios: entre la presión de las bases y, en muchos casos –como el de la CONAIE– la adscripción cada vez mayor de algunos sectores dirigenciales al establishment político.

Ahora bien, más allá de las características generales de la movilización, ¿cuál es el saldo de la intensificación de la protesta, en lo que concierne a los objetivos enunciados por los sectores impugnadores de las políticas gubernamentales en la línea del ajuste? ¿Cómo se ha reordenado el campo político, de cara a la resolución del conflicto mayor: el estatuto ciudadano en lo relativo a la redistribución y el reconocimiento?

En este aspecto vemos un resultado contradictorio, pues, por una parte, se habría operado una democratización de la sociedad en su conjunto, en lo que se refiere al reconocimiento de derechos políticos de amplios sectores: indígenas y mujeres fundamentalmente, lo que, en cierta medida ha conllevado el remozamiento de las elites políticas (con la inclusión de representantes de dichos sectores en altos puestos de dirección del Estado). Pero de otro lado, la sobreacumulación de factores económico-sociales que restringen el acceso a la igualdad, es decir la permanencia de la no resolución del conflicto distributivo, continuará generando nuevas tensiones.

La movilización de estos últimos años ha servido de freno a la instauración del ajuste, ha dilatado sus ritmos, pero no ha logrado revertirla; aun más, actuaciones como las del 21 de enero de 2001 parecen haber abierto un camino a la coronación de las reformas económicas con una salida radical como la dolarización, durante el gobierno de Noboa, y el ingreso al Tratado de Libre Comercio impulsado por el gobierno de Gutiérrez. Y ello obedece –menos que a la inevitabilidad de “globalizarse”– a la inserción del país en un cuadro internacional en el que la presencia hegemónica de los Estados Unidos es indiscutible, y en el que, además, las fuerzas críticas del modelo neoliberal no han logrado rearticularse, ni elaborar discursos y estrategias políticas convincentes. Y serían poco convincentes no tanto en el plano lógico y propositivo, cuanto en el plano simbólico, pues las fuerzas contrarias al ajuste no se han planteado una estrategia de reversión del vacío simbólico y discursivo al que han sido sometidas por los grandes medios de comunicación y los gobiernos. Pero tiene que ver también con la propia situación interna de fragmentación. Toda la ebullición social que hemos experimentado carecería de una propuesta estratégica, tanto en el

plano del encauzamiento de la protesta, cuanto de fórmulas políticas y económicas plausibles y viables. Así, los movilizados en el Ecuador durante los últimos años constituirían “una multiplicidad que todavía no es multitud, un sujeto por constituirse, antes que la acción concertada de un sujeto constituido” (Unda Soriano, 2001: 140).

¿Hemos de esperar nuevas eclosiones de movilización antisistémica, cuando se reinicie la toma de grandes decisiones gubernamentales? Esta pregunta es crucial, y lo que veamos va a depender de los vectores de fuerzas en el campo político que se inauguró con las elecciones presidenciales de noviembre de 2002. Va a depender también de la visión de las elites para “cooptar” a las dirigencias de los sectores movilizados y neutralizar a sus bases.

Por el momento, vemos un Ecuador aprisionado en las reglas de juego dictadas por la inserción en la economía global. Y aprisionado férreamente a través del régimen de la dolarización, del cual no parece haber salida ni en el corto ni en el mediano plazo. Ello, desde luego, es un resultado adverso a los objetivos de la movilización de estos años, resultado que, no obstante, podría ser el devenir de las propias limitaciones de las estrategias planteadas.

En lo que concierne a los límites de las acciones de protesta, diríamos que si la crítica radical de otras fuerzas sociales está limitada por su fragmentación, la presión indígena parece estar limitada “genéticamente” por la forma en la que se expresa: a través de los “levantamientos”. Así, de acuerdo al Equipo de Coyuntura del CAAP, los levantamientos serían intentos por derrocar, mediante manifestaciones violentas, poderes establecidos. De tal manera:

El levantamiento indígena tiene por sí mismo un efecto organizador limitado a la misma acción, es productor de su propia conducción y dirigencia, portador de cambios inmediatos y tiene una especificidad social y étnica, excluyente de alianzas interclasistas (CAAP, 2000b: 58).

Podríamos, entonces, sugerir lo siguiente. Primero, si ciertamente muchas acciones del movimiento indígena y, en particular, el acuerdo de 21 puntos beneficia a un amplio espectro de la población, a todas luces el movimiento indígena ha conseguido hegemonizar el descontento y la protesta, lo que lo torna, por así decirlo “carismático”, inclusivo y capaz de arrastrar las más diversas demandas parciales, cuyos portadores usufructúan la oportunidad para expresarse. “Carismático”, sobre todo, en la medida de la existencia, en su movilización y discurso, de una faceta moral, compatible con el horizonte cotidiano de evaluación de la política. Segundo, los levantamientos respondieron a cuestionamientos específicos con ciertas dosis de “diferencialismo”, resultantes de la con-

fluencia de diversos sectores, a pesar del tenor clasista, universalista y antisistémico predominante en los últimos años; de ahí que sus logros también sean parciales y los efectos macropolíticos, de resistencia.

Las fuerzas contrarias al ajuste durante los últimos años han aprovechado las oportunidades surgidas para movilizarse. Sin embargo, ¿cuánto aliento dieron a la movilización las concepciones políticas que la animan, las metas que las organizaciones se plantearon? ¿Cómo incidió la limitación “genética” de la movilización de los indígenas, líderes de la protesta, en la consecución de las metas que decían perseguir? ¿Existe la posibilidad de que eventualmente las bases, sobre todo indígenas, abandonen a su dirigencia, o viceversa? ¿Existió la posibilidad de un desencuentro entre estas dos instancias, al momento de definiciones cruciales? En suma, ¿hablan unas y otras el mismo lenguaje político y comparten, acaso, las mismas intenciones? Los acontecimientos que advienen luego del triunfo de Lucio Gutiérrez, y la inclusión de varios de los dirigentes indígenas más prominentes en el gabinete ministerial, sugieren un abandono de objetivos antaño proclamados, ante lo cual organizaciones como la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), entre otras, consideraron prudente distanciarse de la dirigencia de la CONAIE. A pesar de lo cual, el espejismo del poder ha llevado a ciertos sectores indígenas de la Amazonía y a los evangélicos a alinearse con el gobierno de Gutiérrez.

Todas estas dudas son el síntoma de objetivos frustrados, de límites de la acción con respecto a las grandes metas trazadas y a las expectativas generadas en algunos sectores de opinión. Queda aún por explicar por qué las rupturas ocurren precisamente en tales momentos, cuando están en la parte inferior del ciclo de la protesta, como ocurrió por ejemplo el 21 de enero de 2000. ¿Será, quizá, que estos son los momentos en que logra concretarse una estrategia política de los sectores afines al ajuste, y que las fuerzas opositoras fueron sorprendidas sin objetivos propios, pero con un ánimo insurreccional boyante?

La división de las fuerzas directoras de la protesta entre 1996 y 2001, su desmovilización y desplazamiento de su estilo de hacer política sería un indicativo del cierre del ciclo de protesta, así como del ciclo de equilibrio político entre las fuerzas opositoras y las impulsoras del ajuste. En lo que podríamos denominar un nuevo ciclo político-estratégico persistirá, sin duda, el imperativo de lograr la cohesión de las fuerzas opositoras al modelo neoliberal. Sin ello será difícil recrear, durante los próximos años, aun el precario equilibrio que ha caracterizado en los últimos años a la correlación de las fuerzas en pugna por el ajuste en el campo político. Es menester, asimismo, una mayor proyección internacional de estas fuerzas, proyección hoy apenas barruntada en la participación en los Foros Sociales.

Todos estos elementos vacilantes parecen condensarse en el tipo de vínculos que han tejido las fuerzas opositoras, y en particular el movimiento indígena y la Coordinadora de Movimientos Sociales, con el poder del Estado. Guerrero y Ospina (2003) consideran que, en el caso del movimiento indígena, esta relación tiene una doble vertiente. En primer lugar, estaría la lucha por la representatividad institucional, el control de gobiernos locales y el aumento de la presencia parlamentaria. En segundo lugar, se intentaría actuar deslegitimando el régimen político desde una movilización potencialmente subversiva. Por otra parte, estaría siempre latente la idea de construir el poder desde las comunidades. Para estos autores, esta curiosa combinación se inscribiría en una búsqueda de acceder al poder empujando desde fuera y desde dentro del poder del Estado (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo VI).

En mi perspectiva, tales prácticas y formas de hacer política conllevaron elementos novedosos, ausentes en el estilo político de otras fuerzas contestatarias. Tal estrategia de doble presión y la impronta insurreccional no la tuvo, en su tiempo, el FUT que siempre privilegió la negociación institucionalizada y, tras el agotamiento de esta, a la huelga como método de presión, sin disputar la ubicación “dentro” del Estado, aunque también sin desdeñar eventuales cooptaciones desde el Estado. La parsimonia de la estrategia indígena y de la Coordinadora de Movimientos Sociales que ha dado ciertamente réditos político-institucionales, no obstante, se ha visto afectada profundamente al momento de inscribirse en el poder del Estado, de cara a los objetivos de democracia social y política que decía perseguir. Soy propensa a pensar que las cúpulas de las fuerzas que han hegemonizado la protesta de fin de siglo han llegado a compromisos más profundos con el establishment de lo que otrora lo hiciera el movimiento sindical. Esto podría deberse a varios factores. Primeramente, la matriz ideológica de sectores de la dirigencia que sobreestima la dimensión étnica en detrimento de la de clase, inscribiendo su propuesta en un modelo transnacional traído de la matriz multicultural norteamericana. Esto conllevaría a una apetencia del poder como poder étnico *per se* y se acompañaría de lo que Augusto Barrera, en la entrevista concedida, denominara “etnopolitismo”, entendido como la negociación indiscriminada en nombre de los objetivos de la comunidad. Ahora desde luego, la actuación del indigenado en su conjunto es mucho más compleja y polívoca que esto, pues de lo contrario no podría haber tenido lugar la proclamación de “Nada sólo para los indios”, en enero de 2001. Cabe, entonces, un decantamiento ideológico-político en torno al tema de la relación con el poder del Estado, una crítica al instrumentalismo insurreccional, carente de un análisis estratégico-táctico detenido, instrumentalismo que habría estado presente, sobre todo, en enero de 2000.

Finalmente, esperaríamos que el discurso crítico de las fuerzas de la protesta sea elaborado cuidadosamente, tomando el pulso a las demandas socio-políticas más relevantes, evitando replicar el recorte hecho por los medios de comunicación, concediendo al tema de la lucha contra la corrupción el lugar que le compete en la jerarquía de las demandas políticas y, más que nada, empeñándose en que el tema moral no se convierta en coartada para la profundización del ajuste. En tal sentido, cabe una reflexión seria en torno a las estrategias pertinentes en lo relativo a la “lucha discursiva” y, sobre todo, meditar profundamente sobre la relación con el poder institucionalizado.

CAPÍTULO II

“CAMPEÑO” E “INDÍGENA”.

LOS IDIOLECTOS DE LA PROTESTA

*Esa fosa en que estás / con palmos medida /
es la cuenta menor / que ganaste en vida.*

*Es de buen tamaño / ni ancha ni profunda /
es la parte que te cabe / en este latifundio.*

*No es una fosa grande / es fosa medida /
es la tierra que querías / ver dividida.*

Morte e vida severina

João Cabral de Melo Neto

AL FILO DE LOS AÑOS NOVENTA, en el Ecuador el repertorio de las imágenes políticas es bruscamente modificado con la exaltación de nuevas figuras y personajes. El primer levantamiento indígena, en mayo de 1990, sacude a la sociedad ecuatoriana del olvido de la existencia de ciudadanos y ciudadanas a los que genéricamente se les denominaba “indios” y cuyo sometimiento fue considerado, durante largas centurias, como parte de “la naturaleza de las cosas”.

Se ha señalado lo inédito del protagonismo indígena en Ecuador a inicios de la última década del siglo XX. Andrés Guerrero, por ejemplo, recuerda la transmisión televisada de las negociaciones de los indígenas con los poderes públicos nacionales que siguieron a los levantamientos de 1990 y 1994. Dice Guerrero:

Este hecho, la difusión masiva de la negociación y las intervenciones de los dirigentes indígenas, trastocó el imaginario nacional. Por primera vez en la historia de la República, los ecuatorianos miraban (presencia física y discursos) a indígenas afirmar sus propios planteos y negociar mano a mano y en público con los grandes poderes reales: los representantes del gobierno, de los terratenientes y de los industriales; de la iglesia y de los militares (Guerrero, 2000: 50).

Con relación a estos acontecimientos, se ha dicho también que un “nuevo actor social” ha arribado a la escena política ecuatoriana: la CONAIE, actor políticamente autosuficiente que enarbola la política de la diferencia, dentro de acciones de demanda de reconocimiento de ciudadanía cultural (Guerrero, 1994 y 1996; ver también Zamosc, 1994, Dávalos, 2000). Para León Trujillo, el levantamiento de 1990 se habría caracterizado por una identidad indígena determinada por la exigencia de la igualdad ciudadana con la confirmación de la diferencia (León Trujillo, 1994: 61)¹. Cabe, entonces, preguntarse ¿De qué índole sería la vinculación con los referentes “campesinos” a finales de los años noventa? ¿Es tan nueva la presencia pública indígena, al punto de ser “adánica”?² ¿Responde realmente el énfasis “diferencialista” solamente a la lucha por el reconocimiento cultural, o complejiza el panorama de las luchas sociales aportando un elemento de disolución en la “comunidad imaginada”, otorgando nuevos matices a las identidades políticas del sujeto campesino-indígena? ¿Cómo interpretar los acontecimientos y relatos universalistas (aspiraciones de amplios sectores de opinión demandantes frente al Estado, o también reclamos planteados en tanto “pueblo ecuatoriano” y no exclusivamente como “indios”) de enero de 2000 y sobre todo de inicios de 2001, en el marco de la demanda de la plurinacionalidad?

En este capítulo nos ocuparemos del discernimiento sobre los sentidos latentes en la protesta indígena contemporánea. Nuestro esfuerzo está orientado también a comprender la compleja constitución del sujeto político que se ha convertido en la punta visible del iceberg de la protesta durante los últimos años. Considero plausible denominarlo “sujeto político campesino-indígena”, apelando a un término de antaño que ha sufrido un menoscabo de la memoria colectiva, aunque reconociendo que no se trata del campesino como tradicionalmente se lo concebía, atado a la tierra, sino, como sugiere Martínez, de productores rurales, mayoritariamente pobres, cuya actividad agrícola ha perdido importancia debido a la escasez del recurso tierra, dedicados a ocupaciones como los servicios, el comercio, la construcción, que le proporcionan ingresos de origen múltiple (Martínez, 1999: 14).

Postulo que se trata de un sujeto colectivo múltiple, discontinuo, contradictorio, cuyas autorrepresentaciones se anclan en diversos filones

1 Los referentes de la identidad indígena al filo de los años noventa serían primeramente, el reconocimiento étnico en tanto pueblo; en segundo lugar, las reivindicaciones ciudadanas, es decir de igualdad de acceso a servicios y, en tercer lugar, las compensaciones sociales en tanto clase, en lo referente a la tierra, el precio de los insumos y productos (León Trujillo, 1994).

2 Término usado por Landa (2002: 11), para caracterizar perspectivas políticas y académicas que sobredimensionan el carácter étnico del movimiento indígena actual, y enfatizan en la ruptura del actual movimiento con su predecesor, el movimiento campesino.

de la experiencia, y que encuentran un vehículo de expresión en identidades aparentemente diferenciadas y desvinculadas, que a veces evidencian y otras ocultan el persistente elemento “campesino”, ahora visto bajo el prisma del anclaje rural vinculado a otras lógicas económicas.

La CONAIE se ha presentado como un sujeto social unificado y políticamente audible; sin embargo, tras ella existe actualmente una composición compleja en la que confluyen y se confrontan tres vertientes de origen de la dirigencia del movimiento. La primera es la ya nombrada vertiente campesino-indígena de raíces serranas, cuyos líderes surgen de un proceso de lucha por la tierra durante varias décadas en el siglo XX, vinculados a las corrientes socialistas, comunistas y latinoamericanistas, así como a la iglesia popular. Vertiente que genera “un tipo de discurso atravesado por las dimensiones clasistas [...] construidas en clave étnica”, a su vez, enraizado en el *ethos* comunitario. La segunda es la corriente “étnico-cultural intelectual”, localizada básicamente en el eje Otavalo-Cotacachi (provincia de Imbabura), cuyos dirigentes no provienen de los sectores campesinos, sino más bien de sectores comerciales y artesanales de comunidades económicamente prósperas, situadas en zonas de gran interacción étnica. En tales contextos primaría la reivindicación cultural, la lucha contra la discriminación y el respeto por la diferencia. Por último, la corriente amazónica, en cuyo discurso predominan las nociones de pueblos y nacionalidades, territorialidad y gestión autónoma (Barrera, 2001: 143-144). Podríamos decir por lo tanto que la CONAIE tiene elementos de continuidad con los procesos del siglo XX, a la par que elementos ciertamente inéditos y que sociológicamente se van distanciando de la matriz campesina (aún entendida bajo la amplia noción arriba citada, de productores rurales vinculados a diversas lógicas económicas).

Recupero la idea sobre lo “campesino”, en la medida que al caracterizar la índole social de la CONAIE solo desde el elemento étnico-cultural y de la diferencia se bloquea la transmisión de la memoria de ciertos eventos, cuya trascendencia sería opacada para las generaciones intelectuales de hoy, eliminándolos, por consiguiente, del horizonte analítico contemporáneo. Así, diríamos que dicha representación en textos y alocuciones, académicos y políticos, durante los años noventa estaría sujeta al juego del “discurso” que exalta la presencia de los particularismos del movimiento indígena³, como corroborando el fin de

3 En este punto, el texto toma aliento en las tesis de Foucault sobre el enunciado, la formación discursiva y, fundamentalmente sobre el discurso y las modalidades de producción de sentido, como emanaciones del poder y los diagramas de fuerzas (Foucault, 1998: 191-199; 1996: 8-21; Deleuze, 1995: 78-87). Se trataría de la existencia, por un lado, de series de enunciados en torno a la democracia, a la crisis de los movimientos sociales tradicionales y emergencia de nuevos movimientos sociales “posmaterialistas”, series que estarían vinculadas a la emergencia del orden global.

la era de la “lucha de clases” –aunque no de toda lucha– y deslindando vínculos con el origen (no necesariamente lineal, sino discontinuo) de las luchas de finales del siglo XX con las de décadas anteriores. Podríamos también considerar que los enunciados sobre la diferencia, bajo el recorte señalado, se articulan de manera específica en la elaboración de las pautas de la democracia, pues se tornan vehículos de una “ciudadanización” controlada, de una inscripción “viable”, desde el punto de vista del nuevo juego democrático, de legítimas demandas de ciudadanización cultural, social y política de sectores agobiados por el legado del “colonialismo interno”.

Nos aproximamos al tema de la movilización campesino-indígena a través de la exploración de los sentidos políticos, sumergiéndonos en sus contenidos, y considerando la existencia de diversas vertientes. Abordamos el análisis a través de dos constelaciones político-culturales: la primera, anclada en el corazón de la provincia del Cotopaxi, en las cercanías de la población de Zumbahua, cantón Pujilí, y la segunda, desplegada en la provincia del Azuay, en la zona aledaña a la ciudad de Cuenca, región habitada por un campesinado mestizo, cuyas luchas no han sido lo suficientemente visibilizadas en los últimos años, pero que responden a una importante tradición organizativa y reivindicativa y, sobre todo, que dan la consistencia “nacional” –como muchas otras presencias locales– a la protesta.

Ahora bien, al incursionar en el tema desde la comprensión de la ideología –como es nuestro caso– es plausible superar la mera yuxtaposición de las representaciones que transmite la experiencia. Por lo mismo, una indagación central apunta a ¿cuál es el momento movilizador de la ideología, o por decirlo de otra manera el momento de producción del conflicto? Sostengo que en el período en cuestión la protesta campesino-indígena, desde el punto de vista de sus miembros de base y muchos “mandos medios”, se articula a partir de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada”, gestado en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX al calor de las luchas por la tierra y las políticas del Estado desarrollista y, últimamente, en las luchas por la ciudadanía social, en el contexto de implementación de un modelo de ajuste. Es solamente de cara a este sentimiento de pertenencia que se torna posible la insurgencia, en la intersección entre aquel sentimiento y la condena de la corrupción, vista como usurpación de ciertos derechos inalienables. Considero que se trataría de manifestaciones de una contestación inscripta en el marco de un antagonismo mayor fundado en la reformulación de las reglas del juego económico llevada a cabo por la lógica del ajuste que se expresó en el Ecuador desde mediados de los años noventa, tanto en la austeridad y los recortes para gastos sociales, como en la adopción de la nueva legislación agraria, tendiente a suprimir lo relacionado con la reforma agraria.

Entiendo que el momento movilizador de la ideología se encontraría vinculado a una “ciudadanía de sentido común” que no siempre se plasma en el autorreconocimiento en tanto “ciudadano”, pero que se expresa en un sentido de pertenencia a la “comunidad imaginada”, cuyas formulaciones se convierten en el fundamento discursivo de la inclusión social y política. En definitiva, se trata de la constitución de identidades políticas ciudadanas frecuentemente contradictorias, y que adquieren contenidos concretos en cada ámbito del espacio social. Es en este florecer de identidades políticas siempre en ciernes que aparecen el potencial del conflicto y algunas de las condiciones para la crisis política. Es conveniente también puntualizar que traigo a colación la noción de identidad, debido a su recurrencia en los estudios de los años noventa, pero la entiendo como un relato que forma parte de un proceso ideológico más amplio, es decir como momento de la lucha en el terreno de los significados (Eagleton, 1997).

Mi argumento comprende, finalmente, también la idea de que el tópico de la diferencia ciertamente no fue privilegiado en la protesta de los últimos años, siendo también que no siempre el lenguaje de la diferencia étnica expresa las voces indígenas. Es por ello que se hace el esfuerzo por traer voces poco audibles o anónimas en el ámbito de la noticia y la publicidad, para proceder a examinar en que grado y cómo se expresa la política de la diferencia como centro de gravedad de las luchas campesino-indígenas durante los últimos años. Es decir, es importante no desestimar el proceso de reetnización ocurrido durante la década pasada, pues muchos sectores habrían abandonado la autoidentificación como indígenas al asociar dicha condición con la pobreza y la discriminación racial, para luego recuperar tanto la identidad como las marcas étnicas: idioma, indumentaria (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo IV; De la Torre, s/f). Lo que aquí se argumenta es que las identidades políticas en la protesta de fin de siglo no pueden ser analíticamente restringidas a la demanda del reconocimiento de la diferencia, puesto que se trataría de procesos identificatorios múltiples y desplegados en diversas esferas de la vida social, impregnados, por añadidura, de una memoria histórica enraizada en las luchas agrarias.

El análisis se realizará enfocando algunos testimonios. Se trata de una reflexión a partir del estudio de voces y experiencias particulares, para la cual hemos hecho previamente dos consideraciones. En primer lugar, cada relato nos remitiría a las representaciones e identidades de cada uno de los grupos abordados; así podríamos lograr una síntesis elocuente de la experiencia colectiva a partir del conocimiento de la singularidad. La segunda consideración, tiene que ver con la calidad misma del relato, en lo que se refiere a la competencia política de

los testimoniante: a pesar de los marcos comunes de referencia, cada uno de los interlocutores posee diversa disposición y habilidad para la producción de un discurso que pueda ser reconocido como políticamente legítimo (Bourdieu, 2000: 407).

Entonces, al someter los testimonios a un tratamiento singularizado, armonizando su visión con el contexto social y cultural, estamos asumiendo que el sentido es producido en el encuentro entre la competencia, la experiencia personal y los códigos culturales del grupo.

Al estudiar los sentidos de la protesta en cada una de las configuraciones político-culturales nombradas, exploro primeramente la experiencia y la producción del conflicto; a continuación me detengo en la reflexión sobre el lugar de lo étnico en la contextura de las identidades y del conflicto mismo, para finalmente reflexionar sobre los códigos de la politicidad en cada una de dichas constelaciones.

En la primera parte, reflexiono brevemente sobre situaciones históricas, en cuyo devenir las poblaciones rurales se fueron “habilitando” (*empowering*) en la producción de una audibilidad pública de sus voces⁴. Más adelante, paso a analizar posibles configuraciones contemporáneas de la ideología de la protesta y de la expresión de las identidades políticas, a través de dos ejemplos. Cierro el presente capítulo con algunas reflexiones conclusivas.

DE VENTRÍLOCUOS Y SUBALTERNOS QUE DECIDEN HABLAR

Perdidos en la bruma del mito del “buen indio” (Atahualpa, Rumiñahui o algún otro general de la resistencia antiespañola), o llorados por la sensibilidad de la literatura indigenista y redimidos por el altruismo de la misma, los indios reales eran representados como “poblaciones casi desapercibidas o en el mejor de los casos [...] ‘pueblos testigos’ de un pasado ya ido; culturas ‘fósiles’ o comunidades campesinas arrinconadas en remotas ‘regiones de refugio’” (Guerrero, 2000: 10).

¿Cuál era la situación de los indígenas, a las puertas de la modernidad en el Ecuador, en tanto sujetos políticos, es decir núcleos sociales de acción y enunciación? Para aproximarnos a las respuestas, analicemos, inicialmente, la naturaleza de la relación política de los descendientes de los pueblos originarios con la sociedad “envolvente” blanco-mestiza.

4 Autores tales como, Jorge León Trujillo (1994), José Almeida (1991), Hernán Ibarra (1991), Augusto Barrera (2001), entre otros, han dedicado esfuerzos al estudio de los levantamientos indígenas, sus causas, formas organizativas, etcétera. Es decir, se ha aprehendido la constitución del movimiento. En el presente trabajo, nos remitimos más bien a las representaciones que subyacen a la insurgencia indígena; en este apartado queremos poner énfasis en los procesos por medio de los cuales se tornan políticamente significativas las voces indígenas.

La independencia política y la difusión de las ideas liberales no determinaron, como es conocido, la vigencia de un estatuto de ciudadanía para los indígenas, en tanto vínculo jurídico con el Estado. Desde 1857 se habría planteado una nueva forma de dominación étnica, “la administración de poblaciones”, en el contexto de un proceso de igualación jurídica de los ecuatorianos como ciudadanos, la misma que, no obstante, termina confiriendo a los indígenas un estatuto de “sujetos”⁵. Se habría tratado, de acuerdo con Andrés Guerrero, de una economía de dominación que descarga al Estado de la responsabilidad sobre las poblaciones indígenas, desplazándola, primeramente, hacia los hacendados, quienes “adquieren una autonomía patriarcal, en el manejo de tierras y personas, ámbito de lo particular que cobra amplitud frente al Estado aun luego después de la Revolución Liberal (1895)” (Guerrero, 2000: 43)⁶.

Pero la “administración de poblaciones” habría sido también desplazada hacia la gestión de “una nebulosa de poderes heterogéneos”, ubicados en las márgenes del Estado, “donde lo que es público-estatal y lo que atañe a los particulares se torna francamente indiscernible y ambiguo” (Guerrero, 2000: 43). Siguiendo a Foucault, Guerrero advierte que tales formas de dominación difieren de los sistemas de tipo “apartheid”, en la medida en que, delegadas al dominio de lo privado (“al mundo del sentido común”), no impiden el acceso a la igualdad ciudadana desde el Estado, ni configurarían una exclusión formal (Guerrero, 2000: 38-39). Los efectos de tal forma de dominación acaban por invisibilizar y fragmentar tanto a los conflictos y su resolución, como a los dominados en ellos involucrados, en la medida que “los conflictos se naturalizan, aparentan convertirse en escaramuzas entre personas individuales (hombres) blanco-mestizos e indígenas y se eufemizan”;

5 En este texto eminente, Guerrero analiza el proceso histórico de constitución de esta “igualdad en la desigualdad”, durante el siglo XIX. El autor acuña el concepto de “ciudadanía del sentido común” que alude a un ordenamiento del “mundo de la vida”, antes que a lo jurídico. Tal concepto nos ayuda a comprender el origen del privilegio de los varones blancos (y, seguramente, también propietarios). Los intentos por igualar jurídicamente a todas las poblaciones fracasarían, pues los blancos, ricos y pobres se negaron a tributar, por ser esta obligatoria para los indígenas; es decir, los blancos se habrían resistido a una “igualación hacia abajo” (Guerrero, 2000). En la dicotomía republicana “ciudadanos/sujetos”, se expresaba la continuidad de la oposición colonial “blancos/indios”, ahora en el contexto de erráticos esfuerzos por igualar a los habitantes del nuevo Estado territorial.

6 El régimen de la hacienda se constituyó sobre las bases de las mercedes reales, pero también el despojo de las tierras de las comunidades y el acaparamiento de aquellas que estaban inexploradas fueron factores de su concentración en propiedad de los hacendados. Tales unidades de producción requieren mano de obra, la cual era reclutada entre los indígenas que abandonaban las comunidades, los “libres”. A tales indígenas los hacendados les conceden el *huasipungo* esto es, una pequeña parcela a cambio del trabajo. Se inaugura de tal manera una forma de relacionamiento individual y personalizada, que conduce a la ruptura de la unidad étnica (Rhon Dávila, 1978: 75).

la dominación, por lo tanto, se convierte en “dominación simbólica”, en “resistencia cotidiana” a la opresión; de tal manera se “disimula” la violencia de la dominación en la subjetividad de los “ciudadanos” y los “sujetos” (Guerrero, 2000: 46). La población indígena, de tal manera deja de ser “objeto de políticas estatales” (Guerrero, 1996: 40).

El mencionado estatuto jurídico ambiguo se refrendaba socialmente con la práctica de la mediación para la expresión de demandas indígenas ante el Estado:

los indígenas debían dirigirse a un intermediario local que goza de ciudadanía, que conoce el funcionamiento del Estado (jurídico, político y personal) y es capaz de ensamblar un discurso escrito [...] para acceder por su estrategia, pluma y palabras a los centros políticos del Estado. La función del intermediario (las personas concretas son múltiples: un hacendado, un compadre del pueblo, el escribiente, el teniente político, el notario) es ‘hacer hablar’ al sujeto indio que, al no ser reconocido ni gozar de derechos ante el Estado, carece de existencia propia; es decir, su discurso y representantes (cabeceillas, caciques, curagas) son ignorados (Guerrero, 1996: 40).

A pesar de que la relación ventrilocua es característica sobre todo del siglo XIX, observo en ella la inercia de una relación histórica anterior, puesto que también en la época colonial existía una función de intermediación realizada por el “protector de naturales”, un profesional del derecho encargado de elevar demandas y quejas ante las instancias del poder (laico o religioso) a nombre de los indígenas, quienes eran considerados eternos menores de edad. La protección de naturales, instituida a partir de la promulgación de las Nuevas Leyes de 1542, como instancia de mediación entre las poblaciones nativas y el Estado, tenía un complejo funcionamiento, pues la comparecencia de los indígenas, sea a título personal o de un grupo y para la realización de todo tipo de negocio público o privado, requería de la mediación: primero, del protector de naturales, quien interponía el pedido escrito ante los jueces civiles o religiosos (entre ellos, al protector general de naturales), segundo, del intérprete, y tercero del curaca al que el/los indígenas se encontraban sujetos⁷. Se podría, entonces hablar de una múltiple “ventriloquia”, pero en todo caso, las transacciones de los indígenas y la dirimencia de conflictos se inscribían en el ámbito de los asuntos de Estado, aun cuando la presencia misma de los miembros de las poblaciones se encontrase disminuida, debido a los conceptos vigentes de

⁷ Agradezco al historiador Donato Amado por haberme informado sobre los detalles del funcionamiento de la institución de la protección de naturales.

desigualdad jurídica de las distintas poblaciones étnicas de las Indias. Por lo tanto, la ventriloquia –colonial y republicana– se constituye en una tecnología por excelencia de la dominación colonial.

Ya en el contexto de la desaparición de la responsabilidad estatal sobre los indígenas y del desplazamiento de tal responsabilidad a la periferia del mundo público, tal forma de dominación simbólica se tornaría particularmente perversa, pues ocasionalmente la violencia manifiesta parecería desvanecerse, al punto de, eventualmente, confundirse con el mundo de los apegos personales⁸. No obstante, no cabe imaginar un mundo de conflictos permanentemente asfixiados en los microespacios de la dominación patriarcal. Una tarea pendiente para la historia es precisamente “desnaturalizar” (para usar la definición de Guerrero) esa inaudibilidad de las voces indígenas perdidas dentro de los linderos de las haciendas, volcándose a la exhumación de las quejas de indígenas y patronos que adoptan la forma de un conflicto particular; y sobre todo, captar en ellas los atisbos de un conflicto político, social y étnico. Recordemos, en todo caso, las rebeliones indígenas del siglo XIX, entre las que sobresale el levantamiento dirigido por Fernando Daquilema y Manuela León en la provincia del Chimborazo, en 1871, contra el cobro de diezmos y el cercamiento de propiedades que afectaban el acceso a la tierra de las comunidades indígenas. Así, a pesar de que la “ventriloquia” intentaría bloquear la expresión misma del conflicto por la vía de la comunicación, quedarían intersticios en los que germinaría la inconformidad. Por otro lado, la revolución liberal de inicios del siglo XX habría allanado el camino para la libertad personal de los indígenas, muchos de los cuales consiguen luchar contra la condición subalterna y convertirse en líderes. La ventriloquia y el sistema de dominación en el que esta se inscribe, por lo tanto, se rompían de tiempo en tiempo, dando paso a la audibilidad de las voces indígenas, aun cuando estas no siempre se expresasen “en clave étnica”.

Considero que la visión de un silencio indígena repentinamente interrumpido a finales del siglo XX ilumina solo parcialmente el proceso de constitución del sujeto político, en el que entran en juego tanto los silencios originados en la dominación, como las búsquedas de libertad

8 Así opera también la dominación de género, otra de las formas de la dominación patriarcal. Paraliza a las víctimas, movilizándolas apenas cuando la violencia ha sobrepasado ciertos umbrales y ha incurrido en exceso o “sevicia”. Así de dramática era (y, eventualmente, aún lo es), por ejemplo la situación de empleados y empleadas dados en la tierna infancia por las familias biológicas en “propiedad” de los amos; una exacerbación de la dominación rayana en la esclavitud doméstica (sin salario reconocido), ellos y ellas están incapacitados/as para cualquier reclamo; aún más, frecuentemente carentes de una identidad pública, la identidad de tales personas se ha fundido con la de sus patronos, en el sentido de convertirse en parte marginal de la familia receptora, oscilando entre el desprecio y segregación de la misma y el apego a ella.

y los intentos de reformulación del contrato social. En tal sentido, consideramos que a, pesar de la relación de ventriloquia, al hablar de los indígenas de los siglos XIX y XX nos estamos refiriendo a sujetos históricos inmersos en toda una gama de prácticas y relaciones cotidianas que escapan al control del patrón y del mayordomo y que si bien inicialmente pueden ser veladas y subterráneas llegan a desembocar en magnas movilizaciones. Michel De Certeau denomina “invención” a las prácticas soterradas de resistencia y acontecen justamente donde y cuando nada parece suceder (De Certeau, 1996). Es decir, en torno al concepto de “ventriloquia”, se anuda de manera dramática la condición del sujeto, tanto en términos de obediencia y sujeción, como de libertad e insurgencia, aunque muchas veces la rebeldía se esconde tras el acatamiento formal. Me parece prudente, por lo mismo, relativizar la importancia de los efectos de la intermediación ventrílocua en la constitución del sujeto político indígena, en la medida que, por esta vía veríamos al sujeto solamente en tanto “sujetado”, en menoscabo de la comprensión del “movimiento del sujeto hacia la libertad” (Balibar, 2000).

Plantearía, entonces, que la visibilidad de la presencia indígena en la Iglesia de Santo Domingo, en el contexto del primer levantamiento indígena en mayo de 1990, es indicio, más que de un repentino aparecer de un sujeto inédito, de la disolución rauda de la petrificada dicotomía que alterna el indio deprimido, sufrido, silencioso y sumiso con el indio atrevido y levantisco, denostado generalmente como “mitayo”⁹. Pero, sobre todo, el preludio de una presencia constante, que durante la década de los años noventa y más allá de ella habrá de tener múltiples desdoblamientos, jalonados por los heterogéneos segmentos que la componen. Junto con tal presencia polifacética, también el repertorio de imágenes, entonces, es ampliado con la imagen del indio beligerante, politizado y propositivo, para que, años más tarde, a raíz de los acontecimientos de enero de 2000, esta galería fuese completada con la del indio redentor y aún “carismático”¹⁰.

Los “subalternos” ahora no solo son visibles sino que han hablado lo suficientemente alto como para entrar en el juego y repertorio de voces políticas y electorales corrientes. La voz autorizada durante los

9 Dicha como insulto, la palabra “mitayo” nos remite a los estigmas y clasificaciones que sustentaban la dominación colonial, pues el trabajo en la mita era considerado obligación y atributo de algunas categorías sociales de los descendientes de los pueblos originarios.

10 Recuerdo los vibrantes aplausos y ovaciones que estremecieron el Salón de la Ciudad del Municipio de Cuenca, cuando, en un acto público realizado en febrero de 2000, se hicieron presentes los dirigentes de la CONAIE. La entrada de Antonio Vargas, miembro de la Junta de Salvación Nacional de 21 de enero, produjo gritos emocionados de la multitud y, aun, el paroxismo de una activista política “de izquierda”, mestiza y de extracción social media-alta, quien entre lágrimas gritaba: “Antonio Vargas, nuestro salvador”.

años noventa se expresó también en el idiolecto de la diferencia étnica. Sin embargo, ¿solamente una voz expresada en dicho lenguaje es una voz propia de los indígenas?

VOCES QUE PERDURAN

En esta sección deseo iluminar la historicidad de la lucha indígena y sus expresiones, al mismo tiempo que reflexionar sobre los enlaces que esta guardaría con la lucha contemporánea. Para ello, me referiré a dos momentos y a algunos de sus eventos que, estimo, habrían tenido un gran impacto político y simbólico en la sociedad de las respectivas épocas. La primera referencia está relacionada con las movilizaciones del campesinado indígena durante la primera mitad del siglo, y la segunda con las luchas por la reforma agraria. Es necesario traer la reflexión sobre estos eventos, porque la misma enmienda una apreciación en cuanto a que durante el siglo XX las poblaciones rurales no habrían tenido protagonismo en el escenario socio-político nacional en la magnitud que habría tenido la serie de levantamientos que se suceden durante la última década del siglo XX. Es importante también, aunque sea colateralmente, plantear el argumento de que lo nuevo en las protestas de los últimos años no es tanto la presencia impactante de la población rural, cuanto la mudanza de los repertorios de la protesta, desde la formas insurreccionales de la colonia, el siglo XIX y los primeros años del XX, pasando por las tomas localizadas y las grandes marchas de la época de las luchas por la reforma agraria, hasta las formas pacíficas y simbólicas de los años noventa (forma que por cierto se rompe en enero de 2000) (sobre el cambio de repertorio de la acción colectiva, ver Zamosc, 1994).

El primero de los procesos que deseo mencionar tuvo lugar en la década de 1920 en el sur del país, y se inicia de una manera *sui generis*. Las elites cuencanas, tradicionalmente aristocratizantes y señoriales, se aprestaban a celebrar el centenario de la independencia e instauración del dominio criollo y blanco-mestizo. Paralelamente, en los campos de la comarca aldeaña a Cuenca iba fermentando una inconformidad que durante una década habría de mantener en zozobra a la sociedad señorial urbana y, aun, como menciona Moscoso, extenderse a otras provincias centro-australes como Chimborazo y Cañar, causando en la población del centro urbano “enorme sorpresa” (Moscoso, 1991: 230). El “epicentro” de la conmoción, con todo, fue la ciudad de Cuenca y las zonas aldeañas: muchas veces la plaza central fue ocupada por los insurgentes indígenas, causando pánico a los moradores de la urbe y, generando, probablemente, la sensación de “un mundo al revés”, pues el Parque Calderón, lugar central de la sociabilidad local –a la sazón cercado con rejas que impedían la entrada de la plebe cuando en él se

realizaban actos de la nobleza— estaba siendo tomado por “huelguistas” y “bárbaros”. El blanco de los ataques fueron, básicamente, algunos funcionarios del Estado y sus viviendas. Los motivos de los alzamientos de esos años fueron diversos: ora la escasez de sal, ora el cobro de impuestos, ora los intentos de realizar catastros mediante “censos” (la memoria oral habría ayudado a la conservación de los recuerdos de los censos coloniales y republicanos, a los cuales indefectiblemente seguía el cobro de tributos), y también las presiones para la convocatoria a “mingas”, una forma de trabajo colectivo que durante la colonia y la república habrían usado los hacendados y la iglesia para la realización de obras públicas y privadas. Las formas de trabajo forzado y la sujeción del trabajador agrario al hacendado, así como el tributo indígena, habían sido suprimidas por la revolución liberal de inicios del siglo XX. Se ha hipotetizado sobre una variedad de posibles móviles de tales eventos: la caída de la exportación de cacao, la devaluación monetaria de esos años, la disminución del salario de los tejedores del sombrero de paja toquilla, y varios otros factores que indican la presencia de una “crisis” en la economía regional (Moscoso, 1991:225). Existió, sin embargo, un denominador común en todos estos acontecimientos: la organización comunal se debilita por la parcelación de la tierra, los cabildos indígenas desaparecen, y las autoridades tradicionales (los alcaldes de vara) son sustituidos por “cabecillas”, líderes locales “que recogen las aspiraciones de la población y las canalizan hacia la revuelta” (Moscoso, 1991: 226).

Diez años más tarde en la Sierra norte, en la provincia de Imbabura, la agitación rural se torna una característica de la convivencia política. En estos años, en varias haciendas (Moyurco, Pesillo, Pisambilla, Carrera) se habrían registrado “huelgas” o alzamientos indígenas en contra de los abusos de los hacendados (en el caso de tres de las haciendas mencionadas se trataba de arrendatarios de haciendas estatales que fueron expropiadas por la revolución liberal a la Iglesia, mediante la ley de “manos muertas”). Siguiendo al historiador Marc Becker, consideraríamos a tales sucesos como la continuación de otros que datan de los años veinte, época en la que “los Cayambis habían estado organizando sindicatos campesinos mientras independientemente los blancos izquierdistas en Quito habían organizado un partido socialista” (Becker, 2002: 5). Entonces, los eventos de los años treinta habrían representado la ampliación y profundización de la organización de “sindicatos” agrarios, proceso que se asociaba a una creciente agitación en el campo. Según Becker, los izquierdistas habrían simpatizado con la causa indígena, y apoyado la organización, así como la presentación de demandas ante el Estado, en virtud del desconocimiento mayoritario de las formalidades del lenguaje jurídico y del analfabetismo mayoritario de los indígenas.

En todo caso, muchos indígenas no tardaron en aprender las competencias requeridas por la formulación de demandas ante el Estado, pudiendo prescindir de los “escribas” blancos que interponían los pedidos incrustando en su discurso representaciones que disminuían a los demandantes: expresiones tales como “ecuatorianos infelices” o “desgraciada raza”. Ya hacia 1932, José María Amaguaña, un “obrero indígena” de Cayambe escribió personalmente al Ministro de Gobierno y Previsión Social para informar sobre “la huelga” de la hacienda Moyurco, en nombre de sus compañeros y “desde el punto de vista de un obrero indígena”. A consecuencia de los aprendizajes logrados durante los años de lucha y organización, el líder indígena exhibe un discurso en el que “se han ido las referencias a los obreros como ecuatorianos infelices. En su lugar, Amaguaña usa la palabra ‘indígena’ como una marca étnica” (Becker, 2002: 6).

Así, Marc Becker sugiere que los procesos organizativos y de lucha en Cayambe de la segunda y tercera década del siglo pasado se habrían sustentado políticamente en “coaliciones interétnicas”, expresión de una confluencia de luchas de indígenas y de militantes de la izquierda.

¿Quiénes, ante todo, y cómo hablan en los eventos de los años treinta? ¿De qué nos hablan estos dos ejemplos, traídos del período de la temprana lucha por la igualdad? Primero, la dominación ventrílocua es susceptible de relativizarse, a partir del tránsito de las personas entre la esfera pública y la privada/doméstica, la ciudad y el campo, a partir del establecimiento de alianzas; en el caso que analiza Becker, del establecimiento de “coaliciones interétnicas”. Por otro lado, evidenciamos el uso de palabras disponibles en la época, tales como “huelga” o “sindicato”, originadas en la “formación discursiva” provista por el pensamiento y la praxis marxista y, particularmente por el concepto de “lucha de clases”. Sostengo que tal uso no necesariamente asfixia el sentimiento de pertenencia étnica, aunque por el momento se encontrase subsumida (subsunción que es realizada por el propio hablante indígena). Entonces, si como dice Craig Calhoun, la política de la identidad no se limita a las ideologías posmaterialistas (Calhoun, 1994: 23), el enunciado de lo étnico se inscribiría –aunque sin sobresalir, pero también sin desaparecer– en el marco discursivo de la “lucha de clases”. De tal suerte, el enunciado sobre lo étnico se habría mantenido latente hasta un momento en que habría de tornarse el eje de las políticas de la identidad.

En fin, lo que deseábamos argumentar con estos ejemplos es lo relevante de la presencia campesino-indígena durante el siglo XX; presencia que se ha guiado –implícitamente– por una política de la identidad, aun cuando no se explicita mediante el término de “diferencia”, exaltado en el contexto de la modernidad tardía.

El segundo proceso que se debe poner de relieve es la lucha por la tierra, por la defensa de las tierras de las comunidades, por la abolición de formas serviles y, en particular por la reforma agraria, durante los años cincuenta y sesenta. En esa época hay una gran agitación en el campo, que se expresa en sublevaciones y tomas de tierras en diversas localidades costeñas y serranas. Un momento especialmente visible de estos procesos fue la movilización de más de 12 mil indígenas en diciembre de 1961, la misma que fue dirigida por la Federación Ecuatoriana de Indios; se pedía la ejecución de una reforma agraria radical, mientras el entonces mandatario Carlos Julio Arosemena debió encabezar dicha marcha, ofreciendo la eliminación de los latifundios (CEDEP, 1984: 13-14). ¿Es acaso poco importante la adhesión de un personero del gobierno a la reivindicación campesina y su fusión en una multitudinaria marcha?

Tampoco en ese momento es central una definición desde la diferencia; sin embargo, no se deja de interpelar a sectores de campesinos de la Sierra norte en tanto “indios” –recordemos las acciones de la Federación Ecuatoriana de Indios– aunque ciertamente de manera implícita y también subsumida a los relatos campesinistas. ¿Cómo podríamos explicar esta secundariedad de los relatos étnicos en varios momentos de la historia del siglo XX? Pensaríamos que la política de la identidad explota siempre filones concretos de la experiencia y la pone de manifiesto con renovados lenguajes: términos y nociones “disponibles” en cada momento. Podríamos decir que en los momentos históricos recordados ha habido modulaciones de la demanda, cambios de repertorios. Pensaríamos sobre todo que el predicado de la igualdad ha fluctuado, expresándose cada vez en idiolectos de la época, plasmados en identidades ora étnicas, ora campesinas. Entonces, si durante algunas décadas primó el significante “campesino” de la identidad, en otros momentos fulguró el de “obrero indígena”.

Por su parte, en la “modernidad tardía” el enunciado étnico adquiriría preponderancia, obedeciendo a varias circunstancias:

La primera, es el establecimiento de patrones de interacción entre el Estado desarrollista de los años setenta y parcialmente de los ochenta con las comunidades campesinas, lo cual redundó no solamente en la titularidad sobre tierras de cultivo y la mejora de calidad de vida en el campo mediante la construcción de obras sanitarias básicas, sino también en la acumulación de poder en las zonas rurales, y en la formación de líderes que se forjan inicialmente como promotores educativos y de reconocimiento legal de las comunidades ante el –ahora extinto– Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Otra vertiente de beneficios que posibilita, como sugiere Andrade, la “acumulación de poder”, es la vertiente “simbólica”, esto es

la liberación de formas de sujeción a la hacienda, la revitalización de las tradiciones culturales a través de la educación bilingüe, el acceso al voto. Este autor considera, en definitiva, que el aprendizaje institucional de los pobladores rurales del Ecuador es fuertemente estatista (Andrade, 2002).

La segunda es la madurez organizativa y fuerza política del movimiento, expresada en la existencia desde 1986 de una organización nacional, la CONAIE, organización que se ha beneficiado de la multiplicación de la organización campesina y de los aprendizajes durante las luchas por la reforma agraria y, sobre todo, desde los años setenta, cuando se fortalece el eje étnico, mediante la multiplicación de las organizaciones locales y regionales, un liderazgo que refleja estructuras tradicionales de elección y surge desde las bases, la reivindicación de la cultura y el pasado (Chiriboga, 1986: 11). Concomitantemente, ocurre un desplazamiento de los contenidos reivindicativos, en comparación con los esgrimidos en la movilización indígena-campesina de los años cincuenta y setenta, pues en los años noventa se da un giro desde la redistribución de la tierra y la lucha contra el precarización hacia la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos originarios y el reconocimiento de la plurinacionalidad del Ecuador, con lo que también se introduce, durante el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) una reconceptualización sobre el acceso a la tierra a través de la demanda de los pueblos amazónicos por la adjudicación de territorios ancestrales (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo III). La tercera es que tanto el impacto de las políticas del Estado desarrollista como la vinculación de los indígenas a los procesos políticos nacionales se constituyen, a la vez, en antecedentes y oportunidades para la recomposición étnica y la reorganización de las luchas, a partir de las nuevas narrativas de la identidad. Parte de estas oportunidades para la expresión de la etnicidad serían también los preparativos para la conmemoración de los quinientos años del descubrimiento de América.

Por último, existe también un nuevo marco político y discursivo internacional, a partir de los años ochenta y sobre todo a inicios de los años noventa; nuevos lenguajes políticos que permiten que la política de la identidad se exprese en términos de política de la diferencia. Sin embargo, es en este punto donde encontramos el hiato entre la política de las demandas y la política de la identidad, pues parecería que las legítimas demandas de reconocimiento cultural –en tanto lucha contra el colonialismo interno y la discriminación– fueron absorbidas por estrategias político-comunicacionales desde el Estado, como resultado de las cuales fue exacerbado el tema de la diferencia –que por cierto era parte de los relatos e intereses de un sector de la CONAIE– y presentado como excluyente de demandas redistributivas.

Es menester aquí abrir un paréntesis para reflexionar sobre la importancia de la problemática de las relaciones agrarias y su actual reconfiguración, como contexto de las identidades políticas del sector social en cuestión. ¿Cuál ha sido esta trayectoria durante los años noventa? Durante el primer lustro de la década anterior se anudó un debate crucial y se cristalizó un antagonismo en torno a las relaciones agrarias en el país y sus circunstancias jurídicas. De un lado, tenemos a las fuerzas privatizadoras, las cámaras de agricultura y los empresarios agrícolas, cuyos objetivos centrales han sido empujar un proceso de contrarreforma agraria: abolir la legislación que permitió en 1964 y 1972 la expropiación de tierras antaño concentradas por los terratenientes; propiciar la liberación de la compra-venta de tierras rústicas y el fraccionamiento de la propiedad comunitaria; restaurar el régimen de concesiones privadas para el uso de agua de riego, y crear un organismo rector de las nuevas políticas agrarias, en sustitución del antiguo Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), bajo cuya égida se realizó en décadas anteriores la redistribución de la tierra. En este espíritu se impulsa la Nueva Ley Agraria, entre 1992 y 1994 (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo III). Otro polo de opinión estaba configurado por la Coordinadora Agraria Nacional, donde tenían presencia las organizaciones indígenas y campesinas, pero también las cámaras de agricultura a través de un representante. Desde este espacio, donde predominaba el criterio de las primeras, se impulsa el proyecto de la Ley Agraria Integral del Ecuador, donde se contemplan la continuidad en el proceso de redistribución de la tierra, el resguardo de la integridad de la propiedad comunal y los páramos, el desarrollo de las formas comunitarias de producción y comercialización. En este ambiente, desde 1993 se despliega nuevamente la movilización campesina indígena, siendo su momento más alto la toma de la Basílica del Voto, a pesar de lo cual la ley propuesta por las cámaras de agricultura es aprobada en junio de 1994, por lo que la CONAIE se vio obligada, nuevamente, a convocar a un levantamiento para ese mismo mes. A mediano plazo, las reformas promulgadas en 1994 habrían originado algunas situaciones adversas a las formas comunitarias de tenencia y explotación de la tierra: la primera, la retirada de las instituciones estatales de la intervención en el proceso de desarrollo rural; en segundo lugar, la eliminación de las causales de expropiación de la tierra y la apertura del mercado de tierras; tercera, la marginalización de pequeños y medianos productores del sistema de crédito estatal a partir de la descapitalización del Banco Nacional de Fomento y la desaparición de tasas de interés subsidiadas.

En este contexto, es relevante el hecho de que precisamente la CONAIE, representada como bloque monolítico portador de una política de la identidad, se haya convertido en el interlocutor de los grupos

modernizadores y el gobierno, mientras como señala Verdaguer “las otras centrales campesinas no tuvieron ‘ni voz ni voto’ en el proceso de aprobación de la nueva legislación agraria” (Verdaguer, 1994: 151). Son estas las razones por las que hemos sostenido el argumento sobre la búsqueda, por parte del Estado, de un secuestro político-comunicacional de la movilización indígena de los años noventa.

DECONSTRUCCIÓN DE LO SOCIAL Y DE LO SIMBÓLICO

No se trata, sin embargo, de relegar la importancia de la lucha por el reconocimiento cultural para la democratización de la sociedad. En esta parte quiero discurrir brevemente sobre la significación tanto de las luchas culturales como de las luchas sociales en este andarivel de nuestra historia contemporánea.

Considero, en ese sentido, que ambos tipos de lucha han contribuido a la “deconstrucción” de alguna dimensión de la dominación. La lucha por la reforma agraria, en su tiempo, al enfilarse contra la estructura de la propiedad apuntaba a la deconstrucción de las bases sociales del colonialismo interno. Al arribar a ciertos resultados con la redistribución de la tierra en la década de los setenta, por limitados que tales resultados hayan sido, no solamente se dotaba a importantes sectores del campesinado del recurso central para la producción sino que se conmovían y “desnaturalizaban” los fundamentos socio-económicos del colonialismo interno, de la sujeción a la hacienda, y se consolidaban las bases de la libertad política de dichos sectores. Así, el enunciado de la clase habría tenido eficacia política para desmontar la dominación en tanto hecho económico-social, eficacia que disminuye con la caída del socialismo y el desprestigio de las luchas clasistas.

Los procesos de los años noventa y sobre todo a partir de los años noventa son, en realidad, de naturaleza política ambigua y no solamente pueden ser vistos como una mera “restauración” del dominio clasista. En tal contexto, el enunciado de lo étnico abriría las puertas a la deconstrucción de la “ontología” misma de la desigualdad: la raza. De esa manera, la política de la diferencia se inscribiría en la búsqueda de una eficacia política mayor, antes que constituir un fin en si misma. En ese sentido, consideramos que tal eficacia es imposible, si se pierde de vista, precisamente, la dimensión clasista de la dominación. Este punto de vista concuerda con la tesis de Cohen de que los llamados “nuevos” movimientos sociales se caracterizarían por la conciencia de sus actores sobre su capacidad de crear identidades y relaciones de poder, y no precisamente por un accionar “expresivo”¹¹ (Cohen, 1985: 694).

11 Cohen polemiza sobre este punto con Pizzorno, para quien la búsqueda de la identidad, autonomía y reconocimiento, por parte de los llamados Nuevos Movimientos Sociales,

¿Quién sabe si la actual recuperación de enunciados universalistas por parte de importantes sectores del movimiento indígena-campesino no corresponda a la búsqueda de una nueva eficacia política del lenguaje, esta vez con sentidos cercanos al enunciado sobre “el pueblo”, a medida que las conmemoraciones del “descubrimiento” van quedando en el pasado, y de que nos confrontamos a las consecuencias políticas y sociales de la exacerbación de la diferencia? La política de la identidad, en tal sentido, podría enrumbarse hacia la constitución de identidades colectivas más abarcativas, universalistas y transétnicas, sin omitir las interpelaciones de tipo “clasista”. Pero sería más importante comprender los procesos de este último período de nuestra historia, en el que los indígenas se han visibilizado de una manera muy activa frente a la sociedad nacional, desde el punto de vista del quiebre de códigos e imágenes de larga duración. Quiebre que, probablemente, sea un indicio de lo que Bourdieu (1999) denominó “revolución simbólica”, esto es, una transformación radical en los modos mismos de conocimiento del mundo (lo que no significa, desde luego, que tal conmoción haya alcanzado por igual a todos los sectores sociales, pues en muchos casos estos hechos han provocado brotes de racismo). La insurgencia indígena, en tal sentido, ha sido crucial para la difusión de arquetipos positivos sobre estos sectores sociales, cuya alteridad sirvió inveteradamente como fundamento para la producción de estigmas sociales y culturales.

Pasemos ahora a comprender los sentidos de la protesta, a través de lo que expresan los/las interlocutores/as.

LA ECUATORIANIDAD ESQUIVA

La organización *Hatun Ayllu* aglutina bajo principios gremiales, mayoritariamente a indígenas urbanos, moradores de Quito, pertenecientes a las más diversas etnias serranas: salasacas, cañarenses, saraguros, etcétera. La agrupación ha concitado la atención de los indígenas que habitan en la capital de la República, pues se ha erigido en defensora de los derechos de vendedores ambulantes que circulan por la capital ecuatoriana, al velar por el respeto de las personas en condición de mendicidad, en contra de los abusos de la policía; en suma, al intentar mitigar el impacto de la migración campo-ciudad. Su dirigente, el doctor Salvador Quizhpe, es miembro activo de la

sería correspondiente a una lógica *expresiva* de acción colectiva. Cohen dice, literalmente, lo siguiente: “*Yet, one might argue, the salient feature of the NSM is not that they engage in expressive action or assert their identities, but that they involve actors who have become aware of their capacity to create identities and of power relations involved in their social construction*” (resaltado original) (Cohen, 1985: 694).

dirigencia de la CONAIE y, en calidad de tal, participa del proyecto político de la organización nacional¹².

Precisamente en las asambleas de *Hatun Ayllu* conocí a Rosa y Miguel, dos de mis interlocutores cotopaxenses. Y fue Miguel quien nos orientó hacia su comunidad, la Cooperativa Chami, situada en el rincón de Tigua, provincia del Cotopaxi, hacia donde nos encaminamos una mañana de inicios de mayo.

Saliendo de Quito a las 8 de la mañana, llegamos a Latacunga a las 10. De Latacunga, con una hora más de viaje, se llega a las proximidades de Tigua, donde se encuentra la hacienda del ex presidente Guillermo Rodríguez Lara. Y es en el corazón de estos dominios donde se encuentra la cooperativa Chami: a tres horas de camino por pastizales, mieses y sembríos de papas. Aunque el sol resplandezca, las ráfagas frías de viento nos recuerdan que estamos en el páramo, y si llueve, el camino se hace más largo.

Es este el camino que recorren los dirigentes indígenas casi cada semana para asistir en Quito a las asambleas de la organización *Hatun Ayllu* o para la tramitación de obras para el rincón de Tigua. Mucho más largo suele ser ese camino en épocas de levantamientos: dura varios días, pues no siempre el recorrido se hace en bus, muchos trechos son cubiertos a pie y por vías secundarias. Y en enero de 2000 y 2001, en algunos puntos de la carretera había obstáculos de alambres de púas instalados por el ejército y la policía que los levantados debieron superar, aun al costo de causarse heridas. La caminata fue un recurso ineludible, sobre todo en enero de 2000, pues la represión ordenada por Mahuad –y denunciada como racista por los indígenas y algunos organismos de derechos humanos– obligaba a los indígenas a descender de los buses.

En Chami, el caserío estaba rodeado por carpas militares. En el centro de la plaza se había levantado una tarima, desde donde los dirigentes hablaban a las bases: se celebraba una asamblea de la comuna. Entre discursos, danzas y “vacas locas”¹³, los tigüenses pasaban una jornada de paz, mezclándose, entre tragos y tonadas, con los militares que en la ocasión habían traído plantas para la reforestación. ¿Qué hermanaba a indígenas y militares? Ensayemos probables respuestas.

12 Algunos fenómenos que observé en las reuniones de *Hatun Ayllu* denotan los procesos de diferenciación social en el seno del indigenado ecuatoriano. Es notoria, por ejemplo, la relación de subalternidad que se está gestando entre miembros de base de la organización y su dirigente Salvador Quizhpe, a quien muchos de aquellos se dirigen con los apelativos “don” y “doctor”.

13 Baile andino en el que un danzante irrumpe disfrazado de vaca y embiste al azar contra los asistentes.

DESANDANDO CAMINOS. EXPERIENCIA Y VISIÓN DEL MUNDO SOCIAL

A mi abuela dice que ha sabido hacer trabajar desde la una de la mañana hasta las ocho labrando la tierra; desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde dice que mandaba a pastar las vacas, a sacar la leche y entregar. Y dice que a mi abuelito mandaba con un cajón lleno de huevos acá a Quito, a los padres de ellos que vivían aquí; de allá dizque salía a las tres de la mañana, que dormía en pie de Cotopaxi [...], que había chaquihuasi¹⁴, que llegaba en cuatro días allá en Zumbahua dejando huevos. Otro tío dizque era correo, que sabía andar llevando los documentos, a pie caminaba, en ese tiempo dice que no ha sabido ocupar los carros, no había también [...]. Así son las mujeres, dice que quieren coger la tierra, que van a bañarse para dormir con ellos; dizque mandaba a traer los patrones a ellas, mujeres buenas dizque mandaba a traer para dormir con ellos, por eso dizque somos ahí mezclados, hay ojos verdes, sucos, ahí dizque daba a sus huasipungueros una hectárea, una hectárea.

El epígrafe anterior no es un pasaje de alguna novela indigenista. Quien así relata es Rosa, una joven cotopaxense, 26 años, moradora de uno de los barrios del sur quiteño, Ciudad Futuro, donde se han asentado inmigrantes del campo. Ella vive con su familia, esposo e hijo de 9 años, en ese sector de la ciudad durante 8 años; el barrio aún carece de asfalto, si bien ya tiene servicios de agua y luz. La emigración de su natal Cotopaxi aún no le ha traído una vida con estándares de inicios del siglo XXI. Su trabajo como modista es duro y le impide visitar a su familia más de una vez al año. En cambio, en Quito aprendió las habilidades de la dirigencia, estudia con ahínco para ello, y no aventura una opinión sobre algún tópico de la política nacional, sin antes “haber estudiado”. La distancia no solamente ha ahondado su añoranza del terruño: también ha profundizado el compromiso con su pueblo e, inclusive, ha fortalecido la decisión de preservar la tradición de su lengua madre, de la vestimenta zumbahuense, resplandeciente en rojos y amarillos.

Movilizada por el deseo de expresarse y ser escuchada, Rosa nos brinda un testimonio excepcionalmente denso: en él está retratada la expoliación económica, el dolor corporal y la perplejidad moral, la mención serena de la afrenta inflingida a través del ejercicio del “derecho de pernada”. Y en el curso de nuestro diálogo, Rosa poco a poco levanta la vista, conforme percibe la disposición para escucharla. A lo mejor esta

14 Casa de descanso o casa de altura.

fugaz pero intensa relación entre entrevistadora y entrevistada sea una expresión metonímica de un fenómeno mayor: la escucha de la sociedad nacional de voces a las que la dominación intentó suprimir; escucha que existe porque esas voces resuenan audibles. Porque las voces se tornaron audibles en el andar y desandar de caminos.

JUAN LORENZO

Las palabras de Rosa son un prelude expresivo para comprender lo que subyace en el origen de la protesta campesino-indígena. Es así como en el testimonio de Juan Lorenzo, dirigente local de la Cooperativa Chami, la palabra clave es “sufrimiento”, la repite una y otra vez, en diversos contextos. Juan es un hombre alto de 38 años, algo encorvado y las numerosas arrugas que le surcan el rostro parecen confirmar sus palabras. El “sufrimiento” habría sido causado por “el gobierno”, y esta situación habría sido especialmente sentida durante la gestión de Jamil Mahuad:

Volvamos ahora al levantamiento, a la marcha, a los sufrimientos que nos hizo el gobierno en el año 2000, el 21 de enero y de cómo fuimos cada sector, cada comuna organizada, como parte de la gran organización, organizados en el Cabildo, sea hombre, sea mujer, aunque sea con guaguas o sin ellas, fuimos a Quito a pie, puro pie, llegamos. Pero, asimismo, cuando los *auka* runas [policía] nos dijeron que no íbamos a pasar, pero nosotros a la fuerza, rodeando los cerros, alojándonos y entrando en chozas, durmiendo con nuestros niños logramos llegar a Quito. Por eso nosotros expulsamos a Jamil Mahuad, y es que él no hizo nada a este Ecuador *Mamallactapi*, [madre-pueblo ecuatoriano] al no hacer bien nos hizo sufrir mucho.

¿Qué tipo de conflicto late en las palabras de nuestros interlocutores? ¿Un conflicto social o un conflicto étnico? ¿Es posible extrapolar ambos conflictos?

A lo largo del siglo XX, diversos autores y políticos de diversas maneras han hecho el esfuerzo por discernir sobre la índole del conflicto fundamental entre la población campesino-indígena, la sociedad envolvente y el Estado, así como sobre una identidad “esencial”, clasista o étnica¹⁵. Tratemos, pues, de discernir si, en el presente caso, se trata de un conflicto susceptible de ser encasillado en uno de los confines de la dicotomía “conflicto social/conflicto étnico” o si se trata, más bien, de una articulación más compleja.

15 La cuestión está tratada extensamente en Landa (2002: 110-118).

Partamos de que en el testimonio de Juan, el “sufrimiento” no sólo es central sino también concreto, y se expresa en diversos ámbitos: la salud, los elevados precios de combustibles y gas; hay una peculiar preocupación por las dificultades para dar educación a los hijos. Tal sufrimiento parece también ser intemporal, lo vivieron los antepasados bajo el látigo del hacendado, pero también es incierto el porvenir de los descendientes; por lo mismo, manifiesta, han de oponerse a la privatización de la venta de la energía eléctrica anunciada a inicios de 2002 por el gobierno:

Eso nosotros no queremos que [nos] pase [con] otros banqueros que quieren comprar. Nosotros no queremos ¿por qué? Nosotros de dónde vamos a pagar, hasta lo que nosotros utilizamos, claro que estamos pagando poco. Hasta [este] año que van a venir más, cuánto nos costará, no sé qué hará con nuestros hijos, nuestras familias, cómo vivirán, hasta el momento nosotros hemos avanzado a sacar [la] luz, por eso nosotros no queremos que [se] venda, que [se] privatice. Que siga manteniendo el gobierno mismo, a todo el pueblo ecuatoriano, no sólo al indio, a todos, la luz no es solo para [los] indígenas. Eso quiere hacer entre los ricos, pero nuestros guaguas, los que van a venir ¿cómo vivirán, de dónde van a sacar la plata? Por eso es que nosotros estamos luchando, por eso es lo que nosotros estamos organizando. ¿Cómo hacemos, cómo dejamos?

De la experiencia de “sufrimiento” surge la inconformidad. Ella a su vez se orientaría hacia la organización, la que estaría llamada a bloquear los imponderables que tendrían lugar si se privatizara la generación y comercialización de la energía eléctrica. Notemos que el habla de Juan Lorenzo se caracteriza por la ausencia de polaridades étnicas excluyentes. En tal entramado, la presencia de elementos contrastivos étnicos y sociales conduce más bien a la construcción de un “nosotros” transétnico y abarcativo que se resume en la noción de “pobres”. Es decir, habría un flujo incesante entre lo étnico y lo social.

Ahora bien, el eje trazado por el interlocutor se orienta más bien hacia la oposición “ricos-pobres”, desembocando en una alineación entre “los ricos” y “el gobierno de Jamil Mahuad”. Analicémoslo en el siguiente fragmento:

P.: ¿Y por qué tumbar un presidente?

R.: ¿Por qué tumbar al presidente de la República? ¿Al Jamil Mahuad? Porque, no sé, no manejaba bien, él como rico, él como es millonario sólo entre los ricos quería hacer más apoyo, ellos querían salir más grandes, más altos. Mejor a noso-

tros pobres como indígenas, [decían]: “como viven ellos en el campo, en [el] páramo, ellos que esténse nomás viviendo en campo, en [el] páramo, como un perrito, como un gato, que estése nomás por ahí metido, a los indígenas no pasemos ni educación, ni salud, nada, ellos que sigan trabajando como antes, que siga nomás trabajando, cultivando”. Los productos de nosotros, de trabajo de nosotros no hace valorar, hasta el momento totalmente está en el suelo, pero los mercados de ellos, los empresarios de ellos como están haciendo subir día, noche, por eso hemos organizado, por eso [nos] hemos sentado a dialogar, a conversar entre nosotros

La expropiación en las haciendas aún es memoria viva en la generación de Juan, es las experiencias de los progenitores, pero también es la suya propia, de infancia y adolescencia. Parte de la memoria de Chami legada por los antepasados, según manifestó el interlocutor, es también la comuna y la lucha por la tierra, y quizá ella reproduzca más intensamente su fuerza en virtud de una suerte de “geografía del sentido”: más presente y a flor de labios de las personas que viven permanentemente en la localidad, confrontadas a la cotidianeidad de los problemas que ella implica.

Ahora bien, el primer elemento de la polaridad multimillonarios-empresarios-banqueros resulta alineado con los terratenientes de antaño, mientras que a partir del segundo, pobres-indígenas se concentraría no solamente la pobreza, sino también la amenaza de la degradación a una condición inhumana. La pobreza se constituye, asimismo, en el campo de aparición de un “nosotros” inclusivo que inicialmente se refiere a una pan-indianidad:

Nosotros con propio derecho, nosotros como indígenas, pensando nuestros derechos, recién a nuestros hijos quizá hasta futuro, nosotros más que sea pero hasta el momento estamos poco-poco avanzando. No vamos a callar con eso, vamos a seguir organizando más y más, pero no sólo aquí en [la] zona [de] Tigua, en toda parte, no sólo en [la] provincia de Cotopaxi, en todo lado, sea provincia de Imbabura, sea provincia de Pichincha, sea provincia del Tungurahua. [En] todo lado estamos organizando, estamos como hermanos, estamos abrazados, poniendo mano, igual, de repente, si es que pasa algún por ahí, estamos echando mano, como ellos sienten entre ricos, también nosotros como indígenas, como somos pobres, asimismo estamos poniendo mano hasta el momento, vamos a seguir luchando hasta último.

El “nosotros” que invoca una coexistencia de pobres e indígenas en las diversas provincias (en este caso serranas), luego de rebasar los linderos étnicos, se asienta en lo que hemos identificado como la “ecuatorianidad”:

[...] a nosotros el gobierno nacional nos hizo sufrir mucho, pero no solamente a nosotros, los del pueblo de Tigua, o solo al pueblo de Cotopaxi, sino a nivel nacional, completo, ya sea indígena, sea negro, sea mestizos totalmente, ya sea en el aspecto educacional, o en la salud, y de muchas otras cosas. Y es por este sufrimiento que desde hace siete años hemos hecho crecer a la organización.

En este párrafo percibimos la concatenación “pobres-pueblos-ecuatorianos”. Si hemos visto anteriormente una actitud frente a lo público, aquí vislumbramos un sentimiento de fusión con la “comunidad imaginada” constituida por los “pobres”. Según Rafael Quintero, la presencia indígena en la protesta de los últimos años y, sobre todo, en enero de 2000, habría iniciado un proceso de cambio en el concepto de “pueblo” en los habitantes del país, concepto que vagamente estaría aproximándose al de “nación” (Quintero, 2000: 12). En tal sentido podríamos decir que a la emergencia indígena de los últimos años se asocia una integración nacional en la que se fortalecen los lazos imaginarios, en la medida que la “otra parte” de la “comunidad imaginada” –sectores mestizos de la sociedad envolvente– ha generado una identificación horizontal. Es interesante constatar, en este sentido, que este vínculo imaginario con una comunidad multiétnica mayor, con un territorio y con una esfera pública “nacional” se reedita con características similares en otros países latinoamericanos. Landa (2002) analiza las jerarquías de las identificaciones de los indígenas xavantes en el Brasil en relación con las diversas circunscripciones geográficas, y concluye que, si bien la identificación puede variar en función de la circunstancia de enunciación¹⁶, muchos indígenas “se consideran brasileños por antonomasia, e incluso se puede decir que la mayoría de los indígenas brasileños se consideran más nacionalistas que los brasileños no indígenas”¹⁷ (Landa, 2002: 125).

16 Por ejemplo, puede preferirse la identificación de cristorreyense a la de xavante, o la de matogrossense a la de brasileño, siendo todas estas identificaciones manejadas con propiedad en diversos ámbitos.

17 En efecto, una gran parte de la población blanca brasileña, descendiente de inmigrantes europeos de buen grado reivindica sus ancestros y, frecuentemente, busca obtener doble nacionalidad. En el caso de los indígenas, prima desde luego la filiación a los pueblos originarios asociada a la reivindicación de una brasilidad “pura”, la que puede estar dada también por ciertos beneficios de la protección estatal ejercida desde el Estado (comunicación personal de Ladislao Landa).

De lo que hemos analizado hasta aquí podríamos sostener que el momento movilizador de la ideología se asienta, en primera instancia, en el sentido de pertenencia a la “comunidad imaginada” como “ecuatorianos pobres”, vale decir en un sentimiento de ciudadanía y de identificación horizontal, y al mismo tiempo de privación de ciertos beneficios y derechos inherentes a tal estatuto. Sostengo que si el sentido de “pueblo ecuatoriano” está presente, aun cuando no siempre explicitado, este se asocia firmemente a la valoración de la dignidad, en tanto dignidad ciudadana demandante de una vinculación jurídica con el Estado, de la vigencia de derechos y de una ciudadanía social y política, una vez que se han gestado sentimientos de pertenencia a la “comunidad imaginada”.

El otro referente de oposición, frente al cual se definiría la indianidad, el mestizaje tiene aquí un estatuto ambiguo, pues si bien en ciertos instantes aparece como el origen de la expoliación y el abuso, y en otros expresa la posibilidad de una alianza, sería una oposición secundaria en comparación con la de “pobres” y “ricos”, diluyéndose frecuentemente en esta (ver Cuadro 1 en Anexo).

Ahora bien, la presencia del elemento étnico es ineludible, y lo analizaremos a partir del siguiente diálogo. Lo curioso del fragmento que sigue es que la conversación fue orientada, por el entrevistador, en el marco discursivo de la etnicidad, pero sobre todo de la diferencia, aguardando, probablemente, una respuesta dentro del mismo marco discursivo, en consonancia con los relatos dominantes, por aquel entonces, en las ciencias sociales y que era esgrimido también por la dirigencia del movimiento indígena:

P.: ¿Cómo se definirían como indígenas? ¿Qué cosa es ser indio aquí? ¿Indio es ser comunero, el que vive en el páramo?

R.: Nosotros aquí, la gente, aquí, los que vivimos en el campo nos hacemos valer, asimismo nosotros sabemos nuestras costumbres, así como los *mishus* [mestizos] cantamos, comemos, caminamos, trabajamos así. Asimismo, también vivimos los hombres, sufrimos y olvidamos, pero nosotros vivimos solidariamente, más unidos que otros. Y a nuestros hijos tratamos de superarlos, haciendo los modos posibles, nosotros los padres y las madres, superando sufrimientos. Hacemos que los niños vivan mejor, como gente. Vemos nuestra cultura quichua, vemos por nuestro propio vestido, así nosotros nos ponemos nuestro poncho, tratando de no hacer perder nuestra tradición. Pero nosotros tratamos de superarnos cada vez más. Y así cuando nos ve la gente, los *mishus* piensan entre sí: “a esos hombres no, no hay que darles educación, no debemos dar-

les salud, ellos no deben estar junto con nosotros, no deben superarse dicen, si no nos van a tumbar, dicen; y nos deben silenciar”. Nosotros como gente, como habitantes del páramo, nosotros sobrevivimos luchando hasta ahora. Y así a sus grandes oficinas llegamos aunque ellos no quieran.

El sustrato básico de la respuesta de Juan es la diferencia [cierta superioridad moral], que busca una equiparación socio-racial o socio-étnica dentro de una condición humana y política más amplia. La diferencia sería un dispositivo de la igualdad, y no un fin en sí mismo. Es evidente la presencia de un conflicto étnico, sin embargo me atrevo a sostener que, en este caso, no está presente la correspondencia unívoca entre etnicidad y diferencia. Obsérvese también el entrelazamiento de la búsqueda de una ciudadanía social universal (“nosotros los pobres indios, mestizos, negros”) en los pliegues de la conflictividad étnica, y no exclusivamente de una “política del reconocimiento” de una diferencia cultural exenta de ambivalencias. La insistencia en el sufrimiento cumpliría también la función de sustento de tal búsqueda de la ciudadanía social de corte universalista.

MIGUEL

En todo caso, la idea de “diferencia” se expresaría con más énfasis en el testimonio de Miguel, un interlocutor de 35 años, oriundo también del rincón de Tigua. Tratemos de comprender el porqué de la diversa acentuación. Con el mismo grupo de origen, Miguel ha adquirido una competencia política distinta, pues se trata de un dirigente reconocido a nivel provincial. Este interlocutor posee una gran capacidad de convocatoria, debido a su habilidad para la gestión de obras y financiamientos para proyectos de desarrollo local. Miguel oscila entre su comunidad y la ciudad de Quito, donde, como hemos dicho, se vincula a las asambleas de *Hatun Ayllu*.

¿Dónde estarían, en su perspectiva, las raíces de la inconformidad? Nos remitiremos inicialmente a su visión sobre la conformación del mundo social –la circulación del interlocutor en el mundo público capitalino es una fuente esencial de su experiencia al respecto– y, a partir de ella, examinaremos cuáles son los atributos de los elementos constitutivos de ese mundo social.

Un primer elemento son los indígenas, que hoy en día “hemos ganado respeto”, aunque vivan “en la más extrema pobreza” en comparación con lo que ocurría hace varios años. Los indígenas serían la antítesis de los mestizos: mientras aquellos son “concretos”, ejecutivos, poco teóricos, apegados al campo y a sus valores, éstos serían lentos y desarraigados.

Un segundo elemento, serían “los ricos”, los banqueros: “millones, millones de sucres se robaban los banqueros y eso estaba acaparando el gobierno”. De cara a tal situación percibida como injusta, los indígenas habrían pensado: “como así pues solo un grupo de gente hace eso y nosotros somos mayoría, y encima de eso nos quitan nuestro dinero para favorecer a ellos”, dice relatando sobre la impugnación de Mahuad.

El tercer componente está constituido por los poderes del Estado y las instituciones democráticas: a su juicio, quienes las conforman “no hacen nada”. Miguel propone entonces “reestructurar el Estado”, “desaparecer a los partidos, desaparecer al Congreso, muchas cosas inservibles, recuperar esa plata y poner en la educación, aunque si los mayores no han estudiado, pongamos autocapacitación en las comunidades, en los campos, no solamente a los indígenas, para que vaya cambiando la mentalidad”. La misma suerte correspondería a la Corte Suprema de Justicia, pues tampoco hace nada: la ley prevalece para los grandes. Pero, en fin, este elemento es más bien parte del proyecto político, y en tal circunstancia será analizado más adelante. No obstante, el interlocutor rescata el papel de instituciones de apoyo, tanto gubernamentales como no gubernamentales, destinadas a dar apoyo y asistencia (Cuadro 2 en Anexo).

Entonces, en primera instancia vemos que el conflicto está representado a través de las polaridades indígenas/autoridades-poderes del Estado + banqueros-ricos. Otra polaridad implícita es: trabajo/corrupción-ociosidad, siendo este último elemento de la oposición visto como la raíz de la injusticia y de la pobreza.

En un segundo sentido nuclear observaremos la búsqueda de inclusión en una ecuatorianidad esquivada, mediada por la oposición entre “lo inservible”, es decir el despilfarro practicado en las instituciones del Estado por los *mishus*, y el progreso y la inversión adecuada de recursos, cuyos propulsores serían los indígenas:

La realidad de Cotopaxi es que ahí hubo esta situación, el estudio, censo, ahí se dieron cuenta de que hubo ni el dos por ciento de crédito del gobierno; absolutamente, la gente sobrevive por allá. Entonces los indígenas están claros que no son como ecuatorianos, en cambio otros sacan millonadas y no hacen nada, en cambio el indígena que mantiene a lo urbano, a la ciudad, el campesino pequeño agricultor y que no tenga ningún reconocimiento ni de las autoridades de la provincia, ni nacional. Entonces es uno de los enojos que tiene la gente.

Nuevamente, en las palabras de este interlocutor percibimos la referencia a la ecuatorianidad. Mientras tanto, el conflicto se gesta en la expresión de la exclusión confrontada con el acaparamiento y la in-

diferencia de los poderes del Estado. Es decir, la fuente del conflicto tiene una doble vertiente: por un lado la tensión entre el sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada” y la exclusión de la misma (“no somos como ecuatorianos”) y, por otro lado, la intolerancia hacia el “robo” y la definición de tales actos como “corrupción” (“otros roban y no hacen nada”) –tal intolerancia es posible solo en la medida en que el sujeto se siente afectado en calidad de copartícipe de la “comunidad imaginada”, y copartícipe de la esfera pública– de cara a la situación de los indígenas y a la “extrema pobreza” en la que muchos de ellos viven. Desde luego, está latente el eje de la confrontación étnica, dispuesto mediante atributos de orden étnico-político-moral, y aun de emplazamiento geográfico (el dominio de lo mestizo es la ciudad, sostenida por el campesino-indígena). El núcleo de sentido, sin embargo, parece radicar en la ecuatorianidad deseable pero trunca.

Ahora bien, en este testimonio, el mestizaje tiene un estatuto más ambiguo que en el anterior, tal vez menos valorizado y más alineado con atributos en negativo. Está latente por ejemplo un sentido de superioridad ética de los indígenas, y de su ejecutividad. El pueblo indígena es poco teórico, (teórico tendría aquí una connotación negativa de ociosidad), es práctico –los mishus serían propensos a no hacer nada, a la lentitud, esto se debe a que: “los indígenas somos débiles con nuestros animales, no somos pues como los mestizos, que matan venden y no sienten nada”–. Sin embargo, siendo la diferencia uno de los ejes del relato de Miguel, tampoco es excluyente. En tal sentido la mención del mestizaje sirve como dispositivo para la definición de un “nosotros” indígena frente a un mundo corrupto e injusto; ese “nosotros” conduciría de lleno a la explicitación de proyectos nacionales; formulación en la que se gesta un “nosotros” inclusivo, que oblitera no solamente las diferencias regionales entre indígenas sino también las posiciones étnicas, anclando en una entidad mayor, de alcance nacional, resumida en conceptos como “pueblo” (todo el pueblo) y “sociedad civil”. Los matices más acentuadamente identitarios de las palabras de este interlocutor podrían estar determinados precisamente por su posición de dirigente, por la conciencia de su rol como productor de una palabra legítima, que además debe ser “eficaz” frente a la sociedad envolvente.

Podríamos decir que las percepciones colectivas, en términos generales, están permeadas por una primacía de la demanda social universalista, a la cual se encuentra anudada la demanda de reconocimiento. Sin embargo, se podría también hipotetizar que hay un énfasis mayor en los atributos negativos de los mestizos a medida que el interlocutor se aproxima a una situación de visibilidad social, si se quiere de “distinción” en el contexto del mundo indígena. Por otro lado, la memoria de las pretéritas luchas por la tierra parecería estar subsumida a los

imperativos del presente: a la organización actual de la cooperativa, a la representación de la comunidad y la negociación de financiamientos para proyectos de desarrollo. En el “olvido” de la lucha agraria también incidiría lo que hemos denominado la “geografía del sentido”: la vida de Miguel es contigua a la vida urbana. Por todo esto, los enunciados de la diferencia no implicarían un recorte de la historicidad en tanto “clase”; la exaltación de los valores de la comunidad indígena tendrían más bien –siguiendo a Guerrero y Ospina– la función de recuperación de una identidad india, habitualmente asimilada a la dominación, la discriminación y la inferioridad (Guerrero y Ospina, 2003). La “geografía del sentido”, por lo tanto, llevaría a la acentuación de la diferencia en positivo, en entornos urbanos donde el contacto político es más confrontacional y la vecindad interétnica más marcada y conflictiva que en el seno de la comunidad nativa. ¿Pero es la geografía del sentido *per se* lo que configura la atracción por el discurso de la diferencia, o es también la “geografía social” la que sustenta la inclinación por este?

Resulta ilustrativo, desde este punto de vista, el análisis de Guerrero y Ospina (2002) sobre los círculos concéntricos de la identidad indígena; según estos autores existirían diversos grados de autoadscripción indígena, pero sobre todo prácticas –como el uso de la indumentaria étnica– como criterios marcadores de la “indianidad”. Dichos analistas presentan en su obra mencionada el testimonio de L.T., una joven dirigente de la CONAIE oriunda de la comunidad de Mulalillo, provincia del Cotopaxi. La vida de L.T. sería un compendio de inserción en las más diversas esferas laborales y de socialización: peona de albañilería, a los 13 años presidenta de un grupo de promotores agrícolas, catequista y alfabetizadora, a los 17 años habría trabajado en Ambato en un taller de corte y confección, electa “campesina bonita” a los 19 años, emigrante a Quito desde esa edad, donde se dedicaría a estudiar (completar la secundaria, ingresar a la Universidad Central) y a trabajar como empleada doméstica. Ya en la capital, L.T. habría experimentado procesos de aculturación que le llevaron a abandonar la vestimenta indígena y tinturarse el cabello. L. T. empieza a “recuperar” la indianidad cuando entra en contacto con la Fundación Hans Seidel, al presentarse como aspirante a una beca que otorgaba esa institución a estudiantes indígenas. Como la beca le fue negada pues ella en apariencia no era indígena, argumenta entonces que ser indígena es ser parte de la comunidad. Ella recupera el vestido indígena –y con él todos los atributos y marcadores identitarios, incluido el “quicha completo”– cuando entra a trabajar en la oficina del diputado indígena cotopaxense Leónidas Iza. Cuentan los autores que L.T. habría usado su traje tradicional, ante la sorpresa de todos, el día que se recibió de doctora en leyes. En lo posterior L.T. haría estudios de posgrado en la FLACSO de Ecuador, y en el

CIESAS de México. En la perspectiva de Guerrero y Ospina, la opción por el mestizaje habría sido una estrategia para huir de la pobreza, un recurso de ascenso. Los pocos que realizan, como L.T., el viaje inverso, el retorno a la autoadscripción indígena, frecuentemente dirigentes, se encuentran en el círculo concéntrico interior de la identidad (Guerrero y Ospina, 2003: Capítulo IV).

¿Qué es lo que estaría en juego en este retorno a la indianidad? Si en la fuga desde ella gravitó la pobreza que convertía la indianidad en estigma, al retorno a ella se asociaría un proceso de recomposición de la propia situación social, la aproximación a los sectores medios, tal vez la adquisición de “capital cultural” mediante la obtención de un título universitario, entre otros factores asociados a un estilo de vida urbano. Lo social y lo étnico, por lo tanto, se entretujan profundamente, y no es posible establecer un divisor de aguas entre uno y otro: el ascenso social elimina el estigma, y restituye la dignidad.

POLITICIDAD Y PROYECTO POLÍTICO

Llamo politicidad al conjunto de nociones o saberes sobre el manejo y acceso al poder, nociones sobre la autoridad y los partidos políticos, así como sobre las alianzas; la politicidad se referiría a las formulaciones basadas, tanto en lo que Rudé (1981) denomina “elemento inherente”, saberes oriundos de la vida cotidiana, como del “elemento derivado”, retomado de los idearios políticos “artificialmente” estructurados, así como de las prácticas de los sujetos frente a los constitutivos del sistema político.

En esta sección analizaremos las representaciones sobre la política vinculadas al quehacer práctico y que desembocan en las propuestas sobre la sociedad deseada. Cabe destacar que, si bien lo aquí planteado se considera como la percepción del grupo en cuanto a las nociones sobre la política, los elementos proyectivos son visibles más nítidamente en la alocución de Miguel, el dirigente provincial, quien al constituirse en vocero del segmento indígena en cuestión exhibe una competencia política adquirida, como se ha dicho, en la circulación entre el mundo comunitario y el mundo público.

Podemos obtener un primer esclarecimiento de lo que está en juego al hablar de “política” del siguiente diálogo con Juan Lorenzo:

P.: ¿El movimiento indígena está haciendo política o no? ¿Están como los partidos o es diferente?

R.: Hasta el momento aquí en Cotopaxi no, pero oigo decir que atrás-atrás si están haciendo, si dizque hacen, pero nosotros de frente no hemos topado, no hemos oído. [...] Tampoco no rechazamos, vamos a seguir apoyando.

P.: ¿Entonces sería bueno que los indios hicieran política?

R.: Sí, sí creo. Por un lado sí, sí vale, pero que sea de libre, sin nada de engaños. Como indígenas, sintiendo como pobre, como pueblo indígena, queriendo servir. Sí, sí vale, pero que sea de libre, nada de engaños, como otros políticos que hacen, partidos que hacen, eso nosotros no queremos, por eso hemos rechazado.

El punto de partida de las elaboraciones sobre política sería la evaluación del quehacer partidario (de los partidos doctrinarios) y las actitudes a ser tomadas con respecto al mismo. Si la práctica usual de “la política” es el engaño, lo que se espera es que los partidos “no engañen”, que sus personeros no lo hagan cuando lleguen al poder. De esa manera, el interlocutor se coloca al margen del quehacer propiamente político por ser inherentemente partidario, pero no descarta alianzas con los partidos, que serían deseables, si las prácticas cambiasen. La política desde esta perspectiva sería la relación con quienes “hacen” política, partidos o independientes; desde luego, no interesa el signo político de la agrupación o del personaje. Este análisis resulta discordante con tesis que parecen haber migrado del discurso mediático a las ciencias sociales, y que postulan el apoliticismo y aun el apartidismo de los indígenas y de los sectores populares en general; solo que la comprensión de lo que sería “la política” tiene aquí códigos propios determinados por las necesidades locales inmediatas. El apoyo, desde el punto de vista de un miembro de base del movimiento indígena de Cotopaxi estaría supeditado a la mudanza de los códigos éticos de la política, pero, claro, en conjugación con la disposición a beneficiar a la comunidad con recursos.

Esta perspectiva puede contribuir a esclarecer los procesos y orientaciones de la toma de decisiones en las comunidades indígenas. Según Pablo Andrade, en dichos procesos gravitarían dos formas institucionales: la primera, la toma de decisiones en asambleas comunales (sea mediante la participación directa de los involucrados, sea mediante la negociación previa entre las familias y miembros poderosos de la comunidad con intereses en las decisiones a tomarse), y la segunda, a la que Andrade ha denominado el “pluralismo limitado”, que implica la expresión de los diversos intereses de las comunidades con exclusión de los partidos políticos, porque se los ve como fuente de división en las comunidades (Andrade, 2002)¹⁸. Parecería quizá que la tesis planteada en mi análisis previamente contradice los planteamientos de Andrade. Considero, sin embargo, que contribuye a una ampliación de los mismos, en el sentido de que, si bien se excluye a los políticos de

18 Andrade se basa en el estudio de Tania Korovkin (2001).

las asambleas, no se niegan posibles apoyos y aperturas plurales a los mismos, mientras se considere que actúan con transparencia y ánimo de servicio.

El reconocimiento de tal ánimo de “servicio” se ha otorgado precisamente a Lucio Gutiérrez –como reconoció Miguel en el transcurso del diálogo (y ello se expresó en las elecciones presidenciales de 2002, a manera de un intercambio de dones)– y, parcialmente, a Gustavo Noboa, quien después del levantamiento de enero de 2001 se dedicó –en medio de un gran despliegue propagandístico– a repartir fondos en muchas comunidades; fondos que, según informaban los medios de comunicación, podrían haber sido cubiertos aún por asignaciones extrapresupuestarias (nuestro interlocutor Miguel decía que si bien la situación de los indígenas no habría cambiado a raíz del levantamiento de enero de 2001 y de las mesas de diálogo establecidas después de él, Noboa tiene “buenas intenciones y algo-algo intenta hacer”). Desde luego, no se trata estrictamente de políticos “tradicionales”, pero la lectura de estos hechos permite entender la proclividad al establecimiento de alianzas beneficiosas independientemente del signo político, lo que por cierto redundaba en un “pluralismo limitado”. Aquí arribamos a otro elemento constitutivo de la politicidad indígena: se trata de lo que Augusto Barrera denominó en la entrevista que nos concediera la “racionalidad etnopolitista”. Es decir, el privilegio de lo étnico sobre lo político, y el correspondiente manejo de alianzas con sectores de cualquier signo político en beneficio de obras para las comunidades. Característica presente sobre todo en los estilos políticos de los indígenas amazónicos, pero no ausente de las prácticas de las organizaciones indígenas serranas. Tal “racionalidad etnopolitista” sería conmensurable con concepciones desde la “economía moral”, asunto que discutiremos más adelante. Por ahora veamos otra variante de tal “etnopolitismo”; en ese sentido es interesante resaltar las nociones sobre la relación que se establece con el opuesto de la identificación colectiva como pobres, con los “ricos”. La definición de los “ricos” (empresarios, banqueros, el gobierno) cumpliría más bien una función integradora antes que confrontativa, constituyéndose en un recurso para la definición de una identidad colectiva, y no de un “enemigo de clase”, en el sentido que antaño se concebía a los terratenientes y capitalistas. ¿Qué hacer entonces con los “ricos”? En la perspectiva de Miguel:

[...] a los ricos no hay que entrar a atacar porque estos tienen poder, entonces llamar a un diálogo y decir: “oye, tienes un poco más, rebájate un poco, pues, no cojas, acá necesita o ponga para tal o cual obra”. Eso hay que poner a entender, no le topamos a usted, usted es multimillonario, pero no le podemos

dar tantos tanques de gas que regala el gobierno, sí te voy a dar pero no te voy a dar todo; rebaje un cincuenta por ciento. Entonces todas esas cosas hay como rectificar, conversar. Yo qué sé, con un comandante o general: “vea queremos hacer esto, conversemos, no para mí; aquí hay un canal de riego de 50 km pero que va a beneficiar a 200 mil ciudadanos o poblaciones; queremos disminuir esto, mándenos un trabajo concreto”. Si es que el indígena va contra los grupos... no serviría de nada.

Lo que aquí podemos percibir como rasgo asociado a la “racionalidad etnopopulista”, con relación a la definición de alianzas interclasistas, es una noción de la negociación política anclada en la lógica del regateo, de una extensión de la economía del mercado local y de la relación cara a cara, sin que sea evidente la apelación a los principios del derecho.

Otro elemento que caracteriza a la politicidad indígena en este sector es la forma de vinculación con la autoridad, relación a la cual se extienden las pautas morales de la relación cara a cara y las normas consuetudinarias. Miguel relata que el 21 de enero los indígenas pidieron la derogatoria de las medidas económicas (dolarización, efectos del congelamiento bancario) y la presencia de Mahuad en el parque “El Arbolito”, con el afán de dialogar con el presidente, que no se hizo presente en el lugar: “ésa era una estrategia, [cuando llegaba] cogían y castigaban, [el presidente nunca llegó] entonces la gente se enojó más”.

Ahora bien, la prescripción de la metodología conciliadora de la negociación contrasta con la radicalidad de las prescripciones para con los poderes públicos. Según Miguel:

[...] nuestro objetivo [el 21 de enero de 2000] era no simplemente tomar el poder, sino que haiga la reestructuración total, el cambio, ver alguna justicia humana dentro de nuestras provincias, el país... Entonces la gente decía que en vez de pagar a estos, el Congreso que sea disuelto y esa plata puede pasar para dar pequeños créditos a la agricultura, para forestación, reforestación, canales de riego, arreglo de vialidad, energía eléctrica, centros de salud, educación, entonces la gente concretamente tiene esa visión, en el campo para que haiga progreso”.

Al hablar de la reestructuración del Estado se plantea más bien una reconversión moral que una propuesta de macro-proyecto político y económico. Es decir, estarían latentes búsquedas de salidas que involucren un proyecto político, económico, social y geopolítico (no privatización, concesión de la base de Manta, redistribución de la riqueza), sin embargo su resolución no asume caracteres políticos, sino de una

reconversión moral. Con todo, se plantean los perfiles de la sociedad deseada, basada en principios humanistas, participativos y de justicia.

[...] lo que tenemos planteado es que esta participación de todos los sectores, la reestructuración del Estado mismo, la atención más adecuada, más humanista hacia la sociedad civil, desde todas las esferas, de las instituciones, hablemos del más pequeño, hablemos desde un teniente político, rendición de cuentas al pueblo y una planificación conjunta donde poder hacer con agilidad, con práctica cualquier proyecto, cualquier necesidad [...]

Un trazo peculiar del modelo de sociedad a la que se aspira es el tipo de racionalidad de la organización de la misma. Racionalidad que estaría dictada por la inversión de los fondos del Estado a las necesidades sociales, cese de erogaciones a los salarios de los personeros de los poderes del Estado, y distribución y empleo de recursos a partir de decisiones tomadas en forma participativa. (Un esquema conceptual sobre la sociedad deseada consta en el Cuadro 3 en Anexo).

En síntesis, podríamos decir que existen múltiples fuentes o formaciones ideológicas que han dejado la huella en las representaciones del grupo de Tigua, pues las fuentes del cambio son vistas tanto desde la *doxa*¹⁹ como extensión de la lógica del regateo y la moral ubicada entre el horizonte de lo cotidiano y el anclaje religioso, como desde una perspectiva rupturista emparentada con la radicalidad de los métodos revolucionarios (no con sus contenidos), y finalmente también desde la ideología del desarrollo local, fomentada en los años setenta y ochenta (y más recientemente por las ONG), discursos en los que eventualmente se perciben influencias de la antropología cultural y el multiculturalismo norteamericano, a diferencia de las formaciones ideológicas en la Sierra centro-sur donde la matriz de la crítica de la economía política aún es robusta, en los pronunciamientos de orientación izquierdista o de centroizquierda. La direccionalidad del cambio, con su compleja superposición de ideologías, se asocia a la gestación de un proyecto universalista y a una búsqueda de hegemonizar la presencia política y orgánica del complejo “pobres, pueblo ecuatoriano = indios, negros, mestizos sufrientes a manos del gobierno y de los ricos”.

Estas reflexiones indican que, al menos, habría que considerar importantes sectores indígenas cuya movilización no está regida de

19 En uno de los densos pasajes de *La distinción*, Pierre Bourdieu ofrece una formulación de la idea de doxa que parece particularmente precisa y fecunda para entender las comprensiones aquí expuestas sobre lo que sería “hacer” política: “doxa, adhesión ordinaria al orden ordinario” (Bourdieu, 2000: 437).

manera exclusiva por la búsqueda de la diferencia, aun cuando pugnen por el reconocimiento en el sentido político, social y cultural. Estos procesos parecen más bien confluir en la consolidación de un sentido de pueblo-nación multiétnico.

Por otro lado, la presencia de la noción de progreso indicaría un horizonte de expectativas modernas, vinculados a una racionalidad que, basada en principios humanistas, autogestión y participación, se oriente a una distribución más equitativa de la riqueza social.

Al evaluar los efectos de la movilización indígena-campesina me atrevo a sostener el carácter limitado de la misma, por lo que a pesar de la fuerza desplegada, la radicalidad y la capacidad de resistencia a un cambio más acelerado, la implementación del modelo de ajuste sigue su curso y entra en una fase avanzada con la adopción de la dolarización. Efectivamente, la protesta del sector en cuestión ya no está inspirada en cambios radicales, sino de una reforma dentro de los marcos existentes²⁰. Pero quizá podamos explicar también los efectos limitados con relación a las metas enunciadas por un colapso de la comunicación política, o restricciones de acceso a los códigos políticos de la relación con el Estado y las elites, la primacía de una visión moralizante, y la extensión de las pautas de los intercambios cara a cara hacia las relaciones con el poder del Estado.

Parecería que el anclaje en la moral imprime a la politicidad del movimiento campesino-indígena contemporáneo una autolimitación, con respecto a sus propios valores. Autolimitación que se expresaría en la dificultad para traducir sus objetivos a los códigos políticos dominantes. Si bien es cierto que las bases campesino-indígenas manejan los códigos de su propio mundo, como los de la sociedad dominante, esto es válido para las transacciones en microespacios, mas no en el mundo de las interacciones macropolíticas. De esto resultaría una comunicación política opacada, una interacción de racionalidades difícilmente conmensurables.

Para comprender la significación histórica de esta forma de hacer política, resulta útil hacerlo a partir de las conceptualizaciones de Michel de Certeau en torno al carácter de las prácticas y discursos cotidianos. Ese autor distingue entre acciones y discursos “tácticos” y “estratégicos”. Los primeros devienen de un cálculo desde el lugar del otro, del más fuerte, al que no se logra distinguir como totalidad visible; tales acciones y discursos constituyen un aprovechamiento de

20 Para Cohen, es precisamente el abandono de sueños revolucionarios y la opción por reformas estructurales lo que define la “novedad” de los movimientos sociales y no necesariamente la sustitución de la política instrumental, por la política de la “expresión” (Cohen, 1985).

ocasiones, una manipulación de circunstancias favorables, y se rigen por lógicas de maniobra cotidiana, teniendo una limitada capacidad para capitalizar ventajas, por originarse precisamente en la primacía política del otro. La estrategia, por su parte, se sustenta en un cálculo de relaciones desde un lugar propio, desde el dominio del tiempo de sujetos capaces de exteriorizarse frente al otro (De Certeau, 1996: XLIX-L). Desde esta perspectiva, tanto las prácticas políticas como los discursos del grupo en cuestión aquí tendrían un carácter eminentemente táctico, aun cuando las grandes metas sean definidas de manera estratégica. Y, probablemente, esta textura “táctica” de la movilización sea la circunstancia que inhibe la consecución de las metas propuestas, la circunstancia que mengua la audibilidad de las voces autónomas. En todo caso, a pesar de los logros obtenidos como pueblos y la “tregua” conseguida para todo el “pueblo-nación” en los ritmos de profundización del ajuste, se debilita y abre las puertas para medidas de ajuste más profundas –la dolarización– debido a la subordinación a las estrategias del Estado (cooptación de líderes: el caso de Luis Maldonado como ministro en el gobierno de Noboa, por ejemplo).

El tema de la “economía moral” como base de la politicidad indígena es polémico, pues si bien aquella imprime limitaciones a la movilización alejando la consecución de los objetivos planteados, por otro lado es precisamente la economía moral lo que proveería la fuerza interpelante a diversos sectores sociales movilizados durante los años noventa, fuerza que, inclusive, puso en jaque al Estado ecuatoriano, neutralizando una potencial represión (Bustamante, 2001). Para analizar el escenario de la crisis de la segunda mitad de los años noventa, es menester llamar la atención, siguiendo a Fernando Bustamante, sobre la existencia de dos lógicas culturales: la economía política y la “economía moral”. La primera se sustentaría en la racionalidad de lo impersonal, de la objetividad de los fenómenos económicos y sociales; mientras que en la economía moral las relaciones sociales están pautadas por las obligaciones éticas entre las personas. En tal perspectiva, los fenómenos económicos tales como los precios responderían a las actitudes de las personas (Bustamante, 2001). Probablemente, como advierten Guerrero y Ospina (2002), Bustamante tienda a oponer el discurso de la economía moral y el discurso de la economía política, ambas lógicas culturales como elementos inconmensurables de la cultura política de los sectores en liza: la CONAIE y las elites gobernantes. Sin embargo las sugerentes tesis de Bustamante sobre la “economía moral” como constitutivo de la movilización de la CONAIE merecen ser consideradas en serio. En tal sentido, sería la presencia de la economía moral precisamente la fuente del “etnopolitismo” en las dos vertientes señaladas, esto es, en la relación con los partidos y en las potenciales

alianzas interclasistas. Tendríamos, entonces, una serie de elementos de la ideología de la protesta originados en la “economía moral” que se constituyen en la barrera para la acción desde la “economía política”, es decir, en términos de proyecto de cambio político, y no de mera re-conversión moral. Tenemos, pues, a ambas lógicas político-culturales configurando la protesta indígena, levantando aporías en el seno de la acción política de la CONAIE. ¿Cómo es posible, desde esa perspectiva, armonizar la coexistencia de la ética y la política?

LA ECUATORIANIDAD DEGRADADA: EL CAMPESINADO DEL AZUAY

El proceso de constitución del movimiento campesino durante la época republicana difiere sustancialmente en el sur del país, particularmente en la provincia del Azuay, debido a que también la configuración histórica de la relaciones de producción es muy diferente en esta región, en comparación con la Sierra centro-norte. La región socio-geográfica de la provincia del Azuay se ha caracterizado por la ausencia de grandes haciendas y del concertaje. Durante el siglo XX ha sido más bien una zona de predominio del minifundio²¹. *Grosso modo*, podríamos decir que “prevalecía la distribución más o menos equitativa de la propiedad, y la mayor parte del campesinado tenía acceso a alguna tierra” (Baud, 1997: 142). Se trataba, por lo tanto, de un campesinado libre y minifundista.

También la configuración socio-cultural difiere de aquella de la región centro norte. Varía en particular la presencia del mestizaje, pues hasta inicios del siglo XX en el campo se hablaba el quichua, pero la vestimenta y la religión eran de origen español; se habría operado, pues, “un fuerte proceso de mestizaje y criollización cultural en la región durante y después del colonialismo español” (Baud, 1997: 235). Hacia finales del siglo XX existen apenas pequeños enclaves de lengua quichua, y es notorio el impacto cultural de la migración hacia los Estados Unidos y países europeos como Italia y España.

Durante la tercera década del siglo pasado tuvieron lugar importantes movilizaciones campesinas que vale la pena recordar, aun cuando se tratara de un fenómeno regional, pues la fuerza y durabilidad de la protesta beligerante (bajo la forma de alzamiento) debió tener un impacto simbólico importante a nivel nacional, reforzando los estereotipos de los indígenas como “levantiscos” y “desobedientes”. Es interesante también que la memoria de dichos eventos sea aún parte de la memoria oral viva, inspirando por lo tanto la movilización de nuestros días, como lo confirma nuestro interlocutor José María, de la comunidad de San Juan, presentado más adelante:

²¹ La minifundización sería también el resultado de ciertas particularidades históricas de la tenencia de la tierra, puesto que en la región no existió la institución del mayorazgo.

Esta población de San Juan por historia es acostumbrada a luchar ya sea por [contra] los impuestos de los terrenos o por la carestía de la sal, este pueblo tiene esta tradición de enfrentar al propio ejército o fuerza pública, cuando se han sentido amenazados los intereses de su pueblo²².

Los acontecimientos del decenio de 1920 tuvieron como escenario central la ciudad de Cuenca y sus alrededores. La conmoción social y la zozobra de las elites cuencanas se ahondan en marzo de 1920, cuando se aprestaban a conmemorar el Centenario de la Independencia y dominio criollo. La inconformidad, en primera instancia, crecía a propósito del empadronamiento de los vecinos de las parroquias rurales de la comarca, que serviría de base para el llamamiento a realizar una “minga”²³, o “contribución” de dos días de trabajo. El empadronamiento fue entendido por los campesinos como un presagio para el cobro de tributos y tal lectura, posiblemente, trajo a la memoria de los más viejos los censos coloniales²⁴, cuando se contaba a la población y se la clasificaba en categorías socio-raciales para dirimir sobre aquellas que serían contribuyentes. Y efectivamente, las autoridades habrían pensado sufragar los gastos de las conmemoraciones del Centenario del dominio criollo mediante la imposición de contribuciones.

Baud interpreta que este intento de empadronamiento y la convocatoria a la minga no eran sino la muestra del retroceso del Estado liberal, cuyo discurso formalmente había exhibido una retórica anticlerical

22 Así relata José María lo que conoce acerca de los eventos de la década del veinte del siglo pasado: “Esta comunidad tiene larga historia de luchas [...] Habían los guardas para el contrabando, de los cucaras. En los censos por ejemplo, venían los militares que se ponían de acuerdo con los curas, pero los indígenas no estaban de acuerdo porque era para cobrar impuestos. Hubieron grandes levantamientos, se comunicaban mediante las quipás, se quipaba por las bocinas y la gente se reunía. Había el problema de la sal, era un problema regional no solo de San Juan. Los de San Juan fueron a Gualaceo, se tomaron las oficinas, quemaron los archivos, por eso las personas mayores de 60, 70 años no tienen partida de nacimiento. También se enfrentaban con los militares. En el cerro de Pishi un dirigente muy importante colocó disfraces de polleras, ponchos en unos pencos, luego cuando los militares subían a constatar cuántas bajas habían hecho, más bien los indios les hacían rodar piedras y salían disparados. La pucara era un arma de piedra y arco, había toda una preparación para actuar en caso de enfrentamiento”.

23 La “minga” representa el reciclaje colonial de una forma prehispánica de trabajo, utilizada durante la República en la construcción de obras públicas en la ciudad. Tal convocatoria se hizo, por ejemplo, durante los primeros años del siglo pasado, para la construcción de la nueva iglesia catedral de la ciudad.

24 Aún a mediados de siglo, los censos evocaban las pretéritas finalidades que perseguía el Estado al realizar esos eventos. Escuché a un participante del censo de 1950 relatar que fueron perseguidos por los campesinos del sur del país, salvándose al acaso de la muerte, al refugiarse en una casa de hacienda.

y proindigenista, promulgando, además, una legislación que aunque sea formalmente intentaba frenar formas extremas de explotación. Los campesinos indígenas habrían absorbido tales ideas, denunciando los abusos de autoridad, los excesos de terratenientes y el clero, siendo el blanco principal de las movilizaciones los funcionarios del Estado y no precisamente los terratenientes (Baud, 1997: 238). Este intento se hacía también en el contexto de la terminación reciente de una hambruna que habría asolado la región.

Después del asesinato de Eloy Alfaro y el establecimiento de la alianza liberal-conservadora, durante el gobierno de Leonidas Plaza en el Austro se produjo una recuperación de la hegemonía clerical-conservadora que condujo a “un cambio gradual de las estructuras de poder”, sin que la intervención del gobierno central en las políticas regionales haya logrado modificar tal recuperación (Baud, 1997: 239). La “restauración” tenía lugar, entonces en un contexto adverso en los planos ideológico, económico, social y político. Con este evento se inicia una década de inconformidad y protesta beligerante que difícilmente podía dejar de afectar las percepciones políticas sobre los indígenas.

Como se ha mencionado, un factor importante de la insurgencia campesina sería el surgimiento de nuevos liderazgos, en el contexto de la existencia de nuevas identidades políticas colectivas constituidas en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, después de la abolición de la esclavitud por Urbina en 1852, de la declaratoria de la ley de “manos muertas” (estatización de los bienes de la Iglesia) y la supresión del concertaje y otros cambios legislados durante los gobiernos de Alfaro y Plaza en las primeras dos décadas del siglo XX. Para la formación de estas nuevas identidades habría contribuido, asimismo, la declaratoria formal de la “ciudadanía”, pues al ser aceptados como tales “veían ahora la oportunidad de hacer valer los derechos que supuestamente debían ir con esta denominación. Los nuevos medios simbólicos y discursivos les permitieron articular sus demandas y hacer valer sus derechos a la educación, a liberarse de la opresión y a oponerse a los impuestos injustos y otros abusos” (Baud, 1997: 246).

Si Baud está en lo cierto, tales identidades colectivas de la población rural de la comarca azuaya podrían tener por eje un cierto sentido de pertenencia y “derecho” refrendado por la difusión de un imaginario liberal-indigenista que habría desembocado en una “ciudadanía de sentido común” y sentimientos de ecuatorianidad que estaban siendo atropellados por el retorno de las contribuciones. De otro lado, estos procesos se vincularían a tendencias hacia la individualización que se estarían cristalizando por la dispersión de las unidades productivas, de tal manera que, la insurgencia de la década de los años veinte se explicaría también por la relatividad de la dominación personalizada de

hacendados, quienes no habrían tenido la capacidad de asfixiar el descontento y la existencia de ciertos niveles de interlocución directa con el Estado, a través de las instancias locales. Todas estas particularidades históricas en la mediana duración podrían estar contribuyendo a la formación de las identidades políticas colectivas actuales, configurando una relación distinta con la “comunidad imaginada” y con lo público, en contraste con los procesos históricos de la Sierra centro-norte, más indígena y con predominio del régimen hacendario.

Además de estos factores de orden histórico, para comprender las identidades étnico-políticas locales es menester contemplar los contextos contemporáneos, pues hoy en día, la emigración o más exactamente “el exilio económico”²⁵ a gran escala y las remesas de los ausentes (desde 1999, este rubro supera los montos de inversión directa, ascendiendo en el 2003 a unos dos mil millones de dólares, (ILDIS, 2003), lo que constituye un colchón importante para paliar las carencias originadas por la crisis económica y la inveterada depresión económica regional) podrían hasta cierto punto, estar generando la ficción de inclusión social, sin una garantía real de ciudadanía social. Por último, otro elemento configurador de las identidades políticas contemporáneas del campesinado azuayo ha sido el acceso a la universidad, en torno a la cual se gestan procesos políticos y culturales de impacto regional. Estos sectores acceden a la formación superior, sobre todo, a partir de los años setenta.

A pesar de estas circunstancias en las que se alentarían sentimientos de pertenencia, aún hoy el campesinado establece relaciones conflictivas con la sociedad señorial urbana, pues las elites cuencanas, que oscilan entre la reivindicación de estirpe y una condición burguesa y pequeñoburguesa, están permanentemente preocupadas por acrecentar su capital simbólico y, aunque frecuentemente de manera larvada, insisten en distinguirse alterizando al campesino, al “cholo” o “longo”, en la jerga local, reproduciendo las subalternidades, discriminando y bloqueando cotidianamente su movilidad social.

Un componente fundamental de los sectores movilizados en el Azuay es el campesinado mestizo, aunque como veremos, existiría una búsqueda de reetnización, por lo menos en las declaraciones de algunos dirigentes. La protesta de estos sectores es mucho menos ritualizada y con escasa presentación de elementos simbólicos en comparación con la de los indígenas de la Sierra centro-norte, lo cual significaría por un lado, la poca importancia concedida a la “invención de tradiciones” (en

25 Dada la magnitud del fenómeno migratorio de los últimos años y de que la finalidad de la mayoría de ecuatorianos que optan por tal salida como una posibilidad misma de sobrevivencia y no simplemente como una mejoría de los niveles de vida y consumo, propongo utilizar el concepto político de “exilio económico” en lugar del técnico “migración”.

un reafianzamiento como mestizos) y, por otro, la continuidad de los repertorios de la movilización en comparación con la de las dos últimas décadas. En todo caso, actualmente en la zona existirían dos vertientes del movimiento reivindicativo: la mestiza, predominante, y la indígena, más reciente y menos pronunciada, vinculada a la CONAIE.

Pasemos ahora a analizar los contenidos de las representaciones que emergen en los testimonios recopilados.

ENTRE LA LUCHA Y EL ÉXODO

Al encaminarse hacia los campos aledaños a la ciudad de Cuenca, sorprende el paisaje aldeano. Hoy en día, las tradicionales casas de adobe con precarios servicios en su mayor parte han sido sustituidas por sólidas casas de ladrillo, muchas de ellas de dos pisos, con reluciente tejado y cuidadosamente pintadas. Corren, inclusive, anécdotas de que adentrándose a uno de los caseríos en alguna de las casas edificadas con dinero enviado del exterior existiría un elevador, que a falta de energía eléctrica ha sido convertido en corral para aves y cuyes. Quedan, desde luego, lo que parecerían “pueblos fantasmas”, en los que no solamente ha impactado el drenaje migratorio, sino donde no existe dicha renovación arquitectónica, y donde la miseria se despliega en sus más escabrosos detalles. También el paisaje humano ha cambiado durante los últimos diez o quince años, pues en muchos pueblos ha disminuido notablemente la población masculina adulta, dando paso al predominio de infantes, mujeres y ancianos/as. Esta modificación obedece a la fuerte ola migratoria que asola a las provincias serranas del sur, pero que paulatinamente se va extendiendo a la mayor parte del país. Si hace algunos años la búsqueda del exilio económico se dirigía a los Estados Unidos, hoy en día se la orienta a España e Italia, y al éxodo se han sumado masivamente también las mujeres y los jóvenes.

Los fenómenos migratorios, derivados de la inveterada depresión económica de la región, no solamente afectan a la disponibilidad de mano de obra, sino que ejercen una influencia nefasta en el ámbito de la familia. Existe, sin embargo, una cierta “compensación” a esta enorme descompensación social y humana: las remesas de los emigrantes, que sostienen la dolarización, y que constituyen uno de los rubros mayores de ingreso de divisas. La afluencia de dólares y euros provenientes del exterior ha permitido que sus beneficiarios mejoren sus niveles de vida, y aun que se establezcan patrones de consumo de bienes globalizados. Pensaríamos que, precisamente, tal consumo y la mejora de la calidad de vida en el aspecto material generarían en muchos de los beneficiarios de la emigración de sus familiares un sentimiento de inclusión social, ficción que se despliega de cara a la marginación y xenofobia que experimentan muchos emigrantes en las tierras de destino. Así, el éxodo de

compatriotas y la desconstitución del tejido social y familiar, el cambio de patrones de consumo material y simbólico, el déficit y la baja calidad de los servicios tales como la educación y la salud, constituyen el panorama en el que se despliega la protesta hoy en día, en una parte importante del país y, ciertamente, en la provincia del Azuay.

Es preciso mencionar que son casi inexistentes los trabajos explicativo-interpretativos sistemáticos y actualizados sobre el tema de la migración, y su relación con la situación de la tenencia de la tierra en la provincia del Azuay. De la misma manera, el discurso oficial y el discurso académico se han quedado en la epidermis del problema, orientando sus diagnósticos más bien hacia el tema de la emigración *per se* y sus efectos familiares. Por lo tanto, es urgente un esfuerzo sostenido de síntesis sobre dichos tópicos. No obstante, se pueden ofrecer algunas estimaciones provisionales: en criterio de Susana Rojas, el origen de la emigración masiva en el transcurso de los años ochenta estaría en la dificultad para diseñar estrategias de supervivencia, en el contexto de la minifundización de la tierra; fenómeno que se habría acentuado después de la reforma agraria de 1964, y sobre todo del impulso reformista de los gobiernos militares de la primera mitad de la década de los setenta. Agravarían la situación la falta de crédito agrario, de capacitación, y de provisión de tecnología y semillas mejoradas. Estas circunstancias obligarían a millares de campesinos a hipotecar las tierras a los “coyotes” –personas que se encargan del traslado ilegal de los emigrantes y su paso por la frontera entre México y los Estados Unidos–, o a la venta para sufragar los gastos del viaje; ocurre también que las tierras quedan abandonadas. En la segunda ola migratoria, en los años ochenta, el incentivo para el viaje era el envío de recursos para la compra de pequeños lotes que permitieran la expansión de la frontera agropecuaria familiar²⁶.

En todo caso, si bien la tierra fue un referente importante de los relatos identitarios de la generación de emigrantes de los años ochenta, en la actualidad existe un incentivo más para la emigración –que va cobrando importancia–: acrecentar el capital simbólico personal y familiar a través del consumo suntuario. Por otro lado, sería urgente explorar la hipótesis sobre si la crisis social y la solución migratoria incentivan la liberalización del mercado de tierras en el Azuay, cerrando el círculo vicioso del déficit de ciudadanía y distorsionando el sentido de esta.

Ahora bien, según Jorge, un interlocutor presentado en páginas siguientes, la ley de Desarrollo Agrario de 1994, que incentiva la venta

²⁶ Agradezco a Susana Rojas por compartir las reflexiones derivadas de la investigación desplegada para su tesis de maestría en el curso de Género y Desarrollo, por la Universidad de Cuenca.

de las tierras, surtiría un efecto benéfico desde el punto de vista del deseo de emigrar, pues tales acciones, vedadas por la legislación anterior, se acoplan con la búsqueda de los campesinos interesados en la comercialización de la tierra para las erogaciones del viaje emigratorio. Por otro lado, entre los beneficiarios de esta situación se contarían los propios “coyotes”, no solamente por el ingreso pecuniario que les reporta la actividad ilícita, sino porque muchos de ellos estarían concentrando la tierra dejada, en una u otra circunstancia, por los campesinos emigrantes. De tal manera, las modalidades de tenencia de la tierra se ubican en el centro del problema de la migración, haciendo girar en su torno, asimismo, la cuestión de las nuevas identidades políticas y sociales.

Los insumos de las reflexiones que siguen tienen fundamentalmente dos procedencias: la primera, son los distintos eventos en los que participó la militancia y dirigencia de la Federación de Organizaciones del Azuay (FOA) entre los meses de febrero y junio del año 2002 (tales como asambleas, marchas, etc.), y la segunda son las entrevistas con dos de sus militantes. La FOA fue fundada a mediados de la década de los años noventa, y aglutina básicamente a organizaciones campesinas: juntas parroquiales, juntas de agua y otras organizaciones. La labor del equipo de dirigentes de la Federación gira en torno a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes rurales de la provincia: se lucha por la dotación de diversos servicios –agua potable, luz eléctrica, la continuidad de servicios que brinda el Estado a través, por ejemplo, de guarderías–. Eventualmente, bajo el patrocinio de la Federación se ventilan, asimismo, conflictos de tierras, como se verá más adelante; sin embargo tales conflictos no necesariamente están inscriptos en la matriz clásica de lucha por la tierra en contra del latifundio, sino que adquieren otras modalidades. Pude observar también que la dirigencia de la FOA coadyuva de manera activa a la existencia de una esfera pública local, articulada en torno a la actividad de un grupo de dirigentes provinciales en estrecha interacción con los dirigentes cantonales y parroquiales; los temas que se dirimen en esos espacios giran en torno a la demanda de servicios básicos en las parroquias rurales y anejos.

De la misma manera como procedimos al analizar los testimonios de los interlocutores cotopaxenses, aquí es menester considerar la diversidad de experiencias, competencia e intereses de los interlocutores.

EXPERIENCIA, VISIÓN DEL MUNDO SOCIAL Y PRODUCCIÓN DEL CONFLICTO

JORGE

Con 33 años, este interlocutor oriundo de una parroquia rural de Cuenca, es el dirigente más visible de FOA; siendo abogado de profesión, Jorge no solamente organiza y dirige la protesta, sino también orienta casos de

disputas de tierras, algunos de los cuales asumen formas inusuales y, como hemos dicho, distantes del modelo clásico de lucha antilatifundista.

Este elemento puede verse en el conflicto que mantiene la FOA y, en particular Jorge, con un organismo no gubernamental de origen extranjero. Según el relato de Jorge, el campesinado de uno de los cantones del Azuay se habría levantado en contra de dicha ONG y habría ocupado las tierras que esta adquirió en la zona. La indignación de la comunidad habría sido suscitada porque el organismo habría “traficado” con la miseria, enviando a Europa fotos de niños harapientos y sucios, para solicitar recursos económicos; habiendo recibido los fondos, éstos habrían sido utilizados para la compra de una finca, que no fue destinada para una escuela de capacitación para los campesinos, tal como rezaba el acuerdo con la comunidad, sino que se habría constituido en propiedad de la fundación. Por otro lado, las tierras de la finca habrían sido dadas “a los compañeros para que trabajen al partir, sembrando maíz”; al tratarse de “formas arcaicas, proscriptas en la legislación ecuatoriana” la población se habría levantado con el respaldo de FOA, a cuyos dirigentes se les ha acusado de instigadores.

El conflicto desembocó en un juicio y su sentencia fue dictada en julio de 2002. Sin embargo, el conflicto dista de ser una simple disputa a ser resuelta por la vía legal, pues, por una parte, desde la perspectiva del acusado y su equipo, se esgrimen argumentos político-doctrinarios –que giran en torno al carácter de clase del derecho en la sociedad burguesa– y, por otra, se ha aglutinado a una gran cantidad importante de organizaciones sociales provinciales en respaldo al dirigente, hecho que pudo ser evidenciado el día de la audiencia de juzgamiento, cuando una manifestación de aproximadamente cuatrocientas personas demandó la absolución de los acusados. Se trata, evidentemente, de una politización de demandas y reivindicaciones.

Para comprender el caso de Jorge, la experiencia debe ser pensada retrospectivamente, desde su actual condición de profesional y político, portador de expectativas de igualdad y bienestar. Tales expectativas se entrelazan con dos vertientes de la experiencia previamente constituidas. La primera vertiente se origina en el ámbito personal y familiar; y la otra proviene de su confrontación con el mundo social, sus instituciones y su choque con la sociedad señorial:

Cuando mis padres eran peones de hacienda y los patrones no tenían el menor empacho de gritarles, de hacerles que madruguen a las cuatro de la mañana para ir al ordeño y uno de pequeño tiene mucho sueño, estaba pensando conciliar el sueño y ya también levántense para ir a la hacienda y a trabajar y doblar el hombro en las lampeadas en las deshieras. Y alguien

que se pare un ratito a enderezar la espalda porque está constantemente agachado, ya le gritaba el patrón: “qué pasa, por qué está parado”. Todo eso hizo que en algún momento haya que buscar por lo menos una equidad, sino una igualdad, por lo menos una equidad. Y fue una rebeldía interna que tenemos, creo que como herencia de nuestros antepasados, los cañaris que fueron muy rebeldes.

El momento de producción del conflicto estaría vinculado a la experiencia urbana, a la experiencia del primer empleo como burócrata, cuando empieza a procesar los recuerdos de la infancia y confrontarlos con el presente, posiblemente a la luz del acervo de conocimientos universitarios y de las enseñanzas de la teología de la liberación. En tal sentido, la perspectiva marxista desempeña el papel de contexto general de diagnóstico:

Les dije a nuestros compañeros: “creo que deben invertirse las cosas, si la gente de la ciudad viene acá, ellos si pueden venir al siguiente día, porque ellos están en la ciudad pero los del campo tienen que hacer enormes esfuerzos económicos, de tiempo y de todo para poder asistir a una oficina y encima que se le haga demorar, que le hagan esperar y después que le digan que vuelva después de una semana o de quince días”; me parecía que era una doble desatención, doble engaño y eso a uno le mantenía, iba acumulando, acumulando.

La experiencia de “sufrimiento, el padecimiento, la marginación, la segregación racial incluso, la exclusión social, el menosprecio que se tiene hacia los campesinos, a los indios” habría desembocado en un trabajo organizativo, pues:

Se nos ve desde los hombros para abajo, pensar que nosotros somos útiles solamente para coger el pico y la pala y los que ven de arriba ven eso con desprecio. Pensar que eso es solamente para los indios, para los que tienen buenos músculos y el resto está reservado para la elite inteligente.

Ahora bien, este flujo de la experiencia constituida en el ámbito de lo personal desemboca en un relato mayor sobre la sociedad, elaborado a base de la formación universitaria, y que condensa narrativas provenientes de la teología de la liberación, el marxismo y otras narrativas de matriz ilustrada. Es notorio como, de tal fusión, este interlocutor hace emerger dos redes centrales de nociones, que se tejen en torno a las polaridades “riqueza-pobreza”, y “campo-ciudad” (las redes de nociones mencionadas están esquematizadas en el Cuadro 4 del Anexo).

Hemos mencionado la presencia de otra red de oposiciones, que teniendo como eje las antípodas “ciudad-campo”, se proyecta hacia la construcción de evaluaciones de las relaciones étnicas. ¿Cuál es el lugar reservado al elemento étnico en la gestación del conflicto?

Lo étnico aquí tiene un lugar diferente al que ocupa en el discurso de los cotopaxenses, pues si en aquel es el punto de origen para desplazarse hacia la demanda de una ecuatorianidad plena y disolverse en ella, aquí parece expresar la búsqueda de una ligazón ancestral no necesariamente evidente –pues la “mismidad” ha sido degradada por el estrecho contacto con un mundo urbano-señorial-ilustrado, donde la lengua ancestral se ha perdido dando paso a un castellano incrustado de quichuismos– que también debe llevar a una ecuatorianidad plena. Es una suerte de dispositivo *ad hoc* en un relato mestizo “cholo” que se desea disolver en lo indígena, en pos de raíces, buscando idílicamente reanclar en el “mundo campesino que es un mundo sencillo humilde, transparente, lleno de reciprocidad, lleno de comunión”. Veamos a través del siguiente diálogo la maleabilidad de la identificación étnica:

P.: ¿Campesino o indígena?

R.: Bueno, la esencia sería indígena, yo tengo por varios lazos el hecho de ser indio y no hay que disfrazarse para ser indio, yo me pongo el poncho, pero cuando necesito ponerme. Cuando necesito, para cubrirme del frío, y para eso en Tarqui me pongo el poncho y me pongo el sombrero, pero aquí si estamos en calor no voy a ponerme el poncho porque eso es un disfraz y peor para hacerme de un objeto pintoresco. Pero sí, ser indio significa para mi practicar eso, creer en lo que hago [...], entonces creo que indio se es por lo que uno hace, por lo que uno está fundido con ellos. Y campesino por lo que es un término medio. Yo lo utilizo, porque hay unos compañeros que por su falta de conciencia firme y por lo que nos han hecho (porque a alguien si le dicen indio es un insulto, a mí que me digan indio no es un insulto, por mi nivel de preparación, más que preparación por mi nivel de conciencia), pero si dice a un compañero indio él se siente ofendido. ¿Por qué? Porque nuestros patronos siempre nos trataban “indio hijo de ...”, nos trataban de esa manera, despectivamente, entonces si nosotros llamamos así la gente un poco se resiste, pero si decimos campesino no es un insulto, para algunos también sí es un insulto. Alguien decía que nuestra identidad no debe ser indio sino debe ser “longos”, pero yo digo: “si a indio nos resistimos a longos más”, porque cuál es la forma de insulto de los que se creen de arriba: “longo de mierda”, “longo de tal”, entonces no creo que es lo más co-

recto. Indio también en términos semánticos es equivocado porque ustedes saben, la equivocación de Colón. Pero el hecho de ser indígena, de ser de los pueblos originarios, eso sí con mucha dignidad, con mucha honra, con un orgullo sano, por todo lo bueno que pueden haber sido nuestros antepasados. Pero yo creo que sí debemos llevar eso muy adentro, sobre todo por su formación social y lo que eran, el convivir, cómo se desenvolvían los lazos de reciprocidad, de solidaridad auténtica, sin esperar de nada, pero claro, la compensación era natural, por eso hasta se dice “con una mano doy y con la otra recibo”, eso era la vida campesina, eso era la vida comunitaria. Yo recuerdo que nos convidábamos desde la candela, nos convidábamos la sal, antes la candela, no había ni siquiera el cilindro de gas, no había el fósforo y como la candela estaba todo el tiempo prendido en el fogón, entonces nos convidábamos eso, qué no nos convidábamos, todo nos convidábamos.

Jorge menciona haber impulsado la creación de una organización indígena a nivel provincial; sin embargo, su identificación étnica es bastante variable. Vemos que un anclaje en lo no-español se combina con la ausencia de autoadscripciones rígidas; tal o cual autoidentificación (indio, campesino, longo, descendiente de los pueblos originarios) es usada de acuerdo a las circunstancias. Por otro lado, la invocación de lo étnico se da en el contexto de una confrontación que podría ser la más abarcativa: la confrontación campo-ciudad, que expresaría, a su vez, la confrontación de los sectores mestizos del área suburbana con la sociedad señorial. En tal contexto, el otro del “indio”/“descendiente de los pueblos originarios” no es estrictamente el blanco, sino el patrón, el rico urbano. Entonces, más que una oposición indio-blanco, tendremos la siguiente superposición o condensación de equivalencias en dos ejes: el primero, “indios-pobres-campo”, y el segundo: “patrones-ricos-burguesía-clases dominantes-ciudad”.

El extenso párrafo citado también da cuenta de la ambigüedad de los sectores mestizos, de la gravitación de la búsqueda de “blanqueamiento”, de ascenso social en su autodefinición.

JOSÉ MARÍA

Algo similar observamos en el testimonio de José María, de la comunidad San Juan de Gualaceo:

El pueblo debe identificar sus raíces, su historia, sencillamente ha perdido su identidad, mis padres han sido indígenas, yo soy de apellido indígena y no me voy a perder de esta identidad, y lo digo con orgullo. Muchos sectores ya no quieren identificar-

se como tal, no quieren identificarse con este lenguaje, pero no podemos negar lo que somos. He visto también disfraces, gente con la vestimenta indígena y con corazón de gringo. No se debe solo actuar, se debe ser consecuente con lo que yo soy. El culpable es el sistema, que yo me avergüence de mi raza, de mi condición, que sienta humillación, es por eso que debemos identificarnos, tanto vale la raza del gringo, la española como mi raza, que no puedo humillarme bajo ningún concepto, por qué voy a avergonzarme? Hablo mi lengua “*ñucanchi shimi*”, el gringo no se avergüenza.

Para el caso del campesinado mestizo, la recuperación de la lengua quichua indicaría, más que el interés por la de reetnización, la búsqueda de revalorización frente a la ciudad señorial. Quizá por eso la adscripción como indígena es apenas barruntada, no es categórica ni se caracteriza, aquí, por un énfasis en la diferencia. La identificación como indígenas produce relatos de autenticidad, justifica la demanda de un lugar social de ciudadanía. La diferencia en este caso está destinada a alimentar un sentido de igualdad y legitimidad, a través de la exaltación de los valores de lo rural y de lo indígena.

¿Cómo se anuda en este caso el conflicto social al enunciado étnico? La clave sería aquí la demanda de servicios urbanos en el campo, así como el tema del empleo, el tema de la tierra está ausente. Probablemente, el acceso a servicios y bienestar en el campo, a través de la creación de fuentes de empleo, podría frenar la emigración. Es justamente lo que Jorge reclama:

¿Cómo es posible que los servicios sigan llegando a lomo de mula a los sectores más alejados? A la ciudad llegó primero el agua, la luz eléctrica, el Internet; en los campos todavía no se conoce lo que es el Internet, el e-mail ni nada de eso, entonces yo no sé si eso llegará alguna vez. Y sobre todo más allá de que algunas cosas claro que son necesarias, el Internet y eso es importante, si lográramos una mayor liberación nuestra sería tener una gran educación, el estar claros, precisos de dónde venimos, cuál es nuestra identidad, en dónde estamos desarrollándonos, y decidir qué es lo que queremos: vivir en comunidad o vivir fuera de la comunidad. El rato que conseguimos eso estamos libres. La educación no es, pues, dos más dos es cuatro y saber rezar mecánicamente como el padrenuestro, la educación es saber diferenciar el porqué de las cosas, el porqué de las clases sociales, el porqué de la explotación, cuando estemos educados estaremos libres y cuando estemos libres sabremos tomar la mejor decisión. Y ahí sí cuando estemos li-

bres realmente jamás nos gobernará un dictador, uno de estos que pretende tenernos como un rebaño.

Ciertamente, en el centro de la demanda social y política estaría el tema de la modernización: de la vida y de las mentalidades. El asunto, empero, se levanta, a diferencia con el proceso dominante en la Sierra ecuatoriana centro-norte, prevalecientemente desde una formación ideológica configurada por la matriz clasista, y en esa perspectiva la invocación a lo étnico formaría parte de una estrategia de “enclasmiento” (a continuación analizaremos esto más detenidamente). De ahí derivaría también una cierta preponderancia de pautas propiamente políticas por sobre las pautas morales, aun cuando tales rasgos asumen por momentos una coloración reiteradamente doctrinaria y lejana de las politicidades emergentes durante la última década.

POLITICIDAD Y PROYECTO POLÍTICO

Analicemos ahora las nociones sobre el manejo y acceso al poder, las nociones sobre la autoridad y los partidos políticos, en suma, las conceptualizaciones y prácticas frente al sistema político. No se puede, sin duda, afirmar que la única fuente de las representaciones que preceden la protesta campesina e indígena del Azuay sea la matriz marxista. Sin embargo, muchos dirigentes populares tienen un fuerte anclaje conceptual en esa doctrina, al punto que podríamos considerarla como una de las matrices *–mutatis mutandis–* más importantes de comprensión y diagnóstico de la sociedad; dicho sea de paso, tal matriz ideológica ha marcado una impronta en la formación de expresiones políticas de centroizquierda en la región; en general, una característica de la formación partidaria regional sería la existencia de partidos políticos “clásicos” tales como el Movimiento Popular Democrático y el Partido Socialista (con su correspondiente gravitación en el tenor de la protesta), y de una relativa debilidad de partidos “étnicos” como *Pachacútek*. Es crucial también la importancia de la universidad estatal en la vida comarcana y regional. La frecuente vinculación del campesinado a esa institución es también la fuente de la politización de la protesta. Politización que al calar en las organizaciones populares ha dado como resultado la conformación de un importantísimo polo de la resistencia nacional a la instauración de las políticas neoliberales.

En materia de resistencia al modelo de ajuste estructural es notable, por ejemplo en los últimos años, la ejercida contra la privatización de la Empresa Eléctrica Regional centro-sur. Este proceso, si bien fue hegemonizado por corrientes políticas de centroizquierda, involucró a un amplísimo espectro de fuerzas, que incluye a la derecha

moderada²⁷. Tal postura obligó al gobierno a rever la convocatoria a la venta de la empresa, y en torno a ella se articuló una oposición nacional a la privatización de la comercialización de energía, prevista como un paso crucial de la profundización del ajuste.

Tal es el ambiente político regional. Y es en este contexto que se despliegan expresiones de protesta radicales, como aquellas en las que participan nuestros interlocutores. De todas maneras, aunque el discurso de su dirigencia se refiere también al elemento étnico, la FOA representa claramente un enclave “campesinista”, y su discurso político se estructura con contenidos bastante clásicos.

Ahora bien, en el caso de Jorge, hemos dicho que una de las narrativas de diagnóstico social que esgrime es de origen marxista. En gran medida, tales ideas alimentan también a nuestro interlocutor José María, quien pugna por la radicalidad de la protesta y la “conciencia” [de clase], en lo que se refiere a la oposición al “modelo neoliberal”:

[...] hemos escuchado el llamado a las movilizaciones de otros sectores de la sociedad, no hemos quedado relegados de estas protesta, pero siempre hemos aprovechado esos espacios, no hemos protestado por protestar, sobre todo cuando reivindicamos la condición de la pobreza, de la miseria o frente a la política neoliberal, aunque esto no está suficientemente reflexionado por los sectores campesinos, ya que falta una verdadera conciencia por parte de los campesinos para que salgan no obligados por una multa.

Así, los contenidos estructurantes de la alocución de José María parecen repartirse en torno a dos ejes: uno, el diagnóstico de la política neoliberal y sus efectos sociales, y el otro la movilización popular, que llevaría a un cambio de gobierno (un esquema de las nociones vertidas se encuentra en el Cuadro 5 del Anexo).

El sentido con el que José María participa en la protesta, es entonces, el de un gobierno popular, de políticas populares. Y la narrativa del “pueblo”, se complementaría con el ideal de la honestidad como cualidad central del gobernante:

P.: ¿Cómo sería un gobierno que llene sus expectativas?

R.: Primeramente, que sea un gobierno no corrupto, nuestro

27 En la Asamblea Provincial realizada el 28 de febrero de 2002, en la que se dirimió el problema de la venta de la empresa, fue evidente un consenso de rechazo a su privatización. Autoridades locales y nacionales, organizaciones sociales (sindicatos, gremios, organizaciones campesinas y de estudiantes, comunicadores sociales, etc.) argumentaron en contra de la venta una amplia gama de criterios: desde constitucionales, hasta doctrinarios, pasando por la argumentación de orden técnico y empresarial.

país genera recursos económicos pero esa riqueza se la pierde por el tema de la corrupción, no hay una buena inversión adecuada, no se piensa en los sectores pobres, está pensado solo para los sectores pudientes, la política neoliberal está diseñada para eso, el pobre cada vez más pobre y el rico más rico. El gobierno debe ser una persona que ha sufrido en carne propia y esté preparado, para que pueda sostener a un gobierno popular, porque la hegemonía no va dejar.

De otro lado, la movilización estaría motivada por la dignidad:

[...] si algo está mal en el país no queda más que los sectores organizados y que estamos en desacuerdo con el gobierno, no queda más que expresar nuestro descontento, si no lo hacemos seríamos un pueblo desgraciado, un pueblo indigno; bajo esos principios salimos a participar.

La voz de este interlocutor trae una noción sobre la corrupción como fuente de la pobreza, con lo que la politización de la protesta disminuiría.

Hemos mencionado ya que para muchos de estos campesinos mestizos el punto de partida es alguna vinculación con la universidad local (ellos mismos, con título o estudios truncos, o bien algun/a pariente); esto significaría que habría un cierto disfrute del acceso a la ciudadanía social, el mismo que busca ser reafirmado mediante las acciones de protesta. El enunciado sobre lo étnico, en tal sentido, se articularía a la reafirmación de esa condición hoy degradada. Ahora bien, si tal reafirmación se ejecuta mediante “juicios de atribución” que forman parte de actos de construcción del mundo social, cuyos sentidos han contribuido a crear frente a los llamamientos o las amenazas a ese mundo, entonces dicha remisión/reafirmación sería un “acto de enclasmiento” (Bourdieu, 2000: 478). Tal posición se aproximaría a la que exhiben los estudiantes secundarios en su protesta, sobre lo que ahondaremos en el siguiente capítulo. La reafirmación del sentido del mundo social es, en este caso, el punto de partida para la búsqueda del cambio ya no a través de la negociación y el regateo, sino a través de la demanda de la plasmación de un modelo de sociedad que reconozca los derechos sociales. En el ámbito de la emigración, la respuesta a la crisis y la reafirmación de la ciudadanía social se procesarían mediante el “consumo conspicuo”, originado en los beneficios de las remesas provenientes de Estados Unidos y Europa.

Ahora, la reafirmación ciudadana en la región austral se diferencia, en la forma, de la practicada por sus pares de la Sierra norte. En el caso de los interlocutores azuayos dicha reafirmación parecería presentarse como orientada hacia una variante de la “economía políti-

ca” más que de la “economía moral” (de manera prevaleciente pero no excluyente), avanzando hacia la decodificación del sentido de la política dominante. No obstante, al momento de articular acciones cruciales, la incidencia en las definiciones nacionales es efímera, quizá por ser extremadamente localizada y regionalizada. Lo cual es, por cierto, una característica acendrada de todo quehacer político en la ciudad y la provincia; así, rara vez –y el caso de la posición en torno a la venta de las comercializadoras de energía eléctrica es una virtuosa excepción– dichas actuaciones, a pesar de la fuerza de su despliegue, logran revertir el curso de las estrategias nacionales. Se impondría, entonces, como una tarea de los sectores campesinos y otras fuerzas opuestas al ajuste la superación de las perspectivas exclusivamente localistas, así como el diseño de metas de incidencia nacional. Tarea ardua, dada la difusión de la ideología del desarrollo local vinculada al discurso en boga de la descentralización, lo que también se inscribe en el trazado hegemónico contemporáneo, pues se deja la puerta abierta al retiro del Estado de sus responsabilidades en tanto garante de los derechos sociales y, fundamentalmente, a la conclusión del ajuste en sus aspectos administrativos. Por último, en mi criterio, existe un elemento que eclipsa la eficacia política del discurso y el accionar de este sector –y de la mayoría de los que se han movilizado estos años– y es el diagnóstico basado en la corrupción como fuente de los desajustes sociales.

CONCLUSIONES

Me vienen a la memoria dos anécdotas relatadas por nuestro interlocutor Miguel en torno a los momentos más altos de la protesta campesino-indígena de los últimos años. La primera dice que –respecto de la marcha de apoyo que sectores de las bases de la CONAIE habrían ofrecido a Abdalá Bucaram, a cambio de la rectificación de rumbos– al enterarse de la marcha hacia Quito, Bucaram habría proferido: “¿qué quieren los indios hijos de...?” Lo cual, según Miguel, habría enardecido los ánimos de los movilizados, quienes solo entonces habrían modificado su posición para también pronunciarse por la expulsión del presidente: “es por culpa de él mismo que está fuera”, sentencia nuestro interlocutor. La segunda, se refiere también a la actitud de otro mandatario impugnado, Jamil Mahuad, en cuyo gobierno se congelaron los ahorros de gran parte del pueblo ecuatoriano. Miguel rememora que los indígenas solicitaron que el presidente llegara a dar cuenta de sus actos al parque del Arbolito; la intención habría sido castigarlo en cuanto Mahuad se hiciese presente en el lugar de la concentración. Mahuad, obviamente, no concurrió al lugar, y eso también exacerbó los ánimos.

¿Qué nos enseña esta forma inédita de presionar y pedir rendición de cuentas a los mandatarios? ¿Qué nos dice ella de los relatos

que estructuran las identidades políticas de las bases campesinas e indígenas del Ecuador en los últimos años? Deseo advertir que, si bien es cierto que las conclusiones sobre estos aspectos son igualmente válidas para los dos espacios que estamos analizando, la exigencia es planteada con mayor radicalidad por los sectores indígenas del Cotopaxi, los que quizá hayan soportado un colonialismo interno más degradante, en el contexto de una ausencia de oportunidades más pronunciada que en el caso de los campesinos azuayos. Es la diversidad de tales experiencias frente al coloniaje interno es lo que determina la existencia de dos formas diferentes de sentirse ecuatorianos (diríamos: dos “ecuatorianidades”). Considero que una primera noción que estructura los relatos identitarios de los campesinos e indígenas, y que aflora en los testimonios, es la noción de “dignidad” expresada en la intolerancia al estigma; un segundo eje sería la exigencia de respeto político y el cese del engaño “de los políticos”; y el tercero sería el de “autonomía”, enfatizado sobre todo por uno de los interlocutores cotopaxenses quien exige, como parte de las demandas políticas, la entrega de los recursos del desarrollo en manos de las comunidades. Clamor de autonomía que podríamos entender mejor tal vez si recordásemos que uno de los rasgos de la condición de la dominación étnica durante el coloniaje y la época republicana fue justamente su condición de eternos menores de edad.

Dignidad, respeto y autonomía podrían parecer lugares comunes, si no fuese porque estas nociones designan relatos personales y valores fundamentales que han germinado durante las últimas décadas en el seno de las comunidades indígenas y campesinas. Valores y relatos modernos, aunque frecuentemente alegorizados bajo motivos ancestrales, los mismos que se asociarían a nociones de igualdad y fundirían en identidades ciudadanas sobre las cuales se han sostenido en los últimos años momentos significativos del inacabado combate al pertinaz y multiforme “colonialismo interno”. Sostengo, en primera instancia, que esa identidad política ciudadana y ese sentido de pertenencia, en condiciones de igualdad, a la “comunidad imaginada” que emerge de la precariedad del estatuto de ciudadanía, en tanto vínculo jurídico y pilar del contrato social, es la que define –y no a la inversa– el relato sobre la diferencia.

En la protesta campesino-indígena, con la intensificación de la presión por el ajuste, se acentúan también requerimientos lejanos a perspectivas etnicistas, sin que lo étnico deje de estar en el horizonte de las demandas y las identidades, pero sin opacar relatos políticos de corte universalista compatibles con el discurso sobre la plurinacionalidad. En este discurso, se expresa un mérito político de gran alcance: la capacidad de expresar en clave universalista una demanda singular, de deconstruir a través del discurso sobre la plurinacionalidad la dico-

tomía igualdad-diferencia, levantando la tesis del ejercicio de derechos sociales de todos quienes componen la comunidad imaginada de los “ecuatorianos”. Es ello un indiscutible mérito del movimiento indígena, y es precisamente tal capacidad de expresar intereses, necesidades y relatos universales lo que hacia finales del siglo XX convirtió al movimiento indígena ecuatoriano en el más importante y exitoso.

Hemos analizado dos configuraciones político-culturales, de las múltiples posibles entre los diversos segmentos del sujeto indígena-campesino. Su confrontación sugiere que en ambas el momento ideológico detonante de la protesta es el desencuentro entre un sentimiento de ecuatorianidad –de manera más acentuada en los cotopaxenses– y la ausencia de un vínculo real con el Estado y la comunidad política. Es decir, en ambas configuraciones tendríamos una suerte de “protociudadanía”²⁸ (lo hemos denominado, usando un término de Andrés Guerrero, “ciudadanía de sentido común”) sin una ciudadanía social y política efectiva, en el sentido también de acceso a derechos de toda índole y recursos que los garanticen. Sin embargo, tal sentimiento “protociudadano” y las identidades políticas correspondientes se cristalizan de manera peculiar en cada espacio y segmento, en función de las circunstancias históricas de cada región. Así, si en entre los campesinos-indígenas de Cotopaxi, la identidad busca capturar una esquiua ecuatorianidad, en la zona de Azuay el sentimiento es de una ecuatorianidad menoscabada o trunca. A estas identidades se asocian diversos discursos de poder. En tal sentido, los sectores cotopaxenses parecen explicitar más nítidamente una proyección hegemónica nacional.

Es preciso detenerse en el caso azuayo para mencionar que las limitaciones impuestas por el modelo minifundista de tenencia de la tierra sin acceso al crédito han promovido la emigración masiva. En todo caso, quizá la existencia previa de una pauta cultural de emigración, como respuesta a las dificultades para elaborar estrategias de supervivencia frente a la estructura minifundista, ha inhibido el desarrollo de prácticas asociativas como alternativa a la fragmentación de la propiedad, así como la fuerza de la movilización por el crédito y la transferencia de tecnología. De tal manera que las identidades políticas en este contexto se configuran desde el conocimiento de prácticas culturales alternativas que bloquean la constitución de una movilización campesina similar a la de la Sierra Norte.

28 Un paralelo interesante e ilustrativo para entender mejor la existencia previa de tales sentimientos, podrían ser algunos ejemplos traídos de la obra de Hobsbawm *Naciones y nacionalismo desde 1780* (Hobsbawm, 1991). En dicha obra el autor sugiere la existencia de un “protonacionalismo popular”, como sentimiento de pertenencia gestado a partir de prácticas culturales y creencias religiosas, por ejemplo el sentimiento compartido a partir de la devoción de la virgen de Guadalupe, antesala del nacionalismo en México.

La identidad es compleja y, como dice Calhoun, se necesita verla en cada sujeto como múltiple e inestable, y al sujeto mismo es necesario concebirlo en su dimensión agonística y fracturada, así como en tanto discursos enfrentados, en el esfuerzo –sobre todo– por lograr un autorreconocimiento y una subjetividad coherente²⁹ (Calhoun, 1994: 20). Quizá estas sean las pautas teóricas para lograr una visión no simplista de las vicisitudes político-culturales del sujeto colectivo campesino-indígena. Bajo esta luz teórica quizá podamos ver el doblete universalidad-diferencia, no como una dicotomía implacable, sino como un juego a través del cual los discursos del poder van dotándose de nuevas estrategias y contenidos. Por otro lado, para comprender la maleabilidad ideológica de la presentación de dicho sujeto “en sociedad”, se tornaría necesario pensar las identidades políticas expresadas a través del discurso étnico desde el punto de vista de su historicidad, de sus luchas, las mismas que estarían íntimamente vinculadas con los lenguajes de cada época (siendo también el uso de determinados lenguajes lo que torna reconocibles a las reivindicaciones, dotando de eficacia a sus acciones políticas). La plasticidad de los relatos estaría también asociada a lo variable de sus reivindicaciones en el espacio y el tiempo, los repertorios diversos y las alianzas políticas dinámicas.

Visto de este modo, la “novedad” (o mejor el “adanismo”) del actor social sería relativa. Más aun si consideramos que la narrativa identitaria se fortalece en el seno mismo de las comunidades campesinas, después de que el Estado impulsara las políticas desarrollistas en el campo y de que fuera cancelado el tema de la reforma agraria a partir de 1994, con la promulgación de la nueva legislación agraria. Según Manuel Chiriboga, las poblaciones campesino-indígenas de la Sierra, la Costa y la Amazonía habrían opuesto resistencia a la aculturación forzada que acompañó a la acción del Estado desarrollista en el campo, mediante “un despliegue de movimientos de identidad étnica y cultural” (Chiriboga, 1986: 11). La afirmación del deseo de reconocimiento cultural y la exigencia de la ciudadanía social en tanto “ecuatorianos” serían, pues como dos caras de la misma medalla, que hacia finales de la década de los años noventa se constituirían en catalizadores de una nueva idea sobre el “pueblo-nación plurinacional”.

Es preciso señalar que el segmento “clasista” de la identidad se encuentra latente en los relatos de muchos líderes intermedios y locales; segmento que se encuentra superpuesto con otros tópicos discursivos,

29 La cita textual dice “*The struggles occasioned by identity politics need to be understood, however, not as simply between those who claims different identities, but within each subject as the multiple and contending of our era challenge any of our efforts to attain stable self-recognition or coherent subjectivity*” (Calhoun, 1994: 20).

y a veces también transfigurado en demandas ciudadanas generales emergentes de la metamorfosis misma de lo que sería hoy ser campesino, inscripto en varias lógicas económicas y sociales, pero también privado o menoscabado en el acceso a la tierra y a las condiciones para hacerla producir. Recordemos que el levantamiento de mayo de 1994 estuvo motivado en torno a un aspecto crucial de la estructura de la sociedad, la oposición a la tramitación de la legislación sobre la desregulación del sector agrario, tendiente, según el análisis de Verdaguer, a despejar el camino al predominio del libre mercado en todos los sectores de la economía, incluido el agrario (tierra, agua, mano de obra, capitales), a la reorientación de la producción hacia la exportación (“reprimarización”), y a la eliminación de la reforma agraria, incluyendo al propio término (Verdaguer, 1995: 146). En ese contexto, el corte abrupto –y forclusión– de la temática de las relaciones agrarias, la producción y la tierra no han eliminado tales elementos de la identidad, aunque habrían obligado a replantear el contenido de las demandas, acercándolas a las reivindicaciones de los pobres urbanos en general.

Por lo tanto, podemos observar la existencia de una línea de continuidad entre el relato de la reforma agraria y el relato de la ciudadanía social, cubierta con el paraguas “nacionalista”. La demanda de ciudadanía social, por su parte, florece en el preciso momento en que se menoscaba el acceso a la tierra y al empleo, cuando las restricciones en el ámbito de la redistribución se tornan más severas, en el contexto de la crisis económica y el recrudescimiento del ajuste. El movimiento indígena alcanza su apoteosis cuando el relato de la ciudadanía social se torna más universalista que nunca, en el 2000, pero sobre todo en 2001, cuando enuncia “nada sólo para los indios”, lo que torna posible alianzas interétnicas e interclasistas de amplio espectro. Pero, curiosamente, este es también el momento cuando se cierra un ciclo de construcción exitosa de un proyecto de sociedad, pues los compromisos políticos establecidos a partir de entonces llevan a la implosión de sus estrategias, responsabilidad imputable no solamente a sus dirigentes –muchos hoy detentando elevadísimos cargos públicos–, sino también a la transposición de criterios de escasa eficacia política, como la moral, la lógica del regateo y el localismo, a los estilos de enfrentar las tareas de la política.

Sería necesario, por otro lado, saldar cuentas con las perspectivas sobre la corrupción, en tanto fuente de todos los males sociales. Tales visiones, aun cuando correctas desde el punto de vista de la recuperación de un sentido de lo público, al ser exacerbadas en el diagnóstico de lo social no contribuyen al esclarecimiento ni de las metas ni de las alianzas políticas viables.

Por otra parte, observaríamos otras dos limitaciones en las concepciones del quehacer político de ambas constelaciones analizadas.

En el caso de los interlocutores cotopaxenses, la negociación política no es vista en términos propiamente políticos, sino concebida desde los códigos del regateo, y al parecer no está presente una adhesión en base a principios o decodificación de los intereses en juego, sino un respaldo político basado en la reciprocidad, también entendida en términos de las prácticas comunitarias y en la extensión de los códigos domésticos a la esfera pública. Estos serían posiblemente los límites de su quehacer, que han llevado a la “implosión” del movimiento, y a la frustración de su protesta frente a los ideales que decía defender. Y sería una implosión, no solo por el vacío político en el que ha caído la movilización y por la imposibilidad de que su potente presencia inhibiera, por ejemplo, la instauración del régimen de dolarización, sino también en razón del desencuentro de las aspiraciones de las bases, los indígenas comunes y corrientes, con los intereses de sus cúpulas, más familiarizadas quizá con los códigos instrumentales de la política, tal como esta se ha venido practicando.

Caben también unas palabras en torno al carácter de la acción-discurso de ambos grupos de interlocutores. Habíamos mencionado el carácter “táctico”, cotidiano de las prácticas y discursos políticos del grupo cotopaxense, confrontado a los objetivos “estratégicos” inscriptos en las orientaciones generales enunciadas por la CONAIE que apuntan a un nuevo modelo de sociedad. Por otra parte, las orientaciones del grupo del Azuay exhiben una radicalidad “estrategista”, sin que por ello sus acciones tengan mayor eficacia, al menos por el momento.

Las palabras de los interlocutores generan una fuerte sensación de una búsqueda de la inclusión en la sociedad envolvente. Atrás quedaron las luchas por la tierra y las condiciones para la producción, y mientras un sector de los campesinos-indígenas realmente logró una “inclusión”, la mayor parte continúa existiendo en un proceso de precarización. Quizá la mayor limitación de la protesta de este sector sea que esta se inspira en lo que Vakaloulis ha denominado “el paradigma de la exclusión”, que “impregnaría” la ideología; en tanto discurso dicotomizante, tal paradigma supone a la integración como solución a una patología social (Vakaloulis, 1999). Siendo así, ciertamente, basta con entrar a la comunidad ciudadana, no importa cómo. De esta manera se ha perdido la perspectiva de una constitución social fundamentalmente antagónica, que niega precisamente la posibilidad de una ciudadanía sobre bases de equidad.

CAPÍTULO III

DESPUÉS DEL “MOVIMIENTO”: LA PROTESTA ESTUDIANTIL

UNA MAÑANA DE INICIOS DE 2003, a escasos días de haber juramentado para el cargo de presidente de la República del Ecuador, el coronel Lucio Gutiérrez decidió movilizarse hacia su lugar de trabajo, el Palacio de Carondelet, trotando, con atuendo de deportista y seguido por toda su comitiva de seguridad. Debíó recorrer varios kilómetros, entre su residencia ubicada en el norte de la ciudad y la sede presidencial ubicada en el centro histórico de la capital ecuatoriana. El azar quiso que en su recorrido encontrase un nutrido grupo de estudiantes del tradicional colegio de varones “José Mejía Lequerica”, conocidos por su combatividad, protestando en contra de las medidas económicas que su gobierno acababa de dictar, y que seguían de cerca, por su contenido, a las que fueron dictadas por los gobiernos predecesores. Al encontrarse con los muchachos, Gutiérrez se disolvió en la marcha y prosiguió su camino, ahora acompañado de una comitiva mayor en la que se contaban entusiasmados jóvenes. Al arribar al Palacio de Gobierno, el mandatario escogió a varios de ellos y los invitó a compartir su desayuno¹. Conocimos también que en otra ocasión el presidente

1 El historiador Enrique Ayala así manifiesta su perplejidad: “Se ve que nuestro gobierno está en buenas relaciones con el FMI porque ha enviado al Congreso un presupuesto cuyo rubro más alto sigue siendo el pago de la deuda externa. Otro síntoma de tan estúpida vinculación es que se anuncian alzas de impuestos directamente destinados a esquilmar a los grupos medios, aunque inexplicablemente, han logrado el apoyo de fuerzas políticas que en otros gobiernos solían combatir la creación de gravámenes y ahora lanzan a los muchachos a las calles a presionar porque se cobre impuestos a sus papás, a sus profesores, a los empleados, a las enfermeras y secretarías, argumentando que esos son los ricos del país” (*El Comercio*, 2003).

ecuatoriano se habría permitido hacer exhortaciones a los estudiantes secundarios, en pro de las políticas gubernamentales. Así, los/las jóvenes estudiantes de los colegios se habrían convertido en destinatarios del mensaje presidencial.

Días más tarde, una elocuente nota de prensa del diario *El Comercio* del 21 de febrero de 2003 informó que durante la “Marcha de la Esperanza” –realizada por sectores de la CONAIE, *Pachacútek* y otros sectores críticos del gobierno para pedir la rectificación de rumbos– la posición de los estudiantes era contradictoria, pues mientras un sector condenaba las recientes medidas económicas², de un ortodoxo corte fondomonetarista, otro grupo se pronunciaba apoyando la alianza gobernante.

¿Podemos explicar estas manifestaciones de respaldo como resultado de la manipulación de las “inconsecuentes” dirigencias? Diríamos, más bien, que tanto el respaldo como la censura se inscriben en intercambios simbólico-políticos: unos habrían caído en la “trampa” de la identificación populista, mientras que otros habrían podido resistirse a ella. Ambos tipos de expresiones estudiantiles podrían significar muchas cosas, dependiendo del ángulo teórico de visión, pero no ciertamente una indiferencia de los/as jóvenes por la política. Fue sintomático, en ese sentido, el interés del mandatario por neutralizar la contestación estudiantil.

¿Ha naufragado, entonces, la protesta estudiantil en el hedonismo de la cultura posmoderna, como parece derivarse de los diagnósticos de numerosos académicos en América Latina? ¿O la movilización de los últimos años se asemeja, más bien, a una presencia esporádica que, al no caber en el panorama de la “contra-política” (término y noción utilizados por Martín Barbero), se parece a un caminar sin rumbo? Estos interrogantes nos apremian frente a la presencia reiterada, en los últimos años, de jóvenes estudiantes en las calles de las ciudades ecuatorianas. Constatado el hecho, no es plausible, a mi juicio, explicarlo ni como resultado de la manipulación de instancias partidarias burocráticas, ni como mera expresión de la rebeldía como atributo de la edad. Con todo, una mirada objetiva nos exige reconocer que la politicidad de la juventud estudiantil se expresa de una manera irreductiblemente plural, como la sociedad misma; consideraremos, por lo tanto, a las identidades de la protesta como una expresión política más, descollante en determinados momentos y yuxtapuesta, en otros, con manifestaciones tales como la participación electoral de jóvenes, en partidos y movimientos de todo signo, que ha sido particularmente notable en los últimos años, así como en agrupaciones por las veedurías ciudadanas.

² El grupo opositor coreaba, dice la nota: “Sale Lucio en la televisión / anunciando el pinchazo a la nación / anunciando la muerte a la población” (*El Comercio*, 2003).

Durante los últimos años, la academia ecuatoriana ha preferido guardar silencio en torno al tema de la protesta estudiantil. En cambio, ha mostrado interés por los fenómenos de la juventud, asociándolos a la problemática del consumo y la influencia de las telecomunicaciones en la cultura³. Una muestra de este desplazamiento temático es la obra colectiva *Culturas juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad & género*, de Mauro Cerbino, Cinthia Chiriboga y Carlos Tutivén (Cerbino et al., 2001).

Las nuevas perspectivas, como veremos, conllevan la sustitución del enunciado de “joven-estudiante”, por los de “joven-consumidor/a” y “joven-conectado/a” (“chateador/a”). Con ello, si bien es cierto que se enfocan aspectos, tan inéditos como interesantes, de la problemática de la juventud, se habría perdido de vista una dimensión importante de la multiplicidad de las identidades juveniles, pues se ha omitido la coincidencia contemporánea –que es casi automática, al menos en las ciudades– de la condición de tales jóvenes con la de estudiantes. Por otro lado, el olvido del “estudiante” desvanece también la perspectiva de una sensibilidad política y utópica, con su inalienable proyección futurista, que no ha desaparecido del horizonte de la juventud. Con todo, la puesta en escena del tema de la juventud nos daría herramientas para examinar la especificidad de la participación juvenil en las expresiones de protesta y movilización, en momentos de descenso en los niveles de escolarización por efecto de la crisis económica.

En este capítulo propongo un remedio parcial a este vacío, intentando restituir al análisis aquella arista del problema en la que se funden la imagen del joven con la del estudiante, mediante el ensayo de algunas hipótesis en torno a los contenidos de la protesta, los procesos de constitución de las identidades políticas “belligerantes”⁴, así como sobre las nuevas formas y expresiones organizativas, los estilos y prácticas políticas que estarían vigentes, tras el debilitamiento político de la convocatoria de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE). En todo caso, el retomar un tema que yace olvidado en el desván de las ciencias sociales ecuatorianas tiene una marcada desventaja, y, por cierto, las conclusiones serán provisionales.

Deseo, pues, abordar el tema de la protesta, resaltando la presencia cuestionadora de la juventud estudiantil en nuestro país, que si bien

3 Una excepción constituyen los esfuerzos realizados por el CAAP, en materia de seguimiento del conflicto social, periódicamente publicados en *Ecuador Debate* y el trabajo de Mario Unda Soriano *Ecuador: conflictos sociales en el año 2000* (Unda Soriano: 2001). En estos trabajos se enfoca el tema de la protesta estudiantil, aunque solamente como parte del conflicto general.

4 Término utilizado por Javier Auyero.

ha sido latente –aunque incesante– durante los años de intensificación del ajuste, ha tenido también momentos descollantes, conformando un importante telón de fondo, y a veces erigiéndose en una fuerza social tan importante que lograba rebasar el mero papel de auxiliar de las luchas reivindicatorias de los diversos sectores movilizadas. Entre noviembre de 1998 y junio de 1999 tenemos una recuperación de la protesta estudiantil, lo que, en criterio del CAAP, indicaría “una reinserción de ciertos actores sociales en la esfera pública-política del país”⁵ (CAAP, 1999b: 38). Pionera y contundente fue, sobre todo, la movilización estudiantil durante el período que va de diciembre de 2000 a febrero de 2001, anticipándose al levantamiento indígena de enero de 2001 (ver Gráfico 5 y Tabla I en Anexo). Importante fue también la presencia estudiantil en las jornadas de enero de 2002, cuando el gobierno de Gustavo Noboa promovía la venta de las comercializadoras de energía eléctrica; en este contexto, además, se exacerba la criminalización de la protesta estudiantil tanto en el discurso del gobierno como de los medios de comunicación, y la represión policial alcanza su clímax con el asesinato del joven Damián Peña en Cuenca, y la agresión a los/as estudiantes de la Universidad Central, que provocó la pérdida de un ojo de uno de los manifestantes.

Esta eclosión de la protesta de la juventud estudiantil de nuestro país tuvo como referente más amplio el despliegue de la protesta tanto en América Latina (por ejemplo, la prolongada huelga estudiantil en la UNAM durante 1999 e inicios de 2000, o las acciones juveniles contra el alza de precios del transporte en Guatemala, en abril de 2000), como a nivel mundial (las movilizaciones estudiantiles en Indonesia contra el régimen de Suharto, las protestas kabiles en Argelia, las revueltas juveniles de los inmigrantes africanos en Francia, el movimiento *Tutte Bianche* de la juventud desempleada, entre otras acciones) (ver Seoane y Taddei, 2002). José Seoane y Emilio Taddei explican este “retorno de la protesta social” por “el creciente cuestionamiento de los regresivos cuestionamientos del modelo civilizatorio forjado por el neoliberalismo”, así como “por la creciente polarización social generada por dos décadas de aplicaciones de concentración del ingreso que han difundido la pobreza, de la cual los jóvenes son víctimas privilegiadas” (Seoane y Taddei, 2002: 147 y 162).

En tal contexto, el estudiantado ecuatoriano ha sentido tanto la amenaza de la negación de su ciudadanía social y la incertidumbre de

5 En ese momento, la revitalización de la protesta de estudiantes y gremios estaría relacionada con los efectos del impuesto a la circulación de capitales recientemente adoptado por la administración de Jamil Mahuad, así como con el aumento de los precios de los combustibles y también con el no pago de salarios a importantes sectores de la administración pública (CAAP, 1999: 39).

su futuro laboral y personal, cuanto el desvanecimiento del sentido de lo público expresado en la corrupción e inequidad. Nuestro análisis se centra en la ciudad de Cuenca, y sus pautas podrían extenderse a la protesta en algunas ciudades serranas, en las que ha sido particularmente activa la oposición al modelo de ajuste desde 1997, con la participación del estudiantado, sobre todo secundario.

El abordaje del tema tiene como una de sus premisas los conceptos de multiplicidad –y frecuentemente contradictoriedad– de los sujetos sociales, tanto cuando se trata de sujetos singulares, cuanto de sujetos plurales y/o colectivos (Calhoun, 1994: 20). Después de la constatación de que en la modernidad se multiplican los esquemas identitarios, Calhoun apunta la ruptura cualitativa que se opera, puesto que los sujetos se ubican frecuentemente en un flujo de discursos culturales que son aún contradictorios. Siguiendo a Cascardi⁶, este autor señala también que dicha multiplicidad y contradictoriedad estaría vinculada a las definiciones de la inserción del sujeto moderno en una serie de esferas de valores separadas, en las que se tiende a priorizar una de ellas, excluyendo a las otras (Calhoun, 1994: 12).

Para nuestro trabajo interesa, precisamente, la idea sobre la producción de una variedad de discursos correlativos a las diversas esferas de producción ideológica y discursiva, teniendo presente, asimismo, la posibilidad de una presencia simultánea de los sujetos singulares en varias de tales esferas políticas y socio-culturales. Por lo tanto, para efectos del presente trabajo consideraremos como complementarias las facetas de “joven” y “estudiante”. Debo también dejar constancia que las hipótesis y argumentos aquí ensayados tendrían validez para un segmento importante de la juventud estudiantil, pero no se pretende extenderlos a la juventud ecuatoriana en su conjunto, pues estamos conscientes de la complejidad de las circunstancias regionales, de clase, etáreas, etcétera.

Al recuperar analíticamente la confluencia de esas dos circunstancias, la de ser joven y la de ser estudiante, asumimos que esta fusión nos ayudaría a comprender la constitución de identidades juveniles expresadas mediante una politicidad activa y, aun, una formulación político-ideológica explícita. ¿Cuál es el crisol sociológico en el que se funde esta doble circunstancia? El primer factor, el de ser joven, se definiría por lo que Margulis y Urresti denominan “facticidad”, es decir la posesión de un “capital temporal” o goce de “un plust tiempo, un excedente temporal que es considerablemente mayor que el de las generaciones mayores coexistentes”; facticidad vital que estructura una experiencia subjetiva sobre la base de una cronología: la distancia res-

⁶ Calhoun se remite a Cascardi (1992).

pecto del nacimiento y la lejanía con respecto a la muerte⁷ (Margulis y Urresti, 1998: 10). Pero también el hecho más o menos generalizado de encontrarse en disfrute de la –asociada a la facticidad– “moratoria social”, esto es, la postergación de los compromisos de adultez tales como el matrimonio y la procreación, para mantenerse por tiempo variable en instituciones educativas (Margulis y Urresti, 1998: 5). El segundo factor sería la concurrencia a una institución educativa que proporciona un espacio de sociabilidad relativamente estable que facilitaría la organización de la politicidad, la misma que podría ser canalizada hacia el cuestionamiento del orden, en la medida en que el consumo sea, en este contexto, una preocupación secundaria. En su análisis sobre el movimiento estudiantil chino de 1989, Calhoun sugiere las circunstancias que habrían facilitado los pronunciamientos y el radicalismo de los estudiantes durante la primavera de Beijing. Un rol importante en ello habrían tenido la concentración espacial y la organización de sujetos –clase y cohorte–, así como la trama de comunicación entre universidades; pero también la mayor libertad para protestar públicamente, en comparación con los mayores, al no tener que arriesgar las condiciones de manutención de su familia (Calhoun, 1999: 86). En el caso que nos ocupa, y dado que muchos/as estudiantes no son responsables de la jefatura del hogar, también esta situación se convierte en un facilitador para la expresión beligerante.

Ahora bien, si admitimos a pies juntillas un determinismo de la cultura mediática y de los efectos de las telecomunicaciones como inhibidores de la politicidad, parecería casi una paradoja la supervivencia de tales formas de actividad política y contenidos ideológicos en una época caracterizada, según Martín Barbero, por fenómenos como la devaluación de la memoria, la hegemonía del cuerpo, la empatía tecnológica y –fundamentalmente– la contracultura política (Barbero, 1998: 32), fenómenos tamizados por el consumo y la “juvenilización”⁸.

7 Margulis y Urresti desechan las caracterizaciones de la juventud que giran tanto en torno a la edad –sesgo biologicista–, como al consumo de bienes materiales y simbólicos, así como de la construcción del cuerpo como signo de la “juvenilidad”. La definición de estos autores sobre la condición de juventud puede ser resumida en los siguientes términos: “la juventud es un espacio de irreversibilidad menor que la adultez porque es menor la serie de jugadas que se han realizado y mayor la que queda por hacerse, por lo que las posibilidades abiertas son más amplias, lo cual implica una manera diferente de estar en el mundo, con percepciones y apreciaciones distintas, con abanicos de opción más amplios y con una frecuente sensación de invulnerabilidad que deriva de esa falta de huellas previas, raíz de la que emana esa característica imagen de la disponibilidad”. (Margulis y Urresti, 1998: 10-11).

8 Para Margulis y Urresti, la “juvenilización” consiste en un conjunto de signos que atraviesan el contexto cultural actual y emerge del avance de la cultura de la imagen y de la exaltación de lo juvenil “fetichizado por los lenguajes hegemónicos de la sociedad de

¿Se trata, acaso, de manifestaciones aisladas de la politicidad juvenil, o esta existe como campo de posibilidades para otra manera de ser joven en el capitalismo periférico tardío? ¿Son residuos o inercias ideológicas próximas a fenecer? ¿O será, tal vez, que la política –no importa su color y signo– aún da respuestas a las búsquedas de muchos/as jóvenes?

Por mi parte considero que, por fugaces que sean las expresiones políticas antisistémicas del estudiantado –tan fugaces como la condición misma de ser jóvenes y estudiantes–, ellas continúan configurando el panorama de la crítica social contemporánea y, en el caso ecuatoriano, como uno de sus elementos permanentes. Empero, su comprensión exige, ciertamente, abordajes no reduccionistas que nos permitan reconocer la pluralidad de sus manifestaciones, así como las sedimentaciones culturales y políticas en las que germinan.

Si consideramos la imposibilidad de evitar la influencia persistente de la cultura de la imagen y el consumo, al igual que del presentismo y hedonismo que modelan las nuevas sensibilidades y la ideología, quizá una metáfora adecuada para comprender la presencia –aparentemente paradójica– de los jóvenes en la política, sea la del palimpsesto, es decir, un “texto en que un pasado borrado emerge, tenazmente aunque borroso, en las entrelíneas que escriben el presente” (Martín-Barbero, 1998: 32)⁹. Podríamos entonces decir, que en las entrelíneas de la cultura de masas contemporánea –de la antiutopía y la contra-política– son rescatadas las utopías y los íconos políticos de antaño. ¿Bajo qué contenidos se amalgaman estas identidades políticas de jóvenes que, sin dejar de ser hijos de su tiempo, revalidan y resignifican los relatos existenciales de sus padres y abuelos? ¿Cuáles son esas condiciones peculiares que en los nuevos contextos culturales permiten la demanda de reformulación del “contrato social” vigente? Creemos que ni las presiones culturales y psicosociales de la telemática, ni la extensión

consumo”. En tal sentido, a sectores cada vez mayores de la población se les ofrece pautas estéticas, estilos de vida, consumos, gustos, *looks*, “como señales emblemáticas de modernización. La “juvenilización”, por otra parte, estaría adscripta a un espacio “mediado por la publicidad, hipersecularizado, estetizado, medicalizado”, siendo la expresión de “la búsqueda de un cuerpo inalterable, un espejo sin tiempo, una imagen sin pasado y sin las marcas de la historia y puede observarse, en sectores significativos de la sociedad, la caducidad de lazos de compromiso y solidaridad, antes vigentes, y el empleo de parte considerable de sus energías y deseos en el apego narcisista al cultivo y atención del propio cuerpo” (Margulis y Urresti, 1998: 15).

9 Aunque la idea del palimpsesto como metáfora de la identidad ha sido tomada del texto citado de Martín Barbero, dicho autor la usa en un sentido divergente al que estamos proponiendo. Parecería que la metáfora se refiere a la des-historización y des-localización de las culturas, las mismas que, des-localizadas, tienden nuevamente a hibridarse. En esta trayectoria resaltarían como elementos notorios la devaluación de la memoria, la hegemonía del cuerpo, la empatía tecnológica y la contra-cultura política (Martín-Barbero, 1998: 32).

del consumo han aniquilado la capacidad de evaluar el orden político vigente y –eventualmente, o frecuentemente– manifestarse, aun de manera radical y organizada. Desde esta perspectiva, pensaríamos que en la relación de la juventud con la política se podrían identificar al menos dos momentos: el de la politicidad activa, encarnada, por ejemplo, en la protesta o en el activismo y militancia en partidos o movimientos de diverso signo, y el de la politicidad diferida o latente, que si bien se manifiesta como un rechazo explícito a la política, podría en algún momento revertirse en pro de una adhesión política, aun cuando esta no se encuentre congruentemente formulada.

Nuestro interés aquí es problematizar el tema de la politicidad en toda su ambivalencia y contradictoriedad, e inclusive en sus déficits, sin solapar las huellas que los filtros sociales y culturales impresos por los desarrollos tecnológicos y los “consumos culturales” de la modernidad tardía dejan en la formación de la opinión de los/las jóvenes estudiantes¹⁰, aunque defendiendo un enfoque optimista de las posibilidades de la juventud para contribuir a los cambios que la sociedad requiere desde un posicionamiento político claro. Veamos ahora las hipótesis que vertebran la presente reflexión.

Al analizar en el capítulo anterior la movilización campesino-indígena sostuve que la protesta se articula a partir de un sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada”, gestado en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Tal sentimiento de pertenencia habría germinado al calor de las luchas por la tierra y las políticas desarrollistas y de mitigación de la pobreza rural impulsadas por el Estado sobre todo en la década de 1970, que hicieron posible cierto mejoramiento de las condiciones de vida, y últimamente en las luchas por la ciudadanía social y cultural, en el contexto de implementación de un modelo de ajuste. En otras palabras, los movilizados pugnarían por superar la disociación entre la existencia formal de un estatus ciudadano (en tanto declaratoria de derechos y obligaciones), por un lado, y la carencia real de recursos que garanticen la inclusión; carencia agravada por la persistencia de prácticas discriminatorias de la “sociedad envolvente” y la presión de la explotación agraria. Planteaba, además, que el momento movilizador de la ideología se encuentra vinculado a una “ciudadanía de sentido común” que se expresa en dicho sentido de pertenencia a la “comunidad imaginada”, cuyas formulaciones se convierten en el

10 Para una profundización de estos aspectos remito a los estudios de Cerbino, Chiriboga y Tutivén (Cerbino et al., 2001), a pesar de no concordar con todas las conclusiones de los autores. En este plano, es importante, sobre todo, la producción de Jesús Martín Barbero; remito asimismo, al texto aquí citado (Barbero, 1998). Como se observará a lo largo del presente capítulo, mi posicionamiento frente a los trabajos del giro culturalógico-comunicacional sobre la juventud es de rescate crítico.

fundamento discursivo para la profundización de la inclusión social y política. La protesta de dichos sectores estaría, pues, sostenida por contenidos bivalentes, en los que al eclipsarse el siglo y el milenio ha predominado la exigencia de derechos sociales por sobre la de reconocimiento cultural.

La lucha de la juventud estudiantil por la ciudadanía social aquí tendría una trayectoria y contenidos ideológicos diferentes, pues se trata eminentemente de representantes de los sectores medios, en su mayoría étnicamente homogéneos y conformantes de la “sociedad envolvente”, a pesar de su variedad en el espacio social. En este caso, el acceso a derechos sociales, recursos y servicios –acceso a la educación hasta un grado relativamente alto de escolaridad, en comparación con la gran parcela de la población que ha perdido este derecho social, junto con los beneficios que comporta la vida urbana, incluida la conectividad– constituye el fundamento de la existencia de una condición ciudadana en términos sociales. Bajo tal configuración, la protesta de la juventud estudiantil estaría animada por la reafirmación de una condición ciudadana por medio de un “acto de enclasmiento”, entendido en este caso, como atribución de derechos sociales o de reafirmación de los adquiridos, bajo el enunciado de la igualdad, acto que estaría mediado culturalmente por valores universalistas. En segunda instancia, considero que la movilización de la juventud estudiantil tendría como contexto de expresión unas formas de sociabilidad institucionalizadas que contribuyen a la manifestación de la crítica social; y es en el flujo de esta sociabilidad que, como en un palimpsesto, afloraría el cuestionamiento al contrato social, desde la profundidad de capas culturales e ideológicas superpuestas, en las que se sedimentan evaluaciones religiosas, creencias cotidianas, representaciones generadas por la cultura de masas y los saberes escolares.

El análisis se basa en testimonios de jóvenes estudiantes de colegios nacionales de la ciudad de Cuenca, provenientes, todos ellos, de familias de una posición social media y media alta. Los/las testimoniantes reconocen profesar un pensamiento de izquierda, aunque, a excepción de uno de ellos, no explicitan una adhesión partidaria, y se identifican como “independientes”. Recuperamos, asimismo, una entrevista informativa realizada con una dirigente local del Movimiento Popular Democrático¹¹, partido al que pertenecen las mencionadas organizaciones estudiantiles.

11 Agradezco a Nidia Solís por el diálogo que está beneficiando esta investigación.

ÍCONOS Y DISCURSOS

Las representaciones de la vertiente juvenil-estudiantil de la protesta, desde finales de los años setenta hasta nuestros días, ha sufrido mutaciones sustanciales, tanto desde el punto de vista de las imágenes que pueblan las narrativas socio-políticas, como de los abordajes disciplinares y las aproximaciones artísticas¹². Una muestra de la inflexión en la representación y de los discursos políticos subyacentes podrían ser las imágenes del cortometraje: *Yo sí que no tengo a nadie*, rodado en 1991 en Quito¹³:

Un joven, casi un adolescente –llamémoslo Juan– atraviesa nerviosamente y con premura una de las calles del centro histórico de la capital ecuatoriana. Por sus rasgos fenotípicos y su vestimenta, así como por el lugar urbano de referencia de las imágenes, Juan podría ser estudiante de uno de los colegios nacionales de Quito o de los primeros años de la Universidad Central¹⁴. Juan mira constantemente a su alrededor y se encamina con sigilo hacia los retretes públicos que divisa en la cercanía, para refugiarse, trémulo, en uno de sus compartimentos: el joven se sabe perseguido por dos agentes de la seguridad del Estado. Allí encerrado, aguja el oído y mira los pies de quienes ingresan al recinto, como intentando adivinar el paso de sus persecutores. Mientras tanto, en su memoria se agolpan recuerdos de las marchas y manifestaciones públicas en las que participara en un pasado reciente, recuerdos de su militancia en la organización juvenil revolucionaria, de la ceremonia de entrega del carné... Recuerdos queridos, pues en ellos se confunde el sentimiento por Amanda, también militante revolucionaria. Las imágenes, sin embargo, son empañadas por rememoraciones dolorosas, resentimientos y rencores hacia algunos de sus dirigentes, las privaciones que trajera consigo la dedicación a la lucha, la disciplina de las horas y los rigo-

12 Desde un análisis inspirado en la obra de Foucault, la teórica feminista y crítica del cine Teresa de Lauretis observa que los discursos y las representaciones mediáticas producen efectos de “tecnologías” de la subjetividad, produciendo efectos ideológicos, ya que las imágenes y mensajes internalizados modelan subjetividades concordantes con el orden hegemónico (De Lauretis, 2000). Esta explicación nos ayuda a comprender el porqué del torrente de representaciones “juvenilizantes” y hedonistas, así como de moralejas visuales como la que analizamos en este capítulo, justamente tras la caída del muro de Berlín.

13 “Yo sí que no tengo a nadie”, guión y dirección de Carlos Naranjo, Eréndira y La Estudio, Quito, octubre de 1991.

14 Instituciones educativas en las que predominan los/las jóvenes de extracción popular, y donde tienen arraigo y tradición tanto la Federación de Estudiantes Secundarios Ecuatorianos (FESE) como la Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos (FEUE), organizaciones vinculadas políticamente a los partidos de izquierda.

res de la clandestinidad¹⁵. Los pasos de los usuarios de los retretes continúan inquietándolo, mientras en su memoria y en su corazón se enfrentan la fidelidad a la revolución y la pasión por Amanda con el dolor de haber sido utilizado. La angustia de Juan va en aumento y también la inquietud de lo que pasaría si lo atrapan con la evidencia: el carné partidario. Contempla largamente su documento de identificación política y dubita sobre su destino: destrozarlo y echarlo al tacho de la basura, lo que significaría mancillar su fe en el cambio revolucionario, su vida de militante y también el recuerdo de Amanda, o conservarlo, y esto conllevaría el peligro de la detención y quizá confinamiento y torturas en las mazmorras de la seguridad del Estado. Pero deshacerse del carné podría también significar una nueva vida, su recomposición al servicio de sí mismo. Tras una larga espera, cuando percibe que sus persecutores lo perdieron de vista, Juan abandona rápidamente el retrete dejando caer el carné en su huida, o tal vez deliberadamente abandonándolo en el piso. Juan se salva, pues ya no hay una evidencia que lo incrimine y, quién sabe, podría ser la redención de su soledad. ¿Se trata de un desenlace feliz, del augurio de una felicidad teñida de nuevos colores? ¿Ha cedido su lugar el rojo de las banderas flameantes –con el fondo austero de los grises de la militancia revolucionaria– a los colores múltiples de una identidad restañada, o a la estridente policromía de la discoteca y el vuelo alucinatorio?

El final del filme puede tener varias lecturas, al margen de la intención de sus realizadores. Pero creo, sobre todo, que traduce una perplejidad que embargó a la sociedad ecuatoriana al entrar en la última década del siglo XX. Perplejidad que condensa la encrucijada de todos: de los sujetos que vivieron el vacío existencial que advino después del derrumbe del socialismo; del poder y sus personeros que se abocaron a la tarea de encauzar –de múltiples maneras: humanistas, pseudo-humanistas y deshumanizadas– a las ovejas descarriadas; de los hacedores de la cultura que se vieron en el apremio de inventar nuevos íconos y lenguajes con los cuales elaborar nuevos discursos.

Ya hacia en las postrimerías de los años noventa, podemos ver que las perspectivas analíticas sobre la juventud han anclado en los siguientes enunciados: el “mercado” como sustituto de la “política”; el

¹⁵ Las referencias a la clandestinidad remiten a la época del gobierno del ultraderechista León Febres Cordero (1984-1988), cuando se persiguió ferozmente a militantes del movimiento “Alfaro vive, carajo”, vinculado al M-19 de Colombia y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) del Perú, conformantes, todos ellos del “Batallón América”. El joven representado en este caso es el símbolo de todo militante revolucionario, aun cuando, ciertamente, muchos militantes de “Alfaro vive” abjuraron explícitamente de su doctrina y adhesión revolucionaria.

“consumo” en lugar de la “reivindicación”; “tiempo libre” por “compromiso” (y/o “militancia”); “mediaciones” y “nueva tecnología”, como sustitutos de “aparatos ideológicos”. Los nuevos enunciados se asocian también a nuevos íconos, siendo el icono predominante el del joven urbano beneficiario de la conectividad, conformante de tribus cohesionadas emocionalmente¹⁶, mientras el “estudiante” desaparece de la galería visual de la posmodernidad¹⁷. Así, durante las últimas tres o cuatro décadas, la representación de dicho sujeto social ha oscilado entre el enfoque político-sociológico de décadas anteriores, teñido de una emotividad romántica que exalta la virilidad-rebeldía-martirio, con el libro bajo el brazo como atributo, y una perspectiva culturalista que –oscilante entre el escepticismo y el encantamiento– tiene sus objetos privilegiados de reflexión en el consumo de bienes materiales y simbólicos (¿y por qué no de drogas?) y las identidades constituidas en el flujo incesante de las imágenes y la conectividad¹⁸.

Existen, con todo, otras representaciones: las mediáticas, que también forman parte del discurso globalizador. La primera de ellas estaría anclada notablemente en la construcción de un “imaginario del miedo”, siendo también portadora de un sentido de criminalización de la juventud, a través de los énfasis en aspectos delincuenciales, de la conversión de esta en “nuevo enemigo de la sociedad” (Reguillo, 1997)¹⁹. Y en los albores del siglo XXI el recorte mediático otorga preponderancia al joven político “aséptico”, tomando como punto de partida las

16 Margulis y Urresti apuntan la construcción, en el plano mediático-publicitario, del mito del joven “construido según la retórica de la mercancía, fácilmente identificable con un patrón estético de clase dominante y ligado con los significantes del consumo” (1998: 17).

17 Por otro lado, es de notar la invisibilidad del/la joven rural, con sus preocupaciones, valores y necesidades, a quien la emigración a la ciudad o a otro país no convierte automáticamente en el modelo de joven urbano/a que goza de cierto bienestar, tiempo libre y acceso a la tecnología de la comunicación, aunque le transfiere algunas de las características y los problemas de la juventud urbana, entre los que se cuenta el desempleo.

18 En este punto dialogo con Jesús Martín Barbero, quien al caracterizar las identidades juveniles gestadas en la era mediática sostiene que uno de los rasgos de ellas sería la “empatía tecnológica”, esto es los nuevos sujetos culturales se construirían a partir de la conexión-desconexión con los aparatos; la empatía deviene de la enorme capacidad de absorción de información por medio de la televisión o de los videojuegos computarizados “que erosiona la autoridad de la escuela como única instancia legítima de transmisión de saberes” (Barbero, 1998: 35).

19 Carlos Tutivén analiza la representación mediática de las culturas juveniles de Guayaquil de la siguiente manera: “En los medios de comunicación masiva, estas culturas existen a condición de la rareza, la anormalidad, la propaganda, el escándalo amarillista o la novedad desatendida, su publicidad es mediocre y desatinada. Los medios, o reducen a los jóvenes a la delincuencia y a la criminología juvenil, o los hace protagonistas del espectáculo trivial, farrero y por ende marketero” (Tutivén, 2001: 125).

dicotomías joven-virtuoso/viejo-corrupción. Se trata del (la) *yuppie* de extracción media alta que milita a favor de la participación política *per se*, abominando los conflictos y antagonismos sociales; de esa manera, otras expresiones políticas juveniles son convertidas en abyección. En suma, la pluralidad de tales es borrada del mapa de la política, hiperbolizando ciertos íconos “químicamente puros”.

Con todo, considero que ambas perspectivas analíticas resultan complementarias, en el sentido de que cada una ilumina facetas del sujeto múltiple, interdictas por la otra perspectiva. Sin embargo, no se trata solamente de un problema de complementariedad o falta de ella, sino de las consecuencias de la supresión de una faceta importante de la multiplicidad de los/las jóvenes, del énfasis apologético en ciertos aspectos de la politicidad juvenil, de la construcción de íconos acordes al discurso globalizador. En este sentido, si bien es cierto que la escuela en la actualidad no es el espacio privilegiado de la adquisición de saberes, considero que tampoco ha perdido importancia como ámbito de aprendizajes y adquisición de competencias profesionales requeridas por la reproducción del orden hegemónico, ámbito en el que contradictoriamente se conjugan la formación disciplinada de tales competencias y el campo abierto de posibilidades para la emergencia de politicidades críticas y de formas de sociabilidad que las organizan.

Hay, además, un desdoblamiento clave producido por tal obliteración. Y es que la interdicción contemporánea de lo social conlleva a que, como sostiene Nancy Fraser: “La dominación cultural reemplaza a la de la explotación como injusticia fundamental. Y el reconocimiento cultural desplaza a la redistribución socio-económica como remedio a la injusticia y objetivo de la lucha política” (Fraser, 1997: 17). Mientras tanto, lo que hemos visto emerger con fuerza a través de la protesta estudiantil es la demanda de atención a una aguda problemática social, cuyo espectro va desde los requerimientos institucionales de presupuesto para la educación y salarios para el magisterio, pasando por las cada vez más altas erogaciones destinadas a pasajes y materiales de estudio, hasta la exigencia misma de mejoramiento de condiciones de vida de la población.

Ahora bien, la organización social ciertamente ha sufrido importantes mutaciones en la modernidad tardía, a merced del impacto en la cultura que ha conllevado, por ejemplo, a la transformación de la sociabilidad juvenil y la emergencia de las culturas juveniles y el declive de fenómenos como el movimiento estudiantil, en la versión de los años sesenta y setenta. De la siguiente manera explica Carlos Tutivén las mudanzas en la modernidad tardía:

La configuración del capitalismo postmoderno, caracterizado por los mercados transnacionales y la virtualización de las

finanzas globales gracias a la revolución informática y comunicacional ha desquiciado el anterior orden desde donde se delineaban las estrategias políticas del Estado-nación como de los actores sociales que intervinieran en ese marco de acción. Las comunicaciones satelitales, las migraciones poblacionales intra e internacionales han alterado el espacio y el tiempo de la sociabilidad civil, lo que ha implicado el estallido de viejas formas de reconocimiento social y la creación de nuevas formas ligadas algunas a las nuevas tecnologías y, otras, a la sobrevivencia diaria, la pobreza lacerante, el trabajo informal, lo que ha requerido de imaginación y producción simbólica *sui generis*, o la resignación y huida masiva (Tutivén, 2001: 102).

Entonces, en la comprensión de la condición actual de la protesta de la juventud estudiantil deberían confluír, hoy en día, tanto la variable de las demandas sociales como el examen de la influencia de los discursos mediáticos, en tanto factores ideológicos que configuran la intensidad y la especificidad de la lucha por la ciudadanía social. Mi acuerdo con los planteos de Tutivén llega hasta ahí, y en adelante deseo esclarecer las implicancias de una propuesta contenida en su diagnóstico sobre las bases político-culturales de la modernidad y el capitalismo tardío. Carlos Tutivén sugiere que

La crisis del Estado nación, el auge casi infinito del mercado mundial, y la planetarización de las comunicaciones han hecho estallar los moldes desde donde se organizaba la vida social moderna. [...] Al pacto social racional hoy le sigue la comunidad emocional (Tutivén, 2001: 107).

Y argumenta el autor, sobre la base de la célebre obra de Michel Maffesoli *El tiempo de las tribus*, que dicha comunidad emocional se plasmaría en las “tribus urbanas”, esto es, en conglomerados humanos cohesionadas gregariamente por los sentimientos, mas no desde las instituciones y la racionalidad que da forma a los sentimientos, y propicia formas políticas institucionalizadas. Por mi parte, disiento con las posturas dicotomizantes, más aún si consideramos que la obra de Maffesoli fue elaborada para explicar la posmodernidad occidental, y más concretamente para entender la temporalidad europea de los años noventa. Dichas tesis, por lo tanto, deben ser relativizadas al ser aplicadas a la comprensión de sociedades como la nuestra, donde si bien lo moderno-occidental-individualista y abstracto tiene un importante arraigo, el poder de la comunidad nunca se desvaneció, y en la que han persistido la importancia de las relaciones personalizadas y el rol de los afectos en la existencia de las instituciones políticas. En realidad, creo

que antes que una secuencialidad antagónica de lo racional-abstracto y lo emocional-gregario, lo que existiría como cemento cohesionador de las colectividades juveniles sería un juego dialéctico de sensibilidades, sin que lo puramente instrumental haya desplazado en la modernidad a los sentimientos, la emotividad y la solidaridad como cemento de las relaciones humanas.

Por otro lado, un elemento prevaleciente en las prácticas de la sociabilidad para Maffesoli sería lo “lúdico”, es decir aquello que no tiene una finalidad específica o una practicidad concreta (Maffesoli, 1987: 101-141). La pregunta sería: ¿podemos concebir a las agrupaciones políticas juveniles “tradicionales” y contemporáneas sin aquellas características? ¿Para muchos y muchas, no era acaso la revolución un juego y un estilo de vida, a pesar de que las prácticas políticas tenían una fundante finalidad de la transformación social?

Discrepo, pues, con la visión dicotómica del pacto social racional moderno frente a la comunidad emocional posmoderna, puesto que aun bajo la vigencia de formas políticas institucionalizadas (léase partidos, sindicatos o cualquier otra forma organizativa “tradicional”, es decir moderna, desde el punto de vista de Tutivén) y racionales, los sentimientos y las emociones tienen también el papel de cemento último de toda sociabilidad y cohesión, entrelazándose mediante identificaciones horizontales, proyecciones afectivas, sobre todo entre los miembros de base.

A decir verdad, percibo una sobredeterminación y un pesimismo no siempre justificado en los trabajos de los autores de lo que denominaría el “giro culturoológico-comunicacional”, al momento de explicar y comprender las identidades juveniles contemporáneas, marcadas de acuerdo con ellos, por la indiferencia y el hedonismo, forjadas al calor del consumo y las nuevas tecnologías de las comunicaciones. Esgrimo a mi favor el argumento ya citado sobre la heterogénea distribución de las identidades en el tiempo y el espacio (Calhoun, 1994: 12). Tal heterogeneidad proporcionaría intersticios sociales, geográficos, institucionales y aun emocionales e intelectuales, en los que se facilitaría la emergencia de las líneas borrosas del “palimpsesto”, y se posibilitaría el flujo de las politicidades, activa y diferida, incidiendo en la esfera pública y aun contestando al orden hegemónico neoliberal. Por lo mismo, sugiero que la tecno-fascinación y la eclosión de las comunicaciones no han colonizado en términos absolutos al mundo de la vida, que continúan existiendo intersticios que permiten la germinación de la politicidad activa e ideológicamente mediada que, eventualmente, logra plasmarse en formas organizativas, diferenciadas a las de los grandes conglomerados político-sociales de antaño. Quizás en estas nuevas formas de organización los colectivos de menor escala tengan, ciertamente, mayor peso,

sirviendo de sustento a nuevas racionalidades y formas de la política institucionalizada, cuya comprensión es una tarea importante.

Entonces, un decenio después del rodaje del filme narrado en páginas anteriores, cuyo argumento, seguramente, es fiel a las opciones tomadas por muchos/as jóvenes de los años noventa, parecería que la crítica social y ciertamente la política continúan siendo opciones para muchos/as chicos y chicas coetáneos/as de la intensificación del ajuste en el Ecuador de nuestros días. Es eso lo que deseamos argumentar en las páginas que siguen.

EXPERIENCIA, VISIÓN DEL MUNDO SOCIAL Y PRODUCCIÓN DEL CONFLICTO

¿Cómo entonces, se construye la visión del mundo social que detona la protesta? Intentaremos responder a esta interrogante, centrándonos en dos relatos, los de Marcia y Joaquín.

MARCIA

Entrevisté a esta testimoniante de 18 años cuando ella cursaba el último año de un colegio nacional de Cuenca. Mi interlocutora creció en un ambiente ilustrado y proviene de sectores de la elite cultural y política de la ciudad. Marcia explica su opción por la militancia revolucionaria a partir del ambiente familiar:

[...] desde muy pequeña [asimiló las ideas revolucionarias], también porque mis papás estuvieron en esto, y bueno, crecí en un ambiente en donde ya veía la revolución, ya veía un cambio, donde vi también mucha pobreza, mucha riqueza, entonces yo creo que esto te hace darte cuenta y marcarte tu ideología.

Su actitud crítica estaría entonces estrechamente trenzada con su biografía y ambiente familiar, y es desde allí que la interlocutora construye el sentido de su presencia en la protesta a partir de la dupla “pobreza/riqueza”, que en el transcurso del diálogo se alimentará con nuevos tópicos que caracterizan la situación de injusticia a la que ella se opone: desigualdad, discriminación, hambre, represión. Su posicionamiento crítico le habría llevado a sentirse inconforme con las reglas vigentes en el colegio de clase alta en el que había iniciado sus estudios secundarios, y esto la llevaría a tramitar el cambio a un colegio nacional, puesto que

[...] no me gustaba la visión de la vida de la gente de clase social alta, eso y también mucha discriminación, si vos no ibas con zapatos de marca eras mal vista, si vos no tenías las cosas de moda eras mal vista, era bastante duro, simplemente se fijaban

en tu apellido, cuanta plata tienes, pero no más allá. Entonces por eso me cambié, entre otras cosas [...]. No te dejaban expresar, esa sería la razón principal. El hecho de que vos llegues y digas: “bueno, Pinochet fue un desgraciado que hizo esto y aquí están las torturas que hizo, que yo saqué de un libro que yo leí, el Che Guevara fue esta persona, fue lo mejor”, yo que sé. Y simplemente era: “no”, porque no te metías en política porque el colegio era apolítico; decían que era laico, pero igual hacían misa.

Sometida a la vigencia de tales reglas, ella entraría en conflicto con las autoridades. Y debió enfrentar tal situación:

[...] poniendo fuerza para que las leyes y la igualdad se cumplan, o sea para que nuestros derechos como estudiantes se cumplan. Muchas veces enfrentando a la misma rectora, a la vicerrectora, que son gente de mucha plata, gente totalmente derechosa. Pero yo llegué con mi ideología y nunca cambié, o sea me conocieron así, y yo era así. Luego salí en tercer curso al colegio que estoy ahora, que es fiscal, universitario, donde ya la protesta es un hecho más común, y es prácticamente una forma de vida.

Como veremos, es sobre la base de este relato que Marcia construye el sentido de su vida, aun cuando suponemos que sus definiciones ideológicas serían, sobre todo, el resultado del contacto con estudiantes radicalizados. El cambio de colegio, acaecido hacia la mitad de la secundaria, habría contribuido a lograr congruencia entre su pensamiento y sus acciones:

[...] desde ahí empecé a salir, ahí es cuando yo me destapé, podría decir, me di cuenta lo que yo tenía en idea, cuando llegué a mi colegio pude vivir en carne propia lo que era salir a una manifestación, luchar, muchas veces correr, sentir vértigo, sentir miedo, sentir hasta hambre. Entonces ya fue un contacto mucho más directo con lo que yo había pensado. Desde que estoy en mi nuevo colegio, desde la época de Jamil he salido a las manifestaciones, he seguido, casi no he faltado, sigo saliendo.

Un lugar notable en la protesta tiene, para ella, el sentimiento del colectivo, de la solidaridad de los diversos y la unidad, siendo particularmente impactante la experiencia de las movilizaciones de 1997 por la impugnación de Abdalá Bucaram:

[...] había un montón de gente, gente de todo lado, niños, ancianos, gente disfrazada, gente de terno, de pollera, de alpargatas.

Eso me marcó mucho yo creo, ver la diversidad. Que luchaban y todos muy unidos, no importaba de dónde seas, de dónde vengas, qué pensabas, por qué teníamos que derrocar a este presidente, pero todos estuvimos juntos hasta el final, hasta que el presidente tiró la toalla. [...] Eso fue algo que me impactó mucho: la gente y la fuerza con la que la gente luchaba.

Dicho sea de paso, la idea de la amistad, la unidad y solidaridad grupal es enfática en todos los testimonios; y es Pablo, un interlocutor de 15 años con quien dialogaremos más adelante, quien mejor expresa las sensaciones experimentadas en la movilización del 5 de febrero de 1997, que fue la primera en su trayectoria: “me sentía como enardecido, bien, feliz porque veía a la gente que gritaba, no sé cómo decirte, fue especial porque la gente estaba unida, gritaban, salían mucha gente.”

En lo que se refiere a las proyecciones políticas de Marcia, ellas están ancladas en la idea de la revolución y en la proclama de ideales universalistas similares a los de la izquierda revolucionaria de los años sesenta o setenta, aunque no parecen tener un lugar explícito nociones tales como “explotación”, “capitalismo”, “clase”, y se privilegian nociones expresadas con términos del léxico contemporáneo, tales como “corrupción” y “diversidad”.

Uno de los motivos centrales de su testimonio es también el de la igualdad, que sería la meta del cambio revolucionario:

Yo he creído siempre, desde que me acuerdo, en la igualdad; en la igualdad en todo sentido. Ha sido una ideología menos desarrollada que la que tengo ahora, pero siempre pensé que todos éramos iguales, y que este país y este sistema hace que las cosas no sean así, que haya mucha desigualdad social, que haya gente que se muere de hambre y que haya otros que tengan una mansión donde puedan entrar diez, veinte familias y podrían vivir bien. Unos ganan un montón, otros... viven con un dólar diario una familia.

¿Cuál sería en este contexto el momento movilizador y el eje del conflicto? Quizá de una manera distante en el caso de ella, podría ser el rechazo de una posibilidad de descenso social, pero esto en la elaboración del sentido de su vida sería secundario, pues Marcia y su familia se encuentran firmemente posicionadas en los sectores medios-altos de la sociedad, tanto en lo que se refiere a capital económico, como a capital simbólico y cultural. Sobresalen, en sus palabras, las ideas de justicia y dignidad asociadas, muy fuertemente, a la búsqueda de encarnar la protesta, “la bronca”, el espíritu de sacrificio. Su símbolo marcante es el Che Guevara. Del subcomandante Marcos dice que es “un humanista impre-

sionante”, aun cuando tendría un pensamiento localista, a diferencia del Che, quien habría tenido “un pensamiento más universal” (“recorrió el mundo, América Latina”, “abandonó el cargo de ministro de Economía [...] cosa que en nuestro país muchos se han aprovechado”).

JOAQUÍN

Escuchemos ahora el testimonio de Joaquín, un joven de 17 años, también de posición social media, aunque de ubicación más bien popular. Joaquín es condiscípulo de Marcia y reside en un barrio tradicionalmente habitado por sectores medios-bajos. Es, además, músico, hijo de músico y familiarizado con los géneros bailables (sobre todo ritmos “tropicales”), y mantiene su propia “orquesta” (una banda) con la que ameniza fiestas y reuniones sociales. Dice también ser un cantautor que interpreta música de protesta: “Yo canto por una patria más libre, toco por una bandera de libertad, hablamos de juntarnos en una plaza para decir que estamos cansados de que se nos oprima, que se nos calle nuestra voz”.

Su testimonio es bastante fluido y podría ser considerado como un caso paradigmático de una “*doxa*” ilustrada, fruto y, a la vez, ejemplo de una socialización masculina urbana, rasgos que le permiten discurrir ágilmente entre los problemas sociales y políticos latinoamericanos contemporáneos, transitando elocuentemente, aunque con incongruencias, por ciertos temas referidos al orden social, tales como las jerarquías, el modelo económico, la política internacional. Es ambivalente frente al modelo neoliberal, contradictorio al evaluar a Pinochet como personaje político, y poco claro en lo que considera como los métodos adecuados de la protesta, sobre todo frente a la “violencia” y la “insurrección”. Observemos como Joaquín construye su modelo de universo social, ubicando dentro de él a la protesta en el siguiente trecho de su testimonio:

P.: ¿Desde cuándo protestas?

R.: Yo me he preocupado de los problemas sociales y de la comunidad, desde que en mi propio hogar surgieron problemas económicos, a raíz de las medidas económicas que se dieron en el país. Hay personas [a las] que antes no les afectaba, por eso uno se ve obligado a dar su voto de rechazo, al ver tanta injusticia y corrupción de por medio, tanto dinero que se llevan de nuestro país; uno alza la voz para protestar ante tanta mediocridad de la gente. Antes de armar una protesta se debe también concientizar a la gente.

[...]

P.: ¿Protestar, para qué?

R.: Es poder tener un punto de vista socialista pero en el buen sentido de la palabra, no hablemos socialistas en lo político o en lo económico. Decimos “socialista” porque todo el mundo debe tener lo básico para vivir, pero no por eso la gente debe explotar a la demás gente para tener más poder y jerarquía. Simplemente, en la idea socialista que tengo yo es que la jerarquía se la debe ganar con el respeto de la gente [y] no porque [se] tenga más dinero o más empleados [...] Yo hablo de un socialismo en el buen sentido, porque obviamente las políticas socialistas se dan, por ejemplo, en lo que se llama el comunismo, en Rusia, aunque ahí no fue bueno. Hasta ahora no se ha visto el comunismo en toda la palabra porque hay jerarquías, se dice que en el socialismo todo es para todo el mundo, pero siempre hay jerarquías, siempre hay el que dirige a todos, y eso a mí no me parece [...] La persona que dirigió el levantamiento debe siempre estar comunicándose con la comunidad y no decir: “yo llegué a esto y yo merezco más privilegios”. Yo digo que las jerarquías se dan más por lo económico, aquí en el país hay jerarquías cuando las personas que tengan más empresas, más empleados eso para mí no es correcto; la jerarquía tampoco sería solo por lo económico, sino por la opresión que significa. El que tiene más educación es una persona más respetada, es la que sabe compartir lo que tiene, para mí esa persona tiene más respeto que otra que tiene cien empresas y que explota a la gente.

Para Joaquín, los hechos centrales del orden social vigente serían la injusticia y la corrupción, y es la primera la que estaría en el origen de las jerarquías y la explotación. Otro hecho negativo sería también la “mediocridad de la gente” que inhibe el cambio social (en otro trecho, Joaquín añadiría también el alcoholismo como un componente negativo del mundo actual). Lo opuesto a estas situaciones negativas sería “el socialismo”, en el que las jerarquías serían construidas solo mediante el respeto que se debe ganar a base de la educación, y no por el dinero que se posea. Es esta proyección de un mundo basado solamente en las jerarquías “simbólicas” la que dota de sentido a las acciones de protesta de Joaquín; sin embargo, también existirían situaciones de orden ético-político concreto por las que habría protestado durante la época del gobierno de Mahuad, ya que, según sus palabras, ese político no habría tenido “valores morales para gobernar”:

Jamil, es una persona que no tuvo la ética suficiente para vencer al país, primero porque utilizó la alcaldía del Municipio de Quito para llegar al poder, ahí no se le podía tildar de co-

rrupto, porque hizo las cosas bien, en cambio en la presidencia creció la ambición y ese tipo se vendió, para mí pasó así, como mucha gente lo hace aquí, incluso dirigentes muy buenos, pero el poder del dinero les corrompe, y si no acepta, la corrupción es tal que lo matan si no acepta. Yo nunca me sentí defraudado porque yo siempre pensé eso, que utilizó la alcaldía para hacer eso, si él necesitaba o quería hacer algo por el país podía hacerlo de muchas formas, no necesitaba ser presidente.

Como veremos, la protesta, según Joaquín, no se encuentra asociada en primera instancia a la necesidad económica; entonces, podríamos interpretar que, en el caso de Joaquín, ella estaría motivada más bien por los excesos inaceptables de manejo “inmoral”, aun cuando el mal manejo es tolerado hasta cierto punto. Este parece ser el punto en el que se anuda la producción del conflicto, en el que se desborda la impugnación; la protesta, empero, tampoco se encuentra disociada de la necesidad inmediata, y se tamiza con un sentido de “justicia” y “dignidad” de alcance universalista:

Mi mamá tiene una enfermedad y compraba medicamentos cada quince días, yo llegué a la casa y mi mamá no tenía para los medicamentos porque estos medicamentos ya habían subido de precio, tal vez ese fue el hecho más indignante para que se dé ese cambio en mí. Yo me puse a pensar en ese momento que eso pasaba en mi casa que éramos de un nivel económico medio, qué pasaba con la gente que vive mucho más abajo, seguramente podrá morir por no poder comprar esos medicamentos. Nosotros haciendo un esfuerzo podíamos sacar para los medicamentos para mi mamá, pero hay gente que no puede, hay jubilados que ganan 8 o 10 dólares y esto está mal, porque mi papá también es de edad y él cuando se jubile, a mí me va a indignar que habiendo dado 35 años de su vida al trabajo, pese a tener educación, que finalmente le den 8 dólares mensuales, eso sí que es demasiado indignante.

Tendríamos, entonces, un repertorio de valores como mediación cultural y sentido de la protesta: por una parte la demanda de moralidad y de valentía, que son vistos como atributos inherentes a un mandatario y, por otro lado, el requerimiento de una justicia de alcance universalista y el respeto a la dignidad, que como hemos visto, se expresa a través del eje formado por las oposiciones “injusticia-jerarquías económicas/ socialismo-justicia- jerarquías simbólicas”. La protesta se ubicaría tanto en la proyección de un mundo justo como en la defraudación por el

incumplimiento de una “esencia” del mandatario²⁰ (ver esquematización en el Cuadro 6 del Anexo).

Creeríamos además que, en la identidad de la protesta, en el caso de Joaquín, está presente también la aspiración tanto de ascenso social, como de proyectarse como dirigente, de ahí la mención de la alocución desde la tarima como forma de protesta “ideológica”. Tal aspiración de movilidad social configuraría la oscilación de su habla entre el discurso radicalizado y la demanda de reconocimiento del “capital cultural” como criterio de posicionamiento en la escala social; y es en ese lugar social ambiguo de un miembro de los sectores medio-bajos que se produciría su amorfo punto de vista político, el mismo que en cierto sentido constituiría una especie de plataforma de negociación con una sociedad que tiende a asignar de manera rígida el estatuto de clase: en razón de capital económico, capital simbólico (apellidos) y cultural, e inclusive del color de la piel.

Hasta aquí hemos escuchado dos alocuciones que, a pesar de las similitudes de los referentes universalistas de las que parten, encarnan modelos discursivos diferenciados: el uno se asocia a una cultura letrada, a un estatuto social definido, así como a un contenido doctrinario coherente; el otro es oriundo de una matriz cultural popular, y se origina en un lugar social relativamente inestable y marcado por un déficit de capital simbólico, generando una posición doctrinaria ambivalente.

¿Cómo comprender la protesta de estos jóvenes que ocupan un lugar social y pautas culturales disímiles, y a la vez distantes socialmente de la necesidad extrema? ¿Cómo comprender su compromiso con ideales universalistas?

Quizá deberíamos tomar en cuenta, en primer lugar, que su lugar de habla en general se configura a partir de un estatuto ciudadano más o menos estable en el aspecto social, de acceso al derecho a la educación y a recursos que les permiten a ellos/as y sus familias mantener un estándar decoroso de vida. Parecería que el enunciado de la igualdad tiene en esta circunstancia a su primer punto de anclaje, al factor que les permite incorporar esta noción en sus esquemas de percepción y

20 La atribución y la exigencia del cumplimiento de estos requisitos estarían vinculadas con lo que Bourdieu denomina “competencia como propiedad estatutaria” y que se origina en una “marca” impuesta al individuo, en consonancia con sus definiciones sociales: “El efecto de marca (en el sentido de acción de marcar) que produce la imposición de propiedades tales como el estatus escolar o la identidad sexual se impone al individuo marcado –requerido de este modo para estar a la altura de sus definición social– así como también a los demás que esperan de él que realice su esencia [...]. Esto es lo que hace que la competencia en el sentido de la cultura específica esté con respecto a la competencia como en el sentido de propiedad estatutaria en la relación de la existencia con la esencia: únicamente a aquellos a quienes pertenece el poseerla pueden realmente adquirirla y únicamente aquellos que están habilitados para poseerla se sienten obligados a adquirirla” (Bourdieu, 1998: 419).

orientación en el mundo social, que Bourdieu ha denominado con el término de *habitus*. La producción del conflicto tendría como momento inicial al “acto de enclasmamiento” que se realiza por medio del enunciado de la igualdad, que en este caso cumple la función de un “juicio de atribución”. Expliquémonos, según Bourdieu:

todo conocimiento del mundo social es un acto de construcción que elabora unos esquemas de pensamiento y de expresión [...] Entre las condiciones de existencia y las prácticas o las representaciones se interpone la actividad estructurante de los agentes que, lejos de reaccionar mecánicamente a unos estímulos mecánicos, responden a los llamamientos o a las amenazas de un mundo cuyo sentido ellos mismos han contribuido a crear (Bourdieu, 2000: 478).

En tal sentido, la idea de “igualdad” no es otra cosa sino un “juicio de atribución” (Bourdieu, 1998: 483) que justifica su “enclasmamiento”, su autodesignación como miembros de los sectores medios urbanos que durante el siglo XX accedieron a una condición moderna de ciudadanía; juicio de atribución que sería, asimismo, la expresión de un proceso de deconstrucción más o menos exitoso de las jerarquías coloniales. El juicio sobre la igualdad sería la punta del ovillo del *habitus* en el que germinan estas identidades políticas beligerantes; es el juicio de atribución que, más allá de “motivaciones egoístas” construye y transmite un sentido del “yo” en el espacio social²¹.

En nuestros ejemplos, el indicio más claro de que lo que preside la constitución ideológica y las identidades de la protesta, en este policromo sector socio-etéreo, son los actos de enclasmamiento, es la búsqueda de ascenso social perceptible con claridad en el relato de Joaquín, quien se explaya en el diagnóstico del origen de las jerarquías, así como en las prescripciones para su eliminación.

En un segundo momento tenemos la intervención de valores tales como la solidaridad, quizá no exenta de motivos cristianos –como es, por ejemplo, la idea de entrega y sacrificio–. Y es aquí cuando la idea de igualdad se extiende “naturalmente” para encarnarse en las prescripciones para la organización del mundo social. Es decir, dichos valores reforzarían el sentido que se otorga al mundo. Precisamente es en ellos que se aloja el constitutivo fundamental de la identidad que,

21 La construcción de un lugar social mediante el “enclasmamiento” tendría varias dimensiones: la autoatribución de un lugar mediante juicios y consumo de determinados objetos “apropiados”, la atribución que realiza, por ejemplo, el sociólogo, y el lugar en las relaciones de producción. Así, según Bourdieu: “una clase se define por su *ser percibido*, tanto como por su *ser*; por su consumo –que no tiene necesidad de ser ostentoso para ser simbólico– tanto como por su posición en las relaciones de producción [...]” (Bourdieu, 1998: 494).

según Calhoun, sería el sentido de “quien uno es como persona y lo que significa seguir viviendo con uno mismo” (Calhoun, 1999: 97).

Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de aspectos latentes que subyacen a la producción del conflicto, la misma que se potenciaría en contextos de crisis social, cuando se cierne la amenaza sobre la continuidad del sentido de la vida que los sujetos construyen, desde su experiencia, deseos y proyectos. La continuidad del sentido del mundo y de la propia existencia podría garantizarse –de manera similar a lo anotado por Calhoun (1999: 87) en su análisis sobre la actuación de los estudiantes en 1989 en la plaza de Tiananmen– mediante la trascendencia de las barreras de clase hacia ideales universalistas, que habrán de encarnarse en la lucha expresada elocuentemente por Marcia en la palabra “bronca”; sentimientos que garantizan la coherencia subjetiva.

POLITICIDAD Y PROYECTO POLÍTICO

Hemos explorado las representaciones subyacentes de la protesta, así como los inicios del proceso de constitución de las identidades políticas de la variopinta “juventud estudiantil”. Analicemos ahora cómo ellas adquieren la potencialidad de incidir sobre el orden social a través de enunciados que poseen una compleja estructuración, y cuyo origen radica tanto en los saberes empíricos como en los saberes derivados de doctrinas políticas estructuradas en torno al poder, la autoridad y otros componentes del sistema político (que en el capítulo anterior hemos denominado “politicidad”); saberes encauzados proyectivamente y plasmados en prácticas políticas.

En esta sección procuraremos identificar los proyectos grupales y/o colectivos subyacentes, a través del análisis de las representaciones sobre lo político y la política, de los contenidos y estilos de la participación en la protesta, y, finalmente, de las prácticas organizativas.

Cabe anotar que aun cuando se ha debilitado la influencia de las instancias políticas estudiantiles prevalecientes en décadas anteriores, las ideas que inspiraron a la juventud de esa época continúan siendo atractivas para los núcleos de jóvenes contestatarios/as de hoy. En virtud de lo cual, las principales fuentes del conocimiento político derivado continúan siendo las lecturas del diario del Che en Bolivia, *Las venas abiertas de América Latina* de Eduardo Galeano y el *Manifiesto del Partido Comunista*. En el medio local tienen muy poca difusión las obras de la crítica contemporánea europea y norteamericana, como *Imperio* de Negri y Hardt, o *No logo* de Naomi Klein; y esto ocurre a pesar de que han sido establecidos contactos con los movimientos “globalifóbicos”, y de la participación de algunos/as de los/las interlocutores/as en encuentros y protestas que convocaron a jóvenes de muchas nacionalidades, como la protesta de 2002 realizada en Quito contra el ALCA.

Como sostiene Mario, uno de los interlocutores con quien dialogaremos de manera extensa más adelante: “la Biblia de los jóvenes actualmente es *Las venas abiertas...*”. En ese sentido, la opinión de estos/as jóvenes continúa siendo alimentada desde una vertiente de pensamiento latinoamericanista que se nutre de un fuerte simbolismo revolucionario, cuya matriz fue elaborada a lo largo del siglo XX, y que es compatible, también, con una imagística cristiana. Considero que el concepto de “imagística” elaborado por E.P. Thompson sería el más adecuado para transmitir esa coloración especial de algunas hablas, como las de Marcia y Mario, que están permeadas del simbolismo cristiano a través de las ideas de la entrega y el sacrificio, y también de la “bronca”, aun cuando sin encarnarse en símbolos inmediatamente perceptibles. Así pues, según Thompson:

Cuando hablamos de “imagística”, entendemos mucho más que simples figuras de lenguaje que “revisten” motivos ocultos. La imagística es en sí misma, una evidencia de fuertes motivaciones subjetivas, tan “reales” y eficaces cuanto las objetivas [...]. Es la señal de cómo los hombres sentían y esperaban, amaban y odiaban y de cómo preservaron ciertos valores en la propia textura de su lenguaje (Thompson, 1987: 50-51).

Hemos observado ya la presencia de una familia de palabras tales como “revolución” y “socialismo”, las mismas que, a mi juicio, ponen de relieve, sobre todo, la oposición a un estado de cosas, pero que también podrían significar una adhesión política. Analicemos ahora los sentidos subyacentes a estos términos, relacionándolos con el conjunto de sentidos indicativos de la politicidad y el proyecto político, a través del examen de tres testimonios (Marcia, Joaquín y Pablo). En ellos comprenderemos las evaluaciones sobre el poder político existente, a través de las representaciones sobre “gobierno” y “sistema”, de las concepciones sobre el cambio social y el papel de las organizaciones.

MARCIA

Como vimos en la sección anterior, el mundo social actual es representado por esta interlocutora a través de los términos antitéticos “riqueza-pobreza” e “igualdad-desigualdad”. Sin embargo, aquellos no serían los únicos elementos marcantes de esta constelación de sentido, pues también la idea de “corrupción” cumple una función de diagnóstico del estado de cosas. He aquí lo que ella observa sobre su participación en las marchas de Febrero de 1997 contra el gobierno de Bucaram: “La primera razón [por la] que salí es porque todos nos dimos cuenta de la urgencia que tenía el país de cambiar un presidente, derrocar a un presidente que era muy corrupto y que estaba llevando las cosas muy mal.”

Ahora bien, la lucha contra la corrupción tiene un lugar; sin embargo, las metas que ella proclama son de mayor alcance, pues cree que la lucha no debe limitarse a expulsar a los mandatarios corruptos. Lo que interesaría, desde su perspectiva, es el “derrocamiento” del sistema. Marcia realiza, entonces, un deslinde –no una dicotomía– entre “cambio revolucionario” (que sería equivalente a “derrocamiento del sistema”), y la lucha anticorrupción, una lucha necesaria, pero ubicada al parecer en el presente, e insuficiente para resolver los problemas de la miseria y la insalubridad. Es relevante aquí citar también sus percepciones sobre las formas de lucha y el papel de las organizaciones:

P.: Algunas personas protestan porque sienten necesidad, pero hay personas y hay agrupaciones que protestan porque hay un contexto y tú te unes a esas ideas. ¿Para tí existen esas diferencias? ¿Cómo es mejor protestar, individual u organizadamente?

R.: Yo creo que las dos [formas] están bien. Organizadamente está muy bien, si los estudiantes y la gente del pueblo tienen una organización y unos dirigentes que valgan la pena y te cumplan las normas de una revolución y de una igualdad, es bueno pelear, protestar en sindicatos, organizadamente. Pero también habemos personas que protestamos sin estar en ninguna organización, que yo creo que somos personas que luchamos porque vemos la necesidad de luchar, no digo que las personas organizadas no vean las necesidades, pero eso ya es gusto de cada quien, igual todos nos llevamos bien, todos somos pueblo y todos estamos yendo hacia el mismo camino, que sería la revolución.

La organización política, entonces, aun cuando momentáneamente no sea su opción, es considerada una instancia válida tanto para la protesta puntual, como para un cambio a largo plazo. ¿Qué nos muestra el examen de este relato? Se trata de un relato coherente, y su perspectiva se encuentra claramente politizada, exhibiendo la capacidad de realizar un deslinde entre lo político y lo moral; este último aspecto atañe a sus decisiones personales, sin “contaminar” totalmente el diagnóstico del orden vigente, y menos aún su formulación de un proyecto de cambio.

Resulta interesante observar la conjunción de propuestas y estilos radicales con el diagnóstico sobre la corrupción, lo que indica una cierta referencia, aun en discursos políticos aparentemente coherentes, a la “economía moral”. Y este elemento se plasmará mucho más nítidamente en los otros testimonios que estamos explorando.

PABLO

Con 15 años, este interlocutor –que ya ha aparecido en páginas anteriores– es el más joven. Pablo procede de una familia de clase media, sus padres son profesionales liberales y al igual que Marcia ha tenido acceso no solamente a la educación formal, sino también a una cultura ilustrada. Estudia actualmente en tercer curso del colegio nacional más prestigioso de la ciudad, aun cuando mantenerse en él ha significado, durante el último año, una ardua lucha de él y su familia, debido a que –como veremos en la sección siguiente– sobre el joven se habría cernido la sospecha de adherir a grupos político-partidarios radicalizados, y promover “revueltas”.

El joven ciertamente dice profesar ideales de izquierda, aun cuando sostiene que no tiene militancia partidaria como tal. En todo caso, ser de izquierda para él significa: [...] estar en contra de todas las cosas que hacen estos gobiernos, reaccionar, no dejarse pisar, luchar por la igualdad”. La lucha por la igualdad, a su vez, se vincularía a la lucha por la revolución; es interesante observar que Pablo se autodefine como situado del lado de la revolución:

P.: ¿Por qué luchan los jóvenes ahora? ¿hay la palabra “revolución”?

R.: Sí hay la palabra revolución, pero la gente no tiene dónde ir. Yo pienso en la revolución pero adónde me voy. Solo hay los chinos [militantes del MPD, frente de masas del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, antiguamente de orientación maoísta y pro albanesa] que para mi punto de vista no son nada y no tengo adónde, se está perdiendo mucho, la gente dice que no hay buenos dirigentes ni organizaciones, mejor se van a andar en la Remigio²², porque no hay organización, y se ve que hay falta de interés por parte de los jóvenes, solo les interesa ir a bailar o a molestar, claro que está bien eso, pero no hay que dejarse ver la cara de todo, tener su propio pensamiento.

Pablo profesaría también, como muchos/as colegiales, los ideales de preservación del patrimonio del Estado, como garantía de una mejor distribución de los recursos y de la “igualdad”, aun cuando su pensamiento exhibe una coherencia diferente a la de las posiciones de izquierda más elaboradas:

P.: ¿Cómo ha sido tu participación en contra de la venta de las eléctricas?

22 Alusión a la concurrencia de los jóvenes de clase media y media alta a la avenida Remigio Crespo Toral, una arteria importante de Cuenca, e importante espacio de socialización y distinción de los jóvenes de esos sectores sociales.

R.: Yo en estas manifestaciones he estado todo el día. Verás, de lo que yo sé primero querían vender las comercializadoras, son los que cobran, entonces nos podrían poner el precio que quieran, si quieren pagan o de lo contrario se quedan sin el servicio eléctrico. Entonces en esas montañas hay una casita, [a] esas casas no se les toma en cuenta porque consumen lo mínimo, las comercializadoras consideran a eso pérdidas, eliminan al campo. Pienso que también tiene su parte buena por la venta, ya que los sindicatos tienen una serie de privilegios; por decirte por su cumpleaños ese día no tenía trabajo o si se enfermaba o moría, el hijo le reemplazaba en su puesto, era todo un monopolio. Si se eliminan los sindicatos toca trabajar más a las otras personas. Se protesta porque sólo tiene esta parte buena, ya que nos podría pasar como en Argentina, las empresas eléctricas es patrimonio del Ecuador, es como vender la casa propia para volver a alquilar la casa.

La alocución de Pablo nos permite comprender que, a pesar de sus búsquedas políticas, los/as jóvenes contestatarios/as no necesariamente asumen el “paquete” ideológico completo de las posiciones de izquierda. El argumento esgrimido por Pablo responde en gran medida a la representación mediática sobre el sindicalismo. De tal manera que en su testimonio confluyen notoriamente el elemento ideológico “derivado”, elaborado desde las posiciones de izquierda, con la representación mediática y, probablemente, los argumentos que esgrimen los adultos del entorno. En todo caso, el sentido de lo que se considera “revolución”, en el esquema –menos consolidado– de Pablo fundiría un vago anhelo de cambio con el descontento por un estado de cosas.

En un diálogo posterior, en enero de 2005, este joven nos manifiesta una nueva perspectiva sobre los contenidos y repertorios de la protesta. Sin negar los anteriores, abrazados en su época de colegial, Pablo admite que es necesario ubicar nuevas demandas y formas de lucha. Cree, primeramente, que es preciso comenzar por el cambio personal, y agrega tópicos como la ecología, la participación ciudadana en espacios locales. Sus actuales intereses estarían configurados desde un nuevo lugar de habla: pues actualmente, con 18 años, él es estudiante de una universidad privada, en la carrera de biología. Ese espacio de socialización se ha caracterizado por la presencia de politicidades de inspiración liberalizante, esto es, cuestionadoras de los obstáculos a la construcción de la democracia, pero también relacionadas con nuevas sensibilidades políticas, como la defensa y preservación de la naturaleza. La tendencia organizativa aquí es la confluencia en pequeños grupos a partir del interés académico. Considero que este ejemplo verifica que es preciso oxigenar el discurso

contestatorio con propuestas sobre la construcción de la esfera pública y la ciudadanía, así como con las inquietudes en torno a los tópicos más recientes de la crítica social, pues al menos en este caso es la ausencia de tales referentes lo que habría disuadido a nuestro interlocutor de la participación en la protesta de formas más tradicionales.

JOAQUÍN

Exploremos, ahora, la constelación de sentidos elaborada por Joaquín, interlocutor que, decíamos, se proclama partidario del socialismo y crítico acérrimo de las jerarquías económicas. El testimonio de este interlocutor, como vimos, se ha caracterizado por transparentar de una manera particularmente ejemplar los “desvíos” de los sentidos y el uso social de diversas ideologías, oscilando entre ellas y adecuando las proposiciones a las búsquedas de “enclasmiento”, creando oportunidades ideológicas para la justificación de una u otra posición política. ¿Qué ocurre en su léxico con la palabra “revolución”?

Usted sabe que salen a las calles con piedras, pero es la manera de protestar de ellos porque en muchas leyes, en anécdotas de la historia, se va a ver que lo que se ha logrado ha sido a través de la violencia. La revolución francesa no llegó a base de conversaciones, llegó por muertes, la revolución de Cuba fue por la revolución armada. Mi lucha es ideológica. La filosofía mía es estar en paz, porque si yo agredo a mí también me van a agredir, simplemente hago discursos frente a la gente.

La palabra “revolución” en este relato estaría asociada a la idea de violencia o de método para lograr el cambio, pero no la concibe como el cambio mismo. Y podríamos interpretar que ella es descartada aquí como determinante de un proyecto político, pues dice no profesar apego a la agresión.

Por otro lado, la corrupción sería uno de los ejes centrales (junto con las jerarquías económicas) del estado actual de cosas, ella permearía y determinaría la desigualdad y la lucha contra ella, tal vez sea lo que alcanza la dignidad de proyecto político: “Tal vez la problemática más grande es la corrupción, pero tal vez con la lucha diaria se pueda lograr cambiar eso, cuando la gente ya no aguante opresiones, sueldos tan denigrantes, se pondrá al pueblo al poder.” La perspectiva es, pues, eminentemente moral, y el cambio hacia el (algún tipo de) socialismo pasaría por una reconversión de ese tipo. Veamos ahora cuál es su apreciación sobre la autoridad y el ejercicio del poder:

Esta situación debe cambiar, porque supuestamente la política del gobierno no es para ayudar al pueblo, entonces nosotros

también hay que dar nuestro voto como pueblo ya que es el poder más grande, puede haber el Congreso pero si nos levantamos puede pasar como lo de Mahuad. Si hablamos en cuanto al Congreso, la división de los partidos políticos, [los políticos] no tienen la menor ética, la menor moral, la menor vergüenza para llamarse padres de la Patria. Hay poca gente que siendo política sí tiene un nivel de conciencia alto y una moral para merecer estos puestos, pero la mayoría parecen buenas [personas], pero luego son compradas por el dinero o por los lujos, terminan siendo como la misma oligarquía. La oligarquía para mí es un grupo de personas que negocian entre ellos no para el beneficio común sino para enriquecerse más. Los presidentes por ejemplo manejan empresas, Rodrigo Borja tiene a cargo la función del Banco del Pichincha, oligarcas como Febres Cordero que manejan al igual que Noboa empresas; no por ser de otras listas son enemigos, más bien son socios en muchas de las empresas con Rodrigo Paz. Entonces nunca se puede hablar de esta gente como parte del pueblo, la oligarquía es el sufrimiento y explotación al pueblo.

Son notables aquí las proposiciones sobre el olvido de los políticos de las necesidades del pueblo, así como sobre una deleznable condición moral de los mismos, y la formación de círculos de poder. La categoría “oligarquía” y la de “explotación” estarían subsumidas a la de “corrupción”, y las nociones sobre la justicia social estarían asociadas a la de honestidad. En este sentido, nuestro interlocutor cree que se necesita de la participación popular, para combatir la inmoralidad, como condición para el bienestar y dignidad “del pueblo”. La meta de la participación, entonces, sería lograr gobiernos “morales”, “honestos”, “receptivos”:

Tumbar a un gobierno es quitarle el gobierno por vías [que no] son legales, [...], en cambio con un gobierno se podrá negociar cuando sea capaz de receptar toda opinión de parte de los bloques, de parte de los sectores del país, de organizaciones. Porque si alguien manda un plan en el que se defienda la educación se debería escoger y no botarlo a la basura, entonces se habla de negociar con gobiernos honestos, con gobiernos llenos de corrupción es difícil hacerlo, mediocres, siempre y cuando sea igualitarios y velen por los que le dieron el poder para que trabaje por ellos.

Estaría, pues, latiendo en la ideología de la protesta la noción de delegación del poder en manos de salvadores “que velen por los que le dieron el poder”. Aquí se reafirmaría nuestra tesis sostenida en el Capítulo I,

en su sección “Entre la política y la cotidianeidad: explorando salidas”, en el sentido de que la “rebelión” y la opción política identificatoria podrían estar en relación de asociación.

Ahora bien, la idea de moralidad trascendería el significado de “manejo correcto”, para encarnarse en la expectativa de trabajo, es decir la realización de obras, garantía de bienestar (“ayuda al pueblo”). Pero, además, la idea de honestidad parece también remitir a la condición de una masculinidad política, y la de corrupción a la de cobardía: “A él [Mahuad] le faltó hombría, no pudo enfrentar a un pueblo que le pedía explicaciones, para mí siempre será un cobarde, porque no enfrenta esta situación”. Así, los símbolos que expresan virilidad y fuerza serían conmensurables con el sentido de honestidad; y esto independientemente del icono político en cuestión, como veremos en el siguiente diálogo:

P.: ¿Qué opinas del subcomandante Marcos?

R.: La ideología de él, creo que después de Zapata es lo mejor de México, porque defiende a un país agrícola, defiende todos los derechos de los campesinos, que son los oprimidos, en México tienen mucha dependencia de Estados Unidos, y eso tampoco es lo mejor. Para mí el pensamiento de Bolívar debería cumplirse, que se una Sudamérica, Latinoamérica, si es posible toda América. El subcomandante Marcos es muy consecuente con esa realidad campesina, él vivió mucho tiempo ahí, sintió pobrezas, al ver tanta forma de vida indigna.

P.: ¿Qué sabes de Allende?

R.: Fue, creo, un comunista, ante esto la política de él más o menos llevaba al comunitarismo, pero Pinochet logró arrebatarse el poder. No estoy en contra de Allende, porque para mí hizo mejorar la economía de Chile; tampoco estoy en contra de Pinochet, porque pese a su política militar también tuvo sus cosas positivas en su gobierno. La imagen de Pinochet me parece negativa en el aspecto de haber matado a mucha gente o reprimir a mucha gente, a mucha juventud universitaria, hizo callar las voces, eso repudiaré de Pinochet, pero mucha gente de Chile reconoce que también elevó la economía. Podría decirse que el neoliberalismo entró ya en Latinoamérica, incluso antes que su gobierno pero él arraigó políticas neoliberales con más fuerza, no desestabilizó tanto como pasó en Argentina, por ejemplo, se podría decir que fue un precursor del neoliberalismo en América Latina.

No está clara la connotación otorgada al término “precursor” relacionado con la evaluación de Pinochet, sin embargo, parecería que no

es negativa. Sugiero que la superposición de símbolos viriles-salvacionistas –emblemas, a la vez, de moralidad– se inscribe en una lógica identificatoria, lo que conllevaría a opciones políticas contradictorias, en la medida de que tales figuras respondan a tales criterios emanados de los procesos de formación de las identidades personales y de la vida cotidiana. En su artículo “La música en la constitución de las culturas juveniles”, Cinthia Chiriboga menciona un caso similar: un rockero guayaquileño de 27 años de estrato medio-bajo expresa su admiración por el Che y Pinochet a la vez. Chiriboga contextualiza esta curiosa adhesión en el discurso de ruptura de los seguidores del rock frente a ciertas convenciones sociales, como son el dinero, el conformismo y la búsqueda del éxito. Señala, además, que parecería que en la perspectiva de ese joven los modelos autoritarios son válidos si traen justicia. En cuanto al origen de esta aparente paradoja, Chiriboga sugiere que probablemente tal admiración provendría de “una aspiración ingenua a un tipo de gobernante, que con el poder imponga orden y justicia, un poco al estilo de los héroes de ficción” (Chiriboga, 2001: 94).

Estas anotaciones de Chiriboga nos ayudan a comprender las aparentes incongruencias políticas, en las que se fusionarían ecos de los procesos afectivos y la lógica del parentesco con las imágenes mediáticas y las interpelaciones públicas. Para comprender por qué esto es posible, es menester recurrir a la conceptualización de Bourdieu sobre la “competencia política” y a los procesos de su formación en cada uno de los interlocutores. Al hablar de “competencia política”, Bourdieu se refiere a la capacidad para reconocer, en el mercado de discursos políticos producidos y ofertados por los productores de opiniones legítimas, las cuestiones políticas como tales, y no, por ejemplo, como cuestiones éticas (Bourdieu, 1998: 406). Entonces, la diferencia de competencias expresadas mediante la coherencia de Marcia, por una parte, y la fusión de imágenes un tanto paradójica que realiza Joaquín se deba al arraigo de las representaciones de ella en la cultura del libro, mientras en el caso de Joaquín los símbolos políticos podrían fusionarse con los héroes de ficción de la cultura televisiva. Obsérvese que en el caso de este, también hay una fusión *sui generis* entre socialismo y neoliberalismo, y una apreciación ambivalente de los mismos, con un sentido de moralismo que prefigura la comprensión de los fenómenos políticos.

La acción-discurso de esta índole no solamente estaría relacionada con una búsqueda de “enclasmiento” o de adaptación a oportunidades de ascenso o preservación de un estatus social, sino que también justificaría eventuales adhesiones a opciones políticas contrarias. Pero, sobre todo, es importante señalar que es este vaivén simbólico lo que posibilita la estabilidad de la dominación, al tener como efecto una

“metaforización del orden” (concepto de Michel de Certeau, 1996), y una “prevención” o contrapeso del antagonismo social y político.

Por último, y para argumentar nuestra propuesta sobre las politicidades estudiantiles “activa” y “diferida”, sugerimos que la carga moral de las representaciones de la política podría incentivar la protesta, transmutándola en cuestionamiento a un estado de cosas, sin que esta tenga el carácter de impugnación al orden. De ahí que es probable que aquellos/as que se mantienen al margen de las opiniones y las prácticas políticas, esto, es en el “estado” de “politicidad diferida” que hemos definido en páginas anteriores, puedan en un determinado momento asumir una postura crítica y aun militante (aquella lucha “de un día” exaltada por Brecht), en circunstancias en que un gobernante sobrepase ciertos límites de decoro. He ahí la explicación, por ejemplo, de las multitudinarias marchas en contra de Bucaram, en las que confluyeron masivamente jóvenes urbanos de todas las tendencias políticas, pues como dice Pablo:

A Abdalá lo quisimos botar todos, las cosas eran demasiado, él robaba de frente, al hijo le manda a las aduanas y mostraba que adquirió su primer millón de dólares que ha robado. Mahuad en cambio era un mal presidente, pero era más tapado, [...] no hacía tantas payasadas. Las dos cosas están mal, no se debería hacer ninguna, pero en todo caso la gente acepta más que le roben por atrás [a] que le roben de frente, esos comentarios he oído en algunas veces en el bus. En mi opinión está mal que roben siempre, no tienen por qué hacerlo, la gente no les eligió [...] para que los desmantelen.

Todas estas vicisitudes de la politicidad juvenil indican que no necesariamente debemos esperar una actuación coherente compatible con una política ilustrada, basada en “ideas”. Pero esta constatación, sin duda, está bastante lejos de sugerir un estado de indiferencia o de contrapolítica. Tal vez, entonces, la reflexión deba orientarse hacia nuevas pautas para el entendimiento de las nuevas sensibilidades políticas y las formas a través de las cuales se proyectan hacia la transformación del poder y el modelo de sociedad. Esa podría ser una forma eficaz de interpelación a la juventud.

CONTENIDOS Y ESTILOS

Decíamos páginas arriba que la literatura revolucionaria de las décadas anteriores tiene un lugar importante en la construcción de la imagen del mundo social que realizan los/as jóvenes contestatarios/as. En esta construcción, hoy en día, han confluído narrativas elaboradas por las ONG, tales como el discurso de género, de salud reproductiva, de la eco-

logía, del liderazgo. Es decir que estos enunciados, al migrar al discurso contestatario, se reinscriben en un giro anticapitalista. Empero, los planteos y reivindicaciones no se quedarían cautivos de estas orientaciones, sino que se asumirían pautas propias, tales como la lucha contra el acuartelamiento y las corridas de toros²³, los derechos estudiantiles, el derecho a la tacha de los profesores (esto es, la descalificación definitiva de aquellos docentes que incurran en actitudes lesivas para la calidad de la enseñanza, en hechos de corrupción o en actos que violen de alguna manera los derechos humanos)²⁴.

En los estilos de trabajo incidirían también las pautas proporcionadas por las ONG, pues en las agrupaciones de jóvenes primarían las actividades de capacitación, por sobre las de agitación y propaganda prevalecientes antaño; y el arte cobraría una importancia fundamental como recurso para la expresión de concepciones políticas y la convocatoria, pues los nuevos estilos de trabajo demandarían la formación de nuevas sensibilidades políticas. He aquí lo que dice Marcia al respecto:

Hablar más ya no tanto de cifras, ya no tanto de lo que nos han dicho siempre, hay tanto sesenta y siete por ciento de poblaciones pobres, sino ya hablar mas testimonialmente de eso, [...], incluso yo pienso que las artes pueden colaborar mucho con el cambio, no se hacen cosas que impacten a la gente, impacten sobre todo a los jóvenes que están perdidos en las drogas.

MARIO

Mario, un joven de 19 años, hoy estudiante universitario en la carrera de sociología, nos ha proporcionado una información particularmente valiosa sobre el tema. También él procede de una acomodada familia de profesionales y es egresado de un colegio particular, dirige un grupo autodenominado “Grupo de Pensamiento Revolucionario” y mantiene, como veremos, relaciones estrechas con varias agrupaciones y organizaciones de jóvenes, tanto políticas como vinculadas a ONG. Pues bien, para este joven y su grupo el arte tiene una importancia fundamental:

Estamos trabajando con niños difundiendo conciencia por medio del arte, les enseñamos en academias artísticas, creemos que el arte es la forma de expresión, una forma de protesta; y que los niños desde sus edades tienen que empezar a protestar, porque tienen mucho de qué protestar, como que se dan cuenta

²³ Comunicación de Nidia Solís.

²⁴ Esta información ha sido proporcionada por Mario, nuestro interlocutor.

de las situaciones que tienen sus padres, de las situaciones que viven a veces sus amigos, entonces necesitan expresarse.

Mario considera que la restitución de las utopías y el desarrollo de la sensibilidad social están unidos indisolublemente a la búsqueda de nuevos lenguajes artísticos y el descubrimiento de los problemas *in situ*, fundando nuevas constelaciones de prácticas:

[...] quien entra a nuestra organización lo primero se le hace que sienta realmente cuál es la situación, si se les lleva a visitar al grupo de niños funderos²⁵; en las academias artísticas encuentras experiencias y vivencias de los niños, en las que yo creo la gente se va dando cuenta de cómo, qué tan cruda es la realidad. Entonces creo que es la única forma de hacer cambiar a la gente, porque si la gente ahora se cierra y dice ahora: “¡no!, es que la política es mala, por comunista, o socialista no, ¿qué te pasa? tienes que ser mas centrado, que esto es imposible”, que te hablen de las “utopías”. Cuando le enseñas a la gente realmente la realidad, ese momento la gente dice [...] “tienes razón, hay que hacer algo”, entonces estamos al nivel de los jóvenes queriendo hacerles dar cuenta de las realidades, cuando les hablamos de política social siempre les hablamos de esta actitud que ha asumido el liberal, el neoliberalismo, con la globalización y todo lo demás que es una actitud totalmente individualista.

Desde la perspectiva de Marcia, por otro lado, tal contacto con el mundo social estaría llamado no solamente a involucrar a los/las jóvenes en la propuesta de cambio, sino que coadyuvaría a la superación de estereotipos discriminatorios y racistas, de una manera semejante al *modus operandi* de los populistas rusos del siglo XIX:

Y yo pienso que también los chicos de esa edad [se refiere a muchos adolescentes que se reconocen como revolucionarios] se enfrentan con ideales o con héroes de las revoluciones mundiales, pero no se dan cuenta de nuestro país, no se dan cuenta de la gente pobre, del pueblo, no se dan mucho cuenta de que ellos están siendo pequeños burgueses, que están explotando a su empleada o que están explotando y tratando racistamente a la gente del pueblo, a un busero²⁶, a un chulío²⁷, a la señora

25 En Ecuador, niños de la calle que se drogan aspirando cemento de contacto.

26 Chofer de bus.

27 Ayudante del chofer de bus, cobrador.

que les lava la ropa, que plancha o simplemente al mismo compañero de clase que es más morenito o que es de apellido tal [...] un cambio fuerte para hacerte dar cuenta de qué es una revolución, [que] es unirte al pueblo, no simplemente cambiarte de un colegio particular a uno fiscal, sino más bien llevarte con todo tipo de gente, compartir con esa gente, hablar con esa gente y también no ir mucho a turistar, por ejemplo cuando te vas al campo, no ir de paseo, sino más bien comprender y ver cómo vive la gente, tal vez preguntarles cuáles son sus necesidades, qué está pasando, qué piensan de la revolución [...]. Yo creo que para darte cuenta ya no con una idea romántica de la revolución, sino ya [de] una realidad ecuatoriana.

El trabajo de estos/as jóvenes tendría una importancia cardinal en tanto ensayo de nuevas formas y estilos, de re-creación y actualización de los contenidos de la crítica social. Su contribución es crucial, sobre todo, a partir de la reivindicación del arte como herramienta de cambio de la sociedad actual. Y no es que las generaciones anteriores de jóvenes contestatarios/as hayan desestimado el papel del arte en la formación de las sensibilidades políticas y las identidades, sino que hoy las expresiones artísticas tendrían un peso mayor, porque como dice Barbero, nuestra época padece del mayor déficit simbólico de la historia, a merced de la saturación de signos (Barbero, 1998: 32).

Es en este esfuerzo de re-simbolización donde también germinarían las posibilidades de recuperación de la sensibilidad social y la política y, por supuesto, las utopías. Y por cierto, la constatación de estas presencias expresivas de la mano con lo que podríamos denominar lo “instrumental-transformador”, reforzaría la sugerencia, antes realizada, de exorcizar las antípodas del análisis de las dinámicas políticas juveniles.

PRÁCTICAS ORGANIZATIVAS Y SOCIABILIDAD

Al observar las jornadas de protesta de 1999 en contra de Mahuad y su ministra de Economía, quienes habían ordenado el congelamiento de los depósitos bancarios, debí reconocer la extraordinaria productividad organizativa de la sociedad ecuatoriana, y particularmente en la ciudad de Cuenca y la provincia del Azuay. Nuevas fuerzas sociales y políticas no cesan de incursionar en el escenario de la política nacional. Independientemente de que muchas organizaciones sociales germinen como “flores de un día”, es decir como agrupaciones articuladas en torno a reivindicaciones puntuales y perentorias –por ejemplo, en contra del fraude bancario–, otras parecían presentarse mucho más consistentes, como las asociaciones de familiares de emigrantes. Me sorprendió, asimismo, la gran cantidad de organizaciones eclesiales de base y

agrupaciones estudiantiles con membretes bastante innovadores, tales como, por ejemplo, la “asociación de estudiantes de teología” de una de las universidades particulares de la ciudad, cuyos miembros portaban pancartas con leyendas de contenido crítico-humanista.

En el diálogo con Mario conocimos sobre la existencia de variadas organizaciones de corte político. Al hablar de su organización, el “Grupo de Pensamiento Revolucionario” (GPR), este joven menciona que el mismo se habría iniciado hace varios años como “Grupo de Pensamiento Revolucionario Pacífico” (GPRP), orientación y denominación con la que varios miembros habrían roto, desechando la sigla “P” de “pacifista”.

Menciona también la existencia de un grupo juvenil universitario simpatizante de los principios del Partido de los Trabajadores del Brasil. Durante las movilizaciones de enero de 2002 en contra de la privatización de la comercialización de la energía eléctrica, esta agrupación denominada “Movimiento por la construcción del Partido de los Trabajadores (PT)” proclamaba, en su hoja volante “¡La lucha continúa!: ¡Ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos imperialistas!, ¡Fuera gringos de la base de Manta, contra el Plan Colombia!, ¡Contra la privatización de las empresas eléctricas!, ¡Contra el ALCA y por el no pago de la deuda externa!, ¡Sanción a los asesinos del menor Damián Peña Bonilla!, ¡Sanción a los militares que trafican con los recursos del pueblo!, ¡Contra el alza de los precios de bienes, servicios, tasas e impuestos!, ¡Por la convocatoria a los parlamentos populares!, ¡Por un gobierno de los trabajadores de la ciudad y del campo!” (hoja volante que circuló en la marcha del 17 de enero de 2002). Vemos, entonces, un repertorio de enunciados políticos que abarca un amplio espectro de propuestas y reivindicaciones, desde aquellas de carácter general “antiimperialista” y de organización del gobierno, hasta las más concretas referidas al costo de la vida.

Otra forma organizativa brota también de la acción de las ONG. Un ejemplo en este sentido sería la Juventud Unida Forjando Esperanzas (JUFE), que se aglutina en torno a proyectos, aun cuando carece de estructura orgánica. Finalmente están las organizaciones promovidas por el Estado, tales como el Foro Nacional de la Juventud, que tiene una filial en Cuenca, y es financiado por el Ministerio de Bienestar Social.

Entonces, ¿hay movilización estudiantil en el Ecuador? La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), así como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), en la percepción de dos de nuestros testimoniantes, habrían “dejado de funcionar” desde hace varios años, incluso cuando se mantienen las siglas y como estructura de convocatoria para las movilizaciones. No obstante, las protestas estudiantiles continúan estando en el orden del

día, aun cuando en el contexto de una institucionalidad política laxa. Y una de las voces colectivas que se también se expresó en aquellos días de enero de 2002 fue la del movimiento “Refundación Universitaria” (RU), planteando: en primer lugar, la necesidad de “unidad férrea de las diferentes organizaciones, movimientos sociales y políticos del país y de la provincia”, unidad que vaya más allá del “dogmatismo”, el “oportunismo” y el “mero afán de figurar”; en segundo lugar, la convocatoria de la movilización social “en torno a una propuesta seria y de largo aliento que apunte a las raíces de los problemas y no al velo”; en tercer lugar, “un programa” que contemple “la ruptura inmediata con el FMI y el BM”, ni un centavo para la deuda externa, que se invierta en obras, se cree empleo y se suban los sueldos y salarios, ni un centavo a la banca, cárcel a los corruptos y venta de sus patrimonios para solventar a los depositantes, juicio y sanción a los asesinos de las víctimas de la policía nacional [estudiantes asesinados y agredidos por la represión] (hoja volante “No somos Argentina”, recogida el 17 de enero de 2002) .

Veamos cuáles serían los afluentes de la protesta estudiantil dentro de este marco. Una vertiente podrían ser los adherentes políticos cercanos a la dirigencia de las organizaciones estudiantiles; otra, un número de organizaciones atomizadas con cierto grado de consistencia orgánica e ideológica, aun cuando distantes de los partidos que responden a las convocatorias de la FESE y la FEUE. Y quizá la corriente mayor estaría conformada por una “periferia”, cuya participación es aleatoria y resultante de la confluencia en las instituciones educativas y del “arrastre” de los líderes y estudiantes motivados/as. Estos/as jóvenes son vistos por sus condiscípulos como conformistas y pasivos; sin embargo, todavía está pendiente la tarea de comprender los entretelones de su participación, ya que no puede satisfacer a un/a analista la tesis simplista del “arrastre”. Pensaríamos que en ciertos momentos los/as jóvenes de la “periferia” podrían estar más incentivados que en otros para la participación en la protesta. En tal sentido, si las primeras dos vertientes ejercen una participación “convicta” y son expresiones de la politicidad activa, la última estaría sustentada eminentemente por la politicidad diferida.

Ahora bien ¿cuáles son los dispositivos que permiten canalizar la politicidad activa y la politicidad diferida de la juventud contestataria hacia una presencia pública? Un lugar privilegiado lo tendría el componente emocional y los sentimientos de amistad. Casi todos nuestros interlocutores reconocen la importancia del grupo de amigos. Pablo, por ejemplo, revela:

Yo siempre salgo, tengo un grupo de amigos; siempre estoy adelante, mis amigos están en la FESE [Federación de Estudiantes

Secundarios del Ecuador], en la JRE [Juventud Revolucionaria Ecuatoriana], en otras organizaciones, a mí me dicen que me integre, “vos eres bueno”, pero yo digo “no, prefiero participar solo por mi cuenta, con mis amigos”. Yo soy solito, no ando con nadie [en el sentido de una adscripción partidaria].

También Mario relata el emprendimiento en la construcción de su organización, el “Grupo de Pensamiento Revolucionario”²⁸, a partir del grupo de amigos. En segunda instancia, estos grupos convergirían en núcleos organizativos mayores, a los que denominaríamos “organizaciones de formalización intermedia”, cuyo objetivo es catapultarse hacia el ejercicio público, aunque con estilos renovados de acción.

Propondríamos, entonces, que lo que cimenta los dispositivos de la movilización se constituye a medio camino entre los sentimientos y la racionalidad. De ahí que si la base de la cohesión en las “comunidades emocionales” es la agregación emocional sumada a las identificaciones con determinados referentes estéticos o modas, las agrupaciones políticas intermedias se constituirían sobre la base de una agregación emotivo-racional, y del predominio de identificaciones con símbolos políticos. El argumento que estoy desarrollando conserva el espíritu de lo que he sugerido en las páginas iniciales de este capítulo, es decir la inviabilidad de la oposición “comunidad emocional” (posmoderna) / “pacto racional” (moderno) en tanto determinantes de las formas de agregación y sociabilidad mutuamente excluyentes, y en ese sentido sostengo que ninguna instancia organizativa formalizada (“tradicional”, en el lenguaje “post”) puede regirse por principios puramente impersonales y abstractos. Sostengo, en tal sentido, que en el seno de las modernas organizaciones políticas cobrarían importancia los lazos de amistad, en sustitución del predominio de los nexos de sangre en las sociedades no-modernas; de ahí también la importancia de los sentimientos, como uno de los factores que sustentan la cohesión. Al tratar de comprender el lugar de lo emotivo en las organizaciones de formalización intermedia como tributarias de formas modernas, en comparación con las posmodernas “comunidades emocionales”, deberíamos argumentar no la ausencia del vínculo emotivo y la identificación, sino la presencia acentuada –tal vez, ni siquiera predominante– del vector político-racional. A su vez, estas organizaciones de formalización intermedia conformarían “redes” de funcionamiento intermitente, sin que se logre, por el momento, concertar acciones de largo aliento, ni plantear metas políticas claras y consensuadas. Se trataría, pues, de una nueva

²⁸ Mario menciona que a inicios de 2000 el grupo habría contado con sesenta adherentes (“militantes”).

forma de existencia de lo político, tras el abatimiento de la forma “partido” en la versión del siglo XX: una forma de diseminación que podría recuperarse políticamente al encarnarse en la forma “multitud”.

LOS LÍMITES DE LA PROTESTA

En otro ámbito, la participación restringida de la mayoría es difusa, y obedecería a la presencia de una nueva sensibilidad política que permite únicamente una presencia formal, sin el compromiso mayor de la perseverancia, lo que conlleva la dispersión cuando la represión recede. Sin embargo, existe la posibilidad de que en algún momento, por ejemplo, cuando las acciones de gobierno excedan lo tolerable, las mismas personas expresen un cuestionamiento al orden existente. Es así que, dependiendo del momento político específico, y si se considera que el gobierno ha cometido abusos imperdonables, la represión policial no solamente no desalienta la participación, sino que sirve como incentivo a la misma. Tal situación se constató, por ejemplo, en Cuenca, durante las jornadas de 1985, en contra del gobierno autoritario de derecha de León Febres Cordero que se alineó francamente con los designios de los Estados Unidos y violó los derechos humanos, al punto de que fueron ejecutadas y desaparecidas personas acusadas de “terrorismo”. En esa ocasión, falleció una persona electrocutada, al ser lanzada con fuerza por el chorro de agua del carro antimotines contra una valla de seguridad con alto voltaje. Las fuerzas represivas no solamente no lograron amedrentar a los y las manifestantes, ni siquiera con la declaratoria del estado de emergencia; parecía más bien que la cruenta represión policial estimulaba la protesta y exacerbaba los ánimos de la gente, por lo que las movilizaciones se prolongaron hasta avanzadas horas de la noche. Ya en la época del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, entre 1988 y 1992, un estudiante observaba que la protesta menguaba debido a la indiferencia del gobierno, que ordenaba a la policía no reprimir (“se van porque la policía no dio una mano”). Se trata, insisto, de fenómenos cuyo estudio debe ser profundizado.

Podríamos también examinar la incidencia del miedo en la dispersión. Así, por ejemplo, explica Marcia: “[...] nos hemos dado cuenta que hay, qué sé yo, doscientos estudiantes manifestando con mucha fuerza, y hay algún estudiante caído, hay algún accidente, hay estudiantes muertos como fue el caso del compañero Damián Peña [...], y se van los estudiantes y quedamos cincuenta o sesenta estudiantes o menos.”

Pero es Pablo quien, a través de su testimonio, nos da mayores elementos para comprender el peso de la intimidación y la represión en la disminución de la protesta, lo que como veremos se realiza también en las instituciones educativas. Como ya anticipamos, este joven y su familia libraron en el 2001 una batalla por su permanencia en el colegio

nacional en el que estudiaba, pues se le acusó de instigador y revoltoso, y se le pidió retirarse, con el agravante de que con la baja calificación en conducta no sería admitido en ningún otro establecimiento de educación media. He aquí su ilustrativo relato:

Justo cuando yo estaba en los exámenes le llaman a mi mami, cuando ella se va le dan una carta diciéndole que busque mis papeles porque ya no me van a dar la matrícula, justo al terminar el tercer año. Entonces la carta ve mi papi y se enoja porque pensó que yo hice algo, no me quería creer que me botaban sin tener yo la culpa, después averiguó y me dijo que me va a apoyar, me dijo: “no te mando [al colegio], vamos a entrar en un juicio”, me preguntó si quería, para mí mejor. [...] Ahí empezamos a ir a hablar en la Dirección de Estudios, a donde los abogados, me decían que no tenía la culpa y que era una injusticia: “en todo caso no hiciste nada malo, entonces tú tranquilo” [...]. Mi papi tuvo que hacer tanto lío, primero habló de buena manera, que no había argumentos para que me hagan tanta cosa, pero ellos me hostigaban, me tomaban declaraciones, me preguntaban qué hago los fines de semana, que adónde me voy, que qué hago, y me escribían todo lo que decía. Había una profesora que daba ética, yo me fui al Encuentro Bolivariano, cuando vine me entero que ha llamado a mis compañeros para saber qué fui a hacer en Quito, cómo participé; le hacía problema a mi mami, pero ella no se dejó y la profe me puso el ojo. Según el colegio, me botaban porque yo hablaba en los cursos para decirles que tenemos que salir, que no nos quedemos aquí, yo nunca hacía eso, me decían que andaba repartiendo propaganda, sellos, total nada de eso, lo que pasó es que me dieron unas entradas para un concierto para poder ir al Encuentro Bolivariano, me dieron en la FESE, mi amigo de la FESE me invitó, me dio un talonario de boletos para que venda, pero mi papi mismo me dijo: “anda a ver cómo es...” No había eso de que estaba vendiendo sellos, que yo me iba con los JRE, que se van a las montañas a entrenar, nunca me he ido y no me interesa, peor, decían que ellos me han visto en las manifestaciones, que estoy ahí. Mi papi sabía que no estaba en eso, él escuchaba las declaraciones. Mi papi tuvo que hacer juicio para que me admitan de nuevo, pero creo que me dejaron la matrícula condicionada y me dijeron que esté tranquilo, que no me verán en esos actos; que la comisión de disciplina me iba hacer un seguimiento durante todo el año, entonces ahora tengo que ser más tranquilo. Cuando se toma-

ron el colegio para sacarle al rector yo tenía que botarme por los techos para que no me vean, tenía que cuidarme. Ahora sí me da un poco de miedo porque no puedo ser, tengo que andar medio escondido, con miedo que me manden otra vez, debo ser callado, nunca hablo nada, tengo que ser uno más del montón para estar [...]. Me gusta hablar, pero me hacen ver como si fueras de esos que no le importa nada.

El miedo como sentimiento más o menos generalizado podría, ciertamente, formar parte de “la estructura del sentimiento”, imbricándose con la politicidad diferida. A pesar de eso, podríamos pensar que tal o cual sentimiento, emoción o estado de ánimo tiene una presencia cíclica²⁹; los ciclos, sin embargo, pueden llegar a su fin, entre ellos el ciclo del miedo, cuando entra en juego, parafraseando a Calhoun (1999: 97), el sentido de lo que las colectividades son y de cómo los sujetos elaboran ese sentido crucial de estar en la colectividad.

Otros factores de la fragmentación y declinación de la protesta serían también la percepción de la ineficacia de la misma para una modificación sustantiva de las circunstancias sociales y políticas, junto con la censura a los aparatos dirigenciales. Sobre todo en la medida que no han sido puestos en tela de juicio la vida democrática interna de las agrupaciones que han sido protagónicas en la lucha contra el ajuste, los objetivos y las reivindicaciones, como tampoco se ha renovado la percepción de los nuevos problemas políticos. De ahí surgirían búsquedas como la de Pablo, quien en el devenir de su proceso de formación universitaria ha optado por la propuesta ecológica y su expresión a través de un grupo pequeño de coidearios.

Un último obstáculo para la eficacia de la protesta juvenil sería el mencionado efecto de “metaforización del orden”, es decir la evaluación de la política desde el registro moral. Y tal “metaforización” dejaría abierto el camino a identificaciones políticas de diversa índole, adhesiones que eventualmente promoverían la movilidad social ascendente de los sujetos. En ese sentido, la protesta asumiría un carácter táctico, es decir, según la definición de Michel de Certeau (1996), de que la negociación transcurra en el campo de poder del otro y se torne desfavorable, por lo que no habría la posibilidad para que los insurgentes puedan capitalizar ventajas, logren un posicionamiento estratégico, un

29 Recuerdo el despertar de la sociedad peruana a mediados del año 2000; en ese contexto muchos participantes de la Marcha de los Cuatro Suyos coreaban “el miedo se acabó”; la oposición peruana ha esperado largos años para manifestarse abiertamente, el miedo había terminado con el triunfo de Fujimori en la segunda reelección. Los límites de la tolerancia llegaron a su fin, pues el autócrata se permitió desafiar un sentido crucial de la vida de la colectividad peruana.

lugar propio. Es pues necesario que los sujetos críticos al orden sepan reconocer, para efectos de una movilización vigorosa, las mudanzas impuestas a la política de la contestación por la contemporaneidad. De lo que se trata, en suma, es de formular correctamente los objetivos de la lucha, tomando en cuenta, tanto quién es el adversario real y sus características, como la adecuación de las alianzas políticas, los estilos, métodos y prácticas que podrían ser eficaces.

CONCLUSIONES

El fin de siglo en nuestro país se ha caracterizado por una plétora de ideologías y prácticas juveniles desafiantes y transgresoras, fundamentadas en lo que se ha denominado la “tribalización”, que se plasma en asociaciones en torno al consumo de determinados bienes simbólicos a la moda; grupalidades que eventualmente desertan del orden hegemónico por vías como la violencia y el consumo de drogas. Para Margulis y Urresti, tales opciones juveniles serían “una resistencia activa [...] contra el molde, implícito en las formas culturales hegemónicas” (Margulis y Urresti, 1998: 19). Formas que expresarían, en ese sentido, una rebelión contra el icono del “heredero oficial” del sistema: el/la joven pulcro/a –casi siempre empresario/a–, exitoso/a, bello/a y, por supuesto, blanco/a. Tales expresiones de rebeldía están dotadas de un potencial deconstructivo, en primer lugar de la dicotomía adulto/a-joven (en el ámbito de los micropoderes) y, en segundo lugar, del ideal de adscripción disciplinada al orden hegemónico. No obstante, muchas de tales grupalidades, con su clamor de reconocimiento social y cultural, y las formas específicas a través de las cuales este es demandado, desde su contexto de “politicidad diferida”, solo tangencialmente se instalan en el terreno del conflicto creado por el ajuste y la precarización social e ideológica de la sociedad.

En tal contexto, cobra importancia la presencia pública de la contestación de la juventud estudiantil que ha sido interpelada por las presiones del ajuste y que, con su exigencia de redistribución enfilada con urgencia a uno de los ejes de la precarización de la sociedad, sitúa al conflicto de una manera próxima a un “horizonte de emancipación” (Vakaloulis, 1999). Concretamente, la ideología de la protesta, en este sector social, se vincularía a la defensa de un lugar social, de la continuidad de la condición de ciudadanía social, en tanto acceso al derecho a la educación.

Por todo esto, la presencia pública de la juventud estudiantil ha tenido un alto grado de politización, a pesar de su fragmentación y vulnerabilidad ideológica. Empero, a manera de recuento sucinto, vale la pena mencionar que los límites de la protesta advienen no solamente del miedo y la criminalización de la protesta, sino también de su propia

forma de existencia. Y es que la inestabilidad del posicionamiento de los sujetos en el campo social, y las búsquedas por la afirmación hechas sin proyectos políticos claros es lo que confiere a los pronunciamientos políticos un carácter polivalente, colindante con fenómenos como la identificación populista y las negociaciones de carácter táctico.

La presencia contemporánea de la protesta juvenil merece ser sostenida por la continuidad de la escuela, en tanto lugar de confluencia capaz de neutralizar el ensimismamiento individualista. Asimismo, la movilización política juvenil puede ser potencializada también por ofertas simbólicas, tal y como demandan Marcia y Mario en sus testimonios, con el objetivo de contrarrestar los efectos ideológicos de la cultura mediática y otras tecnologías de la subjetividad que fomentan el hedonismo, la indiferencia y la pasividad social y política.

Es menester, por otro lado, valorizar la existencia de un soporte organizativo de la protesta estudiantil: grupos de amigos/as, asociaciones estudiantiles, núcleos de encuentro adscriptos a trabajos de ONG y de la Iglesia, etc.; núcleos que han logrado niveles de formalización intermedia, y que frecuentemente habrían definido sus opciones doctrinarias. Estas instancias serían menos rígidas y definidas que las organizaciones políticas juveniles y estudiantiles de antaño y, al parecer, se instalarían tanto en las proximidades de los partidos políticos, como en “redes”. Es interesante, también subrayar que ha sido la condición de ciudadanía social de los/las jóvenes estudiantes, en tanto disfrute del derecho a la educación y a ciertos niveles de bienestar, la que ha tornado posible el re-afianzamiento ideológico y la defensa de un sentido de “igualdad” y dignidad del mundo social del que forman parte. Es la convergencia de las grupalidades politizadas con la enunciación y la experiencia de la “igualdad” lo que ha generado la incidencia pública de los sectores estudiantiles y, en el caso ecuatoriano, ha coadyuvado a la resistencia a las derivaciones extremas de las políticas de ajuste.

En vista de estas circunstancias, al repertorio de tales ofertas simbólicas sería bienvenido el tema de la solidaridad, en la medida que esta tiene claros referentes en las identificaciones horizontales, el afecto y el comunitarismo que caracterizan la sociabilidad juvenil, pues “el ser joven es comunitario, a diferencia del ser adulto que tiende a individualizarse” (Cerbino et al., 2001: 29).

CAPÍTULO IV

PATRIA, SOLIDARIDAD Y REDENCIÓN: LA PROTESTA OBRERO-SINDICAL

... que el hombre no proteste por la sopa en la cocina, que el hombre pelee por la sopa en la calle, porque el salir a protestar es conseguir mejoras para todos...

Don Julio, interlocutor

LA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL de los trabajadores y sus organizaciones en la sociedad ecuatoriana se ha desvanecido de las preocupaciones de las ciencias sociales. De tal manera, un tema importante en la década de los ochenta ha sido suprimido al calor de la “lucha discursiva”¹, que, como dice Jameson, siguiendo a Stuart Hall, no es el “conflicto ideológico total, sino el control de los términos y reglas del discurso a través de la desacreditación de alternativas económicas, sociales y políticas tornando inmencionables determinados tópicos temáticos” (Jameson, 1999: 189).

Y es que el tema del trabajo, la reivindicación y la organización laboral realmente se ha tornado “inmencionable”, en virtud de que “el orden del discurso” ni siquiera ha canonizado a íconos substitutos (digamos, por ejemplo, al más neutral “trabajadores”), como sí lo ha hecho para el caso de la representación de otras fuerzas sociales que se han opuesto a la instauración del modelo de ajuste estructural, como hemos visto en los capítulos anteriores. Decíamos también que el visualizar nuevos desdoblamientos antes obliterados de los sujetos, a la larga, ha-

¹ Un compendio relativamente tardío sobre el tema fue publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca, y data de 1991. La publicación fue producto de un Seminario Internacional sobre “Pensamiento y práctica del movimiento obrero latinoamericano y ecuatoriano en los años ochenta y sus perspectivas en la próxima década” (Achig, 1991).

bía permitido un enriquecimiento de la discusión. Tal visibilización permitiría, ahora, ver al campesinado más claramente a través de la profundidad de sus autoidentificaciones étnicas, cuando las hay, y al estudiante en los avatares de su cotidianidad y en lo insondable de sus aspiraciones personales y afectos de “juventud”.

¿Por qué en este caso ni siquiera se ha operado la sustitución de “obreros” –icono fuertemente hermanado con el de “proletarios”– por otras imágenes? ¿Será, tal vez, porque el trabajo obrero, la organización sindical y su lucha, durante las tres últimas décadas y con todas las limitaciones que podamos identificar, se instalan en la encrucijada de las controversias políticas en torno al modelo de sociedad que unos y otros desean, así como en el corazón de aquello que está en disputa: la estructura de la producción?

En ausencia de una preocupación desde las ciencias sociales por los procesos actuales de las relaciones capital-trabajo, las luchas político-sindicales y sus expresiones simbólicas, serían los propios trabajadores quienes realizarían un esfuerzo de reflexión en torno a la problemática social y política en la que estaban inmersos. Podemos citar, en ese sentido, el texto de Narváez (et al. 1996), *Los encadenados del oleoducto*, o de Fausto Dután, “Situación y perspectivas del movimiento sindical y popular” (citado en Narváez et al., 1996).

El presente capítulo es un esfuerzo por reintegrar esa temática a la discusión de las ciencias sociales, limitándome aquí a esbozar ciertos aspectos de la trayectoria del Frente Unitario de los Trabajadores –y en particular en su expresión azuaya–, y de la Coordinadora de Movimientos Sociales, instancias que han sido las fuerzas motrices de la protesta sindical en las dos últimas décadas. Dado el vacío analítico señalado, el tratamiento del problema no está actualizado, por lo que esta contribución contiene más preguntas que respuestas, y sus conclusiones son provisionales.

Aunque para muchos/as el tema del movimiento sindical es un tema extinto, asumo como punto de partida inicial que el tema continúa tan vigente como hace quince años. Y esto obedecería a que la presencia pública de los trabajadores, y particularmente de los sindicatos, ha marcado la década de los años noventa, aun cuando de una manera muy diferente a la huella dejada en los setenta y ochenta, y también de un modo distante de la acción política y la protesta del sujeto campesino indígena, en lo que a los repertorios de lucha y demandas se refiere. E inclusive más: durante un tiempo significativo, la protesta sindical habría constituido uno de los segmentos más importantes de la conflictividad social, a pesar de la fragmentación interna por la que ha atravesado durante los años noventa la movilización sindical. Así pues, comprender esa presencia contribuye a la comprensión de

un fenómeno de envergadura de la historia contemporánea de nuestro país. Lo dicho puede ser corroborado al observar las estadísticas de la conflictividad social. Por ejemplo, en el Gráfico 3 (y en la Tabla III del Anexo), evidenciamos la alta incidencia de los reclamos laborales en varios períodos: en el que va de noviembre de 1996 hasta junio de 1999, la movilización de los “trabajadores” es particularmente elevada, mientras que la de los sindicatos se acentúa en el período de marzo a junio de 1999, correspondiendo muchas de estas exigencias a demandas salariales, lo que tendría que ver con el intenso deterioro de los ingresos de la gran mayoría de la población, incluidos sectores como el funcionariado de las misiones diplomáticas en el exterior. Debo anotar además que, comparativamente, sus manifestaciones de descontento superan notablemente a las de otros sujetos colectivos, declinando solamente en el lapso de marzo de 2000 a junio de 2001, cuando es superada por la incidencia de la movilización indígena.

Entonces, “el movimiento obrero no es una fuerza histórica en extinción”, a pesar de que indudablemente “perdió [...] su brillo ligado al imaginario heroico del proletariado” (Vakaloulis, 1999). Y es en tal condición que el sindicalismo ecuatoriano ha procurado mantener una capacidad de respuesta a las presiones por la modificación radical de las reglas de juego económico y del contrato social basado en la desigualdad que trae consigo la instauración del modelo neoliberal². Por ejemplo, aún a inicios de 2005 las dirigencias de las centrales sindicales intentan negociar con el gobierno aumentos salariales, empero su dispersión ha conferido a las acciones un carácter meramente táctico, es decir, una inscripción en la lógica política del adversario y una dificultad para revertir la situación. Veo esta fragilidad política, más que como un motivo para el abandono del tema, como un llamado de atención de los/las analistas para la reflexión sobre lo que estaría aconteciendo en el seno de la relación capital-trabajo, sobre las transformaciones de la esfera de la producción, sobre las modalidades de organización y el programa adecuado a las mudanzas políticas mundiales y de la tecnología, así como sobre las identidades sociales en ellas gestadas.

¿Cuál sería, entonces, el carácter de la presencia de los trabajadores, cuáles los ribetes ideológicos de la protesta desde mediados de los años noventa? ¿Cuál sería la incidencia de los obreros sindicalizados en el proceso de la aceleración del ajuste? Sobre la significación de esta lucha podríamos también formular otra interrogación igualmente crucial, que se proyecta más allá de la ideología y atañe al impacto que tales

2 ¿“Podemos imaginar”, se pregunta un sindicalista, “la amplitud que tomaría este fenómeno [de la exclusión] si los asalariados cesaran de luchar por su empleo, por sus salarios y sus condiciones de trabajo?” (Rozet, Pierre-Jean et al. en Vakaloulis, 1999).

expresiones tuvieron en la reconfiguración del mapa de las relaciones sociales: ¿Se trata de luchas exclusivamente laborales y/o “economicistas”, de reivindicaciones sectoriales, o de una lucha de carácter contrahegemónico que apunta contra la instauración de un modelo basado en la “precarización de la sociedad”³?

Nuestro propósito central aquí es analizar el tema de la protesta en la provincia del Azuay, las representaciones sobre la sociedad en tiempo de ajuste, así como las prácticas y cultura de agremiación. Sin embargo, es imposible sustraerse de la novedad organizativa de los años noventa, la Coordinadora de Movimientos Sociales, cuya lucha descolló con caracteres peculiares en la ciudad de Quito; por ello se incluye un breve esbozo analítico sobre este punto con miras a cotejar con los contenidos ideológicos de la constelación azuaya.

A contrapelo de las aseveraciones corrientes de que la protesta se habría mantenido en los marcos estrechos de las reivindicaciones “obreristas”, sugiero que, independientemente de la radicalidad de los discursos sindicales oficiales y del “economicismo” de sus bases, la fusión de dichos reclamos con la condena a las políticas de Estado en el plano de la implementación del ajuste habría producido un “corporativismo universalista” que logró expresar y representar las aspiraciones de amplios sectores sociales: pobladores, campesinos, estudiantes, así como de una vasta gama de sectores medios vinculados a la cobertura social del Estado, pugnando por preservar cierto acceso a los derechos de ciudadanía social alcanzado durante la década de los ochenta.

La hipótesis central de este capítulo es que la protesta es promovida desde una lucha por la ciudadanía inspirada en el “corporativismo universalista” (desplegado en contextos simbólicos específicos durante los años ochenta, y desde mediados de los años noventa). Es decir, la ideología de la protesta no sería “clasista” *strictu sensu*, aun cuando estaría expresando un antagonismo fundamental. En los años ochenta, la ideología del corporativismo universalista y sus identidades (identidades “demandantes”, en los términos de Calhoun, 1994) se habrían tejido en torno de los relatos de la lucha de clases y el “pueblo ecuatoriano”. Ya en los años noventa, y sobre todo hacia mediados de la década, “la nación” y “la patria” se convierten en los relatos eminentes que permiten la construcción de identidades en torno al “espíritu del Alto Cenepa”⁴ (Ibarra, 1997). Construcción, por cierto, muy engarzada en las contratendencias de la globalización (Hall, 1997); y no solamente en el sentido de la eclosión de las particularidades étnico-nacionales,

3 “Precarización de la sociedad”, concepto usado por Vakaloulis (1999).

4 En alusión a la confrontación bélica que sostuvieran Ecuador y Perú en 1995 en un tramo de la frontera amazónica de ambos países.

sino también del repudio a las políticas de ajuste, es decir, de una demanda tanto de “reconocimiento” como de “redistribución” frente al Estado nacional. Tales reivindicaciones se afianzarían en las expresiones de pertenencia a la “comunidad imaginada” y, a partir de ello, en nociones y sentimientos de pertenencia ciudadana⁵. Por otra parte, las identidades construidas en los relatos de la lucha de clases y del pueblo resultan fracturadas en el contexto de la lucha discursiva de los años noventa, mientras que aquellas que se articulan en el relato de la nación habrían tenido eficacia para sustentar la resistencia a la aceleración del ajuste, aunque sin lograr exorcizarlo.

La argumentación se sustentará en el análisis de las representaciones de un grupo de obreros (ahora, en realidad ex obreros) sobre la sociedad ecuatoriana y su época, en la comprensión de las identidades cristalizadas en los últimos años. Aprovecho, asimismo, para tejer unas cuantas apreciaciones en torno del proceso político de los años setenta y ochenta a modo de contextualización, así como para ensayar la comprensión de los procesos ideológicos que lo sustentaron, en tanto referentes fundamentales de las identidades constituidas en la protesta. El análisis ha sido basado en los testimonios de trabajadores comprometidos con la construcción sindical en la ciudad de Cuenca desde hace varias décadas, y en un diálogo con un ex alto dirigente nacional de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT). La dispersión de las antiguas organizaciones obreras impidió dialogar con sus miembros de base, pues gran parte de ellos ha marchado al exilio económico, a países como los Estados Unidos, España e Italia. Empero la palabra recuperada es, en gran medida, la palabra legitimante y no la “palabra legítima” (siguiendo la conceptualización de Bourdieu), pues, a pesar de que se trata de ex dirigentes de instancias provinciales, su voz y decisiones habrían sido más bien marginales frente a las grandes decisiones centralizadas adoptadas en la ciudad de Quito, lugar al que nuestros interlocutores eran convocados por la eventualidad de congresos y asambleas. Recupero, asimismo, la información recogida en la participación en marchas de protesta durante el año 2002, y en la Asamblea Cívica Nacional del 21 de marzo de 2002, que delinearía las pautas para la realización del “Paro del Pueblo” en contra de la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica⁶.

Inicialmente ofrezco al/la lector/a un esbozo del proceso político del sindicalismo ecuatoriano en las décadas del setenta y sobre

⁵ Considero que es en los años noventa cuando ciertos sectores de trabajadores sindicalizados construirían identidades ciudadanas, al afianzarse “la ecuatorianidad” como referente.

⁶ Evento que no fue realizado, en la medida que el gobierno de Gustavo Noboa suspendió la venta de esas empresas estatales.

todo del ochenta, como pauta de confrontación que permitan entender las mudanzas en los años noventa. A continuación, presento un breve análisis de las tradiciones culturales que habrían incidido en la configuración ideológica más reciente. Luego me adentro en la exploración de las experiencias de los obreros sindicalizados (o ex obreros, para mayor precisión) y, al fin, en los códigos de la politicidad de su protesta en los años noventa.

HERENCIAS (E INERCIAS) CULTURALES

Edward Palmer Thompson ha alertado sobre la explicación reductora del surgimiento de la clase obrera inglesa como resultado de la revolución industrial y, particularmente, del florecimiento de la industria textil. Ese autor sugiere considerar la formación de la clase obrera a partir de “ingleses libres”, modelados por los metodistas, herederos de los derechos tradicionales de las villas, de las nociones de igualdad ante la ley, de las tradiciones artesanales, indoctrinados macizamente por la religión, y creadores de tradiciones políticas (Thompson, 1987, t.2: 17-18).

En un sentido que rescata dicha observación del historiador inglés, planteo que al hablar *grosso modo* de una tendencia clasista del sindicalismo que se configuraría hacia la época del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, se olvida la vigencia de las tradiciones y las inercias culturales, pues la ideología corporativista tiene hondas raíces en el sindicalismo ecuatoriano, y persiste tanto a merced de la composición social y étnica del sector de los trabajadores, como de sus prácticas en los microespacios y en las instancias gremiales. (Y hablar de “corporativismo” o de “neocorporativismo” no tiene aquí un sentido peyorativo, pues es preciso considerar las incidencias de la protesta social inspirada en tales constelaciones ideológicas). En las páginas que siguen propongo explorar los orígenes de las prácticas e ideología corporativistas dentro de la vertiente sindical “clasista”, en particular, en organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y en su momento también de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS).

Para comprender el proceso sindical ecuatoriano, cuya presencia pública se fortalece desde inicios de los años setenta, conviene partir de la distinción que realiza Enrique de la Garza Toledo entre “sindicalismo clasista” y “sindicalismo corporativo”, dos tipos de sindicalismo que se habrían conformado en América Latina durante el siglo XX. El sindicalismo de primer tipo, el clasista, habría seguido las pautas de la lucha de clases, bajo la influencia del marxismo-leninismo y, en casos como el boliviano, del trotskismo; la presencia de esa vertiente habría estado definida, primordialmente, por su actuación como fuerza política para la definición de políticas estatales, antes que como factor

de las definiciones de las relaciones laborales a nivel de la empresa. El sindicalismo del segundo tipo, el corporativo, a su vez, habría existido más en su subordinación al Estado –inicialmente al populista y luego al desarrollista– que a las empresas, en la trama de las relaciones capital-trabajo, inscribiéndose en los modos de funcionamiento de la intervención estatal en la economía a través de la intermediación de los intereses y la participación en la gobernabilidad, de manera institucional o informal; de modo que la “gobernabilidad corporativa” habría implicado, en primer lugar, participar como diseñador o aval de políticas económicas, laborales y sociales y, en segundo lugar, evitar que los conflictos interclasistas transpusieran los límites de la gobernabilidad (De la Garza Toledo, 2001: 10-11).

En el caso ecuatoriano no podríamos observar un corte nítido como el sugerido por Enrique de la Garza entre los dos tipos de sindicalismo, pues si bien es cierto que existe una corporativista configurada, en el caso de la vertiente actuante bajo la égida de las formulaciones doctrinarias izquierdistas y el lema de la oposición a las políticas de Estado resulta insuficiente definirla como “clasista”, pues considero difícil sugerir la vigencia plena de una ideología “clasista” aun en el momento de mayor despliegue de la lucha obrera, durante los años setenta y ochenta, cuando las vertientes socialistas predominan en el seno del movimiento sindical y este se convierte en polo activo de resistencia política a las presiones por el ajuste en los años setenta, y a la paulatina implementación del mismo durante los ochenta.

La persistente ideología corporativista estaría vinculada a los orígenes de la organización sindical que, como toda la sociedad ecuatoriana, entre principios del siglo XX y los años sesenta –acentuadamente– se ve obligada a lidiar con las herencias de la colonialidad. Así, siguiendo a León Trujillo (1991: 185), apuntamos que una de las contribuciones del sindicalismo habría sido promover el reconocimiento social del/la trabajador/a portador/a de una marca étnica, en el contexto de una sociedad rural con enclaves urbanos en los que se emplazaba la incipiente industria, y se comercializaban los productos de la artesanía. De lo que se trataba, entonces, es que el trabajo manual, otrora visto como una condición propia del indígena y por lo mismo despreciable, adquiriese una valoración social. En lo que concierne a quienes realizaban dicho trabajo manual, lo que se pretendía era que ganasen derechos (incluida la ciudadanía); así, “el sindicalismo marcará un distanciamiento, un estatus diferente para el obrero de la condición indígena, aunque sus orígenes mediatos sean estos. [...] El obrero se volvía tal adquiriendo su estado de mestizo, es decir distanciándose de lo indígena” (León Trujillo, 1991: 185). En razón de tal circunstancia, los sindicatos en su origen se habrían configurado

como corporaciones de defensa y de ventajas de una minoría asalariada (León Trujillo, 1991: 185).

De esa manera, una marca específica del sindicalismo ecuatoriano habría sido la imbricación entre la problemática de clase, en términos salariales, con la problemática étnica, en términos de una igualdad basada en la asimilación al mundo mestizo-urbano. El tema del llamado “corporativismo”, por tal motivo, sería inseparable de este entrelazamiento entre las dimensiones clasista y étnica.

PARADOJAS POLÍTICAS

Otra importante peculiaridad del sindicalismo ecuatoriano, junto con la fusión de lo “clasista” y lo “étnico”, sería la variopinta composición social de las organizaciones. Durante la primera mitad del siglo XX los sindicatos reunían en su seno tanto a obreros/as industriales como a artesanos/as, y la presencia de estos/as últimos/as significaba la presencia tanto de los maestros como de aprendices y oficiales. Tal diversidad habría estado presente aun en la Confederación de los Trabajadores del Ecuador⁷, así como también en la “Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres” (CEOSL) afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) organizada en 1962 (León Trujillo, 1991: 182). Por lo demás, durante décadas, una de las funciones de cierto sindicalismo será la de contrarrestar la influencia de las corrientes socialistas de pensamiento, siendo este el caso de la Confederación de Organizaciones Católicas del Ecuador (CEDOC) fundada por la Iglesia Católica en 1938.

Durante los años setenta, en el contexto del desarrollo capitalista industrial, la integración al mercado mundial y el advenimiento de la era del petróleo, crece el número de los trabajadores asalariados, y se produce el tránsito del sindicalismo de oficios al sindicalismo industrial y de servicios (Ycaza, 1991: 314). Cada central, sin embargo, mantendría sus especificidades en cuanto a la composición social, por ejemplo, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) habría estado mayoritariamente formada por obreros manufactureros, mientras que en la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) confluían los trabajadores de las empresas públicas de servicios, y en la Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas (CEDOC) predominarían los trabajadores rurales, cubriendo así “la heterogeneidad del mercado de trabajo, o más precisamente la diversidad de condiciones de

⁷ Al nacer la CTE en 1944, su organización incorpora tanto pautas clasistas y experiencias de conflictos laborales y huelgas, combinándolas con una composición social “heteroclita”: choferes, empleados del comercio, vendedores ambulantes, lustrabotas, “escritores y artistas”, dueños de joyerías, sastres, etcétera (León Trujillo, 1991: 182).

trabajo, tanto en el sector rural como en el urbano (campesinos, obreros agrícolas, obreros industriales, empleados, trabajadores, informales, artesanos, etcétera)” (León Trujillo, 1991: 187).

En la misma época las centrales sindicales entonces existentes: las ya nombradas CTE, CEOSL y CEDOC se fundieron en el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), con el propósito inicial de enfrentar las políticas antiobreras de los gobiernos de entonces. Por otro lado, tanto en la CEDOC, como en la CEOSL se inició un claro proceso de “conversión” clasista o, más exactamente, se consolidó el predominio discursivo público de los tópicos socialistas, sin que hayan sufrido alteraciones radicales la composición social básica ni las tradiciones culturales en las que estaban inmersos los miembros de las organizaciones. En el curso de estos procesos, la CEOSL cuestionó su filiación a la CIOSL y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), bajo cuya égida nace la central en el Ecuador. Mientras tanto en la CEDOC, de raíces católicas, la corriente socialista logró prevalecer y ganar supremacía política por sobre las orientaciones demócrata cristianas, lo que llevó a la ruptura de la central, una de cuyas alas continuó perteneciendo a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), mientras que la otra adhiere al FUT y, manteniendo las siglas, resaltó su orientación clasista denominándose Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (y en lo posterior CEDOCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores).

Tras la unificación del sindicalismo denominado “clasista” y la preponderancia política de las dirigencias de izquierda advino, asimismo, una época de alto protagonismo político, expresado a través de varias huelgas nacionales, en las que se unificaron los diversos intereses sectoriales de los trabajadores con los de otros sectores populares, logrando diluir la heterogeneidad reivindicativa en las demandas consensuales planteadas al Estado.

Hagamos un breve paréntesis para recordar cuáles fueron esas reivindicaciones unificadoras del FUT: en noviembre de 1975, en apoyo al reformismo militar de Rodríguez Lara⁸. En mayo de 1977, contra

8 Según Pérez Sáinz, en las políticas del gobierno militar reformista de Guillermo Rodríguez Lara la dimensión estatista habría ocupado un lugar privilegiado, al pretender que “el Estado asumiese el papel de capital colectivo para lograr la constitución del capital global” (Pérez Sáinz, 1985: 55). Tras cinco años de esfuerzo, el gobierno militar habría logrado que del 12% del presupuesto general del Estado destinado a la generación de medios colectivos de producción en 1970, este rubro ascendiese al 20% en 1975; también las erogaciones en medios colectivos de consumo se incrementan, situándose en el 59,5%; también habrían resultado beneficiadas las instituciones del sistema financiero, por ejemplo, el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), institución que habría destinado más de la mitad de su presupuesto, proveniente de las rentas petroleras a la construcción de infraestructura y a la financiación de la Refinería de Esmeraldas. Sin

las medidas económicas del Triunvirato Militar. En mayo de 1981 en contra del alza del precio de la gasolina y la elevación de las tarifas de transporte dictadas por el gobierno de Jaime Roldós⁹. En diciembre de 1981, contra la elevación del precio del azúcar realizada por el gobierno del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado¹⁰. En septiembre y octubre del año siguiente, en contra de la elevación del precio de la gasolina y de la devaluación del sucre, respectivamente, impuestas por el mismo gobierno demócrata cristiano; a la movilización de octubre se le denominó “I Paro Nacional del Pueblo”¹¹. En marzo de 1983, en contra de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Hurtado Larrea. En la época del ultraderechista Febres Cordero se realizaron seis huelgas nacionales: en la primera de ellas, en octubre de 1984, el FUT se pronuncia en defensa de la democracia; en otra, de marzo de 1985, el FUT y el Frente Popular de orientación proalbanesa presionan conjuntamente por el alza salarial; en septiembre de 1986 se realiza el II Paro Nacional del Pueblo, en contra del autoritarismo y el costo de la vida, participaron el Frente Unitario de los Trabajadores (cuyas dirigencias eran de orientación socialista y comunista prosoviética), el Frente Popular (de orientación proalbanesa), la CEDOC-CLAT (demócrata cristiana), sumándose las organizaciones indígenas *Ecuarrunari* y la recientemente formada Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Y, por último, en octubre de 1987 el FUT y las organizaciones indígenas nombradas se alzan en contra del autoritarismo¹². Las movilizaciones de la época del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, y las realizadas durante la

embargo, estos esfuerzos, tanto como la reforma agraria habrían producido la hostilidad de los terratenientes, la ofensiva del capital foráneo y las demandas empresariales de libre competencia, respeto a la propiedad privada y a la libre empresa formuladas por León Febres Cordero (Pérez Sáinz, 1985: 55-57).

⁹ Lo que permite encuadrar estas acciones dentro de la corriente clasista es la denuncia de las medidas como determinadas por compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y la acusación al gobierno por el abandono de las propuestas de cambio y “contubernio” con la oligarquía; se demanda también la salida del Instituto Lingüístico de Verano, acusado de “agencia de penetración cultural que trataba de controlar a las organizaciones campesinas e indígenas” (Ycaza, 1991: 322-323).

¹⁰ Huelga que no habría resultado exitosa, aun cuando se habría paralizado una parte significativa de la producción (Ycaza, 1991: 324).

¹¹ Las medidas diseñadas habrían obedecido a un programa de estabilización económica impuesto por el FMI y el Comité de Gestión de los Bancos Extranjeros como condición para renegociar la deuda; las medidas contemplaban la liberación de divisas provenientes de las exportaciones y la adopción de un sistema de cambio múltiple del dólar. Los efectos de las medidas provocaron el descontento de diversos sectores de la población, cuya movilización fue intensa entre septiembre y octubre de 1982 (Ycaza, 1991: 326).

¹² Sobre el tema de las huelgas nacionales de los años setenta y ochenta, ver más extensamente León Trujillo (1991: 192), Ycaza (1991), así como Pérez Sáinz (1985).

presidencia de Sixto Durán Ballén –cuya gestión hemos caracterizado como preludio de la intensificación del ajuste– aún esperan la atención de los/las estudiosos/as de la sociedad y la cultura (y es también por ello que la reflexión sobre la movilización obrero-sindical continúa vigente como tema de la historia contemporánea de nuestro país, como parte de nuestra memoria reciente, más allá de las modas de las ciencias sociales o de las interdicciones).

Prestemos atención a la fuerza del componente político de las huelgas nacionales de los años ochenta: desde las huelgas “económicas” de 1982-1983, su carácter se modifica, a mediados y finales de los ochenta, cuando los pronunciamientos impugnan el autoritarismo. Y este momento se puede considerar estelar, no solo por la magnitud de las movilizaciones populares, sino también porque el sindicalismo de signo clasista parece haber plasmado su madurez a través de la tan anhelada unidad de sus diversas corrientes. Sin embargo, ni entonces se logró contrahegemonía, y las políticas de ajuste continuaron en el cauce trazado por las elites económicas y sus gobiernos. Por otro lado, la huelga como principal forma de lucha parece haberse desgastado, ya que “los logros obtenidos a través de las distintas huelgas no han sido muy significativos (básicamente alzas salariales y cierta estabilidad laboral)” (Pérez Sáinz, 1985: 196).

Considero, no obstante, que muchos de los logros obtenidos en las sucesivas huelgas habrían beneficiado a amplios sectores sociales en vías de empobrecimiento, “el pueblo” (por ejemplo, la manutención de los precios del gas, de los pasajes, de los productos básicos de la canasta familiar o de los servicios estatales). Durante la época, el relato sobre “el pueblo” habría constituido el referente central de las identidades sindicales, a partir de la permanente confrontación con el Estado; la idea de “clase” como eje de las identidades sindicales, habría estado diluida en la jerárquicamente superior noción de “pueblo”. Es por estas razones que he llamado a la ideología que ha sustentado la protesta de las últimas décadas del siglo XX, “corporativismo universalista”.

Tras las numerosas (seis) y combativas huelgas del período febrerista-corderista (1984-1988), declina la capacidad de convocatoria del FUT y sus instancias aliadas –como el Frente Popular vinculado al Movimiento Popular Democrático–, y se acentúa cada vez más, al internarnos en la década de los años noventa, “la ausencia de un proyecto alternativo al neoliberalismo” (De la Garza Toledo, 2001: 22).

Intentemos comprender los entretelones de este descenso, examinando algunos factores tanto endógenos como exógenos.

Los factores endógenos se tornan perceptibles, al adentrarnos más allá de las superficies de las declaraciones políticas inspiradas en la doctrina socialista, y al indagar más allá de la presencia sindical al-

tamente politizada en el ámbito público. Lo que observamos son fisuras internas y efectos políticos adversos, emanados del tipo de relación con la sociedad, siendo lo más relevante, en este sentido, la autonomía de las dirigencias respecto de las bases (León Trujillo, 1991).

Una segunda fisura sería el bajo peso socio-económico de las centrales sindicales, debido a que la mayoría de los trabajadores asalariados no se encontraba sindicalizada. Así, los niveles de sindicalización hacia final de los años ochenta sería entre el 18 y el 22% (en la época, las leyes laborales establecían un mínimo 15 trabajadores por lugar de trabajo para formar un sindicato, no era posible la sindicalización individual) (León Trujillo, 1991: 195).

En tercer lugar estaría la irregular incidencia política sobre la sociedad, pues, a pesar de la presencia permanente del sindicalismo clasista como factor de presión, la presencia de las centrales sindicales era variable, y estaba ligada al ciclo electoral. En los momentos electorales, los partidos de todo el espectro político competían fuertemente con las centrales sindicales, restándoles capacidad de convocatoria, y ahondando las discrepancias entre dirigencias que seguían las posiciones de sus partidos (de una izquierda fraccionada). Solo en los períodos poselectorales, cuando los partidos tomaban posesión de los asuntos del Estado, la dirigencia sindical unificada recuperaba la capacidad de liderazgo opositor, capitalizando el descontento de amplios sectores, al calor del conflicto social (León Trujillo, 1991: 198).

Por último, la relación con el Estado sería, paradójicamente, la mayor fuerza y la mayor debilidad del sujeto sindical. En esta relación, las organizaciones obreras se sitúan en una condición subalterna y heterónoma, pues, como apunta León Trujillo, sería el conflicto lo que hace posible que el sindicalismo se haya mantenido “en la cresta de la ola” de la oposición política durante más de una década. A su vez, sería la conflictividad detonada lo que lo llevaría a inscribirse como parte del sistema político; literalmente, “no hay cabida a un sindicalismo a-político” (León Trujillo, 1991: 189-196).

En todo caso, es el apuntalamiento desde lo político lo que ha conferido potencia a una fuerza social que de otro modo tendría una presencia menos visible. Por paradójico que parezca, es posible que esta hiperpoliticidad concentrada en la relación con el Estado haya llevado a descuidar la elaboración de contrapropuestas de modelo societal en el momento de la ofensiva neoliberal, afectando el tratamiento de “parcialidades”, tales como la profundización de la unidad, la búsqueda de alianzas político-sociales más consistentes y paritarias en el seno de la pluralidad opositora, el abordaje sostenido del tema de la reestructuración productiva y la “resistencia-adaptación” a las nuevas condiciones, las relaciones obrero-patronales en los nuevos contextos. Me pregunto

si realmente tal “hiperpoliticidad” habría dado cuenta del antagonismo central de la época, no tanto desde el punto de vista del discurso y el diagnóstico histórico, cuanto desde la perspectiva del diseño de estrategias políticas. La hiperpoliticidad, por lo mismo, podría haber bloqueado la producción de adhesiones sociales durante los años noventa, en el justo momento en que el sindicalismo se convertía en blanco de la ofensiva neoliberal, sin un relato adecuado que justificase su existencia, condenándose a actuar en un plano heterónomo, táctico. Además, el último decenio del siglo XX fue la época de exaltación de las virtudes del apoliticismo, cuando las opciones electorales “independientes” ganaron el derecho a la representación de la sociedad y, como veremos, una de las corrientes sindicales abonó el terreno de este discurso desde una posición “post-partidaria”. El contexto de saturación con lo “partidario”, indudablemente, fue desfavorable para la dinámica sindical.

La heteronomía se haría extensiva, obviamente, también a la vertiente sindical de signo democristiano, pues también ella estaba marcada por el estadocentrismo, en una línea corporativista, llamémosla, “estadólatra”, a diferencia de la “estadofobia” y el corporativismo universalista de la vertiente de izquierda.

Entre los factores de orden externo del declive, frecuentemente se ha atribuido la desmovilización del sujeto obrero-sindical a las políticas de Estado y a las modificaciones de la legislación laboral, particularmente a las realizadas durante el período del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, la más importante de las cuales habría sido la entrada al régimen de tercerización y flexibilización de la fuerza laboral. Considero, sin embargo, que hubo un preludio fundamental: el consenso antisindical, que habría preparado el suelo ideológico para las transformaciones económicas y jurídicas en los órdenes productivo y laboral. Se trata de la mencionada “lucha discursiva”: el control de los términos y reglas del discurso. Y es así que se emprende una ofensiva en contra de todo sindicalismo, a través del desprestigio –que se acentúa tras los sucesos mundiales de 1989–, campaña en la que tuvieron un papel primordial los grandes medios de comunicación (que, dicho sea de paso, a mediados de los años noventa permitieron cierta visibilización de la Coordinadora de Movimientos Sociales, en la medida que esta se presentaba como alternativa apartidaria –sin pecado original– al “dinosáurico” FUT).

Podríamos observar que mientras la ofensiva antisindical, desde el Estado, creaba un vacío discursivo en lo referente a la organización y el desprestigio de la protesta, el tratamiento de otras fuerzas sociales, tales como los campesinos y los estudiantes, operaba desplazando los tópicos reivindicativos desde la esfera política a la esfera de lo social-cultural y lo cotidiano-personal (“indígena”, en lugar de “campesino”,

y “joven” en lugar de “estudiante”). Diríamos que la reducción de la complejidad social de los sujetos sociales movilizados tenía como efecto el desvío de los núcleos de la representación a lugares sociales desde donde se podría minimizar los impactos de la contestación en los ejes del nuevo modelo de dominación societal, y no porque tales lugares sociales dejaran de ser aspectos estructurales de las relaciones de poder, sino por la fragmentación e ineficacia para cuestionar el modelo social impuesto que conllevaría la protesta al ser levantada únicamente desde ámbitos como, por ejemplo, la vida cotidiana o la lucha por el reconocimiento cultural sin redistribución. Tales desplazamientos parcialmente iban siendo apuntalados mediante políticas públicas que satisfacían, en algún grado, demandas latentes y legítimas, lo que generaba, al mismo tiempo, efectos de democratización e inclusive cierta mejora de la calidad de vida. Entre tales respuestas tendríamos, por ejemplo, la adopción de la legislación y la creación de una institucionalidad en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y la atención a las demandas étnico-culturales, entre otras.

Las políticas antiobreras, mientras tanto, ganaban profundidad, y el sujeto sindical era convertido en antihéroe, al calor de la representación hiperbólica de la burocratización de las organizaciones y de los desatinos de sus cúpulas. La desesperación de las dirigencias frente a la ofensiva simbólico-discursiva del neoliberalismo ha sido expresada de manera dramática por Ramiro Galarza, dirigente de la CMS:

Los sindicatos estábamos solos, condenados por los ciudadanos comunes que no se interesaban por nuestras demandas y nos miraban por debajo del hombro. Tener un empleo es un privilegio en un mar de desempleados y hambrientos; la clase gobernante sabía de esto y lo manejaba con maestría, los pobres eran sus aliados (Galarza, 1996: 121).

LOS AÑOS NOVENTA ¿TINIEBLAS SIN AMANECER?

¿Cuál es la situación de la protesta sindical durante los últimos años del siglo XX? Los trabajadores, y en particular los sindicalizados, se encuentran en la década de los años noventa en una situación muy difícil para el desarrollo de su organización, pues, sobre todo, pierden la capacidad de convocatoria y de negociación frente a los gobiernos. Este fenómeno de debilitamiento y crisis tendría un alcance latinoamericano, y estaría situado en una fase específica de la transición democrática. Enrique de la Garza Toledo reconoce dos momentos de la transición democrática; en el transcurso del primero se habrían privilegiado las

políticas estatales e intervencionistas¹³, pero el segundo representaría “la fase neoliberal de transición de las dictaduras a la democracia política” (De la Garza Toledo, 2001: 9). Y este sería el marco histórico de la protesta obrera a partir de mediados de los años noventa.

Entre los factores que habrían contribuido al declive de los sindicatos estarían, según el mismo autor, las políticas de ajuste y cambio estructural continuadas en los años noventa como reformas de segunda generación, a través de: la venta de las empresas paraestatales que impactarían con la reducción del empleo, la apertura de los mercados y la desregulación que presionarían a las empresas para implementar la flexibilización laboral; las políticas de reestructuración productiva y flexibilidad laboral con el mandato de cambios contractuales y modificación de la legislación laboral; y, por último, las políticas de combate a la inflación y su consecuencia de deterioro salarial, así como de reducción del gasto público que determinó la caída del gasto social (De la Garza Toledo, 2001: 15). De tal manera, en América Latina en su conjunto habría disminuido el porcentaje de empleos en la industria, puesto que creció el número de ocupados en el sector informal del 42,8% en 1990 al 46,4% en 1999.

Ya ha sido esbozado un perfil de las situaciones de orden político, interno y externo, que incidieron en el declive de la presencia obrera organizada en el Ecuador. Cabe señalar además algunas cifras que ayudan en la comprensión del caso ecuatoriano: el índice de empleados no agrícolas (de la zona urbana) en 1990 habría sido de 20,3%, reduciéndose hacia 1998 al 15,9%¹⁴ (datos de la OIT, citados en De la Garza Toledo, 2001: 16-17). Esta reducción habría tenido un impacto directo en la sindicalización, en la medida que la mayoría de los sindicalizados se encontraba vinculada al sector público y la industria (De la Garza Toledo, 2001: 15).

Por su parte, Fausto Dután, quien por muchos años fuera dirigente de la CEDOCUT y del Frente Unitario de los Trabajadores, en una entrevista concedida reconoció las limitaciones del movimiento obrero y sindical en cuanto a una estrategia “*que permita ir más allá de sus propias reivindicaciones*” (teniendo presente que tampoco éstas estarían actualizadas, dado que no se han contemplado, por ejemplo, demandas sobre la capacitación laboral a la altura de las nuevas condi-

13 Según este autor, en una primera fase de la transición se habrían privilegiado políticas estatales intervencionistas y concepciones estructuralistas sobre cómo combatir la inflación (De la Garza Toledo, 2001: 9).

14 Se trata de cifras anteriores al proceso de dolarización iniciado en el 2000; es previsible que los impactos de la dolarización en la débil industria del país hayan agravado esta situación.

ciones de organización de la producción) (Entrevista a Fausto Dután, 2 de enero de 2003). Dután señala, además, el estancamiento de la estructura orgánica en lo que se refiere a procesos de democratización, pues esta seguiría siendo vertical y jerárquica. Tal rigidez organizativa se traduciría, asimismo, en la resistencia, por ejemplo, a descentralizar las decisiones, a realizar elecciones de carácter universal, y a una mayor participación de las mujeres en las instancias de dirección, entre otras. Empero, Dután reconoce también la incidencia de factores externos que habrían profundizado la crisis, y un lugar primordial entre ellos tendrían, además del colapso del campo socialista, algunas políticas en el ámbito laboral adoptadas durante el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, que facilitarían el debilitamiento de la organización de los trabajadores:

[...] creo que el efecto fundamental es el de la flexibilización laboral, impuesta desde los intereses de la globalización, de la mundialización, durante esta década de los años noventa [...]. El propio presidente Borja es uno de los hombres que, viniendo de plantear una propuesta entre comillas socialdemócrata, impulsa la flexibilización que afecta desde su base fundamental que es el movimiento sindical, con el advenimiento de una nuevas formas de contratación, como el trabajo a destajo, el trabajo de tiempo parcial. Borja elimina muchos aspectos que tenían que ver con las formas más rápidas y organización de los trabajadores, pone obstáculos a la organización, sobre todo del sector público. Borja hace más dura la organización, cuando aumenta el número de afiliados para constituir un sindicato, que antes era de quince, en un país en donde no tenemos la gran empresa sino mas bien la pequeña empresa, la pequeña industria. Esto se volvió un poco más complicado, porque ahora ya no es posible tener el número que se impone, por decir, treinta trabajadores, generalmente los empleadores tienen veinte y nueve, para no tener treinta. Entonces, desde el presidente Borja en adelante las políticas flexibilizadoras han tenido como objetivo el de afectar la organización, el de debilitar, esta organización, pero al mismo tiempo el de precarizar más las condiciones de trabajo y de salarios (Entrevista a Fausto Dután, 2 de enero de 2003).

Una primera reacción a este descenso de la incidencia de la movilización obrera y sindical tuvo lugar a mediados de los años noventa en su propio seno, en los sindicatos del sector público, concretamente en las áreas de la producción de energía como la Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC) y la Federación de Trabajadores Eléctricos

del Ecuador (FEDELEC), sectores que pasarían a formar parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), y cuyos dirigentes se convertirían en sus activos impulsores. En tales espacios se constituyó el eje de la –inusual en América Latina– resistencia a la privatización de la producción petrolera y energía eléctrica, política que se encuentra ya consagrada en el texto de la Constitución de 1998 (lo cual, en todo caso, sería un saldo en contra de los propios “nuevos actores sociales”, entre los que se contaría la CMS, que promocionaron activamente la convocatoria de una instancia constituyente). Es, en gran medida, este proceso de resistencia el que ha apuntalado un proceso mayor en defensa del sector estatal, permitiendo que aun cuando haya desaparecido del texto constitucional la definición de “áreas estratégicas”, se mantenga hasta el momento la propiedad pública también sobre el sector de las telecomunicaciones, y que se haya impedido que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pase a manos privadas.

Es justo reconocer el papel de la CMS en la resistencia sostenida, que ha diferido la agenda de las privatizaciones; empero las orientaciones político-sindicales de la Coordinadora de Movimientos Sociales suscitan algunas reflexiones. La CMS, según plantean sus dirigentes, habría intentado saldar cuentas con las limitaciones políticas expresadas por el Frente Unitario de los Trabajadores en décadas anteriores. Un elemento de esta reorientación sería el establecimiento de alianzas con otros “movimientos sociales” (“los nuevos movimientos sociales”). En la apreciación de Iván Narváez, uno de los dirigentes de FETRAPEC, y la Coordinadora de Movimientos Sociales: “el FUT [Frente Unitario de los Trabajadores] no logró articular un discurso coherente que refleje el interés de la pluralidad social y se anquilosó en el inmediateísmo de las exigencias obreras” (Narváez et al., 1996: 23).

La nueva instancia organizativa, la CMS, se caracterizaría, asimismo, por haber emergido al margen, tanto de los partidos políticos de izquierda vinculados a la práctica sindical, como de las centrales sindicales “tradicionales” y del FUT. Tales serían los signos, en criterio de Galarza, de un “nuevo actor social”:

¿Por qué no se podía construir un remozado paradigma de organización, dirección y conducción socio-política a la vez?
 ¿Acaso el movimiento social tenía que esperar que las viejas y decadentes estructuras de las centrales obreras o los dogmáticos y sectarios partidos de izquierda se rehabilitaran para incorporarnos a la lucha? Había una historia que estaba caminando fuera de nosotros y clamaba por ser reconocida en toda su magnitud y grandeza. Había que dejar a un lado los prejuicios de nuestra propia formación político-ideológica

y enfrentar el reto de la construcción de un nuevo paradigma de la organización y la lucha de emancipación y justicia (Galarza, 1996: 117).

La separación de las corrientes partidarias de izquierda, por parte de la CMS, ha sido explicada por sus gestores a partir del silencio que éstas habrían impuesto a múltiples voces sociales sofocadas por las prácticas políticas “tradicionales”:

No había la fuerza interna en el contexto de la guerra fría, ni quien nos escuche, porque el escenario estaba confeccionado de tal manera que no había participación real y directa para quien no se alineara en el bando social y político de las clases en pugna (obreros y burgueses, que existe por lo demás), liderados por expresiones políticas y partidarias (que eran el summum intelectual y teórico de esa confrontación), las expresiones sociales no enmarcadas en este esquema estaban fuera del proceso.

Para los movimientos sociales (incluido el movimiento indígena, campesino, barrial, movimiento sindical no alineado en las centrales, los cristianos, los intelectuales, etc.) estaban predestinados a jugar un papel secundario, aliados de segundo orden, sectores subordinados anclados y remolcados a las clases revolucionarias. El programa político estaba hecho, el sujeto histórico construido, las estructuras de mando establecidas. No había espacio para los “otros”; cualquier apertura era signo de debilidad, reformismo, oportunismo y cualquier otra cosa. No había espacio para la vida.

El esquema se rompió con la caída (simbólica y física) del muro de Berlín y la sociedad se fue llenando de oxígeno poco a poco. Si todo el esquema que nos imponían fue falso, débil y equívoco ¿qué capacidad moral tenían estos viejos actores de reordenar la vida social y política contestataria de los sectores explotados? Había que seguir adelante desde nuestras propias condiciones de existencia y dar respuestas a los problemas de la cotidianidad, mientras se reordenan los grandes paradigmas y se rehacen las utopías (Galarza, 1996: 135).

La CMS nacía, por lo tanto, en el encuentro de dos circunstancias: el apremio por la aceleración del ajuste, y las severas discrepancias en el seno de las fuerzas sociales y políticas críticas del mismo. Nacía bajo la bandera de la demolición de la conducción político-partidaria y de construcción de una política no partidaria, una política emanada de lo

social y bajo su égida, concepciones que nacen de una “reificación” del “movimiento social”, y de la creencia en que este representaría “el aspecto noble de la política cada vez más degradada e inadecuada”, como ha ironizado Michel Vakaloulis (Vakaloulis, 1999).

En esa búsqueda de incidencia política y social, el sindicato de trabajadores petroleros FETRAPEC intentaría inaugurar un nuevo estilo de presencia pública a través de expresiones político-simbólicas, en aras de concitar la atención de la población sobre los efectos de la ofensiva privatizadora, buscando al mismo tiempo neutralizar los efectos del desprestigio del sindicalismo público llevado a cabo por los medios de comunicación y el gobierno. Es así como en octubre de 1995, la FETRAPEC realizó un encadenamiento simbólico a un oleoducto de cartón y declaró una huelga de hambre que duró nueve días, en contra de los intentos realizados por el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik de ampliación y licitación del oleoducto transecuatoriano (SOTE), y en favor de la renuncia del ministro de Energía y Minas. La forma simbólica de la protesta habría sido privilegiada en virtud del desgaste de la huelga como forma de lucha, y con ello se intentaba también la recuperación interna y de la imagen pública del sindicalismo estatal. La protesta se radicalizó ante las negativas del gobierno a ceder a las demandas de los trabajadores y éstos amenazaron con la automutilación. Así, la idea de “sacrificio” se constituía en el eje del mensaje de los trabajadores petroleros hacia la ciudadanía. Al cabo de varios días el gobierno retiró el proyecto de licitación y ampliación del oleoducto, y el ministro del ramo presentó su renuncia. Habría, a mi juicio, dos aspectos de estas acciones de la CMS sobre los que vale la pena reflexionar.

El primero de ellos es que la nueva instancia sindical habría captado con sagacidad tanto la ineficacia, en ese contexto, de la huelga como forma de lucha, cuanto la importancia de la lucha discursiva y simbólica en la confrontación con el Estado (que sencillamente “borró del mapa” al “movimiento” sindical). Y tales apreciaciones se plasmaron en el mencionado acto de encadenamiento al oleoducto. Sin embargo, la FETRAPEC y la CMS nunca lograron por sí mismas una capacidad de convocatoria similar a la del FUT durante los años ochenta (en cierto sentido, esas instancias permanecían adscriptas a las estrategias de la CONAIE) y, al mismo tiempo, los actos de recuperación simbólica frente a la opinión ciudadana jamás fueron recapitulados.

El segundo aspecto radicaría en el relato mismo del origen de esa instancia sindical, pues la misma nació bajo el signo del apartidismo, relato por excelencia de las elites liberalizantes, aun cuando coincidente con los ánimos de amplios sectores sociales, sobre todo de la Costa. Estos ánimos se plasmaron, a mediados de los años noventa, en la refor-

ma política que dio luz verde a las candidaturas independientes. Tales hechos nos llevarían a pensar que la CMS fue arrastrada por el torrente discursivo liberalizante, sin pugnar por la legitimidad de una presencia pública en términos propios; sin diseñar una estrategia discursiva tendiente a rehabilitar la política y la movilización, rescatándola del manoseo de muchos dirigentes partidarios y sindicales. Lo curioso es también que, de una u otra manera, la CMS aspiraba a lograr una adscripción en el sistema político similar a la que tuviera el FUT, incluida la correspondiente “hiperpoliticidad”, ahora sin partidos. Veamos cómo entendía Iván Narváez este proceso:

Elevar la lucha sindical a la categoría política continúa siendo un objetivo fundamental en la actual crisis, solo cuando la lucha sindical, las acciones reivindicativas sean substituidas por la lucha política habrá recuperación en el ámbito societal global y será determinante para la construcción del nuevo Estado y la economía (Narváez et al., 1996: 27).

Ahora bien en los hechos, ¿estaba este nuevo estilo de presencia pública acompañado de alguna novedad en términos ideológicos, o sigue anclada en el antiguo corporativismo universalista, con sus límites y virtudes para la defensa de la vida de la población? Es una inquietud a la que intentaremos responder en páginas posteriores. Por ahora, lo cierto es que también los sindicatos del sector público han ido perdiendo terreno frente a la imposición del ajuste, aunque cabe reconocer: no sin ejercer una tenaz resistencia. Tal situación podría obedecer a la restricción de la base de alianzas sociales y políticas que devino de la “reificación” del “movimiento social”, logrando un “efecto terapéutico” en las relaciones sociales. Habría aquí, también, una nueva variante de “hiperpoliticización” que ahora tiene como uno de sus ejes el rechazo a los partidos, pues tales concepciones y prácticas tendrían como punto de partida la creencia en la sustitución de un actor social “tradicional” por uno “nuevo”, lo cual recapitulaba la presentación vanguardista de la nueva instancia, recuperando, en el fondo, las antiguas limitaciones del llamado “movimiento obrero tradicional”. Por lo demás, un deslinde basado en la dicotomía “nuevo actor social” / “actor social tradicional” habría representado un obstáculo para los procesos unitarios, tan necesarios en ese momento.

EXPERIENCIA, VISIÓN DEL MUNDO SOCIAL Y PRODUCCIÓN DEL CONFLICTO

Hacia el final del siglo XX, las centrales sindicales y su instancia coordinadora –el FUT– atravesaban una situación de dispersión y acefalía, aun cuando las organizaciones del sector público se sostuviesen en la

defensa de la propiedad pública. En el caso específico de Cuenca y la provincia del Azuay, esta situación se habría tornado francamente catastrófica, pues no solamente habría ocurrido un desmoronamiento del número de organizaciones adscriptas a las filiales de las grandes centrales nacionales. Además, la movilización del sindicalismo del sector público y de servicios parecía menguar ostensiblemente, y este efecto es el resultado de la escasa importancia que los medios de comunicación otorgaban a organizaciones locales que no tienen la envergadura de las organizaciones de la provincia del Pichincha o la ciudad de Quito. Es precisamente esto lo que reconoce José, nuestro interlocutor –abajo presentado–, dirigente sindical de larga data:

En la CEDOCUT teníamos 33 sindicatos hace 10 años atrás, hoy tenemos dos sindicatos en Cuenca, un comité de empresa, tenemos comités pro mejoras como cinco [...], pero es un decaimiento real, por un motivo, las leyes laborales aplicadas por el doctor Borja. Eso trajo el desmoronamiento del movimiento obrero, antes teníamos seguridad y estabilidad laboral. En el gobierno de él se aplicaron las reformas laborales, el trabajo compartido, la ley de maquila, pero como la gente ya no tiene estabilidad busca cualquier otro rumbo, tiene estabilidad cuando tiene incentivo al trabajar, aunque sea ganando poco. Muchos prefieren ganar poco pero tener estabilidad en el trabajo.

El destino de los antiguos trabajadores sindicalizados sería entonces, en gran medida, el exilio económico hacia Europa y los Estados Unidos –situación que, como se ha dicho, es particularmente sensible en las provincias australes– y también la conformación de pequeños negocios o microempresas. Esta circunstancia creada por las políticas flexibilizadoras y la reducción del tamaño del Estado, se habría agravado en los últimos años, a raíz de la implantación de la dolarización. Entre los exiliados económicos se encontrarían también muchos ex dirigentes, y según nuestro interlocutor, de ellos habrían quedado “ocho o diez”; con lo que se presentaría un problema real para la organización sindical a nivel local.

Otro de los factores del decaimiento sindical habría sido la “limpieza” (parte de la llamada “reingeniería”) llevada a cabo en las empresas durante la década de los años noventa. Alejandro, otro de nuestros testimoniantes (también presentado más adelante), ex obrero y activista sindical de la Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur, con sede en la ciudad de Cuenca, nos ha relatado sobre las circunstancias de su despido en 1998. Junto con él habrían sido despedidas, igualmente, 120 personas, las más activas en el proceso organizativo. Desde su perspectiva, tal medida no habría estado determinada por contracción de la gene-

ración de energía eléctrica o reducción de los puestos de trabajo, pues tras el despido masivo habrían entrado 140 nuevos/as contratados/as adherentes democristianos, sino expresamente por la necesidad de despejar la organización de los antiguos/as activistas. Lo narrado es parte del entorno de la experiencia contemporánea de los antiguos militantes de la causa obrera. Escuchemos ahora lo que relata uno de ellos.

JULIO

Don Julio, un militante sindical y ex artesano en la rama de zapatería, es un hombre de sesenta y tantos años, cuyas convicciones políticas habrían sufrido redefiniciones sustanciales durante su trayectoria de lucha sindical. Durante mucho tiempo él se ha desempeñado como funcionario de las filiales de dos centrales sindicales, la CEDOC y actualmente la CEOSL, y podríamos decir quizá que, hoy en día, su labor contribuye a dar continuidad a un espacio que de otra manera decaería de manera aun más acelerada. Lo visité en su local de trabajo, en la sede provincial de la Federación Provincial de Organizaciones Sindicales Libres del Azuay (FETLA). Actualmente él se define como “socialista”, aunque se mantiene al margen de toda militancia partidaria:

Yo no aprendí mucho la política. Yo más me formé en el sentido clasista, pero nunca me gustó ser afiliado a un partido, porque uno cuando se afilia pierde su libertad. Después cuando ya se madura se sostiene que políticamente pluralista, doctrinariamente socialista, esas cosas sí que las mantengo.

En efecto, don Julio habría pasado por un proceso de “maduración”, en cuyo devenir se habría aproximado a posiciones clasistas-socialistas, partiendo desde las perspectivas de la doctrina social de la Iglesia. Su trayectoria se inicia en los albores de la década del sesenta, cuando muchos sectores de la sociedad ecuatoriana –como muchos en América Latina– miraban hacia los procesos políticos y sociales puestos en marcha por la revolución cubana y cuando, también, otros sectores, los opuestos a tales novedades históricas, inician una contraofensiva política y organizativa, en cuyo contexto aparece el sindicalismo vinculado a la Iglesia Católica¹⁵. Nuestro interlocutor, según su relato, se habría iniciado en un gremio de zapateros, donde habría sido cooptado por la CEDOC, de inspiración católica, central a la sazón destinada a contrarrestar las influencias de la izquierda:

15 Una expresión extrema de esta contracorriente, en el caso ecuatoriano, habría sido el movimiento de fanáticos políticos organizado por sectores de la Iglesia Católica, dedicado a colocar explosivos en los templos, de las que se culpabilizaría a la militancia de izquierda.

Tenía mi taller. En una ocasión llegaron unos señores de Quito para buscar un dirigente en Cuenca para que abriera una oficina de la CEDOC [Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas], [...], aquí en Cuenca por los años 1961-1962; alterné para ese cargo y me designaron. En ese entonces no habían muchas organizaciones sindicales, pero sí habían organizaciones artesanales de las sociedades obreras. En esa misma época, recuerdo de un señor Serrano que ayudó a que se multipliquen las organizaciones católicas para luchar contra el comunismo. Me llevaron a Quito para capacitarme, aquí se quedó el taller [...]. Cuando regresé comencé a llamar la atención, todo lo que aprendí por allá compartía aquí. [...] Iba avanzando el movimiento sindical y yo ya sabía lo que significaba el primero de mayo con los barrenos municipales y las tejedoras de paja toquilla de Checa. En el parque de San Francisco fue mi primer discurso revolucionario del primero de mayo, y eso me costó que me botaran de la Curia [donde estaba localizada la sede de la organización obrera].

La aproximación de don Julio al sindicalismo clasista se habría gestado, pues, en el proceso mismo de organización y lucha sindical –no sin profundas contradicciones ideológicas–, en el terreno de la superación de perspectivas abiertamente anticomunistas. Desde mediados de los años setenta en la ciudad de Cuenca inicia el proceso de constitución de sindicatos, al calor de un avance de la industrialización local –como parte del entonces en boga proceso de sustitución de importaciones–, pero también del trabajo de la militancia comunista y socialista, y también del activismo de los propios obreros y sus dirigencias.

La toma de conciencia era como la aspiración de superación de las centrales. Nosotros teníamos la CTE que era enteramente revoltosa, y los dirigentes eran bien preparados, el mejor orador nuestro no se comparaba con el último de ellos. Nosotros no podíamos quedarnos atrás, no solo en la aplicación de la ley sino también en dirigir. Así empezamos a crear la rebeldía. Así sembramos en todas las centrales sindicales, con fundamentos, con bases, estudios. La CEOSL trajo instructores, fue la primera escuela sindical que había, con muy buenas políticas, no tenían reparos en invitar a todos los que querían estudiar, allí se formaron cuadros de la CEOSL, la CTE; no se preguntaba de dónde eran, la escuela era abierta para actualizarnos de lo que pasaba en el país y en todas partes.

Así, a pesar de los intentos por contrarrestar la influencia del pensamiento sindical de izquierda a través de la ORIT y de la CLAT, el pro-

ceso político escaparía al control del Estado y la patronal, a merced de un proceso de constitución de identidades político-sindicales colectivas, sentimientos de pertenencia a la organización y elaboración de la alteridad del patrono y el Estado, aun cuando los contenidos ideológicos no fuesen nítidamente clasistas y/o de izquierda. En este momento, por lo tanto se habría tratado de un proceso –como diríamos contemporáneamente– de habilitación (*empowerment*) mediado por la capacitación que hacía posible la construcción de un discurso sobre la sociedad (el elemento “derivado”, en términos de Rudé), “habilitación” que coadyuvaba a la condensación de un sentimiento de “rebeldía” y apuntalaba una confrontación más bien circunscripta a las relaciones obrero-patronales en los micro-ámbitos (fabriles, de servicio u otros).

Ahora bien, ¿cómo entender, en primer lugar, la actual definición de don Julio como “políticamente pluralista, doctrinariamente socialista” y cómo tal autoadscripción se enlazaría a sus perspectivas sobre el orden social? ¿Cuál podría haber sido la fuente de esta identificación y como esta se enlaza a la producción del conflicto? Veamos cuál es la representación que don Julio realiza del mundo social y político a través de su visión de los intentos del gobierno de Gustavo Noboa por la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica, asunto fuertemente discutido a inicios del año 2002:

Como todo sistema globalizador, la privatización de las eléctricas es otra estrategia del sistema capitalista para acaparar todo lo que es del bien público. Si ellos están en el poder ¿quién les dice nada? ¿Debemos acaso callar y dejar que siempre nos enajenen, ser obedientes y sumisos a todo? Ahí están comprometidas las altas esferas políticas y económicas, entonces qué les va importar el país, solo les interesa que venga el dinero fácil y que nadie les moleste aquí. Esto están haciendo los banqueros y nuestras leyes están tan bien hechas para favorecer a los grupos de siempre.

Un primer elemento de la representación se tejería en torno de la noción de “interés” que gira alrededor de la idea de “bien público”, que aludiría tanto al bienestar de la población como al régimen de propiedad social (y quizá también a la delegación a un ente social superior para que vele por el bienestar y los intereses de todos). Contrapuesto al “bien público” sería el “acaparamiento”, la enajenación de los demás, del pueblo. Existiría, con todo, también la asociación entre el “acaparamiento”, la ambición facilista y la negligencia frente al “país”, por parte de las elites: “los banqueros”.

En un segundo momento aparece, en la alocución de don Julio, la condensación política de ese interés por el acaparamiento “capitalista”

y “globalizador”, y el interlocutor describe esta situación a través de la visión de los cambios sociales al filo de los años noventa, pues:

Con la caída del muro de Berlín vino el dominio del sistema capitalista, no solo en Ecuador sino en el mundo entero, ya que no hemos tenido la suficiente fuerza para resistir esa presión. Se dice también que llegó con eso el fin del socialismo, inclusive refiriéndonos solo a ese término, ahora no nos referimos a ese término para decir que queremos igualdad o dignidad, si eso es el socialismo deberíamos ser todos socialistas, pero ocurre que con las dádivas del capitalismo y con sus mentiras hemos perdido no solo nuestros recursos sino también el recurso humano. Ahora cuando ya no hay qué quitarle al trabajador dicen que vamos a la flexibilidad laboral, y esto no responde solo a un nivel nacional, es en todo lado. Yo no sé hasta cuándo vamos a reaccionar, además está el impacto que proyectan los medios de comunicación, ya no tenemos identidad, ni en la ropa ni en la comida ni en nada, desde afuera nos dicen lo que es bueno, por ejemplo a los sectores artesanales ahora les dicen que tienen que invertir en las microempresas, no digo que eso está mal, pero ¿dónde quedan los conceptos de solidaridad?

El relato estaría estructurado en torno al eje capitalismo-socialismo, cuyos polos se van dotando de contenido a partir de redes de nociones tales como “acaparamiento”, “dinero fácil”, “mentiras”, “enajenación”, por un lado, y “dignidad”, “igualdad” e “identidad”, “solidaridad”, por el otro. Diríamos que mientras la noción de capitalismo está definida a partir de categorías morales, la idea de “socialismo” es difusa y está sobrepuesta con “bien público”, también con fuertes connotaciones morales, aunque también referida a categorías políticas modernas como las de “igualdad” y “dignidad” (ver esquematización en el Cuadro 7 del Anexo).

Este eje se sustentaría, pues, en dos pilares ideológicos: el uno anclado en lo político, en tanto modelo de sociedad, y el otro en lo moral, en tanto atributos de cada uno de los modelos. Considero que mientras el momento moral está claramente definido y sus atributos establecidos, el modelo político se encuentra diluido en aquél, referido exclusivamente al bien público, y desembocando en la configuración de un “interés” (de “clase” con proyecciones universalistas). Ahora bien, ¿cuál sería, en tal contexto, el momento de producción del conflicto, el momento del interés o el momento político?

La gente si no protesta es como si no existiera. Debemos protestar, porque la protesta es la existencia del trabajador solo así se pueden entender las cosas porque ya la palabra, el diálogo, la

ley tiene un sentido, pero la protesta, la rebeldía tiene un sentido viviente, si no se es rebelde no es nada. Nosotros decíamos a los compañeros: “que el hombre no proteste por la sopa en la cocina, que el hombre pelee por la sopa en la calle”, porque al salir a protestar es conseguir mejoras para todos.

Este fragmento revelaría que el momento desencadenante del conflicto sería el del interés por mejoras de la calidad de vida del conjunto, por la preservación del bien público. El momento político sería, entonces, subsidiario, y el socialismo un referente vago siempre superpuesto con la idea de bien público. Siguiendo esta lógica, se podría interpretar que la pretérita existencia del socialismo real habría sido apenas un momento de oportunidades mejores para la clase obrera, y no necesariamente un modelo a seguir o un proyecto político crucial. Emerge así la reivindicación orientada a la consecución de beneficios “para todos”, y es eso lo que estamos denominando “corporativismo universalista”. De modo que tanto el corporativismo como el corporativismo universalista, en tanto sentimientos y culturas basados en la comunidad, pueden estar yuxtapuestos sin mayores conflictos con la idea de socialismo. La rebeldía se orientaría a la defensa del bien público, en consecuencia, hacia la impugnación del tipo de contrato social que permite el “acaparamiento” a espaldas y en perjuicio de la comunidad. Se trata, en buenas cuentas, de un “reciclaje” de la idea de “socialismo” y de disolución en una lógica comunitaria cristiana, mientras las nociones políticas de “igualdad” y “dignidad” se diluyen en esta definición.

Es interesante, además, llamar la atención en que, si bien don Julio enuncia la existencia de “banqueros” y “modernizadores (privatizadores) ladrones”, no se enuncia con toda claridad la existencia de una “clase obrera”, en tanto polo de oposición a las presiones de los primeros. Posiblemente, este silencio se deba a que “lamentablemente hoy día al mismo trabajador solo le importa el trabajo y cuánto le pagan, el resto no le importa, nada de seguridad”; inmovilidad que le produce ansiedad en virtud de que “se toman medidas de saneamiento momentáneo, nada de contratos colectivos, nada de sindicatos, nada de organizaciones. La lógica es: “esto trabajan esto ganan, si no rinden se van”, peor con la famosa flexibilidad laboral o la famosa reducción del Estado, realmente la clase trabajadora en el país ha retrocedido a la esclavitud. Todas las garantías para los trabajadores ya no existen, peor la organización”.

Es decir, los trabajadores estarían limitados a sus reivindicaciones puntuales, sin expresarse –diríamos nosotros– a través de reivindicaciones universalistas que pudiesen sostener la “seguridad”, aunque en cierto momento reconoce brevísimamente su mérito en la lucha contra

la privatización de las eléctricas. Parecería, entonces, que la ausencia del enunciado sobre la “clase obrera” –en tanto referente de una situación social e histórica deseable y de una lucha actual– estaría originada en el reconocimiento silencioso y angustiante de la fragmentación o estado de crisis de la entidad colectiva, estado que emanaría de la constatación de la incapacidad para expresarse de manera universalista. Es así como su identidad en tanto miembro o partícipe de “la clase obrera” estaría fracturada.

Los trabajadores del relato de don Julio estarían, al parecer, inmovilizados por los sentimientos que Fredric Jameson define como “las ansiedades antiutópicas y los miedos a cambios más profundos” (Jameson, 1999: 189). Quizá por el miedo a perderlo todo. Es ello lo que provoca también la ansiedad del veterano sindicalista, es ello lo que lo confrontaría consigo mismo, con su propia práctica sindical, lo que inhibiría la actualización de su autoadscripción de clase.

ALEJANDRO

En otra vertiente del movimiento sindical, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y su expresión local, la Federación Provincial de Trabajadores del Azuay (FPTA), algunos dirigentes ciertamente tendrían una vertiente previa de formación partidaria de izquierda, lo que habría contribuido notablemente a la elaboración de los relatos político-sindicales de la época, aun cuando en la cotidianeidad las prácticas asumiesen otro carácter. Así relata, por ejemplo, nuestro interlocutor Alejandro –un ex obrero de la generación de energía eléctrica, de 59 años, de origen popular-urbano, hoy desempleado y militante del Movimiento Popular Democrático– su experiencia previa a la entrada al movimiento sindical:

Yo tuve a mi padre que no fue de izquierda, tuvo la actitud de un militante de izquierda, pero se equivocó y pensaba que a lo mejor Velasco Ibarra iba a solucionar todos los problemas. O sea, no comprendía la esencia, ahí es justamente la capacitación política ideológica que debe tener un dirigente, un trabajador para comprender por qué está, contra quién luchamos. [...] él se oponía a la oligarquía, al imperialismo que toda su vida ha manejado a su antojo a los pueblos, [los] ha hecho flecos con sus invasiones, las guerras. Yo desde muchacho fui asimilando esa cuestión, posteriormente cuando tuve 25-24 años me invitaron a afiliarme al Partido Comunista del Ecuador [de orientación prosoviética] aquí en el Azuay, yo ya había estado en una asamblea muy buena a raíz de la muerte del Che, habían expositores y expositoras. Más me llamó la

atención una compañera que [...] era una oradora excelente, tenía un carisma... llegaba ¿no? [...]. Yo tenía un hermano que militaba en un partido de izquierda, él me dijo: “afíliate al partido” [...]. Yo entré a militar en el Partido en 1969 [...]. Y eso lo he transmitido a los compañeros, al pueblo en las diferentes situaciones que hemos tenido que atravesar.

En este contexto, el origen de los males sociales estaría ubicado en los exteriores de América Latina, connotando una perspectiva más bien internacionalista de los problemas sociales existentes al interior de las fronteras nacionales. A diferencia de don Julio, Alejandro parece inscribir su visión del orden social en una perspectiva altamente politizada. En lo que concierne a la producción del conflicto, la misma tendría ribetes similares a los analizados en el caso anterior, es decir, el clasismo tendría un anclaje en la demanda de mejores condiciones laborales y salariales, aquí contextualizada por una perspectiva ortodoxa sobre el socialismo:

P.: ¿Por qué protestar?

R.: [...] muchas veces se cree que nosotros nos oponemos al gran capital porque no estamos de acuerdo o porque no estamos en el poder o perdimos las elecciones o perdió nuestro candidato. No es así, la economía está manejada por un grupo totalmente reducido y no se considera a la fuerza de trabajo como un elemento vital para la producción, se quiere subestimar y tenerle al trabajador pisoteado. Entonces, una de las cuestiones, sin llegar al economicismo, ha sido el aumento de sueldos y salarios, pero también oponernos al incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, lo que nos ha llevado justamente a la protesta, entonces ha sido una protesta que ha sido llevada acertadamente [...] y no ha sido por anarquizar el país o siquiera por tener una posición ideológica ya mucho más avanzada, no ha sido eso sino considerando la verdadera realidad en [la] que vive el pueblo.

En esta alocución estaría subyacente, bajo una retórica ortodoxa, una demanda de ciudadanía social respaldada en la idea de dignidad y no una mera reivindicación “economicista”, demanda que, desde tal punto de vista, sustentaría lo que hemos denominado “corporativismo universalista”. Demanda que, por otro lado, se constituye en un puerto de llegada de las luchas, provisional pero al parecer seguro. Del conjunto del diálogo colegimos que, sin embargo, aun este politizado interlocutor disocia las reivindicaciones de políticas sociales, de solución a los problemas de salud, educación y vivienda, de la evaluación política,

pues solo retrospectivamente, al recordar la época febres-corderista, Alejandro otorga a la protesta una significación política, al aludir a las llamadas “huelgas políticas” opuestas a “un gobierno fascistoide”. Tal conclusión iluminaría, nuevamente, las limitaciones políticas y estratégicas (en el sentido que de Certeau otorga a este término: hablar y actuar desde un lugar propio) que devienen de un estilo “hiperpolitizado”; aquí, tal matiz de la actuación política estaría acentuado en ciertos aspectos de la práctica sindical, mientras es inhibido en las prácticas propiamente “clasistas”.

Al comparar los relatos de ambos militantes sindicales, podemos evidenciar, en el caso de Alejandro, una identidad basada en la continuidad de los contenidos ideológicos, en la cual no parece haber hecho mella la desocupación y la pérdida de referentes partidarios sólidos (quizá debido a que el relato existencial se construye fuera del ámbito sindical), y al mismo tiempo percibimos las limitaciones en la politización de la dimensión “clasista”. En el caso anterior, el de Julio, en cambio, observamos la fractura de la autodefinición en tanto miembro de la “clase obrera”. ¿Ha sido esto configurado por la fragilidad de las adscripciones políticas? En este caso, el interlocutor resiste a las alternativas individualistas. Pensaríamos que, en el plano ideológico, tal es la matriz que se expresaría, en términos mucho más amplios, en la pérdida de incidencia pública y en el menoscabo simbólico del sindicalismo. Y los efectos sociales de esta matriz ideológica habrían sido ahondados por la dispersión que indujo salidas individualistas a los embates de la crisis y la política del ajuste.

POLITICIDAD Y PROYECTO

Como en los capítulos anteriores, al hablar de politicidad me refiero al conjunto de nociones sobre el manejo y acceso al poder, nociones sobre la autoridad y los partidos políticos. Recordemos también que ya con anterioridad nos habíamos remitido a los conceptos elaborados por Georgé Rudé sobre la constitución de la ideología (ver el Capítulo I). Este autor considera que en la producción de la ideología confluyen nociones que surgen, tanto de la experiencia –“elemento inherente”, según Rudé–, cuanto a los conjuntos artificiales de ideas –el “elemento derivado”, desde el punto de vista del mismo autor–, y también a las prácticas de los sujetos colectivos en sus actuaciones en sistema político. En esta sección analizaremos las definiciones políticas de nuestros interlocutores.

JULIO

Decíamos en páginas anteriores que en las concepciones de Julio sobre el orden social gana una relevancia central la dupla capitalismo-socialismo. Cada uno de estos términos aglutina en torno a sí la red

de nociones que caracteriza el contenido que el interlocutor atribuye a cada uno de esos modelos de sociedad. Señalábamos, además, el carácter moral de sus apreciaciones políticas, que no obstante están incrustadas por categorías políticas modernas tales como la igualdad. Nos referimos, finalmente, a la primacía del concepto de “bien público” e “interés colectivo”, como preludio de las representaciones sobre la política. Veamos, ahora cómo se enlazan tales representaciones sobre los fines de la política con las perspectivas de don Julio sobre la autoridad. Si la meta deseada parece anclar en la idea de bien público, un buen gobierno, por otra parte, debería “salirse de las empresas electorales. Lo que hicieron con Mahuad y con los otros, ellos [quienes financian las campañas electorales] dicen al más probable tanto, al otro tanto... Todos [los candidatos] tienen el mismo compromiso. Serán buenos planificadores, buenos oradores, pero en la práctica sí les falta [a los políticos]. Ahí sí quisiera, como Pancho Villa, ir con un látigo castigando a todos esos malos gobiernos, aunque parezca una crueldad. Yo sí creo que se disminuiría la corrupción, porque primero es el escándalo real –“aquí está el ladrón”–, y luego la vergüenza que vivirían”.

Nótese que, en rigor, no hay una censura al contenido y al estilo del ejercicio del poder sino a las orientaciones éticas del mismo; el remedio, consecuentemente es –justiciera y bíblicamente– moralizante. Veamos ahora cómo se enlaza esto con la perspectiva que, pensamos, tiene este interlocutor sobre las impugnaciones presidenciales de los últimos años. Según este interlocutor, “la caída de Bucaram fue un complot más desde los ricos, de los políticos que no les gustó la política de él y como la mayoría somos crédulos pensamos que su caída era lo mejor”. En lo que corresponde a la percepción de las políticas de ajuste, Julio expresa indefinición:

P.: ¿Qué aspectos negativos vio en el gobierno de Bucaram?

R.: Como todo gobierno tuvo sus aspectos malos, sobre todo sus asesores, ministros que se aprovecharon de las circunstancias que vivió el país. Hubo un nivel tan bajo en todo el gabinete.

P.: ¿Y los aspectos negativos?

R.: Algo que siempre recuerdo es que decía “comprenden dólares, yo sé por qué les digo”. Ahora sabemos por qué dijo esto y quiénes se aprovecharon en el país.

En primera instancia, la alocución mantiene implícito un rechazo y un deslinde frente a la impugnación de Bucaram: “no fuimos nosotros quien lo deseó, fueron los ricos”. Es probable que esta apreciación del interlocutor sobre el gobierno de Bucaram haya sido elaborada en lo posterior. Diversos interlocutores con quienes hemos dialogado sobre

el tema, en otros contextos, han manifestado su arrepentimiento por haber participado en la impugnación de Bucaram, arrepentimiento que es posterior a la experiencia de los impactos sociales y cotidianos de la gestión de Mahuad, de su alineamiento explícito y radical con la plutocracia. Dichos interlocutores opinaron *a posteriori* que Bucaram quería que el país entrase en la convertibilidad “pero con el dólar a cuatro mil sucres” y que, por lo mismo, no fue una buena idea derribarlo. Sin embargo, pienso que esta posición de don Julio, en todo caso, estaría más bien reflejando las expectativas que abrigaban varios sectores críticos a la implantación del modelo neoliberal. De tal manera, el apoyo brindado a Bucaram respondía a la esperanza de que él detuviera las inevitables medidas que todo gobierno había venido tomando desde 1982, y cuyos efectos se acentuaban más y más. Estas esperanzas estuvieron respaldadas, para muchos/as, en la promesa leída en los denuestos lanzados profusamente contra Febres Cordero: él era el único y “no le pasa nada” (León, 2001, Capítulo IV; sección “Protección y orden”), me decía una interlocutora en 1999.

En un sentido similar, desde el punto de vista de los sindicatos y de muchos de sus miembros, se esperaba que Bucaram detuviera las presiones por la privatización de las empresas públicas y la dolarización, que desde hace tiempo venían anunciando los empresarios y banqueros guayaquileños. Expectativas de salvación que serían reactualizadas luego, en el contexto de los efectos sociales de la dolarización y el avance de otros elementos del modelo, que invocan la nostalgia por algo inconcluso: “de gana le botamos al loco”, y que significarían la espera de un mesías, llámese Abdalá Bucaram, Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez.

En un segundo momento, don Julio evita confrontarse con nuestra interrogación sobre los aspectos negativos que habría observado en la gestión del ex presidente, desplazando la responsabilidad por posibles errores hacia sus colaboradores¹⁶. Como veremos más adelante, don Julio no es el único representante del sector sindical que, de una u otra manera, habría respaldado a Bucaram. Escuchemos, ahora lo que don Julio opina sobre la impugnación a Jamil Mahuad:

P.: En la época de Mahuad, ¿por qué fue el descontento de la clase obrera?

R.: El descontento no solo fue de la clase obrera, fue más bien del sector bancario, donde todos en mayor o menor grado tenían sus dineros en los bancos, fueron los cuentacorrentistas los más descontentos, allí se vio quiénes manejaban en verdad

16 Similares desplazamientos de responsabilidad, tanto de Collor de Mello como de Bucaram, realizan varios de los hombres y mujeres que beneficiaron con su testimonio la investigación de mi libro ya mencionado (León Galarza, 2001).

el poder económico que ha sido tan fuerte. Creo que Mahuad tuvo un respaldo internacional, pero que terminó arruinándonos a nosotros. Sin embargo, Mahuad tuvo la valentía de decir “hasta aquí”, de lo contrario debía seguir agradando a los unos y a los otros, ya que la presión fue muy grande.

Nuevamente escuchamos una excusa a otro ex mandatario. De ahí que podamos interpretar que para muchos sectores populares y de trabajadores, Bucaram no representaba mayor amenaza al “bien público”, aun cuando transgrediese la majestad de la función presidencial. Por otro lado, la “valentía” de Mahuad podría, al parecer, purgar su “culpa”. En síntesis, la fractura de la identidad en tanto “obrero”, junto con la recusa a la definición partidaria mantiene una puerta abierta a las opciones identificatorias, con la correspondiente delegación de la autoridad moral y la demanda de una rendición de cuentas de carácter ético, mientras, por otro lado, está ausente una definición política de intervención o mudanza en el modelo de sociedad, sino que se proclama la idea de “bien público” en tanto “bienestar”, connotando una idea de ciudadanía social apuntalada desde lo que hemos denominado “corporativismo universalista”.

JOSÉ

Para no imputar las evasivas políticas de don Julio y la propensión a las opciones políticas identificatorias a su opacidad doctrinaria o a su no alineación partidaria, escuchemos a otro interlocutor del sector sindical, José, de unos 45 años y militante de otra central sindical. Lo visité en el taller de metalmecánica de su propiedad, abierto tras su suspensión en la fábrica en la que trabajó durante décadas.

José se declara abiertamente de izquierda, manifiesta su adhesión a la tendencia política y su proximidad a la corriente socialista; relata, asimismo, que procura no ser absorbido totalmente por el trabajo en beneficio personal, ya que se esfuerza por dedicarle unas horas diarias y el fin de semana al activismo político que él realiza, en primer lugar, en la central a la que estuvo afiliado el sindicato en el que militó durante muchos años –aunque ya no forme parte del sindicato–, en segundo lugar, al programa radial que mantiene desde hace unos años y, finalmente, al trabajo organizativo y de difusión que realiza en comunidades campesinas ubicadas en los alrededores de la ciudad de Cuenca. El interlocutor insiste en demostrarme su fidelidad a la lucha, y me muestra unas banderas rojas y materiales para la elaboración de pancartas que guarda en su taller; me dice también que ha involucrado a su familia en esta labor.

Se trata de un (ex) obrero de origen campesino, cuyo padre habría trabajado como albañil y su madre como vendedora de hortalizas,

ambos “sumamente pobres”. Narra también su vida de trabajo en la industria desde los 13 años, y no olvida mencionar su trayectoria como formador de innumerables organizaciones sindicales, pues se considera “un luchador, la lucha la llevaba adentro”. Así, pues, escuchemos cuál es la posición de este interlocutor con respecto a las impugnaciones a los dos mandatarios durante los últimos años.

P.: ¿Por qué se debía botar a Bucaram?

R.: Yo creo que el tipo ganó y bien ganado, a mí me parece fue una presión más desde los intereses económicos, ciertos grupos no estaban de acuerdo, pero con los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante, lograron plasmar la imagen de una insatisfacción total. Pero creo que fue el descontento más desde los grupos económicos a quienes no les dio paso. Luego Bucaram cometió ciertos errores, eso de estar andando hecho el artista, futbolista, cantante, la gente se disgustó por no ver la seriedad que como presidente debería tener, además se sumó la vinculación de su familia con el poder, le tenía a un hijo en las aduanas. Pero la gente siempre ve las mínimas cosas, lo más importante para mí [era] que “el loco” sí estaba haciendo ciertas cosas buenas, estaba planteando las reformas al sistema económico, él planteó la convertibilidad o la dolarización, claro que le trajo al mismo asesor argentino. [...]

P.: ¿Cuál es la diferencia entre botar a Bucaram y a Jamil?

R.: Ahí sí, yo estaba de acuerdo con que se le bote al Jamil, primero porque hasta ahora la gente está sufriendo por la cuestión de los Bancos, usted verá que los canales de televisión, las campañas de elección todo se hacía a través de Filanbanco, todo eso fue porque le dieron plata para su campaña, al menos yo creo que toda la gente estuvo de acuerdo. Más bien con “el loco”, luego se dieron cuenta que no era tan grave, la organización a veces es un poco utilizada, manejada, la gente a veces es más espontánea; cuando ve las cosas injustas, sí sale a protestar. En esos dos casos lo que se vio es que cuando el pueblo se para, se para, los militares no pudieron detener. Lo que pasa en Venezuela, con las Fuerzas Armadas, con el Fondo Monetario, con la Iglesia, con los medios de comunicación, el pueblo salió, allá quién le quiere botar al Chávez [son] las Fuerzas Armadas, las cámaras de la producción, los medios de comunicación, la Iglesia y cierta dirigencia también de los trabajadores, en cambio el pueblo no. Acá fue el pueblo, porque siempre será más poderoso. El caso de Chávez y de Bucaram sí puede ser

parecido, pero el mal ejemplo de él fue lo que le arruinó al “loco”. Nuestro pueblo lastimosamente es tan frágil, ahora le dicen una cosa y obedece nomás, o se olvida. Políticamente sí hizo cosas interesantes por los niños, aunque también con errores, lo de la mochila escolar, ¿por qué mandaron hacer en Colombia cuando se las podía hacer aquí? Hizo muchas cosas incoherentes, y el pueblo ya no se deja engañar fácilmente.

Una primera sorpresa me llevé al advertir el apoyo implícito de José a Bucaram, sorpresa que se iba ahondando al escuchar que el interlocutor pensaba realmente que Bucaram sería una opción y que, aun más, las novedades propuestas por Bucaram, tales como la convertibilidad, serían positivas, a pesar de que se las iba a impulsar bajo el asesoramiento del ex ministro argentino Domingo Cavallo. Por supuesto que mi sorpresa se dio en la medida que la conversación sostenida con José tenía lugar después de que el mundo conoció de la catástrofe argentina, que fue resultado de similares políticas económicas y de que, suponía, que el politizado ex obrero estaría al tanto de los sucesos argentinos de 2001. Sin embargo, mi interlocutor se aferraba a la idea de que Bucaram podía haber salvado al país (apreciación que habría sido elaborada también *a posteriori*, contra el telón de fondo de las políticas de Mahuad y el congelamiento de los depósitos bancarios decretado por este).

El testimonio de José es, evidentemente, una clara expresión de la superposición del “elemento derivado” del que nos habla Rudé (en el caso de José, la crítica doctrinaria al ajuste) con el sentido común, el “elemento inherente”, y es ahí donde ocurre la fusión que engendra la idea de salvación endosada a un líder, en la medida que el interlocutor no logra decodificar los alcances de políticas de Estado que rebasan los límites de la acción de un político. Por otro lado, la apuesta del interlocutor por el asistencialismo gubernamental apuntaría claramente a la idea de “bien público”, presente en las concepciones de don Julio.

Sugeriría, en primera instancia, que el paralelismo trazado entre Bucaram y Chávez indicaría quizá una remisión del primero a la figura del héroe salvador, con las complejas implicancias que la acompañan (ver la sección “Entre la política y la cotidianeidad: explorando salidas”, en el Capítulo I de este libro). En esta alocución parece implícita también una expectativa frente a Bucaram, al considerarlo gestor del bien público, atributo que estaría ausente en la imagen de Jamil Mahuad, en la perspectiva de José.

La noción de bien público se presenta, entonces, en ambos casos, como el nudo político-moral en el que se decide la protesta. No se trata, por cierto, de que todo “acaparamiento” lesiona al bien público, sino de que habría un umbral en el cual este es considerado lesionado (es quizá

por ello que don Julio no censura contundentemente a Bucaram, y ni siquiera a Mahuad). La protesta parece, pues, detonar en el momento en que se transpone dicho umbral de tolerancia al menoscabo del bien público. La protesta sería en ese sentido “selectiva”, habría para ella un tiempo específico determinado por la cualidad y calidad de la transgresión. Y quizá la fuerza de los reclamos durante la segunda mitad de los años noventa e inicios de 2000 obedezca al inusual trastorno de la vida cotidiana, y la inusual violencia ejercida contra la escala de valores básicos promovida por el ajuste, aunque muchos trabajadores –y con ellos vastas capas populares– eventualmente estarían dispuestos a obviar tales hechos.

Deseo también llamar la atención sobre la ambivalencia que adquiere el “pueblo”, referente identitario central del sindicalismo de los años ochenta, tributario y sujeto activo del cual fue José en aquel tiempo. El pueblo es concebido ora como poderoso, ora como frágil y olvidadizo, esto podría significar que también aquí tambalea la identificación con la “clase” y con el “pueblo”, referente universal. No obstante, aquí el interlocutor no se ha dejado embargar por los miedos a cambios más profundos, de los que habla Jameson, y continúa con su activismo a pesar de su soledad.

ALEJANDRO

Dentro de esta trilogía de relatos, el de Alejandro sería el único en el que no percibimos la fractura de la identidad obrero-sindical, aunque escuchamos constantemente palabras que podrían interpretarse como justificativos de las acciones llevadas a cabo durante estos años, y de los pensamientos que las guiaron. En todo caso, es interesante el valor que asigna este politizado ex sindicalista a las luchas electorales del presente, en el contexto de un proyecto de sociedad de mayor aliento, que estaría inspirado en “el marxismo-leninismo bien enfocado”:

P.: Después de las conmociones de 1989 ¿cómo debería estar organizada la sociedad?

R.: [...] Yo creo lógicamente que el marxismo-leninismo es una alternativa real, muchos sociólogos, muchos analistas, muchos investigadores plantean que debería verse la forma de consolidar un nuevo modelo, esquema con nuevas formas y planteamientos. Tal vez pueda darse el cambio, nuevas formas de producción, la técnica, la ciencia, estamos en una situación totalmente avanzada, ha cambiado, pero, sin embargo la explotación no ha cambiado, no ha cambiado en nada la humanidad, más bien se agrava. Los problemas de Irak, de Latinoamérica, del Medio Oriente, del Asia, del África no han

cambiado absolutamente nada, entonces eso tampoco garantiza que el modelo neoliberal que es el que maneja el imperialismo sea una alternativa para los pueblos del mundo. Entonces... el marxismo-leninismo, pero en ese proceso podrían darse algunas formas de ir avanzando, yo no sé, el gobierno de Lucio Gutiérrez parecía que era una alternativa, daba una esperanza a los sectores populares, pero en la práctica vemos que no ha sido así...

Los gobiernos democráticos son definidos por este interlocutor a partir de la obligación con el respeto de los derechos humanos y la solución de problemas económicos y sociales, y no solamente como ausencia de represión, serían un momento de una construcción más avanzada:

[...] leí un documento de Evo Morales, me parece muy importante consolidar este grupo sudamericano en lo económico para desplazar al ALCA, pero se avanza por una parte... el imperialismo no le dejó triunfar a Evo Morales en Bolivia, el avance del triunfo de Lula, que directamente no esté aplicando un modelo marxista-leninista, sin embargo hay reivindicaciones que van identificándose con la izquierda, pero que van beneficiando a los sectores populares. La cuestión de Chávez en Venezuela es totalmente marcada, hay un respaldo [...] popular al gobierno y un rechazo de la gran oligarquía y de la pequeña burguesía y alta. Entonces aquí en el Ecuador nosotros teníamos la esperanza, con Lucio Gutiérrez avancemos en un proceso, pero nosotros tampoco queremos entrar a radicalizar [...] teníamos la esperanza, pero ahorita yo pienso que no hay absolutamente nada. Entonces una de las alternativas yo creo es llegar a un modelo socialista, es duro este momento, pero yo creo que sí podríamos seguir avanzando con gobiernos que se identifiquen de una manera democrática.

Así, pues, en términos reales, parecería inclusive que estos “duros” sindicalistas, con la utopía futurista viva y la idea del socialismo a flor de piel, han apostado hoy por hoy a un momento intermedio, un mundo posible con ciudadanía social, y al igual que Julio –indefinido en términos doctrinarios– realimentan opciones personalistas. Inspirada en relatos existenciales diversos, originados tanto dentro como fuera del espacio sindical, la protesta de todos ellos confluiría en la búsqueda de efectos macrosociales, digamos “universal-corporativistas”, y en tal sentido se instala en la producción de un antagonismo mediado por la precarización de la sociedad. Sin embargo, no hay respuestas políticas que viabilicen consistentemente esa búsqueda, la misma que está atra-

pada sin salida en el laberinto de las opciones identificatorias, de ahí la operación permanente de “descarte” entre opciones neopopulistas, primero Bucaram y ahora Gutiérrez, que han hermanado a amplios sectores obreros con sus pares “del pueblo”.

Al explorar las miradas de los dirigentes sindicales de nivel intermedio, hemos observado una diversa “dosificación” y “combinación” de los contenidos ideológicos, con énfasis igualmente disímiles ora en elementos político-doctrinarios, ora en ribetes religiosos. En todo caso, el tenor de sus alocuciones retornaría a la experiencia cotidiana, con sus creencias y evaluaciones, que resaltan el asistencialismo y el bien común. La eventual radicalidad del discurso, entonces, desembocaría en una “terapéutica” de las relaciones sociales.

COMBATES Y PLEGARIAS

Los ribetes ideológicos –latentes más allá de las declaraciones públicas y de los enunciados sindicales en el ámbito de lo político, pero que marcan también el sentido de la protesta– pueden ser mejor analizados en los documentos elaborados por los propios trabajadores. José me proporcionó un folleto escrito por él, en calidad de secretario general de la organización sindical, y editado en mimeógrafo. Lo traigo a colación, debido a que podría ayudar a esclarecer elementos durables, tales como representaciones, rasgos culturales y prácticas que incidirían en el posicionamiento de este sector de trabajadores aún a mediados de los años noventa. El breve texto (catorce páginas) data de 1986, y narra la historia de la organización que a la fecha habría cumplido 10 años de existencia (Comité de Empresa, 1986). El trabajo representa un esfuerzo de recopilación histórica concienzuda, ya que, según señala José en la presentación, la información proporcionada “se ha tomado de las actas, archivos y de la propia experiencia vivida durante más de 20 años” (Comité de Empresa, 1986: s/n¹⁷). De tal manera, se inscribiría en una “política de la identidad” sustentada en la gestión de la memoria, que apunta a sostener la cohesión por la adhesión afectiva, pero también de encuadre de tal memoria mediante la oferta de un relato desde el punto de vista de los trabajadores (sobre este punto, ver Pollak, 1989). Se señala también que el objetivo de la publicación habría sido: “rescatar todo lo bueno que se ha hecho durante estos 10 años y procurar la educación y superación de todos quienes hacemos el Comité de Empresa INDUMESA”.

En el citado opúsculo, José nos cuenta sobre la trayectoria del colectivo de trabajadores de la fábrica donde trabajó tantos años, a través

17 Por tratarse de una publicación artesanal, el opúsculo mencionado no cumple con los rigores editoriales. La presentación, por ejemplo, carece de números de página.

de las breves páginas del folleto mimeografiado de papel periódico con tapas de papel de empaque, fotos de los dirigentes de la organización, y dibujos en blanco y negro que exaltan la lucha de los trabajadores mediante fuertes brazos que rompen cadenas, siluetas de luchadores con banderas (seguramente rojas) enarboladas, y un puñado de hombres de fenotipo indígena que levantan hoces y martillos.

En 1973-1974, en INDUMESA laboraban 30 trabajadores: soldados armadores de estructuras para cubiertas, constructores de carrocerías metálicas para buses, baldes para volquetas y vehículos pequeños, tapiceros, carpinteros, pintores. En aquella época la rama metalmecánica atravesaba un momento de prosperidad y “progreso”, mientras que algunos trabajadores, “los más dinámicos y conocedores del asunto de se dieron cuenta que era hora de organizarse para buscar mejores días [...]” (Comité de Empresa, 1986: 1).

La mayoría de los trabajadores, a la sazón, eran nuevos, y los antiguos que eran pocos, no tenían iniciativa para la organización. Evitaban, sobre todo “dar molestia alguna a los señores propietarios” (Comité de Empresa, 1986:1). Entonces, “los compañeros más conscientes” habrían comenzado a dar los primeros pasos para formar un sindicato, asesorados por un estudiante universitario de ideas socialistas. Los propietarios de la fábrica habrían reparado muy pronto en lo que estaba ocurriendo, despidiendo bajo acusaciones falsas a los activistas. Los obreros no se desalientan y continúan con el proceso organizativo, cuidando del secreto sobre las reuniones. De todas maneras, la información se filtra y los patronos intentan dividir a los trabajadores utilizando a los más antiguos. Afortunadamente, los activistas ya habrían acelerado el trámite de legalización del sindicato. Todo esto, durante 1975.

Un día viernes por la tarde estalló el problema, y los funcionarios de la empresa comienzan a llamar uno por uno a los directivos del sindicato. Después se supo que se trataba de un despido, por lo que el sindicato estaba liquidado. En precaución de nuevos intentos, es el mismo patrono, ya en 1976, quien toma la iniciativa de formar un “comité de empresa”, y recurre para ellos a los hombres de confianza. El 12 de agosto de 1976 el contador convoca a los obreros y les informa sobre la constitución del Comité de Empresa, agregando que en adelante tendrían “algunos beneficios sociales”, y procediendo a nombrar la directiva de la organización. Pero después de algún tiempo, “nuestros compañeros ya se iban dando cuenta del compromiso serio que teníamos los trabajadores y en cada reunión se veía un afán de ir avanzando en la organización”; así las cosas en una de las reuniones resuelven recurrir a un asesor sindical (Comité de Empresa, 1986: 4).

Entre las cosas “interesantes” que los trabajadores de INDUMESA tenían en aquella época eran los viajes gratuitos a Guayaquil “para

apoyar con todo entusiasmo al Deportivo Cuenca¹⁸ y así se nos fue el primer año de organización” (Comité de Empresa, 1986: 5). Durante el segundo año, los trabajadores habrían puesto a uno de sus representantes como secretario general (el anterior era uno de los funcionarios de confianza del dueño), y la organización comienza a “cambiar de rumbo”, porque se afilia a la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC). Es en aquel tiempo cuando empiezan a surgir “compañeros con ideas claras y un afán permanente de ir avanzando en la formación y capacitación sindical” (Comité de Empresa, 1986: 5). Es también cuando dos de los trabajadores viajan a Quito al primer congreso de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos del Ecuador (FEDEMETAL), y a su retorno informan sobre la importancia del evento. Este acontecimiento habría incentivado a todos los trabajadores a avanzar en la lucha y a conocer las leyes laborales, a aprender cómo se debe discutir un contrato colectivo. Entonces los trabajadores comienzan a asistir a todas las jornadas de capacitación que realizaba la central sindical. Luego este esfuerzo da los primeros frutos, y se firma un contrato colectivo en 1978 que habría conquistado “ayuda para el local sindical y financiamiento para el deporte, entre otras” (Comité de Empresa, 1986: 5). A finales de la década de los setenta los obreros se involucraron más y más en distintos eventos: seminarios, congresos nacionales y provinciales. Esos años estuvieron llenos de dificultades y tensiones, pues el gerente no cumplía con el contrato colectivo, lo que dio paso a un período de intensos reclamos. Los obreros entonces toman la decisión de luchar “en contra de la actitud de la patronal y [...] en contra del régimen demócrata-cristiano que día a día imponía medidas en contra del pueblo ecuatoriano” (Comité de Empresa, 1986: 10).

Ya en los primeros años de la década de los ochenta, la organización logra “los más altos niveles” de participación y se involucra en las jornadas de mayo y octubre de 1982. También de este período data la primera actitud de protesta en contra del patrono frente al incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, lucha que culmina con la firma del cuarto contrato colectivo. De la época data también el nombramiento de la Virgen María Auxiliadora como Patrona de la organización. Avanzando hacia la media década se continúa con la persistente presencia en las huelgas nacionales del FUT, y la organización decide reglamentar sus actividades. Fruto de ello fue “un reglamento interno de la organización, las ayudas por enfermedad para algunos compañeros y se inició un archivo de documentos”. Estos años, 1984 y 1985, son recordados también “por el interés que el compañero [...]

18 El principal accionista de la empresa fue dirigente deportivo; el estadio de la ciudad lleva su nombre.

puso en dar mayor realce a las festividades de Nuestra Patrona y fue en su época que se corona a la Virgen María Auxiliadora en una gran ceremonia” (Comité de Empresa, 1986: 11). Los obreros de INDUMESA recuerdan a 1985 como el año en que se cometió una gran injusticia, pues el secretario general del Comité reclamó que se le pague el salario estipulado en el contrato colectivo. La presión ejercida por el dirigente habría provocado su despido, bajo el argumento de atrasos y salidas sin permiso; acto seguido los trabajadores respondieron presentando un pliego de peticiones con trece puntos. La empresa no aceptó la solicitud, por lo que los trabajadores iniciaron una huelga que dura 23 días, en respaldo al secretario general, a quien finalmente, no se le reintegra a laborar. No obstante, el balance de esta huelga se considera positivo, pues se había logrado la solidaridad de otras organizaciones a nivel local y nacional, de los familiares de los huelguistas, de artistas; la huelga había sido beneficiosa para los trabajadores, pues les permitió medir “el grado de combatividad y disciplina de los compañeros trabajadores de INDUMESA” (Comité de Empresa, 1986: 12).

Después de esto, los trabajadores perdieron el recelo o duda ante un conflicto colectivo. También se hizo realidad la tabla salarial por rama de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, además de que, a los pocos días de la huelga, el gerente general fue cambiado. Se inicia, asevera José, otra época del Comité de Empresa, pues además la organización ha desarrollado un alto espíritu de solidaridad y compañerismo, e iniciado la publicación del periódico *La verdad obrera*.

Hasta aquí el relato. En el mismo percibimos varias líneas ideológicas o, mejor, estratificaciones superpuestas e imbricadas. La historia del Comité de Empresa de INDUMESA nos ayuda a reflexionar, nuevamente, sobre la presencia de corrientes subterráneas corporativas y prácticas mutuales, en el seno de la vertiente sindical clasista, de tal manera que sus símbolos de combate (banderas rojas, puños apretados, cadenas rotas) ocultarían, más bien, la idea de rebeldía en pro del bien público, antes que el anhelo de una reestructuración del modelo de sociedad. Agregaríamos, además, que en este caso observamos la existencia de un componente religioso, siendo probable la difusión de tales prácticas y concepciones en una gran cantidad de organizaciones. En tal sentido, si reparamos en el simbolismo laico de la Virgen María Auxiliadora, podemos quizá derivar de él la fuerza de las metáforas familiares (hermandad, maternidad), y de la búsqueda de protección y calidez como contexto de la construcción de la organización.

Resulta interesante también la búsqueda de consolidar la identidad colectiva a través de la gestión de la memoria y la producción de un relato autorizado, pues el autor del folleto pone énfasis en conceptos como la combatividad, la alteridad del patrono, la fraternidad y la

ayuda mutua. Notemos que los tres primeros elementos mencionados serían plenamente compatibles con la perspectiva socialista/clasista, aun cuando, claro, en discursos políticamente diversos. Serían, por lo tanto, aquellos los ejes ideológicos que remiten a valores cardinales. Valores que habrían permitido la confluencia de la dirigencia nacional, local y de los miembros de base. Sin una práctica de inspirada en tales valores no hubiese sido posible que, a la par con el corporativismo, se vigorizase el clasismo-izquierdismo. Y dado que las fronteras que separan ambas vertientes no son rígidas, muchos sujetos oscilaban entre una y otra, con lo que se volvía permanente la simbiosis entre religión y política, creando el sustento para las identidades colectivas de la inconformidad obrera.

Llamo también aquí la atención sobre la importancia de la noción de “pueblo” como referente de los esfuerzos colectivos plasmados en las huelgas, un “pueblo” que se enfrenta al Estado y, siguiendo la retórica de la izquierda, “a la clase dominante que detenta el poder”. Es aquí donde se inscribe de manera implícita la presencia de lo que hemos llamado “corporativismo universalista”: una cultura política anclada en la “estadofobia” y, al mismo tiempo, en una concepción del Estado como fuente por excelencia del “bien público”, en el clamor de justicia social “para todos” frente a quienes detentan el poder macrosocial. Cultura “de las bases”, por lo demás, que no pretende, más allá de la retórica revolucionaria, rebasar el marco de lo realmente existente; una cultura que es movilizad eventualmte por la “economía moral”, y que luego de trastornos de diversa duración dependiendo de la magnitud de la violencia política y económica de las elites, vuelve a su rutina cotidiana y recupera sus hábitos y creencias.

En suma, el llamado “sindicalismo clasista” sería un complejo en el que se superponen ideologías de diverso signo y origen, a las que acompañan en cada nivel de interlocución diversas prácticas políticas. Complejo que resultaría “izquierdizante” con cierta consistencia solamente al nivel de las cúpulas del FUT y las centrales sindicales nacionales, que eran las instancias visibles y audibles en las huelgas –momentos cúlspide de las confrontaciones y/o negociaciones con el Estado–. Es la relación con este que la acción sindical asume un carácter corporativo-universalista laico, pues en mi criterio muchos de los beneficios que la movilización sindical lograba arrancar al Estado (por ejemplo, congelamiento de tarifas de transporte y servicios o precios del gas) y, por su intermedio, a la parte patronal; beneficiaba, hemos dicho, también a sectores no obreros vinculados al Estado. Algunos de estos beneficios se extendían, asimismo, a amplios sectores populares. Ya en los niveles estatales intermedios, por ejemplo, provinciales, la ideología y prácticas sindicales irían distanciándose del discurso nacional, doctrinariam-

te informado, y cobran un carácter más particularizante, aunque sin desechar el componente universal-corporativista. En los espacios locales e inmediatos de agremiación, los miembros de base recrean entre sí relaciones cara a cara impregnadas eventualmente de mutualismo, se encapsulan en las demandas particularistas en la relación con la patronal, y la organización se caracterizaría por lo que denominaríamos “corporativismo particularista no secularizado”.

En síntesis, si imaginásemos al sindicalismo de la vertiente clasista de la manera arriba descrita, es decir, como constituido por efectos superpuestos de representaciones, ideologías y prácticas de diverso origen en varios niveles y ámbitos societales, y realizásemos un corte vertical con el fin de identificar las diversas estratificaciones ideológicas, podríamos ver que el discurso universalista y laico se va diluyendo gradualmente, desde los altos niveles de negociación, con el Estado, hasta las instancias jurídicas y patronales localizadas, lo propio ocurre con el efecto político gracias al carácter despolitizado de las prácticas de negociación. Con todo, es una constante el tenor “antisistémico” del marco ideológico general: su inspiración sería marxista-leninista (ver Cuadro 8 del Anexo).

LA COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES ¿UN POSMOVIMIENTO?

Hemos analizado algunos ejes ideológicos del sindicalismo de los años setenta y ochenta, que irradiaría su influencia hacia la organización sindical clasista que sobrevive en los años noventa. ¿Cuál es la distancia ideológica que separa a este del nuevo sindicalismo de los años noventa, inscrito en la CMS? ¿Cuáles los contenidos de la protesta? Veamos lo que ocurriría al menos en una de sus vertientes, la del sindicalismo estatal, a través de un texto de Ramiro Galarza, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, incluido en la obra colectiva *Los encadenados del oleoducto* (Galarza, 1996).

Galarza relata las vicisitudes de la presencia de los sindicatos del sector estatal en la vida pública, y específicamente de los trabajadores petroleros y los eléctricos. Dos habrían sido los ejes de la lucha librada a mediados de los años noventa: el primero, la brega contra de la supresión del derecho a la sindicalización y otros derechos sociales y, en segundo lugar, la oposición a la ampliación del SOTE y su licitación. En lo concerniente al primer eje, los trabajadores petroleros, buscando presionar a su patrono inmediato, el Estado, habrían vuelto sus ojos a un lugar donde podían ser escuchados por alguien, en la defensa de sus intereses, optando por la negociación parlamentaria, con proyección a inscribirse políticamente y ocupar el vacío dejado por el FUT: “El país ganaba un nuevo actor social y una nueva fuerza política con capacidad

de incidir en los escenarios coyunturales” (Galarza, 1996: 134). En cuanto al segundo, al tratarse de un asunto estratégico para el desenlace de la gestión de Durán-Dahik, el gobierno perseveraría en su propósito, de ahí que los trabajadores petroleros tuvieran que radicalizar la medida anunciando que llegarían hasta las últimas consecuencias, y ello se expresó en el nombrado encadenamiento simbólico al oleoducto.

Independientemente del sentido político y los efectos simbólicos buscados, me pregunto: ¿no está, por ventura, intentándose recapitular el mismo papel social del FUT, solo que ahora con un lenguaje político diferente, desde una nueva autoadscripción, a la altura de la época “post” muro de Berlín y sin la incómoda presencia de los referentes partidarios de izquierda? ¿No se estaría reforzando una orientación más bien neocorporativista de la presencia sindical en el ámbito de la política nacional, en la medida que se rompen las mediaciones político-partidarias antaño existentes entre las instancias obreras y el Estado? Reiteramos que hablar de corporativismo o neocorporativismo no tiene aquí un sentido peyorativo, sino que implica apenas la designación de las prácticas del FUT, bajo un lenguaje remozado. Por ejemplo, la comprensión que tiene Narváez sobre el papel del Estado en la nueva situación de la crisis y el ajuste radica en que el Estado debería actuar en concordancia “[...] a su naturaleza: poner en vigencia la práctica del Bien Común”, pero en realidad, el Estado en su actuación no ha hecho más que “poner el ‘interés general’ en armonía con el interés de esos grandes grupos, con el interés y la lógica del capital [...]” (Narváez et al., 1996: 24).

De modo que el Estado está de vuelta, y sigue siendo el centro de referencia de las demandas sociales. El tenor de tales demandas parece indicar que, en la fase “post”, las fronteras entre la “estadofobia” y la “estadolatría” son igualmente o más difusas que antes, en la era “tradicional”. De vuelta está también la idea del bien común, en desgarradora contradicción con la crítica, que los dirigentes del nuevo sindicalismo formulan, al sistema capitalista y en particular al neoliberalismo (ver, por ejemplo, Narváez et al., 1996: 25).

En cuanto al contenido de la protesta y de la oposición a las privatizaciones, este se acompaña con lo que Ibarra denominara “el espíritu del Alto Cenepa”, que perduraría inclusive en la impugnación a Bucaram en 1997:

Estábamos cerca de bajar los *switchs* de las grandes centrales hidroeléctricas y disminuir carga en las áreas de producción, transporte, refinación y exportación de petróleo. La radicalización nos hubiera llevado a una confrontación innecesaria con nuestras Fuerzas Armadas, con quienes

compartimos el vehemente deseo de fortalecer el sector estratégico de la economía.

La guerra del Cenepa había unido al pueblo y al ejército, la participación de los trabajadores energéticos fue particularmente digna en este momento (se llegó a producir gasolinas de helicóptero, por ejemplo), y el país fue abastecido de forma extraordinaria en combustibles y electricidad. El Ecuador funcionó como un reloj. Nuestro pueblo se crece en momentos difíciles, si logramos unirlo por grandes causas podemos ganar el cielo.

La fuerza de los grandes cambios está en el pueblo, en sus movimientos sociales, en sus diversas formas de asociación, de lucha, de sobrevivencia. No era adecuado fisurar nuestra relación con las Fuerzas Armadas. Los privatizadores hubieran ganado espacio para el despojo de los bienes nacionales (Galarza, 1996: 125).

Tras los bastidores verbales, a mi criterio, lo que aquí se expresa con claridad es la idea de nación; y en esto habría un claro desencuentro con el sindicalismo de los años setenta y ochenta, orientado, más bien, por las nociones de “internacionalismo” (proletario) y de “pueblo”. Ahora en cambio se expresa la idea de “nación” y de “patria”, esta muy acen-tuada también en la protesta de 2002, contra la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica. (“La Patria no se vende, la Patria se defiende” coreaban insistentemente los trabajadores de la energía eléctrica participantes de la mencionada Asamblea Cívica Nacional de marzo de 2002).

La noción de “pueblo”, pese a que se encarna en un enunciado, sería secundaria frente a la de “nación”, que está más bien implícita como un gran telón de fondo; el “pueblo” existiría en su relación con una “comunidad imaginada” sintonizada en la defensa del territorio y sus riquezas, sosteniendo más bien la legitimación del sindicalismo público (algo así como “nosotros: el pueblo”) frente a una noción mayor y más abarcadora, la de la “comunidad imaginada”, representada, ahora, en una confluencia política de tipo “frente popular”, en la convergencia de todas las instancias sindicales opositoras, organizaciones indígenas y campesinas, partidos políticos (y/o sus remanentes o refundaciones) de centroizquierda, colegios profesionales y, por último, “los empresarios honestos” el Foro Ecuador Alternativo –instancia empresarial crítica a la subasta de los bienes públicos y al modelo de ajuste (¿la ansiada durante décadas “burguesía nacional”?).

Habiendo planteado dos nociones distintas que servirían como relatos aglutinantes en la protesta de los años ochenta y en la de los

años noventa, conviene que establezcamos sus especificidades. La noción de “pueblo” se originaría en la “política de la calle” y aglutina un “nosotros” en torno a la centralidad de la “clase”, grupalidad que se caracterizaría, ciertamente, por el arraigo en un territorio, pero, fundamentalmente, por una condición social; en tal sentido se construye la alteridad del “no-pueblo”, que gruesamente identifica a los “ricos”, y quizá a sectores pudientes de la población blanco-mestiza. Desde tal perspectiva estaría implícita una condición étnica homogénea; en todo caso, no se enfatizaría en las diferencias, y el “otro”, aunque también es inter y transnacional, está claramente identificado dentro de las fronteras territoriales. Ya el origen de la idea de “nación” dominante en los años noventa –aun cuando no siempre se la enuncie de manera explícita– tendría su origen en los relatos patrios inculcados en la escuela, con anclaje simbólico en los héroes y gestas independentistas, así como en la idea de mutilación territorial en los conflictos fronterizos, básicamente, con el Perú. La grupalidad que se cohesionaría en torno a estos relatos es ampliamente policlasista, abarcando, por paradójico que parezca, también a la pluralidad étnica. En tal sentido, las alteridades serían también diferentes en comparación con las anteriores: el “otro”, la “no-nación”, proviene de las exterioridades de las fronteras patrias, sean personas, instituciones, ideas, pero sobre todo políticas de enajenación y desmantelamiento de lo que forma parte del “hogar” patrio, sea territorio, sea patrimonio (este último, un sentido muy importante para la movilización sindical de los años noventa). En ese contexto, el “espíritu del Alto Cenepa” impregnaría tanto la lucha por la integridad territorial como el combate a las privatizaciones. Por último, hay que anotar la importancia de los grandes medios de comunicación, y sobre todo de la televisión, como formadores de las identificaciones de un “nosotros” policlasista y poliétnico, de un imaginario de existencia simultánea de los diversos frente a alteridades externas –una variante de las tendencias centrípetas de las que habla Hall (1997) como constitutivas del proceso de globalización–. Es decir, de un sentido de pertenencia y demanda de derechos sociales y políticos en tanto miembros de la “comunidad imaginada”; los medios de comunicación, en ese sentido, coadyuvaron a la experiencia de la unidad y confluencia física de la nación en el torrente ciudadano que impugnó a Abdalá Bucaram.

La idea de la “comunidad imaginada”, el lugar físico de existencia de esta y su patrimonio, al igual que la inmoral transgresión del sagrado recinto patrio (cuya defensa, en última instancia, queda en manos de las Fuerzas Armadas) que pretende consumarse a través de la venta de las empresas estatales, estaría también aquí, al igual que en instancias del movimiento indígena, como metalenguaje que confi-

gura el sentido de la insurgencia. Así, el sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada” y el posicionamiento frente a las acciones del Estado en la venta de patrimonio público serían el sustento de la identidad ciudadana que se encuentra en los entretelones de la protesta. Tal *ethos* ciudadano se sostendría también en una disolución de los trabajadores petroleros y eléctricos en las capas medias de la sociedad ecuatoriana, en el plano de los ingresos y remuneraciones altos, pues se trata en muchos casos de profesionales de alto nivel. Y es desde esa posicionalidad que participan en las movilizaciones de febrero de 1996 por la impugnación de Bucaram, protesta a la que se le ha dado explícitamente el adjetivo de “ciudadana”.

Es importante también destacar que la moral tiene un lugar importante también en las definiciones del sindicalismo de los años noventa. Y ello se expresa en la asimilación de la privatización a la corrupción, tópico dominante en casi todos los discursos, desde el constitucional hasta el de la oposición, y presente, en una u otra formulación, en las alocuciones de dirigencias y en las consignas de los miembros de base. Por contraste, quienes se oponen a la privatización automáticamente pasan a la orilla de los “honestos”, como es el caso de Luis Maldonado Lince, dirigente del Foro Ecuador Alternativo.

CONCLUSIONES

Durante los últimos años han estado presentes los clamores por las insuficiencias de la protesta sindical. Insuficiencias de revolucionarismo para la izquierda política, extremismo para la crítica oficialista. La crítica académica, mayoritariamente, prefirió silenciarlo. Y todo esto, en circunstancias de una flexibilización y tercerización de la fuerza laboral, en las que se desvanecían no solamente los derechos conquistados en décadas de lucha, sino también la organización que, pese a todo y por supuesto al carácter táctico de la movilización, había logrado contrarrestar los efectos del desmantelamiento de las políticas sociales y el frágil acceso a derechos sociales.

Entre esos Escilas y Caribdis, el análisis de los procesos políticos internos del sujeto obrero-sindical, así como sus impactos sociales parecían reposar confiablemente en la caja negra del silencio y el ostracismo. En todo caso, se sabía que habíamos entrado en la era “post” movimiento, y que no había por qué revivirlo. Una mirada analítica “post- Restauración”, y “post” años noventa debe sustentarse en la demolición de la dicotomía “nuevos actores sociales” versus “actores sociales tradicionales”, tanto como en el esfuerzo por recuperar la perspectiva de la presencia obrera como parte constitutiva de la producción de una nueva democracia, en el contexto del ajuste y precarización de la sociedad.

Al analizar, en estas páginas, la ideología de la protesta obrero-sindical en el Ecuador a partir de la segunda mitad de los años noventa, desde una entrada por su vertiente azuaya, hemos planteado que resulta inexacto denominar “clasista” a aquella corriente sindical cuyos líderes explicitaron un tenor socialista en sus discursos públicos. Hemos sostenido, más bien, el carácter “universal-corporativista” de la inspiración ideológica, como así también de las realizaciones político-sociales. De esa manera, consideramos que el análisis nos ha ayudado a escapar de la trampa de las alternativas “sindicalismo revolucionario/sindicalismo reformista”, o “economicismo/politización”. Dicho carácter corporativo-universalista, junto con las luchas de otros sectores movilizados, es precisamente lo que ha permitido preservar posibilidades mínimas de vida para amplios sectores sociales; pero más que eso, ha posibilitado una resistencia a las realizaciones neoliberales inédita en América Latina, y quizá, hasta el momento, guardarnos de sus consecuencias extremas, aun cuando no ha logrado contrahegemonizar la instauración misma del modelo.

Los años noventa han dejado una reflexión fundamental: la necesidad no solamente de retomar una construcción sobre nuevas bases democráticas, sino también la recuperación simbólica y discursiva del sujeto obrero, de su autoestima pública. No basta con tener contrapropuestas para la reconstrucción de la sociedad, parece importante crear condiciones para la recomposición de las identidades fracturadas, que serán finalmente el fermento de dicha reconstrucción. En ese sentido, se encuentra pendiente una tarea de largo aliento en el plano de lo simbólico, para remover representaciones que sustentan opciones político-electorales personalistas. En ese terreno, al tratarse de estructuras ideológico-emotivas profundas, la posibilidad de neutralizar sus efectos pasaría por la renovación de una propuesta “creíble” y posible de sociedad, por una parte, y de desarrollar procesos de deconstrucción de las representaciones y *habitus* de género, junto con el reordenamiento democrático de las organizaciones obreras existentes.

PENSANDO EN VOZ ALTA (A MANERA DE CONCLUSIONES)

EL PAÍS QUE HOY CONOCEMOS es uno que no esperábamos a fines de la década de los setenta, cuando se diseñó la reforma política de la transición. El campo político-ideológico se ha reconfigurado en un sentido absolutamente distinto del que fuera pensado y proyectado en aquel entonces por partidos políticos de todos los signos, gobiernos y fuerzas sociales.

Dos rasgos fundamentales, entre otros, han caracterizado hacia el final del siglo XX la faz política de la sociedad ecuatoriana. Por una parte, la vigencia de los liderazgos personalistas y la política de la identificación. Tales liderazgos –aunque se pretendió exorcizarlos mediante la reforma política de 1979– permanecían latentes en el seno de la sociedad, recibiendo un fuerte aliento institucional a partir de la reforma política de 1994 que consagró las candidaturas “independientes”, y re-emergiendo cada vez con más fuerza. En otra vertiente, igualmente significativa, un enorme aporte a la mudanza de la faz política de la sociedad ecuatoriana ha sido entregado por la acción y presencia de fuerzas constantemente movilizadas, tales como las de indígenas-campesinos, que han contribuido a transformar el imaginario político nacional, deconstruyendo abyecciones heredadas del coloniaje y el patriarcalismo (la movilización de las mujeres requiere pautas de análisis muy peculiares, por lo que no ha podido ser abordada en el contexto del presente trabajo). Hoy en día, por ejemplo, no nos ima-

ginamos unas instancias de representación política “desgenerizadas” o “desetnicizadas”. A su vez, la constancia de la movilización de los sujetos laboral y estudiantil ha contribuido a frenar la aceleración del ajuste, preservando márgenes mínimos para el acceso de las mayorías a los derechos sociales.

Ahora bien, si la política de la identificación ha representado la faceta conservadora de la ideología política, la movilización y crítica ha configurado procesos de democratización de la política y de la sociedad, que no obstante no son unívocos ni lineales. Así pues, la propia composición de las elites políticas en nuestro país ha sufrido una transformación significativa, pues éstas ya no pueden ser vistas solamente a través de imágenes masculinas, occidentales, blancas y urbanas, y tal circunstancia contribuiría, a su vez, al remozamiento y oxigenación de los modos de dominación política y la explotación. Es por ello que los procesos de “democratización” han tenido también un desdoblamiento adverso: la absorción de los antiguos liderazgos de la protesta, y la cooptación de las cabezas más visibles. Y una parcela de tales líderes –varones y mujeres, indígenas y mestizos– se han allanado a la “inclusión”, la misma que ahora sería una plausible –y oportuna– enmienda de “exclusiones” históricas¹.

Es en ese camino y también en la ausencia de propuestas viables y consensuadas sobre un modelo de sociedad alternativo al modelo de ajuste, que el ciclo político de los años noventa y, en particular, la coyuntura de intensificación del ajuste y de la protesta –una mediana duración, en los términos de Braudel– nos presenta un desenlace desprovisto de una negociación real sobre el modelo económico y social desde las fuerzas críticas al neoliberalismo. Por otro lado, es menester recordar la nueva configuración de la toma de decisiones políticas, donde al Estado, interlocutor de los sujetos de la protesta, le cabe un papel cada vez menos importante, en la medida en que ellas se toman en instancias supranacionales. La protesta en este sentido tendría efectos limitados, pues parecería una débil voz y acción perdida en un inmenso espacio donde es prácticamente inaudible, enfrentando a un “tigre de papel” (los resultados de la confluencia de fuerzas antineoliberales en el Foro Social Mundial serán inteligibles y palpables solo a mediano plazo).

¹ Vakaloulis llama la atención sobre las dificultades que tiene el concepto de “exclusión” para “funcionar como tema de reflexión política”, la misma que implicaría “desnaturalizar el curso del mundo, estudiar las estrategias de los actores sociales y la manera como estos construyen y defienden sus intereses, analizar rigurosamente las relaciones de fuerza entre ellos, establecer responsabilidades en la conducta de los asuntos comunes en los niveles regional, nacional y transnacional” (Vakaloulis, 1999). En esta lógica de la exclusión, según el razonamiento de ese autor, problemas como el desempleo serían considerados patógenos y no como un mecanismo de la reestructuración de clase.

Durante el ciclo de intensificación de la protesta, a partir de finales de 1996, hemos experimentado varios momentos de una poderosa unanimidad opositora, intercalados, empero, de latencias que no se tradujeron en movilización efectiva, y en las que predominó la fragmentación. Es en su contexto que se ha tornado posible la instauración, por ejemplo, del sistema de dolarización. En todo caso, durante la segunda mitad de los años noventa hasta el inicio de la gestión de Lucio Gutiérrez lo que se ha mantenido es un efecto de resistencia a las realizaciones extremas por las que ha pugnado la derecha política y económica, que a partir de 2003 y sobre todo el 2004 se ha lanzado a coronar con broche de oro el proceso de liberalización e inserción en la economía “globalizada” mediante las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio.

El ciclo de resistencia, entonces, parece haber terminado, mientras la contestación se empantana en acciones de tipo táctico, de preservación de los márgenes económico-sociales impuestos por el Estado neoliberal para la sobrevivencia, como cuando los servidores públicos, en el 2004, se ven obligados a protestar por el incumplimiento –por falta de presupuesto– de la Ley de Homologación y Unificación Salarial, que da al traste con las conquistas laborales de décadas anteriores.

En la década de los noventa, muchas perspectivas sobre la protesta (académicas, políticas y mediáticas) han recalcado el predominio de lo identitario “post-clasista”, reproduciendo el esquematismo secuencial y dicotómico que contrapone los “nuevos actores sociales” a los “actores sociales tradicionales”, por una parte, y reifica la presencia de lo “identitario”/ “expresivo” por sobre lo “clasista”/ “instrumental”.

¿Cómo miramos los procesos de fin de siglo en el Ecuador, al posicionarnos en el siglo XXI y desde la experiencia de la reconfiguración radical del campo político-ideológico y de la avanzada del modelo de ajuste? ¿Cómo se constituyeron los sujetos políticos que confluyeron en la vertiente de la protesta, concretamente durante la segunda mitad de los noventa? Hemos intentado responder a estas cuestiones recuperando las voces de los dirigentes intermedios y de los miembros de base en tres vertientes de la protesta de fin de siglo en nuestro país. La reflexión sobre sus testimonios, en articulación con los contextos en los que se dotan de sentido, nos abre una puerta a la pluralidad de perspectivas que orientan la protesta. Pluralidad que es opacada tras una aparente unanimidad de sentidos políticos, no siendo esta otra cosa sino los espacios semánticos donde es posible un acuerdo, y que frecuentemente coincide con los pronunciamientos de los liderazgos nacionales. Hemos visto, pues, que los contenidos de la protesta han rebasado los tópicos de la diferencia y la plurinacionalidad, en el caso de los campesinos-indígenas; de la retórica revolucionaria, en el caso

de la juventud estudiantil, y de las demandas estadofóbicas y de la mera reivindicación economicista, en el caso de los sindicalistas.

Así, los sentidos de la protesta, a nivel de los mandos intermedios, están constituidos ciertamente por estos elementos, pero a ellos se le superponen sentidos clasistas que desembocan en acciones beligerantes a partir de percepciones sobre lo que se considera moralmente intolerable. Revisemos brevemente los procesos de constitución de las identidades políticas, en los diversos segmentos sociales movilizados desde 1996.

IDENTIDADES POLÍTICAS CAMPESINO-INDÍGENAS

Para evaluar la significación de la movilización indígena de los últimos años del siglo XX, así como las identidades de la protesta, es conveniente hacerlo a partir de dos elementos básicos. El primero de ellos, es el tema del proyecto de plurinacionalidad; y, como segunda cuestión, el tema del entrecruzamiento de condición de clase con la condición étnica.

En la perspectiva de Dávalos (2003), la movilización indígena de los últimos años, realizada bajo la consigna de la plurinacionalidad, tendría un sentido reivindicativo distinto al de la pluriculturalidad o de meras demandas etnicistas, proyectándose a la demanda del ejercicio de derechos –en particular sociales– para todo el espectro sociocultural de la población. Es preciso reconocer que el proyecto de la plurinacionalidad ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de los últimos años. Pero, ¿en qué medida recoge toda la polifonía política, social y regional? Asumo que el criterio cardinal de discernimiento sobre su validez para la construcción de la justicia social sería su capacidad de proponer y generar alternativas tanto frente a la discriminación cultural, racial y sexual, así como a la explotación y el despojo de carácter socio-económico. Se trataría, como alertaba ya hace varios años Nancy Fraser, de que no se suplante el tema de la explotación por el de la dominación cultural, así como de que el reconocimiento cultural no desplace a la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia (Fraser, 1997: 17).

El momento estelar de la movilización indígena pareció dar cuenta de esta necesidad, a través del lema: “Nada sólo para los indios”, y de ahí se derivaría su capacidad de interpelación a la sociedad en un momento en que arrecia la tormenta del ajuste; es así que hoy en día la utopía de la pluriacionalidad estaría vigente, a pesar del desencuentro de algunos líderes con su propia historia.

Empero, el tema de la plurinacionalidad ha emergido simultáneamente con la búsqueda de apagar el “incendio” campesino-clasista, coincidiendo con el proyecto de eliminación de la reforma agraria. Han fluido, como todos y todas sabemos, ingentes recursos económicos uti-

lizados en el fomento del desarrollo local, con los que se ha pretendido “incluir” a amplios sectores del campesinado indígena al goce de la ciudadanía. Múltiples testimonios de los destinatarios de tales recursos y proyectos han anotado la ineficacia de los mismos para lograr ese objetivo; y al parecer esto tampoco ha generado en la mayoría de tales sectores una sensación de “inclusión”, y de acceso a derechos y servicios modernos. Por otra parte, como es también ampliamente conocido, la aplicación de proyectos locales a través de las ONG ha llevado al despliegue de clientelas de las financieras internacionales y al surgimiento de un estilo de vida afincado en tales recursos y propuestas. Sospecho que la existencia de tales clientelas y gestores de recursos, a la par que contribuyen a apagar “incendios” sociales localizados, empalma de lleno con lo que, siguiendo a Rojas, denominaré las “subjetividades de la pobreza”, subjetividades fracturadas que al buscar vías de acceso a la modernidad a través de tales proyectos, a la larga se encuentran sometidos “a la férrea lógica de la reproducción ampliada del capital” (Rojas, 2001: 58).

La primera y obvia sugerencia que de aquí se deriva es que es menester superar estilos cortoplacistas y localizados, para desarrollar propuestas políticas, sociales y económicas de aliento nacional y latinoamericano. La segunda sugerencia gira en torno a la forma ideológica de concreción del localismo y la diferencia. En torno a este tema, la antropóloga argentina Rita Segato indica que la adopción del lema norteamericano para la constitución de diferencias, si bien coadyuvaría a la afirmación de los derechos étnicos y el acceso a recursos, entrañaría varios riesgos políticos, puesto que “[...] lo que es reclamable, lo que es deseable también llega definido como finalidad impuesta”. Ello entrañaría una pérdida de perspectiva de la finalidad de los recursos y con ella, la propia posibilidad de “contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica”² (Segato, 1999: 190).

La despolitización del concepto de “plurinacionalidad” que se opera cuando se exagera el tópico de la diferencia, así como la pérdida de la lógica “amigo-enemigo”, han condenado a los sujetos a un empan-

² El análisis de Segato explica acertadamente el carácter de las relaciones de la dirigencia indígena con las ONG transnacionales hacia fines de los años noventa, por lo que vale la pena transcribirlo: “[...] el beneficio de introducir estas identidades políticas [pautadas por los modelos transnacionales] consiste en que, a partir de la pertenencia a grupos así marcados es posible reclamar acceso a recursos y garantías de derechos. Pero el precio a pagar por esta conquista es alto: [...] lo que es reclamable, lo que es deseable también llega definido como una finalidad impuesta. En este proceso de pérdida de la memoria de las finalidades alternativas, podemos venir a depararnos con mujeres aspirando a ser generales o negros imaginando fórmulas para maximizar la plusvalía de sus subordinados, pues toda idea de contracultura, de contestación a partir de la experiencia histórica de pueblos se pierde [...]” (Segato, 1999: 190-191).

tanamiento en la táctica, en el accionar en el terreno del adversario, en el escamoteo en torno a lo social en base de recursos destinados a la producción de “gobernabilidad”. Afortunadamente, el “crimen” no es perfecto, y tarde o temprano termina revelándose la incapacidad de las apuestas localizadas para generar una igualdad sustantiva y una ciudadanía social y política, en la medida en que los magros beneficios arrojados por tal “acceso a recursos” acaban arrasados por la “férrea lógica de la reproducción ampliada del capital”.

En lo relativo a la segunda cuestión, la emergencia del sujeto indígena sugirió en su momento la imposibilidad de pensar el problema del campesinado ecuatoriano, o al menos de grandes segmentos del mismo, únicamente en su dimensión de clase. Pero tampoco es viable la exacerbación de la diferencia, pues encasilla la reflexión y las acciones políticas en la dicotomía “clase/etnia”. Cabe aceptar que, si bien es cierto que en el transcurso de los años noventa se ha acentuado la constitución de sectores urbanos indígenas de ingresos medios enmarcados justamente en la reivindicación de su singularidad cultural como respuesta a la discriminación experimentada, también es cierto que grandes contingentes indígenas mantienen su vinculación con el campo, donde se viven cotidianamente las consecuencias tanto de los límites de la reforma agraria, como los impactos de la contrarreforma, así como el desentendimiento del Estado frente a la problemática agraria. Es verdad, igualmente, que la migración hacia la ciudad en pos de un porvenir digno no se ha plasmado para la mayoría de los/as indígenas campesinos/as que efectivamente han migrado en busca de la anhelada ciudadanía social. De tal manera que, junto con la demanda de ciudadanía social vivamente expresada sobre todo en los últimos levantamientos indígenas, sigue estando vigente el tema de las condiciones de la producción agropecuaria, al igual que un examen crítico de lo acontecido a partir de la “contrarreforma agraria de 1994”, en lo relativo a la tenencia y el mercado de tierras.

Dicho de otro modo, el afianzamiento de un sector social en tanto “diferente” no ha conllevado a la supresión de los referentes campesinos de las identidades políticas (en la acepción dada en el Capítulo II). Y esta observación es válida tanto para los sectores del campesinado azuayo, inmersos en la problemática campo-ciudad (que es a la vez expresión de una confrontación étnico-política, en cuyos pliegues germina una búsqueda de etnicización) como del cotopaxense, más claramente definido en el sentido de las orientaciones étnicas. Es, en todo caso, precisamente esta multidimensionalidad y conjugación de lo étnico con lo popular –plasmadas en el lema “Nada sólo para los indios”, y sostenidas en la movilización de las bases de la CONAIE– lo que ha logrado una interpelación del conjunto de la sociedad.

Finalmente, en el caso del campesinado azuayo, la emigración, como respuesta a la inveterada crisis social agudizada por la estructura minifundista, ha configurado la despolitización de las identidades, en la medida que se constituye una alternativa que drena el conflicto agrario e inhibe la demanda al Estado de políticas de apoyo a la producción agropecuaria, tales como el crédito, la transferencia de tecnología, de capacitación, de garantía a la tenencia efectiva de la tierra, entre otros. Mayor visibilidad, en este segmento, ha tenido la movilización del Seguro Social Campesino, orientada a defender la asistencia de salud. Urgiría, en este sentido, la repolitización de la agenda local y las acciones, levantando alternativas tales como las prácticas cooperativas y la demanda de condiciones para la producción. En todo caso, la repolitización de las identidades en este segmento socio-geográfico encuentra un severo obstáculo en los procesos de hibridación que ocurren a merced del contacto cultural de los emigrantes, de los beneficios económicos y, sobre todo, simbólicos que ofrecen las remesas y el acceso al consumo suntuario. Las carencias analíticas indican que es inaplazable, asimismo, la investigación sobre los procesos locales de la tenencia de la tierra, del mercado de tierras y la relación del fenómeno migratorio con estos procesos, como insumo para una agenda del cambio, y para configurar una mirada problemática de alcance nacional sobre lo local.

LAS IDENTIDADES POLÍTICAS ESTUDIANTILES

En el seno de este sector social encontramos fenómenos políticos contradictorios, indicativos, quizá, de nuevas formaciones ideológicas, así como de un replanteamiento de los referentes políticos. Está debilitado el referente político-partidario de corte izquierdista-revolucionario previo. Probablemente, se deba a esto la fragmentación de la expresión pública de este sector que no solamente no aparece como la manifestación unánime de oposición a las políticas de Estado y de gobierno, sino que por momentos asume perfiles espontaneístas, sin demandas ni acciones críticas claras. Por momentos, parece un caminar sin rumbo.

Empero, tras esta superficie de aparente caos, constatamos que, lejos de una apoliticidad proclamada por las corrientes académicas del “desencanto”, la juventud estudiantil manifiesta tanto una crítica antisistémica, como un alineamiento de defensa a las instituciones. Todo, menos una apatía frente al acontecer político y social. En todo caso, asistimos a una diversificación de las demandas. Una mirada más cuidadosa revela también una gran capacidad de generar organización, de innovarla en formas inéditas; por ejemplo, a través de redes de jóvenes o de una multiplicidad de grupos localizados de “formalización intermedia” que han retomado discursos de cuestionamiento antisistémico, tales como los agrupaciones de simpatizantes del Partido

de los Trabajadores del Brasil o de seguidores del ideario comunista y socialista.

En los sectores estudiantiles críticos, las identidades políticas se han constituido en torno a dos ejes. El primero, la necesidad de resguardar la continuidad de su “inclusión”, el goce de derechos a la educación, a la salud y en el futuro al ejercicio profesional. Es decir, sus identidades se construirían a partir de “actos de enclasmiento” orientados a reafirmar el sentido de su presencia social. Sus discursos, siendo portadores de un carácter popular-universalista, se proyectan a la reafirmación de su propia condición de ejercicio de derechos sociales. En segundo lugar, para las nuevas expresiones políticas estudiantiles es fundamental la propia posibilidad de pensarse en términos colectivos, expresada en clave de pertenencia nacional, y la traducción de la ética de la solidaridad en reivindicaciones y plataformas políticas; así como una búsqueda de reencantamiento de la política, que desemboca en nuevas comprensiones de los estilos de trabajo, que ya no admiten rigideces formalizantes, sino que buscan la plasticidad del lenguaje y las imágenes.

La repolitización de la movilización estudiantil demandaría, por otro lado, una proyección del discurso en torno al derecho a la educación como aspiración para una amplia gama de jóvenes que han perdido el derecho a ella, pero también de reivindicaciones específicas que expresen los requerimientos de miembros de clubes barriales, grupos juveniles, etcétera. Se torna necesario también, en ese sentido, la ampliación del núcleo interpelatorio del discurso hacia la reivindicación de empleo, dadas las dificultades de inserción laboral para los/las jóvenes, profesionales o no. Se trata pues de rebasar el estrecho marco de la protesta “movimientista”, dando cuenta de la polivalencia de las transformaciones sociales, en el contexto del ajuste, así como de las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos sociales.

LAS IDENTIDADES POLÍTICAS OBRERO-SINDICALES

Para esta vertiente de la protesta, la década de los años noventa fue una temporalidad de quiebre en varios sentidos. Primero, con la caída del bloque socialista se perdió un referente orientador de las luchas políticas de una parcela significativa de este sector social. Segundo, la reestructuración de las relaciones capital-trabajo, modeladas ahora por la legislación laboral vigente, que contempla figuras socio-jurídicas que conducen a la precarización del trabajo, tales como la flexibilización y tercerización de la fuerza laboral. Tercero, el sujeto laboral se vio abocado a un déficit simbólico proveniente, menos de una ausencia de acciones políticas y reivindicativas que de una “hiperpoliticidad” y actuación táctica en torno al Estado, de una falta de perspectiva sobre

su imagen social, como de una estrategia de invisibilización y desprestigio, desde los medios de comunicación y el Estado. El sujeto derrotado, despojado ya del halo heroico de antaño, continúa ubicado, no obstante, en el espacio de un antagonismo fundamental: entre el capital, ahora globalizado, y el trabajo, que se encuentra circunscripto local y nacionalmente, aunque sujeto a las decisiones políticas y económicas gestadas allende las fronteras de los Estados nacionales.

La derrota política de los años noventa y la fragmentación organizativa que a ella ha seguido han puesto en suspenso y fracturados las identidades clasistas de algunos sectores, además de destituirlos de condiciones para una acción de orden estratégico, para una recomposición organizativa, política y simbólica emanada de sus propias necesidades históricas. Entonces, si para otros sectores sociales la ideología de la protesta estaría impregnada de las “subjetividades de la pobreza”, aquí se caracterizaría por las “subjetividades de la derrota”.

Los/las antiguos sindicalistas sostuvieron un discurso y unas acciones que, siendo calificadas de “economicistas” han sido, sin embargo, claves para la preservación de condiciones básicas de sobrevivencia de amplias capas sociales. Por otro lado, en gran medida este sector permanece anclado en evocaciones pasadistas, sin lograr rebasar la vinculación umbilical con el Estado en tanto interlocutor, y al mismo tiempo postergado por este en esos términos. Aquí, la esencialización de la identidad obrero-sindical no daría cuenta de la complejización de la clase trabajadora durante las últimas décadas. En efecto, como sostiene Antunes, la crisis de los sindicatos no significaría en absoluto la desaparición de la clase trabajadora; lo que estaría ocurriendo es un proceso de heterogenización, fragmentación y complejización de la misma, expresadas en la existencia de un numeroso subproletariado (bajo las formas de trabajo precario, parcial, temporario, subcontratado, “tercerizado”), y del crecimiento del sector de servicios (Antunes, 2001).

La recuperación de la presencia social y política de este sector pasaría, pues, por dar cuenta de las nuevas circunstancias históricas del trabajo, en lo que se refiere a los procesos productivos, así como de la creación de relatos colectivos abarcativos para todos estos tipos de trabajadores/as, incluidos los/as desocupados/as y quienes han debido marchar al exilio económico en busca de la sobrevivencia. Estas nuevas perspectivas serían la condición discursiva mínima para la recomposición de lo que hoy son las “subjetividades de la derrota”.

Probablemente las dificultades para una mayor capacidad de interpelación, de cara a la sociedad, sobre todo en el caso de los trabajadores y los estudiantes, se deba, asimismo, a las resistencias de ciertas instancias organizativas a la democratización de las estructuras de dirección, por ejemplo, desde criterios de género (y se torna cada vez más

necesaria, además, una democratización que deconstruya la homofobia y la discriminación por orientación sexual). El déficit político-simbólico tendría lugar también debido a las limitaciones para asumir orgánica y discursivamente la complejización de la reivindicación en torno al trabajo que, según la propuesta de Vakaloulis, pertenece a un espacio social más amplio que es a la vez laboral (relacionado al trabajo asalariado), popular (relación a las jerarquías sociales) y dominado (relación al poder económico y político) (Vakaloulis, 1999).

El reconocimiento de tal complejidad y el planteamiento de estrategias de comunicación, junto el llamamiento a la pluralidad de sujetos vinculados de una u otra manera a la problemática del trabajo, podrían estar en la base de la ruptura del aislamiento de los sindicatos frente a la sociedad, de la superación, como señala Antunes (2001), de la barrera social que separa a los trabajadores “estables” vinculados al proceso productivo (en retroceso numérico) de los trabajadores a tiempo parcial, tercerizados, informales. En el caso ecuatoriano un elemento central sería sobre todo la reivindicación del empleo y la organización de los desocupados, elemento sublimado con la emigración. Desde luego, una tarea como esta no podrá ser acometida desde los espacios y demandas sectorializadas, sino solamente desde una instancia política plural, unificada y democrática, aún inexistente.

DESFACIENDO ENTUERTOS

Una especial consideración merece aquí el tema de la hegemonía, cuyo suelo ideológico se encuentra constituido por las subjetividades de la pobreza y de la derrota. Como habíamos mencionado al inicio, la opacidad de algunos sujetos sociales durante los años noventa responde más a la exitosa estrategia del Estado y las elites dominantes –sostenida por los grandes medios de comunicación– que a la inactividad en sí misma o la desaparición de tales sectores, pues lo fragmentado de su accionar no ha significado *per se* su muerte social. Se trata de estrategias basadas ora en la obliteración, ora en la sustitución de íconos, ora en la sobreexposición sesgada; procedimientos que han contribuido a crear consensos adversos a las fuerzas políticas y sociales críticas. En tal virtud, se torna imprescindible, para cada uno de estos sectores, construir símbolos y enunciados amplios que interpelen, más allá de las fronteras de la organización, a los grupos interesados en una reivindicación específica: sea el salario, la educación u otras (hemos hablado, en concreto, de la complejidad de la clase trabajadora, o de la juventud estudiantil, o de los sectores indígenas-campesinos y/o productores rurales). Se trata, en definitiva de la posibilidad de producción de contrahegemonía de cara a la sociedad (básicamente exitosa en el caso del movimiento indígena, con todo el simbolismo y la ritualidad desple-

gados, sobre todo en los últimos años, bastante limitada en el caso del movimiento sindical, intuida en 1995 con el encadenamiento al oleoducto y jamás recapitulada). Contrahegemonía que no solamente se afinque en la elaboración de un “elemento derivado” propio (que pase, entre otras cosas, por la politización de tópicos compartidos, como es el tema del combate a la corrupción), sino también en estrategias de resistencia frente al *modus operandi* del neoliberalismo, que contrarresten la generación de consensos ideológicos adversos que aíslan a los sectores contestatarios, al mismo tiempo que el Estado los suprime en tanto interlocutores.

Tales tareas serían posibles solamente en virtud de la existencia de políticas de la comunicación y de producción ideológica. Las mismas deberían considerar tres momentos. El primero, orientado a contrarrestar el juego hegemónico del Estado. El segundo, dirigido a la incidencia en las representaciones que la sociedad elabora sobre la presencia social y política de las fuerzas organizadas; y el tercero, que tenga como destinatarios a sus propias bases. Trabajo que requiere de la misma sofisticación con la que opera “el orden del discurso”. De lo que hablamos, en definitiva, es de la necesidad de anticiparse a los hechos contrarrestando cooptaciones emocionales y culturales masivas; de prevenirse de aquellos discursos que, como analizaba Foucault, circulan reprimiendo e induciendo placer.

Por otro lado, considero que el concepto de “diversidad”, promocionado durante los años noventa, ha sido convertido en un cliché que apuntala la hegemonía. El uso reiterado de ese término para la caracterización de lo social y lo político tiene un correlato histórico concreto, pues se trata, nada menos, que de un término vinculado a la expansión global imperial de la última década del siglo XX. Según Rita Segato, la constitución de identidades políticas en los últimos años habría estado relacionada con procesos de “inoculación de la diversidad”, de transnacionalización de las identidades étnicas, es decir de implementación de mandatos étnicos a imagen y semejanza del modelo multicultural norteamericano, basado en el segregacionismo, y asentado en una concepción esencialista de las identidades; bajo tal modelo el acceso a los derechos se daría en tanto parte de una u otra parcialidad étnica. Según esta misma autora, en el contexto de los países latinoamericanos, la implementación de tal modelo de sociedad redundaría en el “empobrecimiento de la diferencia”, homogeneizando la forma de constituirse en tal. La constitución de identidades, de esa manera, se vería fetichizada, reducida a puros signos, vaciada de su contenido histórico, en la medida que su política se ha regido por los nuevos parámetros de prestigio de

“lo moderno”: lo étnico³. Distanciada, por lo mismo, de la experiencia étnica local (Segato, 1999); y, si actualizásemos estas tesis para el caso que nos ocupa, agregaríamos que fetichizada, al verse reducida a los signos de lo étnico “químicamente” puro, lo juvenil juvenilizado.

Un elemento decisivo para la recuperación política sería la producción de referentes discursivos para las identidades plurales cobijadas por cada uno de los antagonismos contemporáneos. En ese sentido, la elaboración de relatos colectivos estaría pautada por la conciencia sobre el espesor político-conceptual de los contenidos. Desde estas perspectivas, de lo que se trataría es de la suspensión del compromiso de la idea de “diversidad” con políticas de la identidad que desconocen la profundidad histórica de lo plural, a fin de que las singularidades emergentes, al calor de relatos sociales y antagonismos políticos, no se vean reducidos a la aridez de sus signos elementales y conminadas a un deambular político sin propuesta ni perspectiva. Entonces, al hablar de cobijar en discursos amplios las búsquedas políticas de los complejos sujetos sociales, de lo que se trata es de reconocer la polivocidad social e histórica, y este hecho debe traducirse en relatos políticos y en propuestas de sociedad que permitan argumentar mejor las posiciones de cada polo de la contestación, aunque sin perder de vista los referentes universales que servirían de plataforma común, en aras de una lucha política productiva y eficaz.

Y es urgente, hoy en día, la recuperación de las identidades cuestionadoras y propositivas, su re-visibilización y reunificación, junto con un trazado de las metas políticas, que esta vez deberá ser de tipo estratégico, pues la actual arremetida discursivo-mediática ha construido una realidad virtual con centro en las discordias por las instituciones y el Estado liberal de derecho, colocando a la opinión pública ante la falsa disyuntiva “democracia (liberal, claro) / dictadura”, obscureciendo la pluralidad de demandas políticas, tales como la oposición al Tratado de Libre Comercio, o las exigencias de ciudadanía social de múltiples sectores. Es decir, se estaría operando un nuevo secuestro del sentido al desvirtuar lo profundo –a pesar de todo– de la crítica de la protesta de los años noventa, secuestrando, asimismo, los espacios de expresión tradicionalmente populares: las calles, vaciando a “la política de la calle” de contenidos impugnatorios al modelo político hoy vigente.

3 Segato observa también los efectos del transplante de “lo moderno” a nuestras sociedades sin mediaciones de procesos de “digestión” y validación en tanto bienes substantivos: “De nuestro lado, del lado de los países con poca concentración de este tipo de bienes [modernos] [...] más que como tal conjunto de bienes materiales y filosóficos substantivos, la modernidad del lado de acá, tiende a ser percibida como un conjunto de signos de prestigio [...] y no como contribuciones a la cualidad de la vida [...] lo que afirmo es que [tales bienes] aquí [son] mero signo, emblema, fetiche” (Segato, 1999: 170-171).

Felizmente, podemos celebrar la complejidad de lo social que en estas páginas ha sido iluminada desde las palabras de los dirigentes medios y de participantes rasos de la movilización de fin de siglo. Ellos y ellas nos enseñan que lo que se dice en las cúpulas no es lo que se siente fuera de ellas, pues la palabra intermedia, si bien está alentada frecuentemente por las evaluaciones morales que, oriundas de la cotidianidad, contribuyen a despolitizar la contestación, iluminan también la relevancia de la textura clasista de las grupalidades “identitarias”, a despecho de discursos que en el siglo XXI van quedado obsoletos, una vez que estamos consiguiendo “desfacer” los entuertos hegemónicos de los años noventa.

POST-SCRIPTUM

**ECUADOR: PROTESTA Y PODER ENTRE
EL SIGLO XX Y EL XXI**

REPENSANDO LA HISTORIA POLÍTICA RECIENTE

Estamos entrando en un cambio de era, se dice. La frase tiene visos de eslogan o arenga, sin embargo, ciertamente, algo inusual ocurre, pues de repente, gracias a la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la legitimidad lograda por el discurso antisistémico (plasmado, por ejemplo, en la retórica bolivariana), el Ecuador se encuentra en una encrucijada insospechada hace un año y medio, lo que indica una aceleración del tiempo político durante los últimos años. ¿Dónde buscar el origen de estas transformaciones? ¿Tuvieron necesariamente que fenecer los antiguos sujetos sociales y políticos para que brillen los nuevos portadores de la transformación? ¿Dónde germinó la corriente electoral que sustentó el triunfo de Rafael Correa, bajo la expectativa de una transformación sustancial del orden político y socio-económico?

El presente ensayo constituye una necesaria prolongación de la reflexión que inicié en el 2002 y cuyo informe concluí en el 2003, en la que puse bajo escrutinio a la protesta de la segunda mitad de los años noventa, para concluir con los levantamientos indígenas de 2000 y 2001 (el texto central). Con los años de por medio, entre la entrega del informe y su publicación, latía el peligro de presentar a la comunidad académica un texto desactualizado. Sin embargo, las demoras de la publicación de los trabajos de investigación no necesariamente ponen en riesgo la actualidad de la reflexión. Y, en el presente caso, la perspectiva histórica desde la que miramos la política de la contes-

tación ha permitido que ganemos tiempo identificando el desenlace del ciclo de protesta, con la emergencia de los sectores medios como protagonistas. ¿Representa este hecho el fin del ciclo político o el inicio de uno nuevo? Las respuestas a dicha interrogación serán producto de una reflexión del futuro, pues aún no visualizamos con claridad este elemento. Hoy por hoy podemos congratularnos de que los temas de la protesta en la historia política reciente de nuestro país, tocados en el informe central de investigación (cuya versión definitiva data de inicios de 2005), tales como la temática laboral, la cuestión de la posesión de la tierra y la producción recobren vigencia, aunque todavía de manera subterránea y poco visibilizada, junto con la insurgencia ciudadana de los últimos años por la institucionalidad estatal (esta sí, publicitada pródigamente, en cumplimiento de un nuevo orden del discurso que opera obliterando las demandas de cambio estructural de las relaciones sociales y económicas). En el presente ensayo, intentaremos realizar unas interpretaciones iniciales, justamente, sobre la emergencia del sujeto social “ciudadano” a partir de finales de 2004: los amplios sectores medios urbanos –policlasistas y poliétnicos– que están marcando la agenda pública.

Y bien, en concreto, la mirada distante nos está auxiliando en la valoración de un proceso de mediana duración de la contestación social (aproximadamente un cuarto de siglo), en los siguientes momentos:

Primero, la configuración, casi inmediata después del retorno a la llamada “democracia”, de la movilización de los trabajadores y los estudiantes durante los años ochenta, cuando el arranque de la implementación abierta del modelo neoliberal se anunciara con el gobierno de Osvaldo Hurtado.

Segundo, la expresión dubitativa en los años noventa del complejo social indígena-campesino (con la publicidad ganada por ciertos sectores indígenas con sus ambigüedades “diferencialistas”), en el contexto de presiones internas e internacionales por la aceleración del proceso de ajuste estructural, y un frágil equilibrio entre las fuerzas auspiciantes del modelo neoliberal y sus opositores. En aquel entonces, el tema de “lo campesino” se fue extinguiendo, o mejor, se lo fue desplazando del discurso público y mediático, para que en cambio madure la insurgencia social al filo del siglo XXI, con la firme alianza interétnica plasmada en el levantamiento de 2001: “Nada sólo para los indios” expresión de un liderazgo nacional de las fuerzas indígenas y campesinas en la demanda de justicia social, redistribución de la riqueza y reconocimiento cultural efectivos. Esta fase de nuestra historia contemporánea estaría, entonces marcada, por la ofensiva de los promotores del modelo neoliberal y su precoz desgaste, al calor de la vigencia del conflicto distributivo y de la contestación social, a pesar de que no siempre esta se manifiesta con claridad.

Tercero, ya en el siglo XXI, nuevos sujetos y nuevas luchas han iluminado el horizonte de la protesta. Y he aquí el caso de la lucha a muerte de los ancianos pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, presagio de “lo que viene” en materia de la defensa de la dignidad ciudadana, pues fallecieron, como recordaremos, varios huelguistas; lo que, de manera contundente nos muestra la vigencia del conflicto distributivo. En lo posterior, tras la desmovilización de los llamados “movimientos sociales”, vimos la consolidación de ese popurrí de actores de las capas medias urbanas denominados “forajidos”, cuya insurgencia expresó no solamente el cuestionamiento al orden político y la exigencia de reforma del Estado, sino, en mi criterio, también la impugnación al modelo socioeconómico establecido.

Cabe recordar, entre paréntesis, que en nuestro informe de investigación habíamos analizado también lo que, aparentemente, era el ocaso de los sujetos antaño movilizados, tales como el movimiento de los trabajadores, el campesinado –con nuevos ropajes sociales– y el movimiento estudiantil. Llegamos a la conclusión de que dicha “muerte”, si bien obedecía a las dinámicas propias de inserción de dichos sujetos colectivos en un escenario en el que se les dificultaba la adaptación, fue en gran medida artificial, y se debe a una suerte de *eutanasia política*, a fuerza de una agresiva degradación simbólica. Por lo mismo, es importante decodificar el movimiento y *modus operandi* del “orden del discurso”. Sugiero que tal *modus operandi*, hoy en día, exaltaría la reforma política por sobre agudización del conflicto distributivo, promoviendo que la Constituyente se ocupe apenas de los mecanismos jurídicos de funcionamiento del Estado, y que se olvide de la reflexión sobre el modelo socioeconómico en el que deberá anclar el principio de redistribución de la riqueza.

Las últimas décadas de nuestra historia, entonces, se presentarían como una sucesión y encadenamiento de diversas actorías sociales que van tomando la posta en el plano de las respuestas al proceso de ajuste estructural y desinstitucionalización del Estado. Esperemos que, si ciertamente se trata de un cambio de era, el futuro cercano nos depare la construcción de los fundamentos de una civilización solidaria, así como la posibilidad de resignificar los mensajes y señales dados por las luchas sociales del pasado.

ANCLAJES DEL PRESENTE

El triunfo electoral de Rafael Correa en noviembre de 2006, correspondería a la culminación de un proceso de mediana duración, cuyas características y dinámica han sido ya esbozadas. Y estamos hablando de la significación general del período del llamado “retorno democrático”, pues no se trata de que las reivindicaciones hayan asumido siempre y

de manera lineal y acumulativa las impugnaciones al sistema neomercantilista y neoliberal, así como a la institucionalidad instaurada hace ya casi tres décadas. Durante este tiempo, la ficción de una convivencia democrática ha sido una cadena ininterrumpida de aprendizajes, de operaciones de descarte y de ir quemando poco a poco las expectativas mesiánicas, hasta que importantes segmentos de la colectividad han comenzado a barruntar que la construcción del “buen gobierno” y del “bien vivir” es una tarea indelegable.

Se presenta algo difusa, pero también notoria, la acción de la ciudadanía con demandas de recuperación de la esfera pública, de su transparencia y de la abolición de las inequidades mediante transformaciones institucionales y estructurales (electoralmente plasmadas en la votación ganada por Rafael Correa y León Roldós en noviembre de 2006). Pero esto ocurre solamente en una orilla, pues los populismos continúan teniendo cabida en los imaginarios políticos, y eso lo han demostrado las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias de 2006, donde ganaron presencia tanto Álvaro Noboa como el gutierrismo. En el informe de investigación habíamos observado la tendencia hacia la consolidación de una vertiente crítica de “centroizquierda” (para llamarla de alguna manera) que se habría expresado en las urnas a través de las elecciones de 2002. Dicha tendencia estaba siendo indicada por la suma de sufragios a favor de Roldós y otros candidatos de oposición. Y por qué no decir, sumando también la votación de Lucio Gutiérrez, quien saltó a la palestra electoral con promesas, luego burladas, de cambio social, económico, político y geopolítico. En el análisis de aquella época citábamos a Marco Aráuz, quien indicaba que como resultado del proceso electoral se tenía la impresión de que el Ecuador retornaba al 21 de enero de 2000, símbolo del descontento con las consecuencias extremas y fraudulentas de las políticas de ajuste; más allá, claro, de la gestión gubernamental real a la que dio paso el coronel ya en ejercicio del mandato. De tal manera que en el país estaríamos asistiendo a un proceso de polarización política, entre una vertiente populista de extrema derecha que se acoge a los beneficios de la partidocracia, y una vertiente “ciudadana”, crítica, policéntrica, resistente a los antiguos estilos políticos y sin una claridad ni consenso sobre las orientaciones a seguir en la gestión gubernamental.

En todo caso, los acontecimientos de hoy indicarían que la tendencia crítica se ha mantenido, e inclusive fortalecido en número. Empero, no podemos simplificar y esquematizar la mirada sobre la fuente del triunfo electoral de Rafael Correa, pues el torrente de votos que lo benefició tiene, en primera instancia, un componente “anti-Alvarito”, en contra de la degradada imagen del populismo plutocrático simbolizado, esta vez, por el magnate Álvaro Noboa, y luego, muy marcadamente, el

cuestionamiento de la institucionalidad caduca y corrupta a la que se le atribuyen todos los males; esquema en el que tiene muy poca cabida la perspectiva de lo social-estructural. Por lo mismo, no serían apegadas a la realidad las apreciaciones de que el sustento electoral de Rafael Correa sea “de izquierda”; o, al menos, no se trata de un desplazamiento consistente y unívoco hacia la centroizquierda. De ahí que el equilibrio, a inicios de 2007, entre la centroizquierda y los populismos de derecha es precario y reversible. Así las cosas, lo que ha ocurrido es la reconfiguración del campo político, su polarización, al margen de los partidos políticos doctrinarios de derechas, de centro y de izquierdas (Izquierda Democrática, Partido Social-Cristiano, Unión Demócrata Cristiana, Movimiento Popular Democrático, entre otros).

El triunfo de Rafael Correa es, en todo caso, un fenómeno interesante por tratarse de un triunfo emblemático, con gran densidad simbólica, ya que parece encarnar y representar a la mayoría de los sectores movilizados durante la protesta de la última década y media, así como reivindicar las demandas en contra del orden de la tercerización y la flexibilización de la fuerza laboral. Como sabemos, Correa es un personaje que emerge de los sectores medios: joven, ilustrado, actuante desde la tesis de la ética ciudadana y la renovación, cosmopolita, políticamente oriundo del fenómeno “forajido” y, al mismo tiempo, compenetrado con los sectores indígenas, hasta el punto de conocer la lengua quichua. Y, según dijo en campaña, le es también familiar la experiencia de la migración. Correa habría logrado, asimismo, lo que muchos políticos “ilustrados” serranos no consiguen: el apoyo de algunos sectores populares de la Costa, gracias a la versatilidad de su palabra y al desenfado de sus salidas de efecto, en el más puro estilo “populista”: su corta residencia en el suburbio de Guayaquil, hoy en día la firma del decreto de provincialización de la Península de Santa Elena (actualmente parte de la provincia del Guayas, tradicional enclave de una derecha poderosa y de los grandes negocios). Rafael Correa habría conquistado identificaciones electorales de amplio espectro, y ello lo convierte en un referente importante para la concreción de las alternativas políticas críticas, con potencialidades para sustentar los consensos sobre las que éstas se construyan. Se espera que el presidente y el gobierno aprovechen, para “el cambio de era”, estas circunstancias históricas, políticas y simbólicas *sui generis*, haciendo uso de la *prudencia*, exaltada por los estrategas y pensadores de la antigua Roma.

DE LA LÍNEA METÓDICA

Cuando se escribe para un público tan versado como es el que leerá estas páginas, es preciso “curarse en salud” y aclarar que no estamos planteando la realización de un *telos* histórico-político, ni mucho me-

nos, de una “caída del cielo” de un liderazgo largamente esperado, sino de la conformación de un escenario de oportunidades para los sectores que pugnan por la transformación humanista de la sociedad ecuatoriana, escenario en el que confluyen el descontento acumulado, un contexto regional favorable, y la configuración, en proceso, de un núcleo de liderazgo que, esperamos, sepa capitalizar las fortalezas coyunturales, cimentando, sobre todo, procesos de unidad política y, por otra parte, un manejo prudente de lo que hoy por hoy es, sin duda alguna, un escenario de transición.

En este *post-scriptum* nos ocuparemos –como lo anticipamos– de la protesta de los últimos dos o tres años, para completar la mirada del proceso e identificar las continuidades y las rupturas internas de la crítica social y antisistémica. Nuestro propósito central es actualizar el enfoque de la protesta, a partir del escrutinio de los procesos que acompañaron la caída de Gutiérrez, así como esbozar algunas hipótesis sobre el corolario de este período: el triunfo electoral de Alianza País con su abanderado, Rafael Correa. Se trata también de visualizar a los sujetos políticos y sociales actuantes en el período, analizar su desempeño, los contenidos y efectos de la movilización, así como la revisión de sus demandas y repertorios de acción. ¿En qué difiere la protesta del primer lustro del siglo XXI de la protesta de finales del XX? ¿Cuáles serían los impactos políticos de la movilización, sus fortalezas y debilidades?

En síntesis, argumentaremos: primero, que en el campo de la política y la crítica social se ha expresado cierta continuidad de las luchas sociales –al retomar las reivindicaciones contra el ajuste, al calor de la permanencia del conflicto distributivo– que se han ido encarnando en los diversos sujetos sociales mencionados. Segundo: a la par con este transcurso de lo social y político, hemos asistido al paulatino deterioro de la institucionalidad política y estatal inaugurada en el proceso de reforma política de finales de los años setenta; y es ahí donde se expresa la innovación de la protesta y la crítica, y lo que torna posible la mudanza de los repertorios de acción colectiva. Tercero: la presencia de nuevos sujetos sociales, “ciudadanos”, en la escena política ecuatoriana de los últimos años, junto con el declive de las expresiones partidarias “tradicionales”, se encuentra marcando la reconfiguración del campo político a partir de una acentuada polarización entre los actores de la derecha política y los sujetos críticos (¿una suerte de “nueva izquierda”?), lo que impondría nuevas tareas a los últimos. Procedamos a revisar los factores que habrían configurado el contexto desencadenante de la crisis política de 2005, así como la ulterior pujanza de las tendencias políticas críticas.

ACTUALIZACIÓN DE LA CRISIS POLÍTICA EN 2005

En enero de 2001, tras una década de movilización, el sujeto indígena creyó haber acumulado las fuerzas y el prestigio social necesario como para asumir el poder del Estado y comenzar a plasmar, por fin, la sociedad plurinacional, con respaldo de los mandos medios de las Fuerzas Armadas. El efecto real de esta movilización fue el ocaso del ciclo de movilización indígena, junto con el encumbramiento de un nuevo sujeto político: el coronel Lucio Gutiérrez, junto con una red de allegados, algunos de sus compañeros de armas y su parentela.

En noviembre de 2002, Gutiérrez asumió la presidencia de la República, con respaldo de una parte significativa del indigenado y de sectores medios, a la par que recibió el pasaporte para la conversión suya, su grupo familiar y círculo íntimo, en nuevas elites que apostarían a ser el recambio de las antiguas elites “oligárquicas”, para usufructuar de forma mafiosa de los bienes y cargos del Estado. En abril del año 2005, Gutiérrez fue depuesto, en opinión de Carlos de la Torre:

[...] sin un paquetazo económico con el que se incrementen los precios de los servicios básicos, como cuando Bucaram subió el precio del gas, de la luz y del teléfono. También, a diferencia de Mahuad, que fue tumbado luego de una crisis económica que golpeó fuertemente los bolsillos de los ciudadanos con la hiperinflación y con la crisis bancaria en la que perdieron sus ahorros, esta vez cayó un Gobierno en una coyuntura de estabilidad y de crecimiento económico (De la Torre, s/f).

Concordando con Carlos de la Torre en que el paquetazo no estaba “a la vista”, considero que la tolerancia de la ciudadanía se acaba cuando a los efectos latentes del conflicto distributivo se agrega la indignación moral con el abuso de poder expresado en la intervención en la Corte Suprema de Justicia y el ulterior regreso de Bucaram, desde Panamá. Pero volvamos a las circunstancias del manejo económico. Dado el hecho de que la economía ecuatoriana ya estaba dolarizada, y de que el momento era de crecimiento económico (nuevamente, gracias a los precios internacionales del petróleo, y las remesas de los migrantes), ¿era urgente la revisión de los precios del gas y otros combustibles, así como una devaluación monetaria, ya que el gobierno de Gutiérrez encontraba “la mesa puesta”? ¿Por qué y cómo estalló la crisis política de 2005? ¿Por qué la tozuda ciudadanía continuaba exigiendo cambios radicales?

I

Un primer elemento para comprender el estallido de la crisis sería la ya mencionada persistencia del conflicto distributivo. En tal sentido el “paquetazo” se habría dado en una forma casi invisible, sutil. Los

dos años y poco de gestión presidencial de Gutiérrez han sido vistos como un período de expansión. En efecto, entre el año 2000 y el 2004, se mantiene en alza el crecimiento del Producto Interno Bruto, que arranca con el 0,9% hasta llegar al 6,6%. Se trata, sin embargo de un crecimiento fluctuante, que obedece, por una parte, a los precios internacionales del petróleo y, por otro lado, a las remesas de los emigrantes. Es decir, la estructura misma del crecimiento presupone la paradoja de la pobreza.

De tal manera, no estaban aseguradas las condiciones para la estabilidad económica (OIT, s.f.). En lo que corresponde a la redistribución, Alberto Acosta nos recuerda la firma de la carta de intención con el FMI a los pocos días de que Gutiérrez asumiera el mando. En efecto, en el 2004 se recortó la ya magra inversión social efectiva, pues el gasto estatal en educación pasó de 638 millones de dólares norteamericanos en el 2003, a 464 millones; asimismo, la inversión en salud decayó de 323 millones, a 211 millones de dólares. Mientras tanto, el servicio de la deuda registraría un incremento del 60%, pasando de 2.370 millones en el 2003 a 3.795 millones en el 2004, elevación alimentada con los ahorros correspondientes a las pensiones jubilares (Acosta, 2005). En síntesis, ni el crecimiento era sostenido, ni los beneficios, nuevamente estaban siendo orientados a la redistribución, como tampoco a la reactivación productiva. Según datos de la OIT, sabemos que la tasa de desempleo urbana continúa siendo elevada, por el crecimiento de la Población en Edad de Trabajar. Es así que, si bien la tasa total de desempleo disminuye del 14,1% en el 2000 hasta el 11% en el 2004, la tasa de desempleo entre los jóvenes se incrementa del 17,4% al 22,1% en el 2003 y al 20,3% en el 2004 (OIT, s.f.). Las cifras dadas por la OIT no estarían reflejando, por ejemplo, los niveles de desocupación que asolarían al país, si no existiera la emigración económica. En todo caso, en la administración de Gutiérrez, el drama de la desocupación continúa acentuándose.

En otro ámbito, como es sabido, es el exilio económico de grandes contingentes de ecuatorianos y ecuatorianas lo que aplaca algunos de los efectos de la pobreza. En un estudio sobre los impactos de las remesas de los emigrantes, Acosta, López Olivares y Villamar sugieren que los montos enviados del exterior cubren y exceden en un 20% las necesidades de la canasta básica de los sectores medios empobrecidos, que son los que tendrían la posibilidad de emigrar, y con ello en el 2004 se reducirían en general los niveles de pobreza a los que existían antes de la crisis del sistema bancario de 1999-2000; sin embargo, tales remesas, siendo destinadas al consumo y no a la inversión, potencian la espiral de la inflación, lo que constituye una amenaza a la economía y al bienestar. Mientras tanto los sectores pobres propiamente dichos, amenazados por

la indigencia –y más aun los indigentes– carecen de recursos para viajar al exilio económico, y por lo tanto no logran cubrir la subsistencia. (Acosta et al., 2004). En muchos casos, si bien es posible aliviar el gasto de la canasta básica con las remesas, la educación y la salud, como hemos visto, continúan estando en una situación bastante precaria.

En tal contexto, la huelga de hambre de los jubilados por el aumento de sus míseras pensiones sería el dramático corolario de este escenario, en el que aparentemente “no ha habido paquetazo”. Por otro lado, si bien en el 2004 estuvieron activos básicamente los jubilados, la situación de la mayoría de la población se deterioraba cada vez más, por los factores que han sido mencionados, sin que se tenga clara conciencia de ello.

La explosión social se detenía seguramente por la ausencia de “paquetazo”, a consecuencia de la no eliminación de los subsidios, y la esperanza que probablemente se filtraba al calor del despliegue publicitario del gobierno sobre las entregas y donaciones realizadas a algunos sectores. Entonces, el amplio apoyo electoral conseguido por los Gutiérrez sobre todo en los campos de la serranía, en las áreas urbano-marginales y en la Amazonía en noviembre de 2006, se debería más a la gestión de la memoria, que a la atenuación misma del conflicto distributivo.

El coronel, estratégicamente, hacía entregas de herramientas e insumos agrícolas, sobre todo en las provincias centrales de la Sierra, o sea en aquellas de donde provenía la fuerza de la movilización indígena. Se trataba, claro, de la entrega de las migajas de la mesa de las elites económicas, pues, como sugiere Ana María Larrea, “la política social se redujo al reparto de dádivas y a la compra descarada de dirigentes sociales” (Larrea, 2005: 2). La deficiencia de las políticas sociales no era perceptible a simple vista, aun más, cuando la publicidad gobiernista, como se ha dicho, exacerbaba la magnitud de las dádivas.

En síntesis, en la primera década del siglo XXI, el conflicto distributivo y el acaparamiento de la riqueza social se mantienen, a pesar del mejoramiento formal de algunos indicadores. El reconocimiento de la existencia de dicho conflicto y de la inequidad social, desde el punto de vista publicitario, en general ha sido muy poco acogido por las elites gobernantes, a excepción de las circunstancias electorales, en las que prometen crear la equidad y el empleo mediante el “trabajo”, la honestidad y el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos.

II

El segundo detonante de la crisis son los efectos de la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Con el manejo arbitrario del nombramiento –sustitución de la “Pichi” Corte, clímax de la desinstitucionalización– quedaron transparentados, de cuerpo entero, la co-

rrupción y el autoritarismo, el desprecio del coronelato y su círculo de afines por la esfera pública. Y como si todo esto fuera poco, el representante del Estado ecuatoriano ante la República Argentina, Germánico Molina, cuota del poder ejecutivo en la Cancillería, en meses anteriores había cometido una inusual torpeza diplomática, que seguramente se originaba no solo en su carencia de formación en relaciones internacionales (y aun de cultura general), sino en las adhesiones doctrinarias de Molina. Es así como dicho personaje decide “llevar de paseo” en un vehículo oficial a Guillermo Suárez Mason, general de alto rango de la dictadura militar argentina, y acusado de múltiples asesinatos y robos de bebés, durante aquél régimen militar. Molina conocía a Suárez Mason desde hacía ya varias décadas cuando el represor se desempeñó como agregado militar en Ecuador. Con estos antecedentes, Molina retiró a Suárez, quien cumplía ochenta años, del arresto al que estaba condenado para llevarlo a festejar su aniversario. Más allá del bochorno internacional por el escándalo, se cometían ingerencias en los asuntos internos de la Argentina, lo que sumió a ambas naciones en una impasse diplomático que afortunadamente no prosperó (Gutiérrez retiró a Molina de la embajada en Buenos Aires). Es decir, a todas las malas artes del gutierrismo se sumaban el nepotismo y la impunidad.

Vale la pena analizar la atmósfera de la desinstitucionalización durante la era Gutiérrez. Fernando Bustamante sugiere que si antes de la nominación de la “Pichi” Corte (presidida por Guillermo Castro Dáger, alias “Pichi” Castro), por un amplio sector del Congreso manipulado por Gutiérrez, la población tenía aún la percepción de un Estado de Derecho mínimo, ahora esa ilusión se había desvanecido (Bustamante, 2005). En criterio de ese autor, entre noviembre de 2004 y abril de 2005 se habría consumado la aniquilación del Estado de Derecho. Es decir, siempre se vivieron violaciones a la ley emergidas de la cotidianeidad de la práctica legal, pero no obstante parecería que el Estado de Derecho hasta entonces todavía tenía una existencia tenue.

En las circunstancias de noviembre de 2004-abril de 2005, habían desaparecido tales ilusiones, ya que el Estado estaba prácticamente privatizado y manipulado por parte de los mayores partidos políticos (Bustamante, 2005). Y, añadido, en tales maniobras obtuvo su tajada también la gavilla gutierrista, que convirtió al aparato estatal en dispositivo para la legitimación y ascenso de los advenedizos de última hora, que así se convertían en las nuevas elites políticas (en el 2007, en el Congreso Nacional, el gutierrismo se ha convertido ya en la fuerza dirimente de las decisiones parlamentarias, manteniendo siempre su estilo de mayoría móvil, oscilante de acuerdo a la conveniencia y desprovista de cualesquier criterio ético). El propio gobierno gutierrista, en

su composición, mostraba profusamente su índole mafiosa; recordemos el asalto a numerosos cargos por parte de afines y consanguíneos del presidente. De tal manera que, como veremos, el gobierno como tal se constituía en un actor antiinstitucional, con sus redes de parentesco al frente de la corruptela y el saqueo de los fondos públicos.

Retomemos la reflexión de Bustamante, para dimensionar la gravedad de ese rasgo del coronelato, que a la sazón parece llegar a su clímax, lo que no quiere decir que este sería un fenómeno exclusivo del gobierno de Gutiérrez. Bustamante clasifica a los actores antiinstitucionales en dos grupos: las mafias y las corporaciones. Las mafias se encarnarían en los partidos políticos, en cuyo núcleo de poder se alojan las redes de parentesco que transforman a la organización en una empresa familiar; son los casos de las organizaciones institucionalizadas, tales como el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el Partido Revolucionario Institucionalista Acción Nacional (PRIAN), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y el Partido Social Cristiano (PSC), entre otros.

La ley de la mafia, de tipo patriarcal, desdibujaría la distinción entre lo público y lo privado. Las redes mafiosas serían simulacros de instituciones políticas, al ser reconocidas por el sistema poliárquico; en realidad se trata de un sistema de acumulación de adhesiones hacia la cabeza de la familia, que parasita de la economía del Estado, de donde extrae los recursos para reproducir las lealtades: “su finalidad no es la ganancia crematística exclusivamente sino el asalto de los fondos públicos justamente para obtener fondos que les permitan afianzar sus clientelas” (Bustamante, 2005: 14).

Por su lado, las corporaciones serían estructuras radicadas en la organización profesional o de interés sectorial. El derecho corporativo otorga estatus jurídico a las personas en función de su pertenencia o no al grupo, por lo que todo privilegio o prebenda deviene de la pertenencia al grupo, restringiendo el espacio ciudadano, ya que las personas se constituyen en titulares de derechos y obligaciones solamente en calidad de miembros de un grupo de estatus, nunca como personas o ciudadanos. El corporativismo acentúa la exclusión social y económica al monopolizar el acceso a dignidades y puestos de trabajo. Lo realmente grave es que en ambos casos se generaría una ficción de juridicidad (Bustamante, 2005: 14-15), lo que en gran medida se convierte en la fuente de distorsiones institucionales y de conflictos políticos, así como de la inequidad social y distributiva.

La ciudadanía, aprisionada entre las mafias y las corporaciones enquistadas en muchísimas entidades estatales y autónomas, agotaba los límites de su tolerancia; más aún cuando todo esto iba acompañado de la violencia de Estado, cuestión que tocaremos más adelante.

III

Un tercer factor para la inconformidad ciudadana fue que el gobierno de Gutiérrez se caracterizó, como pocos, por un marcado estilo de componenda política, a la que recurría para suplir la ausencia de una estructura de poder que sustentase la acción gubernamental. Y es que el presidente buscó alianzas momentáneas “con todos y cada uno de los partidos políticos”, en el contexto de la volatilidad de las coyunturas del país (Larrea, 2005: 2). Y este patrón de comportamiento político se reproduce, en el 2007, a nivel de la legislatura, convirtiendo al Partido Sociedad Patriótica en la segunda fuerza parlamentaria.

Volviendo al año 2002, recordemos la parentoria alianza de Gutiérrez con *Pachacútek*, al iniciar el mandato. Las desavenencias se iniciaron de inmediato, al clarificarse que el curso político real de Gutiérrez se había apartado del discurso de campaña. En ese momento *Pachacútek* se torna un elemento incómodo del gobierno del coronel, por lo que este procede a despedir intempestivamente a este grupo de “gente”, que lo tornaba sospechoso ante el imperio.

Por otro lado ¿cómo olvidar los alineamientos de la Sociedad Patriótica en el gobierno con el Partido Social Cristiano, hecho que develaba y enfatizaba su verdadera índole política? Sin embargo, tal concubinato tampoco fue duradero, pues Gutiérrez, comprometido solamente con las causas de su red mafiosa rompió los acuerdos, valiéndose del ajuste de cuentas, a través de la Agencia de Garantía de Depósito, a los deudores de los bancos, afectando los intereses de la familia Febres Cordero, al presionar a Agustín Febres Cordero.

Gutiérrez se aproximó también a las izquierdas en el Congreso, en aras de monopolizar los poderes del Estado y los organismos de control, en el proceso de reorganización, a su favor, de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y otras entidades.

El coronel buscó, igualmente una coalición con Álvaro Noboa, la misma que se rompió cuando el advenedizo presidente de la Corte, Castro Dáger (alias “Pichi” Castro), suspendió los juicios penales en contra de los prófugos de los noventa, Abdalá Bucaram y Alberto Dahík, así como de Gustavo Noboa. Esta situación abría las posibilidades para el retorno de Abdalá Bucaram y, con ello, la potencial amenaza de una participación en las elecciones de 2006, del ausente en Panamá, quien disputa las mismas bases sociales que el bananero. Recordemos que el fugaz retorno de Bucaram al país fue la gota que desbordó el vaso de la tolerancia de la población.

En suma, Lucio Gutiérrez supo sacar el máximo provecho de todos estos *affaires* con fuerzas de los más diversos colores políticos. Y, en el caso de las alianzas populistas, a pesar de la fractura del entendimiento con el populismo de extrema derecha de Álvaro Noboa, la

convergencia coyuntural de las tres vertientes populistas permitió que Gutiérrez, a la larga, empezara “a minar algunas de las fuentes de poder de Febres Cordero” (Larrea, 2005: 2).

Tal situación ha dado sus frutos, pues en las elecciones de 2006, el PSP, de actor electoral poco visible, pasó a ser “la segunda fuerza política de este país”, mientras el Partido Social Cristiano, junto con la Izquierda Democrática y otros sectores partidarios conformados bajo las pautas de la reforma política de 1979 saboreaban la amargura de la derrota. Es así que a finales de 2006 e inicios de 2007 tendríamos bastante claras las pistas de la articulación de un nuevo campo político.

IV

La violencia política y la inseguridad de la población también alimentaron el descontento de la ciudadanía. El gobierno emprendió acciones de inteligencia para consumir la destrucción del movimiento indígena, ahondando desde el Estado los desacuerdos entre evangélicos y católicos, entre serranos y amazónicos. El resultado final fue su desmovilización, pues “el movimiento indígena fue erosionado, fragmentado y dividido como nunca antes en su historia” (Larrea, 2005: 2). En una detallada crónica de los acontecimientos de la caída de Gutiérrez, Jairo Rolong hace un recuento de las cooptaciones a las dirigencias y organizaciones indígenas, con las que desarticularía la CONAIE. Tras la compra del ex presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, con su nombramiento como ministro de Bienestar Social, el coronel afianzaría sus relaciones con la Federación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras (FENOCIN), y la Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE). Con tales respaldos y una estrategia de confrontación, Gutiérrez procedió a retirar la presencia de la CONAIE en la Dirección Nacional de Salud Indígena (DNSI), la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (CODENPE) (Rolong, 2005: 3).

La desarticulación del movimiento indígena se concretaría no solamente con tentaciones de cooptación a dirigentes corruptibles, sino mediante la persecución política. El dirigente indígena Humberto Cholango fue víctima del asedio y la represión del gobierno, en los primeros tiempos del coronelato. Más tarde, otro dirigente indígena, Leónidas Iza, y su familia fueron chantajeadas mediante agresiones del estilo del vicariato, el hijo del dirigente fue brutalmente golpeado por supuestos desconocidos, y debió ser internado en una clínica por lesiones severas. Más de una vez la dirigencia política de oposición se vio amenazada de muerte en las carreteras del país, al ser perseguida por vehículos conducidos de manera sospechosa.

Recordemos, además, la asechanza a los/las ciudadanos/as críticos/as al gobierno, el espionaje telefónico, la zozobra permanente que recordaba los funestos tiempos del febreorderato. Además, se armaron grupos defensores del régimen, encabezados frecuentemente por personajes con antecedentes delictivos y de corrupción, frente a lo que la fuerza pública hizo la vista gorda. Es así que “la violencia política ganó terreno en el país” (Larrea, 2005: 2).

Los golpes contra las organizaciones populares, la destrucción de las instituciones, la violencia de estado, empatan con el alineamiento del coronel con la geopolítica del presidente estadounidense Bush, de quien se declaró el mejor aliado. No sorprende por ello que sus políticas interna y externa fueran congruentes con la búsqueda de firmar el Tratado de Libre Comercio, y con el involucramiento del país en el Plan Colombia. Todo esto le habría valido a Gutiérrez la protección de Bush, cuya embajadora estaría siempre presente con declaraciones públicas de respaldo a las acciones del coronel (Rolong, 2005: 1). Así, el Ecuador bajo el coronelato se alineaba plenamente en el escenario andino favorable a la estrategia norteamericana, junto con los gobiernos de Uribe en Colombia, y el entonces presidente del Perú, Alejandro Toledo.

EL ARCO IRIS DE LA MOVILIZACIÓN

En abril de 2005, la bandera arco iris de la CONAIE quedó a buen recaudo entre las cuatro paredes de la sede de la confederación, mientras los llamados “movimientos sociales” y otros sectores populares organizados se acogían a un inquietante reposo, al encontrarse debilitados.

Con todo, por los motivos ya expuestos y analizados, había una multiplicidad de personas y sectores sociales insatisfechos con la gestión de Gutiérrez. El retorno de Bucaram al amparo de las resoluciones de la “Pichi” Corte, no solamente consumaba la caída del Estado de Derecho, sino que también sobrepasaba los límites de lo moralmente tolerable, desde la perspectiva de amplios sectores medios urbanos, cuyo protagonismo y movilización contribuyó decididamente a la expulsión de Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo los sectores medio-altos urbanos habrán de marcar el carácter de la política nacional, y bajo qué expresiones?

Los sujetos de la movilización de abril de 2005, de extracción social múltiple, plantearon, en síntesis, cinco puntos, sobre los que ya se había insistido en circunstancias anteriores, tales como: el anticipo de las elecciones presidenciales, la creación de una Asamblea Constituyente, el rechazo al Tratado de Libre Comercio (TLC), el no involucramiento del país en el Plan Colombia y la finalización de de los convenios militares con los Estados Unidos, entre ellos, el de la Base de Manta (Luna, 2005).

El señalamiento de la importancia de la protesta de los sectores medios, en la coyuntura de la caída de Gutiérrez, no debe llevarnos al

equivoco de que ellos, al marcar el momento culminante del descontento, hayan sido los gestores exclusivos del cambio, pues ya hemos visto que el conflicto distributivo se expresó con todo dramatismo en los reclamos de los ancianos pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que ya a partir del 15 de abril de 2005, los sectores barriales del sur de Quito se involucraron, otorgando consistencia y envergadura a la protesta forajida.

La intensidad de los reclamos contra la corrupción, el nepotismo y la arbitrariedad recordaban en algo al escenario político de la caída de Abdalá Bucaram. Los sectores medios-altos e ilustrados continuaban movilizándose, mientras, ya en abril, Bucaram llegaba de Panamá, como otras veces, entre el júbilo de sus seguidores y la indignación de una gran cantidad de la población urbana serrana, sobre todo capitalina, para quienes, entre Gutiérrez y Abdalá, el fantasma del populachismo redoblabla su amenaza.

Revisemos, ahora, la cronología de la movilización y la secuencia de los hitos más importantes de la respuesta a la crisis política de 2005.

Uno de los hitos fundamentales del mes de enero fue la llamada “Marcha Blanca”, movilización convocada por el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en demanda del presupuesto estatal comprometido para la ciudad porteña. A continuación, en el mes de febrero de 2005, siguieron las marchas de Quito y Cuenca, ambas lideradas por los alcaldes, miembros del partido Izquierda Democrática. La de Quito (a la que se sumó el movimiento *Pachacútek*) se caracterizó por levantar el lema de la defensa de la democracia. Según Rolong, las exigencias no se limitaron a la reivindicación del retorno de la Corte defenestrada, sino que se ampliaron al clamor de “¡Que se vayan todos!”. Mientras tanto, en la marcha de Cuenca brillaron consignas tanto de reivindicación provincial, como en defensa de la democracia, así como en contra del TLC. En todo caso, a diferencia de la “Marcha Blanca” de Guayaquil, en Quito y Cuenca la participación y las demandas habrían rebasado el mandato por la vuelta de la institucionalidad jurídica.

Un intento de movilización se realizó en abril desde la prefectura de Pichincha, bajo el liderazgo del socialdemócrata Ramiro González; sin embargo, el 12 de abril, día designado para la paralización provincial, todo en Quito funcionaba normalmente: el transporte, los negocios, las oficinas. Solamente pequeños grupos de ciudadanos/as de extracción social medio-alta interrumpían el tráfico vehicular en algunos sitios. Todo indicaba que la población había desoído la exhortación de uno de los partidos que había liderado la política provincial y nacional durante las dos últimas décadas. El sociólogo Mario Unda interpreta este hecho como el fracaso de las intermediaciones de los partidos políticos y de las instituciones locales (Unda Soriano, 2005: 4).

Por la noche, en cambio, comenzó a prosperar la autoconvocatoria de los sectores medios urbanos, por vía de mensajes de celular y correo electrónico, dando inicio a las movilizaciones masivas. Para comenzar, unas cinco mil personas se concentraron en la avenida de los Shyris, en el norte de la capital. Desde el 14 de abril crecía ya la efervescencia nocturna. El coronel Gutiérrez denominó “forajidos” a un nutrido grupo de manifestantes que se congregaron frente a la residencia presidencial. Y de esa manera, en el término “forajidos”, resignificado como rebeldía ante la “dictocracia”, se cimentó la identidad de la protesta abrileña.

El 15 de abril fue decretado el estado de emergencia, hecho que caldeó los ánimos de la población quiteña, a partir del cual crecen las concentraciones nocturnas. La movilización se extendía también a los barrios del sur, donde prima la población de extracción popular. Ante la presión de las manifestaciones, Gutiérrez se vio obligado a cesar a la “Pichi” Corte que él mismo había encumbrado manipulando medidas dictatoriales.

Mención especial merece el papel que jugó en las protestas de abril, el llamamiento de Radio La Luna, emisora caracterizada por su postura crítica contra el establishment político y los gobiernos neoliberales. Sus exhortaciones contribuyeron de manera decisiva para que el ambiente cuestionador se profundizara, al punto de que “ya la noche del domingo 17, el lunes 18 y el martes 19 de abril estaban las calles de Quito con un ambiente generalizado de descontento popular contra el gobierno de Gutiérrez. A toda hora había concentraciones, asambleas, reuniones y diversas actividades que se orientaban desde Radio La Luna, como frenazos, pitazos, globazos, cacerolazos, etc., que cobraban fuerza en la noche con movilizaciones hacia el centro histórico” (Rolong, 2005: 5).

En adelante, proliferaron las expresiones de la protesta y se desplegó una inusitada gama de acciones pacíficas: desde los cacerolazos sugeridos por las amas de casa y los globazos, armas bélicas de las familias, hasta los tablazos, los rollazos (rollos de papel higiénico lanzados al aire) pasando por los mochilazos de los estudiantes. Todas estas expresiones merecieron la atención del gobierno, es decir lograron aquellos niveles de eficacia política que no habían conseguido las “marchas” organizadas por el establishment, ni los pitazos y plantones organizados por Participación Ciudadana.

Cabe destacar, asimismo, que Quito no durmió (casi literalmente) porque los y las reclamantes aparecían en horas de la noche, manteniendo pendiente de la pantalla de TV a todo el país. Las protestas nocturnas mantuvieron en vilo al Gobierno, al Congreso y a los partidos políticos. El 21 de abril, las Fuerzas Armadas retiraron el apo-

yo a Gutiérrez; pasado el medio día el coronel y sus allegados huían en helicóptero de la terraza del Palacio de Carondelet, mientras en el Congreso se tomaba juramento a Alfredo Palacio, hasta entonces vicepresidente del Ecuador.

ENSAYANDO INTERPRETACIONES

Ha llegado el momento de arriesgar elucidaciones e hipótesis, en torno a lo que Charles Tilly ha denominado “repertorios de acción colectiva” y sus connotaciones, en el contexto de la movilización de abril de 2005. Siguiendo a Tilly, Javier Auyero denomina como tales a los modelos de movilización, los que se configurarían por un “conjunto de rutinas aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado”. Dichas rutinas no derivarían de una filosofía, sino que surgirían en la lucha, en las interacciones entre los ciudadanos y el estado. El examen de los “repertorios” involucraría diversos niveles de análisis, que van desde los cambios de magnitud macro, tales, como la (des)proletarización o los procesos de formación del Estado, hasta la interacciones del estado con los sectores movilizados (Auyero, 2002).

Lo fundamental, a mi juicio, es el hecho de que el cambio de repertorio, según Tilly, indicaría la presencia de cambios políticos significativos. Intentando probar esta explicación para el caso ecuatoriano, mencionaríamos el cambio de lo que fue la forma “huelga nacional” del Frente de Trabajadores vigente entre los años setenta y ochenta, a la forma “levantamiento” característica del movimiento indígena de la década de los noventa, como transformación del modelo desarrollista con Estado interventor, al modelo neoliberal, con el Estado que cumpliría funciones de gestión. El cambio de “repertorio” operado inicialmente en las movilizaciones contra Bucaram (movilización de los sectores altos y medios) y en las protestas contra el coronelato sería indicador, en esta lógica, de algo bastante sustancial que está aconteciendo en el seno de la sociedad ecuatoriana, tras el ocaso por “inanición” y por “eutanasia” del movimiento indígena. ¿Qué es aquello, y cuál es su significación histórica?

Quizá dicho cambio responda a la extenuación de la institucionalidad estatal inaugurada en 1979 como brújula de la vida política, lo que daría preeminencia a la sociedad civil como orientadora de los cambios en el modelo político y económico. No hace falta redundar ya en los sujetos protagonistas de conflicto desatado en la primera mitad de 2005, y sí recalcar en las formas eminentemente pacíficas, amigables y creativas asumidas por los protestantes de inicios de la época (la violencia se desencadenó solo al momento que los francotiradores gutierristas atacaron a los manifestantes). Eran también llamativos los

horarios de la protesta, esto es, después del trabajo y no en horas laborales como antaño. Un rasgo esencial del presente repertorio sería, sin embargo, algo que podríamos llamar la “espontaneidad” de la acción, y la policromía social de los participantes. Ahora bien, ¿se trataría, realmente, espontaneidad “ingenua”? Me inclino a pensar más bien que se trataría de una acción policéntrica marcada por la reticencia a los protagonismos individuales, a la generación de una cierta elite (con lo que de paso quiero decir que es preciso distinguir entre los participantes del movimiento forajido y de los sectores incentivados por Participación Ciudadana, es decir “de la sociedad civil de arriba”). La demanda latente en estas formas de participación radicaría, entonces, en el cambio de carácter del liderazgo político y de las reglas del juego institucional, de la economía y de las relaciones internacionales.

Del rechazo a los liderazgos políticos de viejo cuño se derivaría que el agotamiento de la ciudadanía se habría traducido en un “fuerte cuestionamiento a las representaciones” (Unda Soriano, 2005: 5). Se trataría, pues, del rechazo al centralismo, a la concentración del poder político y económico y como acertadamente menciona Unda, de la búsqueda de autorrepresentación. Este autor adelanta que el rechazo no se habría limitado a la imagen y gestión del presidente de la República, sino que en lo posterior se habría extendido también hacia “los representantes recién elegidos o reelegidos apenas en octubre, alcalde, prefecto concejales[...] todos perdieron legitimidad” (Unda Soriano, 2005). La expresión más clara de la quiebra de las instituciones, del modelo económico-social y de la representación política sería el clamor por la Asamblea Constituyente, que si bien comienza a concretarse en el 2007, con el gobierno de Rafael Correa, venía madurando desde hace tiempo atrás en las continuas impugnaciones de los movimientos sociales contra los congresistas en el 2001, bandera que luego fue recogida por las fuerzas ciudadanas.

En nuestra interpretación, “lo ciudadano” manifestado en abril no cabe ser restringido a la demanda del retorno del Estado de Derecho o en contra de la corrupción. Considero que cabría más bien pensar en una apuesta colectiva a cambiar el carácter y perfiles de lo que llamamos “Estado de Derecho”, es decir, en la apuesta a la modificación misma de los pilares del contrato social, en su modalidad inaugurada a fines de los años setenta. No se trataba, desde luego, de “hacer la revolución”, en el sentido de las décadas anteriores, sino más bien de modificar de raíz las reglas del juego de la convivencia pública. En todo caso, la conjunción del desmoronamiento del Estado de Derecho con la concentración de la riqueza y los recursos, la privatización del Estado, la plutocracia y la oligarquización de la sociedad que se agudiza desde los años noventa, impulsarían, en primera instancia, a asumir a la ética

como fundamento de toda política. Pues, para dar curso a las transformaciones sistémicas, es preciso inicialmente recuperar la confianza en los actores políticos. Una gran parcela de la población, desde el bastión de lo cotidiano, se ha “blindado” en contra de “la política”, y podremos ver el cambio solamente en la medida en que las propuestas sociales y políticas vuelvan a ser creíbles.

En una última línea interpretativa nos referiremos al carácter mismo de la movilización del año 2005, pues existen puntos de vista escépticos acerca del problema. Por ejemplo, según Rodríguez y Solís (2005), un papel crucial en la Marcha Blanca y la Marcha Ciudadana de la Asamblea de Quito lo habrían tenido los financiamientos realizados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de la Corporación “Participación Ciudadana”. Tampoco ha faltado la mirada de la sospecha, la misma que ha sido plasmada en el análisis de Guido Proaño, autor que sostiene que el movimiento forajido “más que un movimiento en el sentido marxista de la palabra, fue una eclosión social. Se incubó al calor de los fallidos esfuerzos realizados por la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano para llevar la oposición parlamentaria a la acción callejera con participación de las masas, de allí su matriz política –no reconocida por supuesto– y su composición social pequeñoburguesa media y alta que se sentía resentida por tener como presidente a un indio, a un “yumbo” (como coreaban en las calles) y que encontró el momento para la revancha social” (Proaño, 2005: 2).

Así, pues, las acciones de protesta de abril de 2005 eventualmente estuvieron teñidas por el racismo y el regionalismo. En Quito, por ejemplo, se consideró un agravio la entrada de huestes gobiernistas de otras ciudades (costeñas, en particular) para contrarrestar la movilización ciudadana. Es en ese sentido importante reconocer que parte del ímpetu antigutierrista se debió al origen geográfico del presidente, así como a su ascendencia “chola”. En Guayaquil, como veíamos, el tenor de la movilización llegó a tener fuertes tintes regionalistas, incluida la expectativa autónomo-separatista.

Es preciso reconocer el carácter regionalista y de clase, y aun el financiamiento por parte de la USAID a Participación Ciudadana. Pero este reconocimiento no puede llevarnos a aceptar los enfoques simplificadores y reduccionistas. Pues dichas evaluaciones estarían, en nuestra opinión, orientadas por criterios revolucionario-maximalistas, lo que las llevaría a descartar la validez de la contestación abrileña como hito importante de la protesta en contra de la profunda degeneración del orden socioeconómico y político institucional. ¿Podemos obviar el hecho de que las presencias y reivindicaciones levantadas en la marcha de Quito –como en la de Cuenca– hayan rebasado los cauces políticos y

discursivos que se les habría pretendido imponer a través de dichos financiamientos? Solamente la mirada de conjunto al período nos revela que, en su transcurso, nuevamente se expresaron las tensiones acumuladas durante las últimas décadas con el orden de cosas, en general, y en concreto, con el modelo excluyente en lo social y concentrador de la riqueza y el poder político.

A MODO DE CONCLUSIONES: LA RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO POLÍTICO

Primero. Insisto en que la crisis política que vive el país en los últimos años tiene sus orígenes tanto en la permanencia del conflicto distributivo, como en la privatización del Estado, aun cuando eventualmente el primero resulta disimulado gracias a las remesas de los emigrantes, mientras la segunda se iba configurando dramáticamente en el fenómeno de la desinstitucionalización, la partidocracia y el quebranto del estado de derecho. Lo que quiero decir es que los matices “institucionalistas” de los que se tiñó la protesta de abril no significan que haya perdido vigencia la demanda por la redistribución, pues, como hemos esbozado, el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos no tuvo un impacto, ni siquiera paliativo, en la precarización de la oferta de empleo, ni en las inversiones estatales en salud y educación.

Segundo. Si en los años noventa, en el campo de fuerzas políticas se configuraba una suerte de “empate” entre las corrientes auspiciantes de las transformaciones neoliberales y las que las han impugnado, después del paso por el gobierno de Sociedad Patriótica tal equilibrio colapsó a merced no solamente de las dinámicas internas de las organizaciones campesino-indígenas, sino también de lo que hemos llamado su *eutanasia política*, en el contexto de la intervención corruptora del gutierrismo contra las organizaciones populares. Es decir, hacia el 2003 el Estado había dejado de ser el campo de negociación de los sectores populares para la manutención de ciertas condiciones básicas para la defensa de los derechos sociales.

Tercero. El proceso electoral cumplido en la segunda mitad de 2006 ha mostrado uno de los corolarios del proceso de la mediana duración: la consolidación y fortalecimiento de una nueva derecha populista, encarnada en el PRIAN y en el PSP, que toma la posta a la derecha “doctrinaria” –Partido Social Cristiano y Unión Demócrata Cristiana– visiblemente debilitadas. Por otro lado, asistimos también al eclipse de las organizaciones sociales de corte gremial y corporativo, mientras se da el despliegue de organizaciones “ciudadanas”. De hecho, un conglomerado de ellas, Alianza País junto con otras organizaciones del mismo tipo, sostiene el triunfo presidencial de Rafael Correa Delgado. En general, asistimos a la proliferación de agrupaciones ciudadanas de pequeña

y mediana envergadura, muchas de ellas “antioligárquicas”, frecuentemente desconocidas y/o poco expuestas a la difusión mediática.

Cuarto. Un rasgo fundamental del nuevo campo político es el retroceso relativo de las reivindicaciones sobre la diferencia. Esta tendencia se tornó palpable ya en el 2000-2001, bajo el eslogan “Nada sólo para los indios”, expresión de demandas de redistribución de la riqueza, junto con el reconocimiento y el diálogo interétnico. En aquel entonces comenzaba a esbozarse la inconformidad con el deterioro de las instituciones del Estado. Aproximadamente un lustro después, cobra fuerza la exigencia de un nuevo orden institucional, que se convierte en el pivote de la lucha política, manteniéndose vigente la demanda distributiva, hecho que se reflejó también en las agendas electorales de 2006.

Quinto. En lo que llevamos del siglo XXI el campo de pugna se ha trasladado de los patios interiores del sistema político, a su antesala “ciudadana”, en virtud de la decadencia del segmento partidario y de la pérdida de legitimidad de la política, tal como esta se había venido poniendo en práctica desde el llamado “retorno democrático”. Es así que el “mundo de la vida” ha resultado politizado, gracias a la entrada sin mediaciones orgánico-partidistas de un gran contingente “ciudadano”. Se trata, precisamente, del fenómeno “forajido”, del cual aún no hemos logrado la distancia necesaria como para apreciarlo en todas sus implicaciones político-sociológicas. En todo caso, frente a las evaluaciones que simplifican y caricaturizan dicho fenómeno, planteamos que hoy en día son necesarios otros parámetros y lenguajes para su aprehensión. Enfáticamente propongo que la politización del mundo de la vida podría promover un acercamiento entre la actividad pública y las exigencias reales de la población, acortaría la distancia entre los políticos y la enorme gama de ciudadanos/as “de a pie”, siempre y cuando aquellos logren tomar el pulso de las transformaciones anheladas: transparentar las acciones en la esfera pública, recuperar el sentido de “lo público” en tanto lo común a todos y todas (más allá de las especificidades sociales y culturales) y trabajar a favor de la ciudadanía impulsando la redistribución substantiva de la riqueza.

Cuenca, 28 de febrero de 2007

ANEXO

ANEXO TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LAS OPCIONES TEÓRICAS

Al hablar de “protesta” como fenómeno asociado a la movilización, la entiendo como la acción colectiva ideológicamente promovida desde los relatos culturales de mediana y larga duración. Acción que construye significados políticos al objetivizar las proyectualidades latentes cristalizadas por los/las movilizadas/as, a partir de una lectura y evaluación del mundo social y de un deseo de mudanza conforme a creencias, valores e ideales. Consideramos, por otro lado, que la posibilidad para la protesta está contenida estructuralmente (Mouriaux y Beraud, 2000), aun cuando ciertamente esa posibilidad no se manifiesta bajo la forma de causa (precarización de la sociedad) y efecto (protesta), sino que se “activa” desde la cultura y los sentidos personales en torno al lugar que cada uno ocupa en el mundo social, y no desde un escrutinio utilitario y/o “espera” de las “oportunidades” para la acción colectiva¹.

¹ Un recorte epistemológico del conjunto de teorías sobre movimientos sociales permitiría identificar aquellas que se centran en los modos de representación, en combinación con los factores externos de constitución de los “movimientos” y aquellas que los abordan en tanto “cosas” totales. Recuperemos para el efecto la clasificación de las teorías de los movimientos sociales realizada por Wada (1997). Este autor identifica en la amplia literatura sobre los movimientos sociales “ocho grandes perspectivas basadas en dos clivajes”. El primer clivaje se sustenta en el foco analítico y cuatro de las ocho perspectivas analizarían los efectos causales de los cambios macrohistóricos sobre los movimientos sociales; este primer grupo de teorías ha sido denominado “*macro-historical transformation perspectives*”, y han sido incluidas en él las vertientes durkheimiana, marxista, weberiana

Como se ha dicho, el examen de la protesta es emprendido desde el concepto de “ideología” que hemos definido, de acuerdo con Eagleton, como “el modo como las luchas por el poder son entabladas en el nivel de la significación” (Eagleton, 1996: 196). Al plantear el problema desde el punto de vista de la producción de sentidos nos redimimos de la comprensión de la ideología como falsa conciencia, sustentando la evaluación de la eficacia política de la acción significativa a la luz del concepto de “competencia política”, es decir, de las capacidades para “reconocer la cuestión política como política y tratarla como tal, respondiendo políticamente a ella, es decir respondiendo a partir de principios propiamente políticos (y no éticos, por ejemplo)” (Bourdieu, 2000: 407). Tales pautas se elaboran en el “campo de producción ideológica”; es en él que se definen los instrumentos de pensamiento del mundo social dados en un momento y la problemática legítima, lo que es políticamente pensable. Serían, entonces, estas competencias de los sujetos las que coadyuvarían –o no– para que las proyectualidades personales y grupales sean formuladas en términos de proyectos políticos, y la acción sea llevada a la esfera pública con alguna visión estratégica.

Al proponer una entrada al tema de la protesta desde la ideología, estamos deslindando campos con un abordaje desde las perspectivas sobre los movimientos sociales, debido a que tales perspectivas teóricas no proporcionan el acceso suficiente a nuestra preocupación actual², centrada precisamente en la gramática de las representaciones y los contenidos ideológicos de la protesta, en una gran proximidad con la experiencia social de los sujetos y aun los relatos personales, así como en la evaluación de los efectos de dicha experiencia, relatos y movilización en la constitución de la política de contestación.

y posmoderna. Las teorías que conforman el grupo determinado por el segundo clivaje analizarían la incidencia de los esfuerzos movilizatorios sobre los movimientos sociales (los elementos contextuales que inciden en la movilización o la promueven, elementos de orden económico, político, social y cultural). De manera sintética, el argumento central de estas teorías sería que la emergencia, las dinámicas y los desenlaces de los movimientos sociales son resultado de “incentivos movilizatorios” (“*mobilizational efforts*”). Wada denomina a estas corrientes teóricas “perspectivas movilizacionales”, en las que es puesto el énfasis en diversos “tipos causales”: utilitario, de las oportunidades políticas, de las estructuras movilizadoras (“*mobilizing structure*”) y de los marcos culturales (“*cultural framing*”) (Wada, 1997: 2).

2 Maria da Glória Gohn sugiere que: “Analisar os paradigmas a respeito dos movimentos sociais implica abordar preliminarmente duas difíceis questões: o próprio conceito de movimento social e as teorias a seu respeito. Quanto á primeira, poucos autores se dedicaram a definir ou a conceituar o que entendem por movimentos sociais. Acrecente-se a essa lacuna a profusão de tipos e espécies de movimentos sociais que tem sido tratados da mesma forma, além da não diferenciação entre movimentos propriamente ditos, lutas, protestos, revoltas, revoluções, quebra-quebras, insurreições e outras formas de ações coletivas” (Gohn, 1997: 12-13).

Antes de continuar deseo reforzar el argumento en torno a la opción teórica realizada, pues existiría, con todo, otra posibilidad de aproximación hacia nuestro interés analítico. Tal posibilidad ofrecería lo que Wada (1997: 53) denomina *cultural framing perspective*, cuyo eje teórico y sustento es la categoría de “*frame*”, cuyo origen sociológico es el legado de Goffman. Definido inicialmente como “orientaciones cognitivas”, en la segunda mitad de los años ochenta el *frame* fue definido por Snow y Benford como un esquema interpretativo desarrollado por las colectividades para entender el mundo, y utilizado por esos autores para identificar las estrategias de los activistas para vincular sus esquemas de interpretación a los *frames* existentes en la sociedad (Ghon, 1997: 88). Visto en esta acepción adaptada al análisis político-cultural de la acción social, Ghon propone traducir el término *frame* no como “marco” o “molde”, sino como “marco referencial significativo y estratégico de la acción colectiva” (Ghon, 1997: 87).

En la interpretación de Oliver y Johnston, el *frame* nos remitiría a varias acepciones: estructuras cognitivas individuales localizadas en la mente que ayudan a procesar y sistematizar la experiencia y a orientar la acción; esquemas interpretativos –y no ideas aisladas– relevantes para diferentes niveles de la experiencia y compartidos colectivamente, que son capaces de canalizar los comportamientos individuales dentro de patrones sociales; procesos interactivos de conversación, persuasión, argumentación (Oliver y Johnston, 2000: 4).

Los autores llaman la atención también sobre la frecuente confusión entre “*frame*” e “ideología”, señalando que no se trata de sinónimos, pese a que los referentes empíricos puedan ser los mismos; en su perspectiva, la diferencia existente entre estos dos conceptos serían que el primero, *frame*, se refiere a un proceso de interacción y focaliza en la intencionalidad, mientras que el segundo, ideología, en los contenidos; abordar la ideología implicaría, pues, averiguar también sobre los orígenes de esos conjuntos de creencias y valores, así como sobre sus repercusiones para la acción social y política (Oliver y Johnston, 2000: 8-9).

Concordando con que *frame* e ideología no son sinónimos, mi opción por esta se sustenta en un razonamiento de mayor complejidad, ya que al hablar de ideología involucramos una dimensión eminente de la que carece el primero: su proyección hacia la comprensión de los fenómenos del poder y los efectos hegemónicos, así como de las escisiones internas del sujeto, de sus eventuales incongruencias que desdican la racionalidad instrumental.

Ahora bien, aun tratándose de abordajes que juzgo adecuados para mis propósitos actuales, como son la perspectiva sobre la ideología en los términos de Eagleton o la de hegemonía desarrollada en la

tradición gramsciana, considero que las pautas teóricas disponibles no alcanzan a explicitar la complejidad constitutiva de los sujetos de la protesta, pues lo que habitualmente se nos ofrece es el perfil del “sujeto sujetado”, tal como aparece en el bosquejo de Althusser en *Aparatos ideológicos del Estado* (Althusser, 1996). Lo que Balibar denomina los movimientos del sujeto “hacia la libertad” (Balibar, 2000) permanece como idea residual. Se trata, sin embargo de una idea que debe ser rescatada en aras de la comprensión de la protesta social, aun cuando dicho “movimiento” pueda ser limitado desde el punto de vista de la eficacia política. Sin revalorizar esta idea, en el contexto de una comprensión de la duplicidad del sujeto no entenderíamos cómo los sujetos logran –desde diversas competencias políticas– impugnar, como diría Barrington Moore (1987), “el contrato social vigente”. En efecto, ¿cómo se podría protestar dentro de un “encuadramiento” rígido o una pre-determinación hegemónica?, ¿cómo romper, en calidad de “sujetado” por excelencia, la tautología de la dominación, eufemística o groseramente ejercida?, ¿se puede reducir la capacidad de protesta a la influencia de los *outsiders*, los intelectuales orgánicos o la alta dirigencia, o considerarla como previamente encauzada? La respuesta a estos interrogantes requiere un cierto ejercicio de “inmersión” en las profundidades del sujeto, “completando” las perspectivas teóricas elegidas, pues allí encontraríamos tanto las potencialidades emancipatorias, cuanto –en gran medida– la fuente de la evanescencia de esas “fugas” hacia la libertad.

Estos “ajustes” pueden ser concretados al considerar que la producción del significado de la protesta tendría dos tiempos. El primero, el de los códigos culturales compartidos en espacios organizativos y/o cotidianos (que tendría, digamos, un carácter externo y envolvente) y el segundo tiempo, el del acontecimiento movilizador interno que transcurre en el fuero personal. Es justamente en este registro personal, íntimo, emotivo –“en la intimidad del corazón”, como diría Hannah Arendt– donde emprenderemos nuestras búsquedas centrales del sentido político elaborado por nuestros/as interlocutores/as; es allí donde trataremos de captar estos momentos que tornan posible una “fuga hacia la libertad”, que estaría muy relacionada con lo que Althusser llamó “interpelación” o llamamiento³ (Althusser, 1996).

El planteamiento althusseriano sobre la ideología y la interpelación puede ser interpretado de la siguiente manera: la ideología es un *corpus* de creencias y valores que representa la relación del sujeto

3 Agradezco a Javier Auyero el haberme proporcionado el manuscrito del capítulo de su obra *Vidas beligerantes* intitulado “La vida en un piquete: biografía y protesta en el sur argentino”, trabajo sobre el cual el autor disertó en la FLACSO Ecuador, en noviembre de 2001. La lectura de dicho capítulo me permite apreciar con mayor profundidad el trabajo plasmado en el libro de su autoría que cito (Auyero, 2002).

con la dominación (“representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones de existencia”). Es en consonancia con estas creencias que el sujeto resulta interpelado o llamado para cumplir con los preceptos trazados por las relaciones de poder existentes (“la ideología interpela a los individuos en cuanto sujetos”). Sin embargo, los sujetos al obedecer al llamado no actúan bajo coerción sino que “trabajan por sí mismos”, relacionándose con el mundo exterior mediante la praxis; ese trabajo “autónomo” del sujeto es posible en la medida en que la ideología está “incorporada” en el sujeto y actúa de manera semejante al inconsciente freudiano (“la ideología no tiene historia”). En el *corpus* teórico althusseriano, la interpelación y la ideología estarían asociadas a la idea de “falsa conciencia”; es por ello que al recuperar el concepto de “interpelación”, preferimos, con Eagleton, una acepción de “ideología” en tanto batalla en el campo del significado, donde el “trabajo” de los sujetos “por sí solos” estaría asociado a la producción de numerosos significados, entre ellos los de sujeción y emancipación.

Ahora bien ¿con qué llave maestra abrir la caja negra de la interpelación, en tanto trabajo de los sujetos “por sí mismos”? O en otras palabras, ¿funciona la interpelación en un lugar subjetivo vacío? En el momento interpelatorio es justamente cuando entraría en juego algo cercano a lo que el sociólogo Craig Calhoun denomina “identidad”, en tanto elemento constitutivo de las proyectualidades personales (lecturas del mundo y de un lugar personal en él), de cara a la estabilización de la propia subjetividad, así como de proyectos políticos hacia la sociedad (Calhoun, 1994: 28 y 1999: 95-97). (Entiendo aquí la idea de “proyecto” no necesariamente en un sentido instrumental rígido de delineamiento táctico y estratégico de la búsqueda de metas políticas, sino como una palabra que todos y todas tenemos frente a la sociedad, y cómo en ella se organiza el poder y el vivir, como un deseo de cambio o conservación del orden). Pero más allá de las proyectualidades y proyectos, el momento movilizador o interpelatorio estaría estrechamente vinculado a la puesta en juego de un sentido de la vida, de la continuidad de ese sentido expresado en nuestros relatos personales que, a la larga, podría revertirse en la construcción de ideales duraderos (remito, otra vez, a Calhoun, 1999, en su análisis sobre el movimiento estudiantil de la Primavera de Beijing).

En una línea argumentativa desde la teoría crítica, John Holloway concibe a la identidad como resultado de un proceso de fetichización, “de separación entre lo hecho y un hacer”, argumentando, al mismo tiempo, la imposibilidad de una estabilización de una condición fetichizada de la subjetividad, es decir, de una identidad estable. En otras palabras, siendo imposible reducir un proceso de subjetivación y posicionamiento frente al mundo a un “estado” (metáfora mía) de

identidad, lo que existiría es una lucha por la identificación, por imponer una capa de estabilidad sobre la violencia que implicaría separar “lo hecho del hacer”. En ese sentido, Holloway considera imposible un estado de alienación permanente y generalizado en espera de una salvación externa por un *deus ex machina*, sea este el proletariado, el partido u otra entidad histórica. Así pues, junto con las tendencias a la fetichización, de cosificación de las relaciones sociales capitalistas, el autor observa la presencia del antifetichismo o desfetichización, como desdoblamiento dialéctico, en tanto conciencia sobre la historicidad de las relaciones sociales capitalistas y, sobre todo, insurgencia de la que todas (o casi todas) las personas serían capaces (Holloway, 2002).

Siendo diversa la procedencia teórica y filosófica –y aun disciplinar– de Calhoun y Holloway, las lecturas de ambos nos sugieren la plausibilidad de entender a la identidad como proceso y momento de la ideología, como complejidad, inestabilidad y, en mi criterio, aun negación, como potencial *locus* de cuestionamiento frente a lo establecido (por su parte, Holloway adelanta, además, un ingrediente ético, en el sentido de la necesidad de la negación de la identidad en tanto encapsulamiento frente al dolor del mundo; sin embargo, tal objeción puede ser entendida como cuestionamiento precisamente a la reificación de la identidad llevada a cabo por algunos teóricos de los llamados “nuevos movimientos sociales”). Así, tanto el sentido de la construcción del mundo que alberga la identidad, según Calhoun, como la coexistencia de la fetichización y la desfetichización, en la perspectiva de Holloway, nos ayudan a argumentar sobre la potencialidad intrínseca de los sujetos para las “fugas hacia la libertad”.

Sintetizando, este trabajo se orienta por una concepción del sujeto de la protesta caracterizado, en primer lugar, por su inscripción en un campo de posibilidad –no fatalidad– estructural para la contestación a las políticas de ajuste, y en segundo lugar, por su escisión entre la sujeción y las búsquedas de libertad, y por su movilización a partir del llamamiento (interpelación) desde un sentido del mundo social sustentado en creencias, valores e ideales.

En el ámbito de lo macrosocial, son el florecimiento de estas proyectualidades-identidades a través de la protesta y la confrontación entre conformidades y “fugas hacia la libertad”, así como la toma de la palabra por parte de los sujetos y las acciones colectivas, lo que en determinados tiempos constituye “la crisis”. La misma que, según Portantiero “opera haciendo estallar la percepción reificada de las relaciones sociales como actualización de ‘intereses’ predefinidos” (Portantiero, 1988). La crisis, nos dice Portantiero siguiendo a Cacciani⁴, se instala en el

4 Portantiero cita el texto de M. Cacciani (1981).

“mundo vital” y adquiere una productividad particular, “como brusca iluminación de la artificialidad de la acción colectiva”, como “proyecto político y como resultante del conflicto entre proyectos políticos” (Portantiero, 1988: 173). La crisis, en ese sentido, sería la ideología objetivada, encaminada a través de las identidades en tanto vehículos para las aspiraciones colectivas, valores y sentidos del mundo social y político, así como a través de las acciones colectivas en tanto búsquedas de incidir en el cambio a partir de determinados proyectos de sociedad.

La confrontación de tales “proyectos” no es otra cosa sino el ruedo político en el que entran en liza fuerzas sociales y políticas (partidos, clases, grupos de interés, grupos étnicos y de género, etc.), el campo minado de la hegemonía, en el que las fuerzas en pugna pueden implosionar y sucumbir, resistir creando equilibrios, o triunfar. Y en este terreno es donde nos abocamos al análisis de las astucias de la construcción del consenso. Ya hace años, en una línea argumentativa de vocación gramsciana, Laclau advertía que la hegemonía es construida no mediante la imposición de una ideología uniforme, sino a través de sutiles articulaciones y absorciones de diferentes visiones del mundo en forma tal que el antagonismo potencial de éstas resulte neutralizado (Laclau, 1980: 188-189). Habría además que agregar que tales absorciones asumen dinámicas no disruptivas a merced de creencias y evaluaciones del mundo social compartidas por dominantes y dominados. El desarrollo teórico de este punto lo encontramos en el análisis de Carlo Ginzburg, quien adhiere el análisis de Mikhail Bakhtin en *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento*, en torno a la circularidad de la cultura, en el sentido de que las creencias de las clases subalternas y la de las clases dominantes ejercerían una influencia recíproca (Ginzburg, 1995: 24). El caso paradigmático de una creencia compartida que ha ejercido una influencia enorme en el desenlace de los acontecimientos de la protesta de los últimos años sería, para nuestro caso, el de la corrupción, en su acepción moralizante que la constituye en la fuente de todos los males, ladeando las significaciones propiamente políticas de ella. Se comparte, entonces, la idea y el enunciado, esgrimido por las elites dominantes de manera instrumental en respaldo de lineamientos de organismos como Transparencia Internacional, y a su vez sostenido desde el lado de los sectores subalternos ecuatorianos en la medida en que este enunciado forma parte de la categorización y perspectiva predominante sobre la sociedad, circunscribiendo frecuentemente la solución –unos y otros – al desalojo de los corruptos y a medidas de saneamiento, que postergan las soluciones políticas. No se trata, pues, de una mera recepción pasiva o de una imposición, sino de la intersección entre los valores que dan vida a una cultura y los relatos legitimantes del desmantelamiento del antiguo Estado interventor y desarrollista.

DE LA LÍNEA METÓDICA

Concretemos ahora las posibles secuencias de acceso a la comprensión de la ideología de la protesta.

Una primera vía, hemos considerado, es el acceso desde el umbral de la singularidad y la experiencia, desde el proceso de constitución del sujeto de la protesta en la interacción con otros, así como de su lectura y posicionamiento frente al orden. Para el efecto, junto con la comprensión de los contenidos de la protesta y los estados de ánimo colectivos⁵, recuperaremos segmentos biográficos significativos, pasajes en los que podamos advertir la inflexión de sentidos que representan el cuestionamiento al contrato social existente. No nos interesa, en tal sentido, toda la historia de vida, al no concebir a esta como la trayectoria hacia un *telos*; focalizamos más bien los momentos cuya narración condensa los ideales, sentimientos y las creencias interpelantes. La comprensión de la singularidad tiene validez en tanto entrada al mundo simbólico de un grupo social, pues, como señala George Marcus, “las representaciones colectivas se filtran de manera más efectiva a través de las representaciones personales” (Marcus, 1994: 48).

Tal posicionamiento en torno a la singularidad se encuentra distanciado de una perspectiva individualista, en virtud de varios supuestos. Primero, la producción de sentidos personales es posible solamente en estrecha relación con los sentidos sociales, y en la intersubjetividad. Segundo, la interpelación se realiza en la confluencia de la profundidad proyectual del sujeto y de sus los relatos personales con los relatos culturales colectivos. Tercero, la singularidad encuentra anclaje en el “sujeto” propiamente, y no en el “actor social” –tan importante en los perspectivas sobre movimientos sociales– en virtud de la escisión interna apuntada con anterioridad, y de la oscilación dialéctica entre la sumisión y la libertad, que lo define como lugar del ejercicio del poder (ni la metáfora del escenario, ni el concepto de acción vinculadas a la idea de “actor” traducen de manera adecuada, en mi criterio, esta escisión, y la complejidad con la que el sujeto se aboca al juego de la hegemonía).

Una segunda entrada, derivada del acceso a través de la singularidad, es el lenguaje. A través de él procuraremos la comprensión de la

⁵ Una propuesta igualmente interesante, de aproximación al fenómeno ideológico es la que realiza E. P. Thompson, en su obra *La formación de la clase obrera inglesa*, en la que trata sobre la movilización popular entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX (Thompson, 1987). Esta obra llama la atención sobre los sentimientos que animan la protesta y los contextos simbólicos. Al abordar los símbolos e imágenes que habitan el lenguaje, el concepto de “imagística”, coadyuvaría a la comprensión de los sentimientos.

ideología de la protesta, mediante el escrutinio las representaciones en dos niveles: el de los saberes sociales circulantes, y el de los “insumos” socio-cognitivos.

En el primer nivel de aproximación es fructífero recordar la obra de George Rudé (1981): *Revuelta popular y consciencia de clase*. En ella se argumenta que la ideología popular es una “mezcla, una fusión de dos elementos, de los cuales solamente uno es privativo de las clases populares, mientras el otro se sobreimpone mediante un proceso de transmisión y adopción desde afuera. El primero es el elemento “tradicional” o “inherente”, basado en la experiencia directa, la tradición oral o la memoria colectiva”. El segundo elemento es “un cúmulo de ideas y creencias que se toman prestados de los demás y que se presentan en forma de un sistema más estructurado de ideas políticas”, como por ejemplo: “Derechos del Hombre”, *laissez faire*, ideas religiosas, etcétera. A este elemento Rudé lo ha denominado “elemento derivado”. No existe, según el autor, ninguna separación rígida entre los dos elementos de la “mezcla” ideológica, pues el “elemento inherente” de la ideología de una generación bien puede ser el “elemento derivado” de la ideología de la generación anterior (Marx, por ejemplo, no hubiese podido adoptar el punto de vista de la explotación clasista sin la lucha anterior del proletariado) (Rudé, 1981: 34-36). Finalmente, la “revuelta” o, hablando en términos contemporáneos, la movilización sería posible, bajo la existencia de los siguiente factores: en primer lugar, la existencia del “elemento inherente”, en segundo lugar, del “elemento derivado” o externo, que puede absorberse si el terreno es preparado de antemano y, en tercer lugar, las circunstancias o experiencias que determinen la naturaleza de la “mezcla final” (Rudé, 1981: 45). En el plano procedimental, se trata de identificar en las alocuciones las capas del elemento “inherente” y el elemento “derivado”, es decir, las modalidades de discurso en tanto oriundas de diversas temporalidades socio-culturales.

En el segundo nivel de aproximación al lenguaje, nivel anclado ya en lo singular-social y más conciso y detallado que el primero, tratamos de leer las representaciones captando las clasificaciones y evaluaciones del mundo social, de sus jerarquías y del lugar propio en ese mundo; pero indagamos también la oferta política que cada uno tiene para este. Lo hacemos sobre la base de aislar núcleos elementales, procedentes de los sustratos cognitivos y articulados sobre dicotomías primarias. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “representaciones”?

Denise Jodelet concibe que las representaciones son formas de conocimiento social: imágenes que condensan conjuntos de significados, sistemas de referencia que permiten interpretar el mundo, categorías de clasificación de las circunstancias, los fenómenos y los individuos que

nos rodean, teorías que nos permiten establecer hechos sobre ellos. Tales formas de conocimiento surgirían en la intersección entre lo psicológico y lo social, en virtud de los marcos culturales que poseen los sujetos para la aprehensión de lo representado (Jodelet, 1988: 472-473).

Al hablar de “representación”, nos estamos refiriendo al modo como se establece la relación de los sujetos del conocimiento social con objeto/s, sujeto/s o fenómeno/s del mundo exterior, a través de su sustitución y refracción mental, de un acto de restitución simbólica de “algo”, de recuperar ese “algo”, otorgando significación y contenido subjetivo y valorativo al acto de conocer (Jodelet, 1988: 475-476). Interpretando a Moscovici (1986), podemos decir que el objeto es reconstruido y valorizado a través de una especie de “filtro” durable, que es justamente el sistema de representaciones que precede y configura a la lógica del raciocinio. Tanto las representaciones como el ámbito mayor en el que ellas se procesan: el de la ideología, tienen la propiedad de constituirse en fuerza material, de “objetivarse”, de donde deriva su capacidad de construcción de realidades sociales⁶ (Hall, 1997: 15; Jodelet, 1988: 483). Esta capacidad de objetivación, como hemos dicho en párrafos anteriores, se realiza a través de la identidad.

En el nivel de las representaciones sobre el mundo social y político y el lugar propio en él, los sentidos serán decodificadas a partir de los núcleos de oposiciones binarias que estructuran el conocimiento del mundo y se expresan en las hablas. A partir del basamento de las representaciones en las dicotomías cognitivas primigenias emprendemos el análisis de la estructuración del contenido ideológico, identificado las redes de nociones que acompañan cada uno de los polos de las dicotomías nucleares, reconstruyendo las imágenes verbales y símbolos que constituyen una matriz o constelación ideológica más o menos compartida por el grupo o subgrupo social al que pertenece el o la testificante⁷. Es en esa matriz ideológica que decodificamos en las hablas donde encontraremos, también, la ambivalencia de las identidades de la protesta.

6 Las representaciones adquieren fuerza material en virtud de dos procesos. El primero, la objetivación, implica que las nociones abstractas del sujeto son puestas en imágenes, haciendo corresponder cosas con palabras y dando cuerpo a esquemas conceptuales (símbolos, mitos) (Jodelet, 1988: 481). El segundo proceso, el anclaje, está relacionada con una función social y “se refiere al enraizamiento en lo social de la representación y de su objeto”, en dos momentos, uno de ellos es el de integración cognitiva o integración dentro del sistema de pensamiento preexistente; y el segundo conlleva que “la intervención de lo social se traduce en significado y utilidad que les son conferidos”, proyectándose en la instrumentalización del saber (Jodelet, 1988: 486-487).

7 Ciro Flammarion Cardoso ha llamado la atención sobre la necesidad de analizar las representaciones sociales en sus diversos niveles de complejidad (Cardoso, 2000).

Hemos procedido a dialogar en profundidad con dieciséis interlocutores/as, doce de los/las cuales nos brindaron sus testimonios personales, siendo ellos/as miembros de base, mandos medios y allegados a organizaciones campesinas e indígenas de las provincias del Azuay y Cotopaxi, así como a organizaciones estudiantiles y obreras de la provincia del Azuay; las restantes cuatro entrevistas, de carácter informativo, son resultado de diálogos con dirigentes nacionales de las fuerzas movilizadas. Cabe añadir que, aun cuando nuestro trabajo se concentró en la provincia del Azuay, fue inevitable ampliar el universo de investigación a una de las provincias centro-norte del país, caracterizada por una activa movilización indígena; tal ampliación sería indicativa de la coextensividad de la protesta en tanto “indígenas” y “campesinos”; en general, ha sido inevitable remitirse a contextualizaciones de la protesta en ámbitos nacionales. Nuestro material de trabajo ha incluido también textos testimoniales escritos, así como hojas volantes recabadas en las marchas, asambleas y otros eventos de protesta hacia donde orientamos nuestra observación participante.

La argumentación incorpora profusamente la palabra de los/las interlocutores/as, a quienes nombro mediante seudónimos que precautelan su identificación. Al proceder de esta manera hemos procurado evitar la deducción de los sentidos de la protesta desde las hablas oficiales, distantes de los horizontes cotidianos, y cargadas más bien del “elemento derivado” originado en diversas instituciones: direcciones partidarias, sindicales, indígena-campesinas, organismos internacionales, etcétera. Al focalizar nuestro interés en las hablas “no autorizadas” buscamos recuperar su especificidad y sus desplazamientos de la “palabra legítima”, desplazamientos que provienen de un habla más matizada y compleja, informada en los sentidos políticos emanados de la socialidad. Es un esfuerzo que quiere alimentar la posibilidad de una escritura de la historia política del Ecuador contemporáneo “a contrapelo” y “desde abajo”.

TABLAS

Tabla I
Movilización de sectores populares opuestos al ajuste*

Gobierno	Período	Campesinos	Estudiantes	Indígenas	Sindicatos	Trabajadores
Sixto	Mar-Jun 96	4	2	-	21	50
Sixto/Abdalá	Jul-Oct 96	1	2	5	16	40
Abdalá	Nov 96-Feb 97	-	10	12	14	51
Alarcón	Mar-Jun 97	6	5	7	20	69
Alarcón	Jul-Oct 97	6	4	10	28	61
Alarcón	Nov 97-Feb 98	3	12	4	13	39
Alarcón	Mar-Junio 98	16	7	3	23	68
Alarcón/ Jamil	Jul-Oct 98	10	8	18	28	60
Jamil	Nov 98-Feb 99	2	9	9	18	45
Jamil	Mar-Jun 99	8	14	10	44	72
Jamil	Jul-Oct 99	6	5	16	26	34
Jamil/Noboa	Nov 99-Feb 00	8	13	24	19	38
Noboa	Mar-Jun 00	11	7	21	39	39
Noboa	Jul-Oct 00	13	1	24	13	21
Noboa	Nov 00-Feb 01	16	41	48	14	29
Noboa	Mar 01-Jun 01	10	3	13	9	38
Noboa	Jul-Oct 01	3	1	1	18	29
Noboa	Nov 01-Feb 02	4	8	6	7	16
	TOTAL	127	152	231	370	799

Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

* Tabla referida al Gráfico 1.

Tabla II
Dinámica del conflicto, 1996-2002*

Gobierno	Período	Eventos
Sixto	Mar-Jun 96	131
Sixto/Abdalá	Jul-Oct 96	118
Abdalá	Nov 96-Feb 97	208
Alarcón	Mar-Jun 97	236

Tabla II [continuación]

Gobierno	Período	Eventos
Alarcón	Jul-Oct 97	239
Alarcón	Nov 97-Feb 98	209
Alarcón	Mar-Junio 98	275
Alarcón/Jamil	Jul-Oct 98	230
Jamil	Nov 98-Feb 99	208
Jamil	Mar-Jun 99	290
Jamil	Jul-Oct 99	253
Jamil/Noboa	Nov 99-Feb 00	237
Noboa	Mar-Jun 00	227
Noboa	Jul-Oct 00	179
Noboa	Nov 00-Feb 01	293
Noboa	Mar 01-Jun 01	162
Noboa	Jul-Oct 01	104
Noboa	Nov 01-Feb 02	81

Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

* Tabla referida al Gráfico 2.

Tabla III
Objeto del conflicto*

Gobierno	Período	Denuncias Corrupción	Financia- miento	Laborales	Salariales	Rechazo Política Estatal	Otros	Total
Sixto	Mar-Jun 96							
Sixto/ Abdalá	Jul-Oct 96	21	6	6	22	24	39	118
Abdalá	Nov 96-Feb 97	43	12	3	10	72	68	208
Alarcón	Mar-Jun 97	94	41	16	20	20	55	246
Alarcón	Jul-Oct 97	45	46	17	26	38	67	239
Alarcón	Nov 97-Feb 98	50	41	3	12	43	60	209
Alarcón	Mar-Junio 98	61	80	7	39	33	55	275
Alarcón/ Jamil	Jul-Oct 98	42	41	12	29	60	46	230
Jamil	Nov 98-Feb 99	53	37	9	17	58	34	208
Jamil	Mar-Jun 99	39	45	7	72	99	28	290
Jamil	Jul-Oct 99	54	28	11	29	93	38	253
Jamil/ Noboa	Nov 99-Feb 00	52	15	26	14	97	33	237

Tabla III [continuación]

Gobierno	Período	Denuncias Corrupción	Financia- miento	Laborales	Salariales	Rechazo Política Estatal	Otros	Total
Noboa	Mar-Jun 00	47	20	11	40	85	24	227
Noboa	Jul-Oct 00	51	19	5	7	64	33	179
Noboa	Nov 00-Feb 01	47	32	24	47	147	19	316
Noboa	Mar 01-Jun 01	34	30	11	11	54	20	160
Noboa	Jul-Oct 01							
Noboa	Nov 01-Feb 02	8	5	1	13	19	35	81
	Total	741	498	169	408	1006	654	

Fuente: Elaboración propia en colaboración con Ladislao Landa con base en CAAP, *Ecuador Debate*, N° 38-55.

* Tabla referida a los gráficos. 3, 4, 5 y 6.

Cuadro 1

Referentes étnico-políticos (en orden de sentido jerárquico)*

Dominados	Dominadores
Pobres, sufrientes Indios, negros, algunos mestizos Pueblo ecuatoriano (Ecuador-Mamallactapi)	Ricos, gobierno Hacen sufrir a los indígenas y a todo el pueblo ecuatoriano
Indígenas [se organizan] [desafían a los mishus]	Mishus [Niegan la condición humana y ciudadana de los indígenas] [Abusan]

* Interlocutor: Juan Lorenzo. Esquemmatización del análisis que consta en el capítulo II, sección "Juan Lorenzo".

Cuadro 2

Representaciones sobre la composición del mundo social*

Indígenas	Instituciones	Autoridades, poderes del Estado	Banqueros, ricos
Viven en la más extrema pobreza Trabajan Luchan	Dan apoyo	No hacen nada Roban	Roban

* Interlocutor: Miguel. Esquemmatización del análisis que consta en el capítulo II, sección "Miguel".

Cuadro 3

Modelo utópico de sociedad (a) (elementos básicos)*

Lo inservible	Lo adecuado
Mantener instituciones estatales	Invertir el dinero en el desarrollo y la asistencia social

* Interlocutor: Miguel. Esquemmatización del análisis que consta en el capítulo II, sección "Politicidad y proyecto político".

Cuadro 4
Narrativas sobre la injusticia*

Ciudad	Campo
Menosprecio y engaño de parte de los burócratas Aculturización de los trabajadores Servicios	Padecimientos Ausencia de servicios

* Interlocutor: Jorge. Esquemmatización del análisis realizado en el capítulo II, sección “Jorge”.

Cuadro 5
Diagnóstico social y acciones políticas*

Acciones	Diagnóstico
Movilización Lucha Gobierno popular	Pobreza Miseria Política neoliberal

* Interlocutor: José María. Esquemmatización del análisis realizado en el capítulo II, sección “José María”.

Cuadro 6
Modelo utópico de sociedad (b) (elementos básicos)*

Orden social actual	Futuro
Injusticia Corrupción Jerarquías económicas	Socialismo Jerarquías basadas en el respeto a la educación [simbólicas]

* Interlocutor: Joaquín. Esquemmatización de la red de nociones analizadas en el capítulo III, sección “Joaquín”.

Cuadro 7
Modelo utópico de sociedad (c) (elementos básicos)*

Capitalismo	Socialismo
Acaparamiento Dinero fácil Mentiras Falta de solidaridad Enajenación Banqueros Modernizadores [ladrones]	Bien público Dignidad Igualdad Identidad

* Interlocutor: Julio. Esquemmatización de la red de nociones analizadas en el capítulo IV, sección “Julio”.

Cuadro 8

Vertientes ideológicas y prácticas en la corriente sindical clasista*

Espacios de confrontación e interlocución	Sujetos	Contenidos ideológicos en orden jerárquico de predominio	Matrices doctrinarias predominantes	Prácticas
Altos niveles del Estado	Dirigencia sindical unificada	Clasismo: discurso y efecto político Corporativismo universalista y laico: defensa de intereses colectivos de los trabajadores y sectores populares	Socialismo Marxismo-leninismo	Confrontación Negociación Demanda
Niveles estatales intermedios. Empresas de producción y/o servicios Centrales sindicales	Organizaciones intermedias (“corporaciones” propiamente dichas como unidad frente a instancias estatales de nivel provincial o local)	Corporativismo particularista laico Corporativismo universalista	Socialismo Marxismo-leninismo Pluridefinición doctrinaria Indefinición doctrinaria	Confrontación Negociación Demanda Relaciones obrero-patronales en niveles estatales intermedios
Espacios de agremiación, niveles internos	Miembros de base de la organización. Militantes y activistas	Corporativismo particularista no secularizado	Pluridefinición doctrinaria Indefinición doctrinaria Socialismo Marxismo-leninismo	Prácticas mutuales Relaciones inter obreras cara a cara

Fuente: Síntesis realizada en el capítulo IV, sección “Combates y plegarias”.

* El presente cuadro representa la constitución del sindicalismo de la vertiente clasista, en se de efectos superpuestos de representaciones, ideologías y prácticas de diverso origen en varios niveles y ámbitos sociales. Hemos hipotetizado un corte vertical, con el fin de identificar las diversas estratificaciones ideológicas.

BIBLIOGRAFÍA

- Achig, Lucas et al. 1991 *Pensamiento y práctica del movimiento obrero latinoamericano y ecuatoriano en los años ochenta y sus perspectivas en la próxima década* (Cuenca: Universidad de Cuenca).
- Acosta, Alberto 2005 “Ecos forajidos al sur de Colombia” en <http://www.eldiplo.infor/mostrar_articulo.php?id=201&numero=40> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Acosta, Alberto et al. 2004 “Ecuador. Oportunidades y amenazas económicas de la emigración” en <www.lainsignia.org/2004/agosto/dial_006.htm.org/2004/agosto/dial_006.htm> acceso 20 de enero de 2007.
- Almeida, Ileana et al. 1991 *Indios. Una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990* (Quito: ILDIS/ El Duende/ Abya Yala).
- Althusser, Louis 1996 “Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado (Notas para uma investigação)” en Žižek, Slavoj (org.) *Um mapa da ideologia* (Rio de Janeiro: Contraponto).
- Anderson, Benedict 1993 (1983) *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Anderson, Perry 1999 “Neoliberalismo: balance provisorio” en *La trama del neoliberalismo* (Buenos Aires: CLACSO-EUDEBA).

- Andrade, Pablo 2002 "Fuerzas sociales y políticas en la Asamblea Constituyente Ecuatoriana de 1998". Ponencia presentada en el Encuentro de Ecuatorianistas de la Asociación de Estudios sobre América Latina (LASA), realizado en Quito, 17 al 20 de julio de 2002.
- Antunes, Ricardo 2001 *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo del trabajo* (São Paulo: Cortez).
- Aráuz Ortega, Marco 2002 "No a la política del avestruz" en <<http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=41737>> acceso 26 de noviembre.
- Arendt, Hannah 1993 (1958) *A condição humana* (Rio de Janeiro: Forense Universitaria).
- Arias, Natalia 1995 "Partidos políticos: ¿héroes o villanos" en *Ecuador Debate* (Quito: CAAP) N° 36.
- Asamblea Nacional Constituyente 1998 *Constitución Política de la República del Ecuador* (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador).
- Asociación Cristiana de Jóvenes s/f "Reflexiones sobre la Rebelión de los Forajidos", Resumen del conversatorio interno realizado el 26 de abril de 2005 en *Hoyonline. Caída y fuga de Lucio Gutiérrez. El abril de los forajidos*. En <<http://www.hoy.com.ec/especial/caidalucio/caida9.htm>> acceso 18 de abril de 2006.
- Auyero, Javier 2002 *La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires) Serie Extramuros N° 5, Libros del Rojas.
- Ayala Mora, Enrique 2003 "Un triste récord" en *El Comercio*. En <www.elcomercio.com> acceso 7 de febrero.
- Ayala, Enrique et al. 1992 *Pueblos indios, Estado y derecho* (Quito: Corporación Editora Nacional).
- Balibar, Étienne 2000 "Sujeción y subjetivación" en Arditi, Benjamin (ed.) *El reverso de la diferencia. Identidad y política* (Caracas: Nueva Sociedad).
- Barrera Guarderas, Augusto 2001 *Acción colectiva y crisis política. El movimiento indígena ecuatoriano en la década de los noventa* (Quito: Ciudad/Abya Yala/OSAL).
- Baud, Michiel 1997 "La huelga de los indígenas en Cuenca, Ecuador: 1920-1921, perspectivas comparadas" en Reina, Leticia (coord.) *La reindianización de América, siglo XIX* (México DF: Siglo XXI/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social).

- Becker, Marc 2002 “Coaliciones interétnicas en los años treinta. Movimientos indígenas en Cayambe” en *Yachaikuna* (Quito: Instituto Científico de Culturas Indígenas) N° 2. En <<http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/2/becker.html>> acceso 24 de octubre de 2002.
- Bernal, Angélica (comp.) 2000 *De la exclusión a la participación. Pueblos indígenas y sus derechos colectivos* (Quito: Ediciones Abya Yala).
- Bourdieu, Pierre 1998 (1982) *A economia das trocas linguísticas. O que falar quer dizer* (São Paulo: EDUSP).
- Bourdieu, Pierre 1999 (1998) *A dominação masculina* (Rio de Janeiro: Bertrand Brasil).
- Bourdieu, Pierre 2000 (1979) *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto* (Madrid: Taurus).
- Bustamante, Fernando 2001 “Política. Economía política y economía moral: reflexiones en torno a un levantamiento” en *Ecuador Debate* (Quito: CAAP) N° 52, abril.
- Bustamante, Fernando 2005 “En los arrabales del Estado de Naturaleza” en *Ecuador Debate* (Quito: CAAP) N° 64, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1996a “El conflicto sociopolítico marzo-junio 1996” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 38, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1996b “Conflictividad social” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 39, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1997a “Conflictividad social. Noviembre 1996-febrero 1997” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 40, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1997b “Conflictividad social. Marzo 1997-junio 1997” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 41, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1997c “Conflictividad social. Julio 1997-octubre 1997” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 42, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1998a “Conflictividad social. Noviembre 1997-febrero 1998” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 43, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1998b “Conflictividad social. Marzo 1998-junio 1998” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 44, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1998c “Conflictividad social. Julio 1998-octubre 1998” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 45, diciembre.

- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1999a “Conflictividad social. Noviembre 1998- febrero 1999” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 46, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1999b “Conflictividad social. Marzo-junio 1999” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 47, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 1999c “Conflictividad social. Julio-octubre 1999” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 48, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2000a “Conflictividad socio-política. Noviembre 1999-febrero 2000” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 49, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2000b “Ecuador, enero 21: de la movilización indígena al golpe militar” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 49, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2000c “Conflictividad socio-política. Marzo-junio 2000” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 50, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2000d “Conflictividad socio-política. Julio-octubre 2000” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 51, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2001a “Conflictividad socio-política. Noviembre-febrero 2001” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 52, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2001b “Conflictividad socio-política. Marzo-junio 2001” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 53, agosto.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2001c “Conflictividad socio-política. Julio-octubre 2001” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 54, diciembre.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2002a “Conflictividad socio-política. Noviembre 2001-febrero 2002” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 55, abril.
- CAAP (Centro Andino de Acción Popular) 2002b “Conflictividad socio-política. Marzo- junio 2002” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 56, agosto.
- Cacciani, M. 1981 “Transformación del Estado y proyecto político” en VVAA, *Teoría marxista de la política* (México DF: Cuadernos del Pasado y Presente).
- Calhoun, Craig 1994 “Social theory and the politics of identity” en Calhoun, Craig (ed.) *Social theory and the politics of identity* (Cambridge, Mass./Oxford: Blackwell Publishers).
- Calhoun, Craig 1999 “El problema de la identidad en la acción colectiva” en Auyero, Javier (comp.) *Caja de herramientas. El lugar de la*

- cultura en la sociología norteamericana* (Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes).
- Cardoso, Ciro Flamarion 2000 “Uma opinião sobre as representações sociais” en Cardoso, Ciro Flamarion y Malerba, Jurandir (orgs.) *Representações. Contribuição a um debate transdisciplinar* (Campinas: Papirus Editora).
- Cascardi, Anthony J. 1992 *The subject of Modernity* (New York: Cambridge University Press).
- CEDEP 1984 *Las luchas campesinas, 1950-1983. Movilización campesina e historia de la FENOC* (Quito) Serie Movimiento Social N° 4.
- Cerbino, Mauro et al. 2001 *Culturas juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad & género* (Quito: Abya-Yala/Convenio Andrés Bello).
- Chiriboga, Cinthia 2001 “La música en la constitución de las culturas juveniles” en Cerbino, Mauro; Chiriboga, Cinthia y Tutivén, Carlos *Culturas juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad & género* (Quito: Abya-Yala/Convenio Andrés Bello).
- Chiriboga, Manuel 1986 “Crisis económica y movimiento campesino e indígena en Ecuador” en *Revista Andina* (Cusco: Centro Bartolomé de las Casas) N° 7.
- Cohen, Jean L. 1985 “Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements” en *Social Research*, Vol. 52, N° 4.
- Comité de Empresa de INDUMESA 1986 “Diez años de lucha. 1976-1986”, CEDOC del Azuay, Cuenca.
- DaMatta, Roberto 1985 (1983) “Cidadania. A questão da cidadania num universo relacional” en *A casa e a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil* (São Paulo: Editora Brasiliense).
- Dávalos, Pablo 2000 “Ecuador: las transformaciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Dávalos, Pablo 2003 “Plurinacionalidad y poder político en el movimiento indígena ecuatoriano” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.
- De Certeau, Michel 1996 (1980) *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer* (México DF: Universidad Iberoamericana).
- De la Garza Toledo, Enrique 2001 “Introducción. Las transiciones políticas en América Latina, entre el corporativismo sindical y la

pérdida de imaginarios colectivos” en De la Garza Toledo, Enrique (comp.) *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (Buenos Aires: CLACSO).

De la Torre, Carlos 1997 “Los usos políticos de las categorías pueblo y democracia” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 41, agosto.

De la Torre, Carlos s/f “El gobierno cayó en las calles” en *Hoyonline. Caída y fuga de Lucio Gutiérrez. El abril de los forajidos*. En <<http://www.hoy.com.ec/especial/caidalucio/caida9.htm>> acceso 18 de abril de 2006.

De la Torre, Carlos s/f “El racismo en el Ecuador. Experiencias de los indios de clase media” en <<http://www.clacso.org>> acceso 12 de mayo de 2004.

De Lauretis, Teresa 2000 “La tecnología del género” en *Diferencias. Etapas de un camino a través del feminismo* (Madrid: Horas y Horas) Cuadernos Inacabados N° 35.

Deleuze, Gilles 1995 (1986) *Foucault* (São Paulo: Editora Brasiliense).

Eagleton, Terry 1996 (1994) “A ideologia e suas vicissitudes no marxismo ocidental” en Žižek, Slavoj (org.) *Um mapa da ideologia* (Rio de Janeiro: Contraponto).

Eagleton, Terry 1997 (1991) *Ideología. Uma introdução* (São Paulo: Boitempo/Editora UNESP).

Echeverría, Julio 1997 *La democracia bloqueada. Teoría y crisis del sistema político ecuatoriano* (Quito: Letras).

Echeverría, Julio 1999 “Globalización, crisis sistémica y estrategia social en el Ecuador” en *Ciencias Sociales* (Quito: Universidad Central) N° 17.

El Comercio 1996a (Quito) 21 de noviembre.

El Comercio 1996b (Quito) 26 de noviembre.

El Comercio 1997a (Quito) 7 de enero.

El Comercio 1997b (Quito) 25 de enero.

El Comercio 2002 (Quito) 30 de octubre.

El Comercio 2003 (Quito) 7 de febrero.

El Comercio 2003 “Pachacútek y el Partido Sociedad Patriótica dialogan” (Quito) 21 de febrero. En <<http://el.f137.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=1021>> acceso 24 de febrero.

- Escobar Cristina 1997 “Clientelismo y protesta social: política campesina en el norte colombiano” en: *¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo*, Javier Auyero (comp.) (Losada: Buenos Aires).
- Farinetti, Marina 1997 “Clientelismo y protesta: cuando los clientes se rebelan” en Auyero, Javier (comp.) *¿Favores por votos? Estudios sobre el clientelismo político contemporáneo* (Buenos Aires: Losada).
- Foucault, Michel 1988 (1969) *La arqueología del saber* (México DF: Siglo XXI).
- Foucault, Michel 1996 (1970) *A ordem do discurso* (São Paulo: Edições Loyola).
- Foucault, Michel 1999 *Estrategias de poder* (Barcelona: Paidós).
- Fraser, Nancy 1997 *Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “post-socialista”* (Bogotá: Universidad de los Andes/Siglo del Hombre).
- Freidenberg, Flavia 2000 “Percepciones ciudadanas hacia la democracia y las instituciones políticas en los países andinos” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 50, agosto.
- Gadamer, Hans-Georg 1988 (1975) *Verdad y método* (Salamanca: Ediciones Sígueme).
- Galarza, Ramiro 1996 “La Coordinadora de Movimientos Sociales” en Narváez Quiñones, I.; Galarza, R.; Villavicencio Valencia, F. y Ortiz Cevallos, M. *Los encadenados del oleoducto* (Quito: Laser Editores).
- Ginzburg, Carlo, 1995 (1976) *O queijo e os vermes. O cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição* (São Paulo: Companhia das Letras).
- Gohn, Maria da Glória 1997 *Teorias dos movimentos sociais. Paradigmas clássicos e contemporâneos* (São Paulo: Edições Loyola).
- Guerrero, Andrés 1993 “De sujetos indios a ciudadanos-étnicos: de la manifestación de 1961 al levantamiento de indígena de 1990” en Adrián, Alberto et al. *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos* (Lima: IEP/IFEA).
- Guerrero, Andrés 1994 “Una imagen ventrilocua: el discurso liberal de la ‘desgraciada raza indígena’ a fines del siglo XIX” en Muratorio, Blanca (ed.) *Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX* (Quito: FLACSO).
- Guerrero, Andrés 1996 “El levantamiento indígena de 1994. Discurso y representación política en Ecuador” en *Nueva Sociedad* (Caracas)

Nº 142.

- Guerrero, Andrés 2000 “El proceso de identificación: sentido común ciudadano, ventriloquía y transescritura” en Guerrero, Andrés (comp.) *Etnicidades* (Quito: FLACSO/ILDIS/Fundación Friedrich Ebert).
- Guerrero, C. Fernando y Ospina, Pablo 2003 *El poder de la comunidad. Movimiento indígena y ajuste estructural en los Andes ecuatorianos* (Buenos Aires: CLACSO).
- Hall, Stuart, 1997 (1992) *Identidades culturais na pós-modernidade* (Rio de Janeiro: DP & A Editora).
- Hobsbawm, Eric 1991 (1990) *Naciones y nacionalismo desde 1780* (Barcelona: Crítica).
- Holloway, John 2002 *Cambiar el mundo sin tomar el poder* (Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla/Herramienta).
- Hoy 2004 (Quito) “Índice de desarrollo humano” 16 de julio de 2004. En <http://www.hoy.com.ec/id_hoy.htm> acceso 20 de enero de 2007.
- Ibarra, Hernán 1997 “La caída de Bucaram y el incierto camino de la reforma política” en *Ecuador Debate* (Quito) Nº 40, abril.
- ICCI (Instituto Científico de Culturas Indígenas) 2001 “Levantamiento indígena, institucionalidad y Estado” en Lucas, Kintto y Cucurella, Leonella (comps.) *Nada solo para los indios. El levantamiento indígena de 2001: análisis, crónicas y documentos* (Quito: Abya-Yala).
- ILDIS (Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales) 2003 *Análisis de Coyuntura Económica de 2003* (Quito: ILDIS/Friedrich Ebert Stiftung).
- Jameson, Fredric 1999 (1997) “Cinco tesis sobre el marxismo actualmente existente” en *Em defesa da história. Marxismo e post-modernismo* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor).
- Jodelet, Denise, 1988 (1984) “La representación social, fenómenos, concepto y teoría” en Moscovici, Serge (ed.) *Psicología Social*, t. II, (Barcelona: Paidós).
- Kalberg, Stephen (1993), Cultural Foundation of modern citizenship, en Turner, Bryan (ed.) *Citizenship and social theory* (Londres: SAGE).
- Korovkin, Tania 2001 “Reinventing the communal tradition: indigenous people, civil society and democratization in Andean Ecuador” en *Latin American Research Review*, Vol. 36, Nº 3.
- Laclau, Ernesto 1980 (1977) *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo* (México DF: Siglo XXI Editores).

- Landa, Ladislao 2001 “¿Una re-antropología de los movimientos indígenas?”, Conferencia proferida en el Encuentro del FELAA (Federación de Estudiantes Latinoamericanos de Antropología y Arqueología), agosto de 2001, Brasilia.
- Landa, Ladislao 2002 *India(ge)nismo: La formación de las identidades prestadas o la reconstrucción permanente de ideologías sobre la presencia de los originarios* (Brasilia-Quito-Lima: Inédito).
- Larrea, Ana María 2005 “Abril quiteño y forajido: Crónica de una rebelión” en <http://osal.clacso.org/des/article.php3?id_article=1287> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Lascano Palacios, Mario 2001 *21 de enero. La noche de los Coroneles. Rebelión de los mandos medios* (Quito: Editorial KESS).
- León Galarza, Natalia Catalina 2002 “De padres y contratos (Una aproximación a la experiencia política en las democracias contemporáneas latinoamericanas)”, Ponencia presentada al Encuentro de Ecuatorianistas de LASA, realizado en Quito, julio de 2002.
- León Galarza, Natalia Catalina 2006 *Género, subjetividad y populismo. Fantasmagorías de la política contemporánea* (Quito: Abya-Yala).
- León Trujillo, Jorge 1991 “Composición social y escena política en el sindicalismo ecuatoriano” en Achig Subía, Lucas (coord.) *Memoria del Seminario Internacional “Pensamiento y práctica del movimiento obrero latinoamericano y ecuatoriano en los años 80 y sus perspectivas en la próxima década”* (Cuenca: IDIS de la Universidad de Cuenca).
- León Trujillo, Jorge 1994 (1994) *De campesinos a ciudadanos diferentes. El levantamiento indígena* (Quito: Abya-Yala-CEDIME).
- León Trujillo, Jorge 2000 “Las crisis ecuatorianas en perspectiva” en Cañete, María Fernanda (comp.) *La crisis ecuatoriana: sus bloqueos económicos, políticos y sociales. Memoria del seminario realizado el 19 y 20 de enero de 2000* (Quito: CEDIME-IFEA).
- López Maya, Margarita 2002 *Protesta y cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999* (Buenos Aires: CLACSO).
- Lucas, Kintto 2000 *La rebelión de los indios* (Quito: Abya-Yala).
- Lucas, Kintto 2001 “El movimiento indígena volvió a las calles: La utopía de los ponchos sigue viva” en Lucas, Kintto y Cucurella, Leonella (comp.) *Nada solo para los indios. El levantamiento indígena del 2001: análisis, crónicas y documentos* (Quito: Abya-Yala).

- Lucas, Kintto y Cucurella, Leonella (comps.) 2001 *Nada solo para los indios. El levantamiento indígena de 2001: análisis, crónicas y documentos* (Quito: Abya-Yala).
- Luna, Clara 2005 “Los forajidos de Ecuador” en Toulouse Réseau Unitaire Citoyen en <<http://www.truc.abri.org/Los-forajidos-de-Ecuador>>, acceso 11 de diciembre de 2006.
- Luna Tamayo, Milton 1996 “Jorge Dávila Loor, *El FUT, trayectoria y perspectivas*, Colección 15 de noviembre, t.9, Corporación Editora Nacional, Quito, 1995” reseña en *Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia* (Quito) N° 8, II semestre de 1995-I semestre de 1996.
- Maffesoli, Michel 1987 *O tempo das tribos. O declínio do individualismo nas sociedades de massa* (Rio de Janeiro: Forense Universitaria).
- Marcus, George 1994 “After the critique of ethnography: faith, hope, and charity, but the greatest of these is charity” en Borovsky, Robert (ed.) *Assessing cultural anthropology* (New York: McGraw-Hill, Inc.).
- Margulis, Mario y Urresti, Marcelo 1998 “La construcción social de la condición de juventud” en Cubides, Humberto et al. (eds.) “*Viviendo a toda*”. *Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre Editores/Universidad Central).
- Martín-Barbero, Jesús 1998 “Jóvenes: des-orden cultural y palimpsestos de identidad” en Cubides, Humberto et al. (eds.) “*Viviendo a toda*”. *Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades* (Bogotá: Siglo del Hombre/Universidad Central).
- Martínez, Luciano 1999 “La nueva ruralidad en el Ecuador” en ICONOS (Quito) N° 8, junio-agosto.
- Melucci 1989 *Nomads of the present. Movements and individual needs in contemporary society* (Temple University Press, Philadelphia).
- Montúfar, César 2000 *La reconstrucción neoliberal. Febres Cordero o la estatización del neoliberalismo en el Ecuador 1984-1988* (Quito: Ediciones Abya-Yala).
- Montúfar, César 2002 “¿Qué pasó el domingo 21?” en *El Comercio*, 30 de octubre. En <<http://www.elcomercio.com/noticias.asp?noid=42110>> acceso 31 noviembre de 2002.
- Moore Jr., Barrington 1987 (1979) *Injustiça. As bases sociais da obediência e da revolta* (São Paulo: Editora Brasiliense).
- Moscoso, Marha 1991 “‘Cabecillas’ y ‘huelguistas’ en los levantamientos de inicios del siglo XX” en Urbano, Henrique (comp.) y Lauer, Mirko

- (ed.) *Poder y violencia en los Andes* (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas).
- Moscovici, Serge 1986 “L’ère des representations sociales” en Doise, Willem y Palmonari, A. *L’étude des représentations sociales* (Neuchatel-París: Delachaux et Niestlé) (manuscrito en portugués, traducción de María Helena Fávero).
- Mouriaux, René y Beraud, Sophie 2000 “Para una definición del concepto de ‘movimiento social’” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 1, junio.
- Muratorio, Blanca 1994 “Nación, identidad y etnicidad: imágenes de los indios ecuatorianos y sus imagineros a fines del siglo XIX” en Muratorio, Blanca (ed.) *Imágenes e imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX* (Quito: FLACSO-Sede Ecuador).
- Narváez, Iván 1997 “Resistencia al gobierno neopopulista de Abdalá Bucaram” en Acosta Alberto et al. *5 de febrero. La revolución de las conciencias* (Quito: Corporación de Estudios y Promoción Cultural/Fundación José Peralta/Federación de Trabajadores de Petroecuador).
- Narváez, Iván et al. 1996 *Los encadenados del oleoducto, Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC)* (Quito: Laser Editores).
- Neveu, Erik 2000 (1996) *Sociología de los movimientos sociales* (Quito: Abya-Yala).
- Novaro, Marcos 1996 “Los populismos latinoamericanos transfigurados” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 144, julio/agosto.
- Nun, José 1985 “Averiguación sobre algunos significados del peronismo” en *Revista Mexicana de Sociología* (México DF: Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM) N° 2, abril/junio.
- O’Donnell, Guillermo 1997a “¿Democracia delegativa?” en *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización* (Buenos Aires: Paidós).
- O’Donnell, Guillermo 1997b “Democracia y exclusión” (entrevista) en *Ágora* (Buenos Aires) N° 6.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo) s/f “Ecuador: Economía y empleo” en <<http://www.oitandina.org.pe/pagina.php?secCodigo=56>> acceso 27 de febrero de 2007.
- Ojarasca suplemento mensual de *La Jornada* 2003 (México DF) 14v de agosto. En <<http://www.jornada.unam.mx/2003/04/14/oja72-ecuavenez.html>>

- Oliver, Pamela y Johnston, Hank 2000 "What a good idea! Frames and ideologies in social movement research" en *Mobilization: an international journal* (Madison: The University of Wisconsin) Vol. V.
- Ortiz, Pablo 1997 "Apuntes breves sobre la caída del Bucaramato y el futuro" en Acosta, Alberto et al. *5 de febrero. La revolución de las conciencias* (Quito: Corporación de Estudios y Promoción Cultural/Fundación José Peralta/Federación de Trabajadores de Petroecuador).
- Ospina, Pablo 2000 "Reflexiones sobre el transformismo: movilización indígena y régimen político en el Ecuador" en Bonilla, Marcelo y Massal, Julie (eds.) *Los movimientos sociales en las democracias andinas* (Quito: FLACSO, IFEA).
- Pachano, Simón 2000 "Representación, clientelismo y corporativismo en Ecuador" en Cañete, María Fernanda (comp.) *La crisis ecuatoriana: sus bloqueos económicos, políticos y sociales. Memoria del seminario realizado el 19 y 20 de enero de 2000* (Quito: CEDIME-IFEA).
- Palán, Zonia 1997 "Las mujeres del 5 de febrero" en Acosta, Alberto et al. *5 de febrero. La revolución de las conciencias* (Quito: Corporación de Estudios y Promoción Cultural/Fundación José Peralta/Federación de Trabajadores de Petroecuador).
- Pasquino, Gianfranco 1998 (1983) "Crise" en Bobbio, Norberto et al. *Dicionário de política* (Brasilia: Editora da Universidade de Brasilia).
- Pérez Sáinz, Juan Pablo 1985 *Clase obrera y democracia en el Ecuador* (Quito: Editorial El Conejo).
- Petras, James y Morley, Morris 2000 "Los ciclos políticos neoliberales" en Petras, James *La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del neoliberalismo* (Madrid: Akal).
- Pizzorno 1989 "Algún tipo de alteridad: una crítica a las teorías de la elección racional", en: *Sistema* (Madrid) No. 89.
- Pizzorno 1994 "Identidad e interés", en *Zona Abierta* 69, (Editorial Pablo Iglesias:Madrid).
- Pollak, Michael 1989 "Memória, esquecimento, silêncio" en *Estudos Históricos* (Rio de Janeiro) N° 3.
- Portantiero, Juan Carlos 1988 *La producción de un orden. Ensayos sobre la democracia entre el estado y la sociedad* (Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión).

- Proaño, Guido 2005 ¿Se acuerdan de los forajidos? en *Voltaire.net Red de Prensa No Alineados*. En <<http://www.voltairenet.org/article38333.html>> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Quintero López, Rafael 2000 “El alzamiento popular del 21 de enero y sus consecuencias para la democracia en el Ecuador” en *Ciencias Sociales* (Quito: Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, Universidad Central) N° 18.
- Rebelión Internacional* 2003 “Del desencanto al horror: la traición de Lucio Gutiérrez”, 12 de abril. En <www.rebelion.org>.
- Reguillo, Rossana 1997 “Jóvenes: la construcción del enemigo” en *Revista Latinoamericana de Comunicación*. En <<http://www.comunica.org/chasqui/reguillo.htm>> acceso 19 de noviembre de 2004.
- Rhon Dávila, Francisco 1978 “Lucha étnica o lucha de clases: Ecuador” en Valderrama, Mariano (ed.) *Campesinado e indigenismo en América Latina* (Lima: Ediciones CELATS).
- Rodríguez, Lenin y Solís, Edison 2005 “ONGs: intervencionismo yanqui en Ecuador” en *Voltaire.net Red de Prensa No Alineados*. En <<http://www.voltairenet.org/article124020.html>> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Rojas Reyes, Carlos 2001 *Sujetos del desarrollo* (Cuenca: U Ediciones).
- Rolong, Jairo 2005 “El Ecuador cobró la institucionalidad ¿y la democracia cuándo?” en <http://ecuarunari.org/gutierrez_dictador/30abril05.html> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Rudé, George 1981 (1980) *Revuelta popular y consciencia de clase* (Barcelona: Crítica/Grupo Editorial Grijalbo).
- Segato, Rita Laura 1999 “Identidades políticas/alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global” en *Anuário Antropológico/97* (Río de Janeiro: Tempo Brasileiro).
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2000 “La conflictividad social en América Latina” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, septiembre.
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2002 “Los jóvenes y la antiglobalización” Feixa, Carles et al. (ed.) *Movimientos juveniles: de la globalización a la antiglobalización* (Barcelona: Ariel).
- Striffler, Steve 2002 *In the shadows of State and capital. The United Fruit Company, popular struggle, and agrarian restructuring in Ecuador, 1900-1995* (Durham y London: Duke University Press).

- Taylor, Charles 1993 (1992) "La política del reconocimiento" en *El multiculturalismo y "la política del reconocimiento"* (México DF: Fondo de Cultura Económica) Presentación a cargo de Amy Gutmann.
- Thompson, Edward Palmer 1987 (1962) *A formação da classe operária inglesa* (Rio de Janeiro: Paz e Terra).
- Touraine, Alain (1973) *Production de la société* (Paris: Editions du Seuil).
- Turner, Bryan (ed.) (1993) *Citizenship and social theory* (Londres: SAGE).
- Tutivén, Carlos 2001 "La disolución de lo social en la socialidad de una comunidad emocional" en Cerbino, Mauro et al. *Culturas juveniles. Cuerpo, música, sociabilidad & género* (Quito: Abya-Yala/Convenio Andrés Bello).
- Unda Soriano, Mario 2000 "Pueden los movimientos sociales representar una alternativa a la crisis presente" en Cañete, María Fernanda (comp.) *La crisis ecuatoriana: sus bloqueos económicos, políticos y sociales. Memoria del seminario realizado el 19 y 20 de enero de 2000* (Quito: CEDIME-IFEA).
- Unda Soriano, Mario 2001 *Ecuador: conflictos sociales en el año 2000* (Quito: CIUDAD Centro de Investigaciones/Escuela Superior Internacional del Hábitat y el Desarrollo Local/Programa de Gestión Urbana).
- Unda Soriano, Mario 2005 "Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel" en <http://osal.clacso.org/des/article.php3?id_article=128> acceso 11 de diciembre de 2006.
- Vakaloulis, Michel 1999 "Antagonismo social y acción colectiva" en *Travail salarié et conflit social, Actuel Marx Confrontation* (París: PUF). (Versión traducida por Emilio Taddei).
- Vázquez, Lola y Saltos, Napoleón 2003 *Ecuador: su realidad*, edición actualizada 2002-2003 (Quito: Fundación José Peralta).
- Verdaguer, Jorge 1994 "La ley de modernización agraria o la guillotina sobre la economía campesina" en *Ecuador Debate* (Quito) N° 32.
- Wada, Takeshi 1997 "Literature review on social movements", Department of Sociology, Columbia University, mimeo.
- Ycaza, Patricio 1991 "La clase trabajadora ecuatoriana frente a la crisis" en Achig Subía, Lucas (coord.) *Memoria del Seminario Internacional "Pensamiento y práctica del movimiento obrero latinoamericano y ecuatoriano en los años 80 y sus perspectivas en la próxima década"* (Cuenca: Universidad de Cuenca).

- Zamosc, Leon 1994 "Agrarian protest and the Indian movement in the Ecuadorian Highlands" en *Latin American Research Review* (University of New Mexico) Vol. XXIX, N° 3.
- Zemmelman, Hugo 1990 "Introducción" en *Cultura y política en América Latina* (México DF/Tokio: Siglo XXI/Editorial de la Universidad de las Naciones Unidas).
- Zemmelman, Hugo 1997 "Sujetos y subjetividad en la construcción metodológica" en Zemmelman, Hugo y León, Emma (coords.) *Subjetividad: umbrales del pensamiento social* (México DF: Anthropos Editorial y Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares).

HOJAS VOLANTES

- ¡La lucha continúa!*, hoja volante recogida en Cuenca, 17 de enero de 2002. (Movimiento por la construcción del Partido de los Trabajadores).
- ¡Todos a las calles!*, hoja volante recogida en Cuenca, 17 de enero de 2002. Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales-Unión General de Trabajadores del Ecuador.
- No somos Argentina*, hoja volante recogida en Cuenca, 17 de enero de 2002. Refundación Universitaria.
- El pueblo en defensa de la vida*, hoja volante recogida en Cuenca, 17 de enero de 2002. F.R.M.A. Vanguardia.
- ¡No se roben la luz de los ojos! ¡Ecuatoriano, despierta!* Plegable didáctico recogido en Quito, 21 de marzo de 2002.
- ¡Impidamos que se COMAN el país!*, afiche recogido en Quito, 21 de marzo de 2002. Federación Unitaria de Trabajadores de la Empresa Eléctrica-Red de Trabajadores de la Energía Eléctrica del Ecuador.
- Si los jueces me condenan... el pueblo me absolverá*, hoja volante recogida en Cuenca el 24 de julio de 2002. Carlos Pérez Guartambel.

FUENTES VISUALES

- "Yo sí que no tengo a nadie" video, 1991, guión y dirección de Carlos Naranjo, Eréndira y La Estudio, Quito.

**ENTREVISTAS
TESTIMONIALES**

Jorge, 15 de febrero de 2002.

Marcia, 10 de marzo de 2002 y 3 de enero de 2003, Cuenca.

Joaquín, 9 de abril de 2002, Cuenca.

Miguel, 3 de abril de 2002, Quito.

Pablo, 10 de abril de 2002, Cuenca.

Juan Lorenzo, 7 de mayo de 2002, Tigua.

José María 19 de mayo de 2002, San Juan, cantón Gualaceo.

Julio, 21 mayo de 2002, Cuenca.

José, 14 de junio de 2002, Cuenca.

Rosa, 6 de julio de 2002, Quito.

Mario, 11 de febrero de 2003, Cuenca.

Alejandro, 13 y 15 de mayo de 2003, Cuenca.

INFORMATIVAS

Napoleón Saltos, 2 de mayo de 2002, Quito.

Nidia Solís, 20 de junio de 2002, Cuenca.

Fausto Dután, 2 de enero de 2003, Cuenca.

Augusto Barrera, 23 de septiembre de 2003, Cuenca.

Susana Rojas, 20 de diciembre de 2004, Cuenca.